

REVISTA IIDH

INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS
INSTITUT INTERAMERICAIN DES DROITS DE L'HOMME
INSTITUTO INTERAMERICANO DE DIREITOS HUMANOS
INTER-AMERICAN INSTITUTE OF HUMAN RIGHTS



13

Enero - Junio 1991

INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS

CONSEJO DIRECTIVO

Presidente:

Thomas BUERGENTHAL

Vicepresidentes:

Pedro NIKKEN

Oliver JACKMAN

Miembros:

Lloyd G. BARNETT

Allan BREWER-CARIAS

Marco Tulio BRUNI-CELLI

Augusto CANÇADO TRINDADE

Máximo CISNEROS

Gisele CÔTÉ-HARPER

Margaret CRAHAN

Mariano FIALLOS OYANGUREN

Héctor GROS ESPIELL

Claudio GROSSMAN

Louis HENKIN

Emilio MIGNONE

Máximo PACHECO

Carlos Roberto REINA

Luis Adolfo SILES SALINAS

Rodolfo STAVENTHAGEN

Walter TARNOPOLSKY

Cristian TAITTENBACH

Edmundo VARGAS CARRERÑO

Fernando VOLIO JIMÉNEZ

Miembros Ex-Oficio:

Héctor FIX-ZAMUDIO

Orlando TOVAR TAMAYO

Rafael NIETO NAVIA

Policarpo CALLEJAS BONILLA

Julio A. BARBERIS

Rodolfo E. PIZA ESCALANTE

Sonia PICADO SOTELA

Roberto CUELLAR

Daniel ZOAVITTO GARETTO

Directora Ejecutiva:

Subdirectores:

REVISTA

IIDH

Editor en Jefe: Daniel Zovatto Garetto

Editor en Castellano: Rafael Nieto Loatza

Editor en Inglés: Robert M. Buergenthal

La Revista IIDH es una publicación semestral del Servicio Editorial
del Instituto Interamericano de Derechos Humanos

REVISTA

IDH

INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS
INSTITUT INTERAMERICAIN DES DROITS DE L'HOMME
INSTITUTO INTERAMERICANO DE DIREITOS HUMANOS
INTER-AMERICAN INSTITUTE OF HUMAN RIGHTS

Revista IIDH/Instituto Interamericano de Derechos Humanos.—Nº91 (Enero/junio 1985).—San José, C.R.: El Instituto, 1985.—v.; 23 cm.

Semestral

ISSN 1015-5074

1. Derechos del hombre - Publicaciones periódicas.

Las opiniones expuestas en los trabajos publicados en esta Revista son de exclusiva responsabilidad de sus autores.

© 1991, IIDH. INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS.

Esta revista no puede ser reproducida en todo o en parte, salvo permiso escrito de los editores.

Producida por el Servicio Editorial del IIDH, coordinado por Rafael Nieto Loaliza.

Diagramación y montaje electrónico de artes finales: Prometeo S.A.

La Revista IIDH acogerá artículos inéditos en el campo de las ciencias sociales, que hagan énfasis en la temática de los Derechos Humanos. Las colaboraciones para su posible publicación deberán dirigirse a: Editores Revista IIDH; Instituto Interamericano de Derechos Humanos; A.P. 10,081 (1000) San José, Costa Rica, Centroamérica.

Se solicita atenderse a las recomendaciones siguientes:

1. En todos los trabajos se entregará un original y una copia escritos a doble espacio, dentro de un máximo de 45 cuartillas tamaño carta. Es posible acompañar el envío con discos de computador, indicando el sistema y el programa en que fue elaborado.
2. Las citas deberán seguir el siguiente formato: apellidos y nombre del autor o compilador; título de la obra (subrayado); volumen, tomo, editor; lugar y fecha de publicación; número de página citada. Para artículos de revistas: apellidos y nombre del autor; título del artículo; nombre de la revista (subrayado); volumen, tomo; editor; lugar y fecha de publicación; número de página citada.
3. La bibliografía seguirá las normas citadas y estará ordenada alfabéticamente, según los apellidos de los autores.
4. Un resumen acompañará a todo trabajo sometido, de no más de una página tamaño carta.
5. En una hoja aparte, el autor indicará los datos que permitan su fácil ubicación. Además incluirá un brevísimo resumen de sus datos académicos y profesionales.
6. Los editores aceptan para su consideración todos los originales inéditos que les sean remitidos, pero no se comprometen a su devolución ni a mantener correspondencia sobre los mismos.

LA REVISTA IIDH ES PUBLICADA SEMESTRALMENTE. EL PRECIO ANUAL ES DE US\$25.00 Y DE US\$20.00 PARA ESTUDIANTES. EL PRECIO DEL NÚMERO SUBLITO ES DE US\$15.00. SUSCRIPCIÓNES DE CENTROAMÉRICA Y PANAMÁ DEBEN INCLUIR US\$3.00 POR ENVÍO; SUR Y NOROCCIDENTAL US\$4.00 Y EUROPA, US\$6.00.

TOCOS LOS PAÍSES DEBEN SER HECHOS EN CHEQUES DE BANCOS NOROCCIDENTALES O GIRO POSTAL, A NOMBRE DEL INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS. RESIDENTES EN COSTA RICA PUEDEN UTILIZAR CHEQUES LOCALES. SE REQUIERE EL PAÇO PASTO PARA EL ENVÍO.

DIRECCION TODAS LAS ÓRDENES DE SUSCRIPCIÓN AL SERVICIO EDITORIAL DEL INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS, A.P. 10,081 (1000) SAN JOSÉ, COSTA RICA, CENTROAMÉRICA.

ENTREGAS EN CASHE, ESCRIBIR A LA REVISTA IIDH, BIBLIOTECA DEL INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS, A.P. 6906 (1000), SAN JOSÉ, COSTA RICA, CENTROAMÉRICA.

INDICE

DOCTRINA

LIBERTAD Y PARTICIPACIÓN POLÍTICAS EN EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS 11
Germán BIDART CAMPOS

OUR RIGHTS AND OBLIGATIONS TO FUTURE GENERATIONS FOR THE ENVIRONMENT 21
Edith BROWN WEISS

THE PARALLEL EVOLUTIONS OF INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS PROTECTION AND OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND THE ABSENCE OF RESTRICTIONS UPON THE EXERCISE OF RECOGNIZED HUMAN RIGHTS 35
A.A. CANÇADO TRINDADE

LE DROIT A LA CONSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT 77
Alexandre KISS

LOS DERECHOS HUMANOS Y EL PRINCIPIO DE NO INTERVENCIÓN PLANTAMIENTO SOBRE REGLAS ESCLARECEDORAS Y SANCIONES POR VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS 87
F. VILLAGRÁN KRAMER

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

ACTIVIDADES ENERO-JUNIO 1991 127

RECONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA DE LA CORTE POR PARTE DE NICARAGUA 134

ADHESIÓN A LA CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y RECONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA DE LA CORTE POR PARTE DE TRINIDAD Y TOBAGO ... 135

MEDIDAS PROVISIONALES SOLICITADAS POR LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS RESPECTO DEL PERU DE 17 DE ENERO, 1991 (CASO BUSTOS-ROJAS) 137

RULES OF PROCEDURE OF THE INTER-AMERICAN COURT OF HUMAN RIGHTS	140
REGLAMENTO DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS	141
COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS	
ACTIVIDADES	
ENERO - JUNIO 1991	191
PRESENTATION OF THE ANNUAL REPORT OF THE INTER-AMERICAN COMMISSION ON HUMAN RIGHTS	195
Dr. Patrick Robinson	
ASAMBLEA GENERAL DE LA O.E.A	
XX ^o PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES	
Compromiso de Santiago con la Democracia y con la Renovación del Sistema Interamericano	213
AG/RES. 1080 (XXI-0/91) Democracia Representativa	216
AG/RES. 1087 (XXI-0/91) Educación para la Participación Cívica y la Democracia	218
AG/RES. 1102 (XXI-0/91) Informe Annual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1990	219
AG/RES. 1102 (XXI-0/91) Annual Report of The Inter-American Commission on Human Rights, 1990	221
AG/RES. 1112 (XXI-0/91) Fortalecimiento de la OEA en Materia de Derechos Humanos	223
AG/RES. 1116 (XXI-0/91) Apoyo al Proceso Democrático de la República de Suriname	228
AG/RES. 1117 (XXI-0/91) Apoyo al Proceso Democrático en la República de Haití	229
AG/RES. 1130 (XXI-0/91) Informe Annual de La Corte Interamericana de Derechos Humanos, 1990	230

AG/RES. 1130 (XX-0/91) Annual Report of The Inter-American Court of Human Rights, 1990	232
DOCUMENTOS	
THE IMPLICATIONS OF THE "COMMON CONCERN OF MANKIND" CONCEPT ON GLOBAL ENVIRONMENTAL ISSUES	237
I MEETING OF THE UNEP GROUP OF LEGAL EXPERTS TO EXAMINE THE IMPLICATIONS OF THE "COMMON CONCERN OF MANKIND" CONCEPT ON GLOBAL ENVIRONMENTAL ISSUES	247
II MEETING OF THE GROUP OF LEGAL EXPERTS TO EXAMINE THE CONCEPT OF THE "COMMON CONCERN OF MANKIND" IN RELATION TO GLOBAL ENVIRONMENTAL ISSUES	253
SYMPOSIUM ON DEVELOPING COUNTRIES AND INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW	259
NUESTRA PROPIA AGENDA	267
PROLOGO, INTRODUCCIÓN	
OUR OWN AGENDA	289
PROLOGUE, INTRODUCTION	
EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS PUESTO A PRUEBA: Las Sentencias de Interpretación en los Casos de Desaparecidos Hondureños	309
Instituto de Derechos Humanos Internacionales, Universidad DePaul	
THE INTER-AMERICAN HUMAN RIGHTS SYSTEM PUT TO THE TEST: The Interpretation Judgments in the Honduran Disappearance Cases	315
International Human Rights Law Institute, DePaul University	
CUARENTA AÑOS DE LA CONVENCIÓN EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS: Logros alcanzados y futuras perspectivas	339
Juez, Rolv Ryssdal	
O BRASIL E OS DIREITOS HUMANOS: MOÇÃO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIREITO INTERNACIONAL	347

DOCTRINA

LIBERTAD Y PARTICIPACIÓN POLÍTICAS EN EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Germán J. Bidart Campos

Argentino, profesor de derecho constitucional en la Universidad de Buenos Aires

1. Solemos hablar de sociedad democrática y de estado democrático. Incluso los tratados internacionales sobre derechos humanos utilizan frecuentemente la primera locución —“sociedad democrática”—. La Corte Interamericana de Derechos Humanos echa mano de ella en sus pronunciamientos cuando interpreta y/o aplica normas sobre derechos humanos en el sistema interamericano.

Conforme a nuestra personal interpretación —ya de muy vieja data, como que arranca de nuestra tesis doctoral del año 1953— el sustantivo “democracia”, y los adjetivos derivados de él —“democrática”, “democrático”— aluden a un neollo irreductible: los derechos del hombre, o derechos personales, que hoy se llaman más bien derechos humanos. Por la época en que así empezábamos a pensar con sólida convicción, los derechos humanos eran, a nuestro juicio, fundamentalmente los clásicos derechos civiles. Dicho de otro modo: la libertad civil, acaso abarcadora de los derechos sociales propios del constitucionalismo social. ¿Y los derechos políticos? ¿La libertad política? ¿La libertad de participación? No llegábamos a su inclusión. En todo caso, hacían a cuestiones formales, no sustanciales para la democracia.

2. Hoy ya no decimos lo mismo. Continuamos aferrados a la noción de que la esencia de la democracia —su contenido visceral— radica en los derechos humanos. Hay democracia cuando esos derechos tienen efectividad, vigencia sociológica, sea que estén formulados en normas escritas,

o que no lo estén. La variante actual proviene de una añadidura, que hoy se halla muy adentrada a las valoraciones sociales, y que compartimos: dentro de ese núcleo esencial de los derechos humanos que configura a la democracia, se encuentran los derechos políticos, la libertad política, la libertad de participación.

Esto es de suma trascendencia, porque significa que no es suficiente para abastecer a la democracia que los derechos civiles y los derechos sociales gocen de efectividad: es menester, es imprescindible, además y también, que haya derechos políticos, libertad política, participación.

No en vano —al menos en el derecho público provincial de Argentina— el señalamiento de pautas organizativas del estado y de la sociedad introduce a la participación, a la democracia participativa, a la participación política y social —con unos vocablos o con otros— para trazar el diseño organizativo de la sociedad, del estado, de la política, del orden jurídico.

3. Una primera consecuencia práctica puede ser —es— la siguiente: cuando un tratado internacional de derechos humanos contiene en su plexo a los derechos políticos, los estados que se hacen parte en ese tratado asumen la obligación y la responsabilidad internacionales de garantizarlos, de conferirles efectividad, de depararles la misma tutela—incluso jurisdiccional— que a los derechos “no políticos”.

Este es un indicio seguro para saber y corroborar que, actualmente, la democracia, esencialmente caracterizada por los derechos humanos, no es democracia si están ausentes los derechos políticos, aunque acaso los “no políticos” cuenten con efectividad y con protección.

Por supuesto, que los derechos políticos sin los civiles y los sociales tampoco abastecen a la democracia. La confluencia indisoluble de derechos civiles, derechos sociales, y derechos políticos es la trinidad nuclear de los derechos humanos que definen a la democracia.

4. De ahora en más, como los derechos civiles y los derechos sociales cuentan con un perfil suficientemente claro en la doctrina y en las formulaciones normativas de las constituciones y los tratados internacionales que les prestan reconocimiento, vamos a prescindir de ellos, y a ceñirnos al ámbito de los derechos políticos.

Los concebimos con la mayor amplitud posible. Seguramente, valoramos que en su médula se ubica el derecho electoral activo y pasivo, o sea, el derecho a elegir y a ser elegido. Pero, ¿por qué y para qué? En la pregun-

ta reside la clave para comprender y valorar todo el espectro plurímo de la libertad política.

No sería ocioso contestar los interrogantes sugeridos con la misma respuesta con que damos razón de los derechos civiles clásicos, y de los derechos sociales que vinieron a acoplárseles como derechos de la segunda generación. La respuesta básica es ésta: porque el hombre es una persona. Y de inmediato: porque como persona se hace parte de la comunidad política y se integra a ella, con toda la carga gravitante de su dignidad y de su libertad.

5. ¿Entonces? Entonces, quien es parte, debe tener parte y debe tomar parte, y debe recibir su parte. Ser parte, tomar parte, tener parte, recibir su parte, es lo mismo que afirmar que el hombre-persona es protagonista de la participación. Como estamos en el área del estado, de la política, del derecho público, esa participación es participación política, es situarse en el mundo político, que a la vez es jurídico, porque siempre que hay hombres, convivencia, sociedad, hay conductas que son jurídicas, hay derecho como realidad ontológica de esa misma vida humana que es convivencia social, política y jurídica.

Cuando desde esta perspectiva nos desplazamos a la noción de que la organización político-jurídica de la convivencia societaria está directamente enderezada a dar satisfacción completa a las necesidades humanas que cada cual no es capaz de abastecer por sí solo, arribamos a la idea de fin o finalidad: hay que ordenar la convivencia, hay que cubrir las necesidades, hay que realizar los valores propios de la vida compartida, hay que lograr un entendimiento societario. No es difícil abarcar ese fin —así ejemplificativamente propuesto en su eje mínimo— como un fin total: la imagen de “totalidad” se le incorpora, porque es un fin de y para toda la sociedad, para todos sus integrantes, para la membresía completa. Y, además, un fin que, si es total y no parcial en relación con el agregado humano, también es total, y no parcial ni sectorial, respecto de lo que tiene que abastecer, de aquello a lo que debe prestar cobertura suficiente.

6. ¿Qué nos parece si ahora añadimos que, por esa nota de totalidad, decimos a la vez que cuando los hombres son parte en una organización de tales características y cuando en ella y dentro de ella comprometen su vida personal y su convivencia compartida, todos han de tener y tomar parte en tres momentos que son: uno, la etapa de formación del poder (que es la etapa de designación de los gobernantes); otro, la etapa de ejercicio del poder, en la que sin interrupción se desarrolla el proceso de poder o proceso político (pluralizado en múltiples procesos); el último, la etapa —tam-

bien ininterrumpida y constante—de rendimiento de ese poder, ejercido en el citado proceso de poder o proceso político?

Si nos parece bien —y personalmente así lo creemos— hemos de invertir al hombre-persona con el protagonismo de la participación en cada uno de esos momentos y en cada una de esas etapas. Hay, pues, un derecho a la participación, que es uno de los derechos humanos fundamentales, y que por referirse a la organización política, al estado, a la cosa pública (la res-pública de los romanos como cosa común o de todos) damos por cierto que es un derecho "político". Participar es más, mucho más, que elegir y ser elegido. El derecho electoral clásico —activo y pasivo— puede ser el centro de gravedad de la participación, puede ser lo mínimo, pero no es lo único, no le da agotamiento. Hoy, estrechar la participación en el derecho electoral no otorga complejidad a la libertad política ni a la participación. Las valoraciones sociales reclaman y pretenden un protagonismo activo de mucha mayor extensión, en intensidad, y en sucesión temporal de etapas subsiguientes a los procesos electorales.

7. Al estirar del modo propuesto la libertad y la participación políticas, se nos colocan en el camino otros intervinientes distintos de las personas físicas a título individual. Por de pronto, la realidad contemporánea universal nos muestra a los partidos y las agrupaciones políticas. Son de primordial importancia, pero ni deben opacar al protagonismo individual de los hombres, ni descartar a otros entes colectivos con un monopolio exclusivista.

¿Qué quiere decir esto?

Que los roles de los partidos, imposibles de ignorar, disminuir o cercenar, tienen que ser vitalizados, pero no han de llegar a convertir a los hombres en convidados de piedra frente a las opciones que les ofrecen. Por otro lado, aunque acaso se consienta —con simpatía o simplemente con tolerancia—, que los partidos asuman el monopolio de las candidaturas a los fines electorales, hay otros actores grupales que no pueden quedar marginados de la participación en el proceso político en el que se gestan, adoptan, ejecutan y controlan las decisiones de poder; estamos mentando, ejemplificativamente, a asociaciones sindicales, empresariales, profesionales, culturales, y de todo tipo, que deben disponer de oportunidad suficiente para tomar parte —"su parte"— en aquel proceso decisivo cada vez que sus intereses están en juego porque la decisión les atañe o los afecta.

¿Es esto también participación política? Por supuesto, porque es tener y tomar parte en el proceso político.

Y hasta puede ocurrir, o ser aconsejable según las circunstancias, que la afiliación a los partidos quede extendida, además de a las personas físicas, a las asociaciones. No es una receta, pero es una posibilidad coyuntural.

8. Cuando los rasgos troncales de las formas participativas se alinean en una o más de las direcciones apuntadas, estamos en condiciones de sumar a la sociedad calificada como participativa, el adjetivo de sociedad abierta. Participativa y abierta se asimilan a democrática. Las modalidades operativas de la participación y la apertura dependen de muchas cosas: de cómo es la estructura social (cuando no es pluralista, hay defectuosidad y hay impedimento); de cuáles son las actitudes y los estilos políticos; de cuál es la dosis de activismo social; de cómo es el estilo del poder; de cuáles son las representaciones y pretensiones colectivas; de cuál es la clase y el grado de la cultura política. Todo esto nada más que como ejemplo. Pero reparémos en que no traemos a colación cuáles sean o no sean las normas jurídicas, porque estamos frente a fenómenos tan espontáneos, movédizos y reales, que es difícil, por no decir imposible, preverlos y describirlos en fórmulas normativas. Tienen el ritmo vital del quehacer cotidiano, de las conductas humanas, del dinamismo político y bullen en la trama misma del proceso político con la fuerza ocasional que les deparan sus protagonistas, gubernamentales y no gubernamentales.

Puede extrañar que un fenómeno sociopolítico y jurídico como éste de la participación venga señalado por nosotros como huidizo o reactivo a la normación predeterminada. Pero es así. La ya aludida espontaneidad social rebalsa los marcos de las normas escritas. No es el único caso ni el único ejemplo. Por otra parte, son muchas las normas que, pese a su consuetudinaria formal, no se cumplen o se violan, con lo que se vuelven ineficaces, pierden su vigencia sociológica, su positividad, de modo que señalar ahora que la participación carece de aptitud para ser prevista normativamente en sus detalles, ocasiones, modalidades, etc., no debe sonar demasiado raro. A lo sumo, las normas escritas pueden aludir a ella con un estándar elástico que la describa como debida en las tres instancias antes referidas: en la etapa de formación del poder, en el desarrollo del proceso político y en la distribución de su resultado y de su producto.

9. De estas tres instancias participativas hay, sin embargo, una — que es la primera— en torno de la cual suelen existir normas expresas, a veces excesivamente reglamentaristas si es que se incluyen en la constitución. Es la etapa del proceso electoral, del sufragio, de la determinación del sistema electoral, etc. Pero en las otras dos etapas, la normatividad no pro-

porciona margen —nos parece— más que para una genérica mención individual y programática, no por eso menos obligatoria o imperativa.

10. Albergar en los derechos humanos a toda la gama participativa que es capaz de dinamizar una sociedad democrática y un estado democrático suministra un horizonte político en el cual el hombre y las agrupaciones propias de una sociedad organizacional (como la llama García Pelayo) aparecen como personajes centrales comprometidos, con todo el vigor de partes activas de la misma sociedad y del mismo estado democráticos, con posibilidad de titularizar y ejercer roles propios de su condición de personas, y con la consiguiente responsabilidad de no paralizarse como espectadores pasivos o indiferentes.

Cuando en la convivencia política y en la organización jurídica en que la persona está inmersa se juegan su libertad y sus derechos, no es aventurado insistir en que los hombres tienen interés más que suficiente para participar e intervenir libremente en orden a: quién ha de gobernarlos, cómo ha de gobernarlos y para qué ha de gobernarlos, lo que nos retrotrae a la trinidad ya apuntada: la nominación de los gobernantes en la etapa de formación del elenco de poder; la intervención en el proceso de ejercicio del poder; el acceso a la distribución del beneficio que es resultado del ejercicio del poder.

11. Sabemos bien, porque no pecamos de ingenuos ni de inocentes, que la perfección participativa no va a lograrse nunca, como en ninguna de las cosas que dependen del hombre; todo es imperfecto y limitado. Pero sin caer en el angelismo ni en la utopía, estimamos viable hacer un esfuerzo para aproximar la participación a los cánones valorativos que sean los mejores y los accesibles en cada situación concreta. Este no es un empeño estéril, sino recomendable y realizable.

12. Así, los procesos electorales han de orientarse a su legitimidad. Para eso hacen falta requisitos mínimos: pluralismo, competencia, posibilidad de alternancia en el poder, periodicidad comicial, lealtad y buena fe, etc. Muchos de estos requisitos han de cumplirse en la etapa preelectoral, en la que —por ejemplo— tiene que darse ámbito suficiente para la libertad de expresión, de crítica y disenso, de información, de reunión, etc., en un marco de igualdad de oportunidades para todos los contendientes.

13. En el desarrollo del proceso de poder se hace menester que el poder adopte el perfil de un poder abierto, para estar en condiciones aptas de comunicación y diálogo con la sociedad —a condición de que ésta tenga, a su vez, propensión recíproca a influir, intervenir, reclamar—. Los múltip-

les procesos políticos en que se desglosa y diversifica "el proceso político" (en singular) pueden dar cauce y agilidad a la apertura señalada: procesos de comunicación, de mediación, de negociación. Y aquí los actores no han de ser únicamente los partidos políticos, sino cuantos grupos y organizaciones tengan interés propio (no por sectorial menos legítimo) en las distintas decisiones de poder.

14. En la etapa última de participación en el resultado que arroja la gestión de poder, hemos de tomar muy en cuenta algo importantísimo. A tal etapa la proponemos como última, final, o tercera de la serie, pero no porque se llegue a ella en un supuesto momento de logro definitivo y de inmovilidad política. La política es continua, vital, ininterrumpida, no concluye jamás, y la gestión de poder produce día a día, en una temporalidad sucesiva, sus resultados. Nunca puede imaginarse que un buen día el fin se ha alcanzado para siempre, y que de ahí en más se produce un reparto de beneficios definitivos. No es ésa la cara dinámica del quehacer estatal, ni de la convivencia social, ni de la política. La dinámica del régimen político nunca se extingue, nunca se paraliza; esa reversión de resultados es cotidiana, permanente, sin discontinuidades. De ahí que a la vez que se participa en el proceso de poder a través de la propiciada intervención con roles protagónicos activos, se opera simultáneamente el resultado del mismo proceso de poder, en una especie de ciclo de retroalimentación sin pausa.

La única etapa que no es, entonces, continua, es la electoral, por que tiene su tiempo inicial y su consumación transitoria y temporal. Las otras dos acabamos de ver que se entremezclan conjuntamente.

15. Esbozadas las precedentes diagramaciones, muy someras por cierto, conviene agregar alguna reflexión sobre partidos y sistemas electorales, con particular referencia a la instancia de formación del poder, pero sin estancarla ni agotarla en ella.

Lo primero que nos viene a la mente es una doble recomendación: que no haya un excesivo intervencionismo y reglamentarismo estatales, porque aprisiona la libertad y la espontaneidad sociales, pero o que sí haya una especie de control o gestoría del estado en materias propias del derecho público, como son las relativas a partidos y cuestiones electorales.

Diríase que es necesario situarse en un punto medio de equilibrio: reconocer que la cuna de los partidos está en la sociedad, en sus pr extensiones, en su pluralismo, y que el estado no debe sofocar ni estrangular las opciones sociales; por lo menos queda así descartado el partido único oficialmente impuesto, o acaso cobijado o prohibido a través de diversidad de

modalidades no democráticas; por el otro costado, tampoco puede pensarse en una especie de "privatización" absoluta del sistema de partidos y del sistema electoral, como si el estado abstencionista fuera el gran ausente. Que deba ser neutral no es equivalente a que abandone, desde el poder, el protagonismo que le incumbe en el proceso de conducción, de orientación, de dirección.

16. En seguida adviene otra cosa: el sistema partidario y electoral no admite recetas válidas para todas las sociedades y todos los tiempos. Ninguno, por otro lado, es totalmente inocente, y todos tienen virtudes y defectos, pros y contras. Hay que escoger el que mejor responda a cada situación de lugar y de época. No hay recetas inmutables, ni canjeables a gusto apriorístico y racionalista. Hay que ser pragmático. Si existe un campo bien empírico, parece que éste del mundo partidario y electoral lo prueba con evidencia.

No obstante, tal situacionalidad concreta de enmarque no ha de entenderse como insinuación propicia para buscar, a través del acomodamiento coyuntural del sistema partidario y electoral, ventajas sectoriales, ocasionales, triunfos propios, y recíprocos reveses del adversario, o resultados predeterminados. En suma, lo empírico y singular de cada sistema partidario y electoral no debe mancillarse con diglaciones, manipulaciones intencionadas, ni prestidigitaciones espúreas.

Lo ideal —que como ideal sólo es una guía inductora— consiste en que tanto el sistema de partidos cuanto el electoral reproduzcan con la mayor fidelidad posible la fisonomía de la sociedad. Una especie de mapa o fotografía, sabiendo que aún la mejor reproducción no coincide con la realidad.

17. La presencia y el protagonismo de los partidos es permanente. No se congela en el proceso electoral, aunque en él cobra relieve. Diríase que aquella presencia y aquel protagonismo tampoco se enderezan únicamente al activismo electoral. Es una mala práctica. Los partidos invisten funciones sociopolíticas que trascienden el momento de la puja electoralista.

Lo electoral, con ponerse en funcionamiento cuando periódicamente hay que designar candidatos y gobernantes, tiene también, de alguna manera, una continuidad que no deja de ser tal cuando entra en latencia entre un acto electoral y otro.

Es bueno, entonces, que para la vida partidaria y para el sistema electoral se complementen dos cosas en dosis suficientes: una transparencia de

la vida interna partidaria (por ejemplo, para la elección de sus cúpulas dirigentes —temas de elecciones internas y otros, como las primarias abiertas o cerradas—) y una relación democrática entre los partidos. En otros términos, propender y fortificar la vida democrática "en" los partidos y "entre" los partidos. Hay aquí un ámbito donde el estado, con razonable moderación y sin intrusiones exorbitadas, debe inducir la democratización.

18. Y vamos arribando al término de nuestro modesto comentario. Todo lo dicho circula por el área de la libertad política, de los derechos políticos, de la participación política, de la sociedad y del estado democráticos.

La democracia está también allí, anudada fuertemente. Así la entendemos ahora y hoy. Tal vez, porque la libertad es indivisible en sus manifestaciones y en sus sectores, la libertad civil y la libertad política tejen en común el plexo de los derechos humanos. Este es, pues, nuestro testimonio.

OUR RIGHTS AND OBLIGATIONS TO FUTURE GENERATIONS FOR THE ENVIRONMENT*

Edith Brown Weiss

Estadounidense, professor of Law, Georgetown University

"This we know: the earth does not belong to man: man belongs to the earth.... Whatever befalls the earth, befalls the sons of the earth. Man did not weave the thread of life; he is merely a strand in it. Whatever he does to the web he does to himself."

Chief Seattle**

We read every day about the desecration of our environment and the mismanagement of our natural resources. We have always had the capacity to wreck the environment on a small or even regional scale. Centuries of irrigation without adequate drainage in ancient times converted large areas of the fertile Tigris-Euphrates valley into barren desert. What is new is that we now have the power to change our global environment irreversibly, with profoundly damaging effects on the robustness and integrity of the planet and the heritage that we pass to future generations.

In Fairness to Future Generations argues that we, the human species, hold the natural environment of our planet in common with all members of

* Reprinted and adapted from E. Brown Weiss, *Our Rights and Obligations to Future Generations for the Environment*, 84 *American Journal of International Law* 198 (1990) with permission of the publisher, the American Society of International Law.

** Letter from Chief Seattle, patriarch of the Duwamish and Squamish Indians of Puget Sound, to U.S. President Franklin Pierce (1855). Although the letter appears in numerous anthologies, the original has never been located.

our species: past generations, the present generation and future generations.¹ As members of the present generation, we hold the earth in trust for future generations. At the same time, we are beneficiaries entitled to use and benefit from it.

There are two relationships that must shape any theory of intergenerational equity in the context of our natural environment: our relationship to other generations of our own species and our relationship to the natural system of which we are a part.²

The human species is integrally linked with other parts of the natural system; we both affect and are affected by what happens in the system. The natural system, contrary to popular belief, is in many ways a hostile one. Deserts, glaciers, volcanoes, tsunamis can bring havoc to our species. Moreover, the natural environment can be toxic to our species, as through the natural toxicity of some plants and animals or the dramatic release of toxic clouds of carbon dioxide from Lake Nyos in the Cameroon, which killed 1,700 people. On the other hand, the natural system makes life possible for us. It gives us the resources with which to survive and to improve human welfare.

Our actions affect the natural system. We alone among all living creatures have the capacity to shape significantly our relationship to the environment. We can use it on a sustainable basis or we can degrade environmental quality and the natural resource base. As part of the natural system, we have no right to destroy its integrity; nor is it in our interest to do so. Rather as the most sentient of living creatures, we have a special responsibility to care for the planet.

The second fundamental relationship is that between different generations of the human species. All generations are inherently linked to

1 E. Brown Weiss, *In Fairness to Future Generations: International Law, Common Patrimony and Intergenerational Equity* (Transnational Publishers and the United Nations University, 1989). The theory of intergenerational equity and the implications for international law are developed in detail in the book. This article is based on the ideas developed in the book.

2 The field of human ecology studies this relationship. See readings in *Man, the Environment, and Human Ecology* (A.S. Boughey ed. 1973) (good selection of readings in human ecology); R.& P. Watson, *Man and Nature* (1969) (thoughtful essay).

other generations, past and future, in using the common patrimony of earth.³

To define intergenerational equity, it is useful to view the human community as a partnership among all generations. In describing a state as a partnership, Edmund Burke observed that "as the ends of such a partnership cannot be obtained in many generations, it becomes a partnership not only between those who are living but between those who are living, those who are dead, and those who are to be born".⁴ The purpose of human society must be to realize and protect the welfare and well-being of every generation. This requires sustaining the life-support systems of the planet, the ecological processes and the environmental conditions necessary for a healthy and decent human environment.

In this partnership, no generation knows beforehand when it will be the living generation, how many members it will have, or even how many generations there will ultimately be. It is useful, then, to take the perspective of a generation that is placed somewhere along the spectrum of time, but does not know in advance where it will be located.⁵ Such a generation would want to inherit the earth in at least as good condition as it has been in for any previous generation and to have as good access to it as previous generations. This requires each generation to pass the planet on in no worse condition than it received it in,⁶ and to provide equitable access to its resources and benefits. Each generation is thus both a trustee for the planet with obligations to care for it and a beneficiary with rights to use it.

3 Professor D'Amato has criticized existing theories of equity for depending on "an articulate link to the improvement of the human condition" (i.e., as anthropocentric), rather than on a moral relationship with nature itself. See A. D'Amato, *Do We Owe a Duty to Future Generations to Preserve the Global Environment?*, 84 AJIL 190 (1990). It is certainly true that *In Fairness to Future Generations* is concerned with equity among generations of the human species. But it is equity with regard to the care and use of the planet, which is explicitly rooted in the recognition that the human species is part of the natural system. This implies great respect for the natural system of which we are a part, but it does not imply that all other living creatures are or should be treated equally. Rather, the human species, as a part of this natural system, has a special obligation to maintain the integrity of the planet, so that all generations will be able to enjoy its fruits.

4 E. Burke, *Reflections on the Revolution in France* 139-40 (1790), in 2 *Works of Edmund Burke* 368 (London 1854).

5 See J. Rawls, *A Theory of Justice* (1971).

6 See Callahan, "What Obligations Do We Have to Future Generations?", in *Responsibilities to Future Generations* 73 (E. Partridge ed. 1981).

Intergenerational equity calls for equality among generations in the sense that each generation is entitled to inherit a robust planet that on balance is at least as good as that of previous generations. This means all generations are entitled to at least the planetary health that the first generation had.⁷ In practice, some generations may improve the environment, with the result that later generations will inherit a richer and more diverse natural resource base. In this case, they would be treated better than previous generations. But this extra benefit would be consistent with intergenerational equity, because the minimum level of planetary robustness would be sustained and later generations would not be worse off than previous generations. The converse is also possible, that later generations would receive a badly degraded environment with major loss of species diversity, in which case they would be treated worse than previous generations. This latter case would be contrary to principles of intergenerational equity. Equity among generations provides for a minimum floor for all generations and ensures that each generation has at least that level of planetary resource base as its ancestors. This concept is consistent with the implicit premises of trusteeship, stewardship and tenancy, in which the assets must be conserved, not dissipated, so that they are equally available to those who come after.

The theory of intergenerational equity finds deep roots in international law.⁸ The Preamble to the Universal Declaration of Human Rights begins, "Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world". The reference to all members of the human family has a temporal dimension, which brings all generations within its scope. The reference to equal and inalienable rights affirms the basic equality of these generations in the human family.

The United Nations Charter, the International Covenant on Civil and Political Rights, the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, the American Declaration on the Rights and Duties of Man, the Declaration on the Elimination of Discrimination Against Women, the Declaration on the Rights of the Child and many other human rights documents protect the dignity of all people and the equality of their rights. The Declaration of the Principles of International Cultural Coopera-

tion provides in Article 1 that "each culture has a dignity and value which must be respected and preserved", and that "all cultures form part of the common heritage belonging to mankind".⁹ These instruments reveal a fundamental belief in the dignity of all members of human society and in an equality of rights that extends in time as well as space. Indeed, if we were to license the present generation to exploit our natural and cultural resources at the expense of the well-being of future generations, we would contradict the purposes of the United Nations Charter and international human rights documents.

It is not enough, however, to apply a theory of intergenerational equity only among generations. It also carries an intragenerational dimension. When future generations become living generations, they have certain rights and obligations to use and care for the planet that they can enforce against one another. Were it otherwise, members of one generation could allocate the benefits of the world's resources to some communities and the burdens of caring for it to others and still potentially claim on balance to have satisfied principles of equity among generations.

Moreover, the fulfillment of intergenerational obligations requires attention to certain aspects of intragenerational equity. As is well-known, poverty is a primary cause of ecological degradation. Poverty-stricken communities, which by definition have unequal access to resources, are forced to overexploit the resources they do have so as to satisfy their own basic needs. As an ecosystem begins to deteriorate, the poor communities suffer most, because they cannot afford to take the measures necessary to control or adapt to the degradation, or to move to pristine areas.

Thus, to implement intergenerational equity, countries need to help poor communities to use the natural environment on a sustainable basis, to assist them in gaining equitable access to the economic benefits from our planet, such as potable water, and to help protect them from degraded environmental quality. As beneficiaries of the planetary legacy, all members of the present generation are entitled to equitable access to and use of the legacy. The future nationals of all countries will benefit from effort of the present generation to protect the general planetary environment for future generations. Conversely, all will suffer if the present generation does not make such efforts.

7 See B. Ackerman, *Social Justice in the Liberal State* (1980).

8 E. Brown Weiss, *supra* note 1, at 25-26.

9 Declaration of the Principles of International Cultural Cooperation, Resolutions, Gen. Conf. of UNESCO, Nov. 4, 1966 (Sess. 14).

The development of principles of intergenerational equity must be guided by four criteria. First, the principles must be the product of consensus, shared by different cultural traditions, and generally acceptable to different political and economic systems. Second, they should allow future generations the flexibility to operate within their own value systems and not require one generation to predict the values of another. Third, they should promote equity among generations by respecting both the rights of future generations not to be deprived of resources by present exploitation and the rights of the present generation to be free from unreasonable restrictions to protect indeterminate future requirements. Finally, the principles should be as definite and as clear as possible in application to foreseeable situations.

Three basic principles of intergenerational equity are proposed. First, each generation should be required to conserve the diversity of the natural and cultural resource base, so that it does not unduly restrict the options available to future generations in solving their problems and satisfying their own values, and should also be entitled to diversity comparable to that enjoyed by previous generations. This principle is called "conservation of options". Second, each generation should be required to maintain the quality of the planet so that it is passed on in no worse condition than in which it was received, and should also be entitled to planetary quality comparable to that enjoyed by previous generations. This is the principle of "conservation of equality". Thus, each generation should provide its members with equitable rights of access to the legacy of past generations and should conserve this access for future generations. This is the principle of "conservation of access".

These proposed principles constrain the actions of the present generation in developing and using the planet, but within these constraints do not dictate how each generation should manage its resources.

These principles of intergenerational equity form the basis of a set of intergenerational obligations and rights, or planetary rights and obligations, that are held by each generation. These rights and obligations derive from each generation's position as part of the intertemporal entity of human society.

Planetary rights and obligations are integrally linked. The rights are always associated with obligations. They are rights of each generation to receive the planet in no worse condition than did the previous generation, to inherit comparable diversity in the natural and cultural resources bases, and to have equitable access to the use and benefits of the legacy. They rep-

resent in the first instance a moral protection of interests, which must be transformed into legal rights and obligations.

Planetary rights and obligations coexist in each generation. In the intergenerational dimension, the generations to which the obligations are owed are future generations, while the generations with which the rights are linked are past generations. Thus the rights of future generations are linked to the obligations of the present generation. In the intragenerational context, planetary obligations and rights exist between members of the present generation. They derive from the intergenerational relationship that each generation shares with those who have come before and those yet to come. Thus, intergenerational obligations to conserve the planet flow from the present generation both to future generations as generations and to members of the present generation, who have the right to use and enjoy the planetary legacy.

Intergenerational rights of necessity inhere in all generations, whether these be immediately successive generations or ones more distant. There is no theoretical basis for limiting such rights to immediately successive generations. If we were to do so, we would often provide little or no protection to more distant future generations. Nuclear and hazardous waste disposal, the loss of biological diversity and ozone depletion, for example, have significant effects on the natural heritage of more distant generations.

Intergenerational planetary rights may be regarded as group rights, as distinct from individual rights, in the sense that generations hold these rights as groups in relation to other generations past, present and future.¹⁰ They exist regardless of the number and identity of individuals making up each generation. When held by members of the present generation, they acquire attributes of individual rights in the sense that there are identifiable interests of individuals that the rights protect. However, those interests derive from the fact that those living now are members of the present generation and have rights in relation to other generations to use and benefit from the planet. The remedies for violations of these rights will benefit other members of the generation, not only the individual.¹¹

10 For a thoughtful analysis of group rights in relation to goods that are enjoyed together, see J. Waldron, *Can Communal Goods Be Human Rights?* (paper delivered at Conference on Development, Environment and Peace as New Human Rights, Oxford University, Oxford, England, May 28-31, 1987).

11 The temporal dimension may offer theoretical basis for unifying these human rights that we now consider to be group of social rights and for so-called new human rights. Group rights, such as cultural rights, have a temporal dimension since the community inherently extends over time. Theoretically, rights to development, to food, to

Developments in international law outside the field of the environment make acceptance of intergenerational rights a natural and desirable evolution. Indeed, international human rights law the genocide convention, and the prohibition against racial discrimination, to cite two examples, are arguably directed as much to the protection of future, as to present generations. The extinction of, for example, an entire people is more odious in law than the murder of an equal number of people constituting a minority of each of several groups. Similarly, discrimination denies an "equal place at the starting gate" not only to the generation of the suppressed group but (by implication) also to future generations. Provisions in other human rights agreements refer to rights of children and of the elderly, and to education and training, which are implicitly temporally oriented.

One might still ask whether it is not preferable to speak only of planetary obligations toward future generations without corresponding intergenerational rights. Can intergenerational obligations exist without rights?¹² While rights are always connected to obligations, the reverse is not always true. Theoretically, an obligation need not always entail a right. For example, a moral obligation of charity does not give those who benefit a right to charity. The legal positivist Hans Kelsen hesitated to find a legal right connected to certain legal obligations.

If obligated behavior of one individual does not refer to a specifically designated other individual... but refers only to the legal community as such, then... one is satisfied... to assume a legal obligation without a corresponding reflex right: for example in the case of the legal norms that prescribe a certain human behavior toward some animals, plants, or inanimate objects by pain of punishment. It is forbidden to kill certain animals at certain times (or altogether), to pick certain flowers, to cut certain trees or to destroy certain historical monuments. These are obligations which -indirectly- exist toward the legal community interested in these objects.¹³

→ health, and to the environment can be seen as intergenerational, or intertemporal, in that they are rights of access of each generation to use and benefit from our natural and cultural resources. See E. Brown Weiss, *supra* note 1, at 114-15.

12 Bryan Norton, a philosopher, argues that if one accepts the conceptual model of rights as limited to individual rights (which he does), it is preferable to recognize general obligations toward the integrity of environmental systems rather than to discuss environmental protection in the framework of rights, since this framework cannot encompass such categories as future generations, whose individual members are still contingent. Norton, *Environmental Ethics and the Rights of Future Generations*, 7 *Soc. Theory & Prac.* 319, 337 (1981).

13 H. Kelsen, *Pure Theory of Law* 62 (M. Knight trans. 1969).

1991]

Doctrina

29

John Austin described some obligations as absolute duties, which exist independently of any correlative right. He defined absolute duties as those prescribing actions toward parties other than the one obliged, who are not determinate persons, such as members generally of an independent society and mankind at large.¹⁴

If we were to follow this analysis, we would contend that the obligations of the present generation to future generations constitute obligations or duties for which there are no correlative rights, because there are no determinate persons to whom the right attaches. Similarly, in the intragenerational context, obligations to conserve diversity, quality and access would be viewed as absolute duties for which there is no correlative right.

While this approach may be attractive, the fundamental temporal relationship that each generation has to all other generations and that gives rise to the rights of each generation to share equitably in the use of the planet and its natural resources. These rights focus discussion on the welfare of generations, what each generation is able to have and to enjoy, in a way that obligations cannot. If obligations of the present generation are not linked with rights, the present generation has a strong incentive to bias the definition of these obligations in favor of itself at the expense of future generations. Intergenerational rights have greater moral force than do obligations. They provide a basis for protecting the interest of all generations in a healthy and robust planet.

It has been argued that future generations cannot have rights, because rights exist only when there are identifiable interests, which can only happen if we can identify the individuals who have interests to protect. Since we cannot know who the individuals in the future will be, it is not possible for future generations to have rights.¹⁵

This paradox assumes the traditional conceptual framework of rights as rights of identifiable individuals. But planetary, or intergenerational, rights are not rights possessed by individuals. They are, instead, general rights, which must be conceived of in the temporal context of generations.

14 J. J. Austin, *Austin's Jurisprudence*, *Lectures on Jurisprudence* 413-15 (1973).

15 This has been referred to as Parfit's paradox and was developed in D. Parfit, "On Doing the Best for Our Children", in *Ethics and Population* 100 (M. Bayles ed. 1976) and D. Parfit, *Future Generations*, *Further Problems*, 11 *Phil. & Pub. Aff.* 113 (1982). The paradox was further elaborated in A. D'Amato, *supra* note 3.

Generations hold these rights as groups in relation to other generations—past, present and future. This is consistent with other approaches to rights, including the Islamic approach which treats human rights not only as individual rights, but as “rights of the community of believers as a whole”.¹⁶ They can be evaluated by objective criteria and indices applied to the planet from one generation to the next. To evaluate whether the interests represented in planetary rights are being adequately protected does not depend upon knowing the number of kinds of individuals that may ultimately exist in any given future generation.

Enforcement of these intergenerational rights is appropriately done by a guardian or representative of future generations as a group, not of future individuals, who are of necessity indeterminate. While the holder of the right may lack the capacity to bring grievances forward and hence depends upon the representative’s decision to do so, this inability does not affect the existence of the right or the obligation associated with it.

Now it may be argued that such rights do depend upon knowing at least the number of individuals in the future, because if the earth’s population continues to grow rapidly, the amount of diversity and degree of quality that must be passed on will be higher than if the population in the future were at the same level or less than it is today.

But, if anything, the existence of these generational rights to the planet may constrain the population policies of present and future generations. Whether a generation chooses to meet its obligations by curtailing exploitation, consumption and waste or by constraining population growth is a decision it must make. The fact that future generations have a generational right to receive the planet in a certain condition puts constraints on the extent to which a present generation can ignore this choice.

It has also been argued that if we intervene to conserve the environment to protect future generations, we cannot succeed in protecting them because our intervention will cause a different group of individuals to emerge. But since the rights of future generations exist only as generational rights, it does not matter who the individuals are or how many they may be. Only at the point where the individuals are born and by definition become members of the present generation do the generational rights attach to individuals.

It is certainly correct that the composition of future generations cannot be known in advance, in part because it is affected by actions of the present generation. In making this argument, we do not need to limit ourselves to ascribing these effects to subtle changes in the biochemistry of conception.¹⁷

Virtually every policy decision of government and business affects the composition of future generations, whether or not they are taken to ensure their rights under the guidelines enunciated above. Decisions regarding war and peace, economic policy, the relative prosperity of different regions and social groups, transportation, health, education—all influence the demographics and the composition of future generations by affecting the lives and fortunes of the present generation: who will succeed and prosper, who will marry whom, who will have children, and even who will emigrate.

In Fairness to Future Generations takes the view that our planetary obligations to future generations are owed to all the earths future human inhabitants, whoever they may be. This opens the possibility that these decisions, too, deserve to be scrutinized from the point of view of their impact on future generations. It offers a useful and broadly acceptable theoretical underpinning to sustainable resource development. The possibility that intergenerational equity may place limits on our options is an important new area of human rights research.

Such limitations should be applied very narrowly, lest the rights of future generations develop into an all-purpose club to beat down any and all proposals for change. But surely long-term environmental damage is a good place to begin. Future generations really do have the right to be assured that we will not pollute ground water, load lake bottoms with toxic wastes, extinguish habitats and species or change the world’s climate dramatically—all long-term effects that are difficult or impossible to reverse—unless there are extremely compelling reasons to do so, reasons that go beyond mere profitability.

17 Professor D’Amato focuses on this narrow biological aspect in his amusing excursion into the dynamic egg and sperm to illustrate the intrusive effect of present actions on the identity of future generations. See A. D’Amato, *supra* note 3 at 191. Professor Gündling by contrast, asserts that the behavior of current generations always determines the identity of future generations, and thus the relevant question is whether the intervention is purposeful and deliberate or not. This line of reasoning is developed in L. Gündling, *Our Responsibility to Future Generations*, 84 AJIL 207, 210 (1990).

Chaos theory has been evoked to justify the contention that any environmental intervention will produce different individuals in the future than would otherwise have been produced. But this overlooks the most important implication of chaos theory for the environment, and for future generations: namely, that systems do not proceed on orderly, linear paths of change, but rather that they will abruptly change.¹⁸ This can be demonstrated on a home computer, using a very simple program. It has been suggested that there may be key breaking points in our global environmental system, beyond which systems will reorganize and substantially change their properties.¹⁹ If we are concerned about future generations, it is important to try to predict these breaking points. More importantly, the best tool that we could give future generations to respond to abrupt changes and reorganizations is a robust planet, which requires conserving a diversity of resources so that future generations have greater flexibility in designing responses.

It has also been argued that there is a "preverbal sense of morality" that tells us not to waste resources, degrade the environment or wantonly kill animals.²⁰ But, if anything, history in the last few centuries suggests that our natural instincts are self-indulgent. We have desecrated environments, wasted resources and slaughtered animals purely for pleasure or for modest personal gain. It may be that the human species carries both a selfish gene and an altruistic one, as the sociobiologists tell us,²¹ but it is hardly sufficient to rely on the generous gene to build a theory of morality to overcome the selfish genes, without more.

In Fairness to Future Generations relies on a fundamental norm of equality among generations of the human species in relation to the care and

18 For catastrophe theory, see R. Thom, *Mathematical Models of Morphogenesis* (1983); for the theory of complex systems, see I. Prigogine & I. Stengers, *Order Out of Chaos: Man's New Dialogue with Nature* (1984). For a concise review of the influence of chaos theory, see *Chaos Theory: How Big an Advance?*, 245 *Science* 26 (1989).

19 G. Gallopín, President, Fundación Bariloche, discussion with author, June 1986. This is consistent with the scientific paradigms in the theories of catastrophe and of the dynamics of complex systems far from equilibrium.

20 A. D'Amato, *supra* note 3 at 197.

21 See, e.g., J. & I. Baldwin, *Beyond Sociobiology* (1981). Sociobiologists assert that there are four types of inherent behavior that explain all our social behavior: selfish, altruistic, cooperative and spiteful. Humans act so as to try to ensure that their genes will be carried forward into succeeding generations. *Id.* at 49-50.

use of the natural system. But it recognizes that we are part of the natural system and that we, as all other generations, must respect this system. We have a right to use and enjoy the system but no right to destroy its robustness and integrity for those who come after us.

Whether we rely on a beneficent "preverbal sense of morality" toward the planet and its resources or on theories rooted in the welfare of the human condition and the ecological system of which people are a part, there is a shared recognition that the present generation has an obligation to care for the planet and to ensure that all peoples can enjoy its services.

THE PARALLEL EVOLUTIONS OF
INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS
PROTECTION AND OF ENVIRONMENTAL
PROTECTION AND THE ABSENCE OF
RESTRICTIONS UPON THE EXERCISE OF
RECOGNIZED HUMAN RIGHTS

Antonio Augusto Cançado Trindade

*Brazilian, Judge ad hoc, Inter-American Court of Human Rights;
member Board of Directors, Inter-American Institute of Human Rights.*

Summary:

I. Introduction. II. The Growth of Human Rights Protection and of Environmental Protection: From Internationalization to Globalization. 1. The Internationalization of Human Rights Protection and of Environmental Protection. 2. The Globalization of Human Rights Protection and of Environmental Protection. 3. The Globalization of Protection and *Erga Omnes* Obligations. III. Further Affinities in the Evolutions of Human Rights Protection and of Environmental Protection. 1. Protection of the Human Person and Environmental Protection: Mutual Concerns. 2. Incidence of the Temporal Dimension in Environmental Protection and in Human Rights Protection. IV. The Rights to Life and to Health at the Basis of the *Ratio Legis* of International Human Rights Law and of Environmental Law. 1. The Fundamental Right to Life in Its Wide Dimension. 2. The Right to Health as the Starting-Point towards the Right to a Healthy Environment. 3. The Right to a Healthy Environment as an Extension of the Right to Health. V. The Question of the Implementation (*Mise en Oeuvre*) of the Right to a Healthy Environment. 1. The Issue of Justiciability. 2. The Issue of Protection *Erga Omnes: Drittwirkung*. VI. The Right to a Healthy Environment and the Absence of Restrictions in the Expansion of Human Rights Protection and of Environmental Protection. 1. No Restrictions Ensuing from the Co-existence of International Instruments on Human Rights Protection. 2.

No Restrictions Ensuing from the Co-existence of International Instruments on Environmental Protection. 3. No Restrictions Ensuing from the Expansion of Systems of Protection (As Evidenced by the Recognition of the Right to a Healthy Environment) in Their Effects upon Each Other. 4. The Recognition of the Right to a Healthy Environment and the Consequent Enhancement, Rather than Restriction, of Pre-Existing Rights.

I. INTRODUCTION

The general theme chosen for consideration in the 1990 Banff Conference is a particularly suitable and most timely one: *Human Rights in the XXI Century: A Global Challenge*. Not only does it render possible to encompass the examination of a wide variety of aspects and concerns pertaining to the present state of the international protection of human rights, but it also paves the way for a projection into the future of insights and ideas which may point the ways towards the enhancement of the international protection of human rights in the years that bring us into the new century. Within this general outlook, the topic which has been entrusted to us for presentation in the present Conference in Banff is a specific and so far virtually unexplored one: the parallels in the evolutions of two domains of protection—human rights protection and environmental protection—and the impact of their expansion upon the exercise of previously recognized human rights.

For the purpose of examination of this novel topic, we shall develop four lines of considerations: first, the identification of affinities in the parallel evolutions of human rights protection and of environmental protection; second, the identification of the wide dimension of the fundamental right to life, added to the right to health, at the basis of the *ratio legis* of international human rights law and of environmental law; third, the question of the implementation (*mise en oeuvre*) of the right to a healthy environment; and fourth, the expansion of human rights protection and of environmental protection in their effects upon each other and a critical appraisal of the so-called *restrictions* upon the exercise of previously recognized human rights. It is our hope that the reflections developed herein may stimulate or pave the way for further attention to, and research on, the subject, conducive to a better understanding of the proper sense of the expansion of the two domains of protection and to the enrichment and strengthening of the international protection of human rights.

II. THE GROWTH OF HUMAN RIGHTS PROTECTION AND OF ENVIRONMENTAL PROTECTION FROM INTERNATIONALIZATION TO GLOBALIZATION.

1. *The Internationalization of Human Rights Protection and of Environmental Protection*

The parallel evolutions of human rights protection and environmental protection disclose some affinities which should not pass unnoticed. They both witness, and precipitate, the gradual erosion of so-called domestic jurisdiction. The treatment by the State of its own nationals becomes a matter of international concern. Conservation of the environment and control of pollution become likewise a matter of international concern. There occurs a process of *internationalization* of both human rights protection and environmental protection, the former as from the 1948 Universal Declaration on Human Rights, the latter—years later—as from the 1972 Stockholm Declaration on the Human Environment.

With regard to human rights protection, eighteen years after the adoption of the 1948 Universal Declaration the International Bill of Human Rights was completed with the adoption of the two U.N. Covenants, on Civil and Political (and Optional Protocol), and on Economic, Social and Cultural Rights (1966), respectively. The normative corpus of international human rights law is today a vast one, comprising a multiplicity of treaties and instruments, at both global and regional levels, with varying ambit of application and covering the protection of human rights of various kinds and in distinct domains of human activity.

As for environmental protection, the years following the Stockholm Declaration likewise witnessed a multiplicity of international instruments on the matter, equally at both global and regional levels. It is estimated that nowadays there are more than 300 multilateral treaties and around 900 bilateral treaties providing for the protection and conservation of the biosphere, to which over texts from international organizations can be added.¹ This considerable growth of international regulation in the present domain has, by and large, followed a *sectorial* approach, leading to the celebration of conventions turned to certain sectors or areas, or concrete situations (e.g., oceans, continental waters, atmosphere, wild life). In sum, international

¹ Reference can further be made to domestic legislation on the matter in virtually all States: it is estimated that domestic legislative instruments reach today a total of 30,000. A.C. Kiss, *Droit international de l'environnement*, Paris, Pédone, 1989, p. 46.

regulation in the domain of environmental protection has taken place in the form of *responses* to specific challenges.

The same appears to have taken place in the field of human rights protection, where we witness a multiplicity of international instruments: parallel to general human rights treaties (such as the two U.N. Covenants on Human Rights and the three regional—European, American and African—Conventions), there are Conventions turned to concrete situations (*e.g.*, prevention of discrimination, prevention and punishment of torture and ill-treatment), to specific human conditions (*e.g.*, refugee status, nationality and statelessness), and to certain groups in special need of protection (*e.g.*, workers' rights, women's rights, protection of the child, protection of the elderly, protection of the disadvantaged). In sum, human rights instruments have grown, at normative and procedural levels, likewise as *responses* to violations of human rights of various kinds.

This being so, it is not surprising that certain gaps may appear, as awareness grows as to the increasing needs of protection. An example of such gap, in the field of human rights protection, can be found in our days, *e.g.*, in the protection to be extended to certain vulnerable groups, in particular indigenous populations. Another example of such gap, in the area of environmental protection, can nowadays be found, *e.g.*, in the needed enhancement of international regulation on climate change and protection of the atmosphere.

A significant task for the near future—if not for the present—will precisely consist in ensuring the proper *co-ordination* of multiple instruments which have grown in the last decades, at global and regional levels, pursuant to the "sectorial" approach (*supra*), in the domains of human rights protection² as well as environmental protection. Beyond the internationalization of human rights protection and of environmental protection in the pattern above referred to, it was soon realized that, in each of the two domains of protection, there existed an inter-relatedness among the distinct sectors object of regulation.

2. The Globalization of Human Rights Protection and of Environmental Protection

The awareness of this inter-relatedness has decisively contributed to the evolution, in recent years, from the internationalization to the globalization of human rights protections as well as of environmental protection. As far as human rights protection is concerned, two decades after the adoption of the 1948 Universal Declaration of Human Rights the 1968 Teheran Conference on Human Rights, in a global reassessment of the matter, proclaimed the *indivisibility* of all human rights (civil and political, as well as economic, social and cultural rights). This was followed by the landmark resolution 32/130, adopted by the U.N. General Assembly in 1977, where it stated that human rights questions were to be examined globally.

That resolution endorsed the assertion of the 1968 Teheran Proclamation of the indivisibility and interdependence of all human rights, from a globalist perspective, and drew attention to the priority to be accorded to the search for solutions to massive and flagrant violations of human rights³. Three decades after the adoption of the 1948 Universal Declaration, the U.N. General Assembly, bearing in mind the fundamental changes undergone by so-called international society—decolonization, capacity of massive destruction, population growth, environmental conditions, energy consumption, amongst others—by its resolution 32/130 endeavoured to overcome the old categorizations of rights and to proceed to a needed global analysis of existing problems in the field of human rights.

Such new global outlook and conception of the indivisibility of human rights, rendered possible by the U.N. Charter itself and externalized in G.A. resolution 32/130 of 1977, contributed to drawing closer attention in particular to the rights pertaining to human collectivities and the measure of their implementation. The matter was re-taken by G.A. resolutions 39/145, of 1984, and 41/117, of 1986, which reiterated the inter-relatedness of all human rights, whereby the protection of one category of rights should not exempt States from safeguarding the other rights. Thus, human rights instruments turned to the protection of certain categories of rights, or of certain rights in given situations, or of rights of certain groups in special need of protection, are to be properly approached on the understanding

² Cf. A.A. Cançado Trindade, "Co-existence and Co-ordination of Mechanisms of International Protection of Human Rights (At Global and Regional Levels)", 202 *Revue des Cours de l'Académie de Droit International* (1987) pp. 21-435.

³ Th. C. Van Boven, "United Nations Policies and Strategies: Global Perspectives?", *Human Rights: Thirty Years after the Universal Declaration* (ed. B.G. Ramcharan), The Hague, M. Nijhoff, 1979, pp. 88-89 and *cf.* pp. 89-91.

that they are complementary to general human rights treaties. Multiple human rights instruments re-inforce each other, enhance the degree of the protection due, and disclose an overwhelming identity of purpose.

In the domain of environmental protection, the presence—despite the “sector by sector” regulation—of “transversal” issues and rules contributed to the globalist approach. It was reckoned, *e.g.*, that more and more often certain activities and products may cause harmful effects in any environment (*e.g.*, toxic or dangerous substances, toxic or dangerous wastes, ionizing radiations, and radioactive wastes); in fact, the problem of dangerous substances is present in the whole of *sectorial* regulation, thus pointing to globalization and generating a “réglementation se superposant aux différents secteurs”⁴.

Already in 1974, two years after the adoption of the Stockholm Declaration, the U.N. Charter on Economic Rights and Duties of States warned that the protection and preservation of the environment for present and future generations were the responsibility of all States (Article 30). And in 1980 the U.N. General Assembly proclaimed the historical responsibility of States for the preservation of nature on behalf of present and future generations⁵. While in the past States tended to regard the regulation of pollution by sectors as a national or local issue, more recently they have realized that some environmental problems and concerns are essentially global in scope⁶. In its resolution 44/228, of 22 December 1989, whereby it decided to convene a U.N. Conference on Environment and Development in 1992, the U.N. General Assembly recognized that the global character of environmental problems required action at all levels (global, regional and national), involving the commitment and participation of all countries; the resolution further affirmed that the protection and enhancement of the environment were major issues that affected the well-being of peoples, and singled out, as one of the environmental issues of major concern, the “protection of human health conditions and improvement of the quality of life” (§ 12 (i)).

4 A.Ch. Kiss, *op. cit. supra* n. (1), pp. 275-276 and 46, and *cf.* pp. 93, 106 and 204.

5 *Cit. in ibid.*, pp. 38-39.

6 “Formal and informal linkages” across nations and States have contributed to this new perception; R.W. Hahn and K.R. Richards, “The Internationalization of Environmental Regulation”, 30 *Harvard International Law Journal* (1989) pp. 421, 423 and 444-445.

The global character of environmental issues is reflected in the question, *e.g.*, of conservation of biological diversity; it is further illustrated, in particular, by the problems linked to atmospheric pollution (such as depletion of the ozone layer and global climate change). Those problems, initially thought of as being essentially local or even transboundary, were to disclose “une portée pratiquement illimitée dans l'espace”⁷. The threat of damage to many nations resulting from global warming, for example, is a major problem the cause of which would hardly be traceable to a single State or group of States, thus calling for a new approach on the basis of strategies of prevention and adaptation and considerable international cooperation⁸. Thus, the U.N. General Assembly, by resolution 43/53, of 6 December 1988, recognized that climate change is a common concern of mankind, and determined that action should be promptly taken to deal with it within a global framework.

Likewise, the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), set up by the WMO and UNEP, has indicated, as one of the possible elements for inclusion in a future framework Convention on climate change⁹, the recognition that climate change is a common concern of mankind, affecting humanity as a whole, and to be thus approached within a global framework¹⁰. The 1989 Hague Declaration on the Atmosphere insists on the search for urgent and global solutions to the problems of the warming of the atmosphere and the deterioration of the ozone layer. In the same line, the 1989 International Meeting of Legal and Policy Experts, held in Ottawa, in its report stated *inter alia* that the atmosphere constitutes a “common resource of vital interest to mankind”¹¹.

And still in 1989 (November), the Ministerial Conference on Atmospheric Pollution and Climatic Change, held in Noordwijk, The Netherlands, with the participation of 67 countries, considered the elements of a future framework climate change Convention (to be further elaborated by the IPCC) and reasserted the principle of shared responsibility of all States.

7 A.C. Kiss, *op. cit. supra* n. (1), p. 212.

8 V.P. Nanda, “Global Warming and International Environmental Law - A Preliminary Inquiry”, 30 *Harvard International Law Journal* (1989) pp. 380-385.

9 *Cf.* UNEP Governing Council decision 15/36, of 25 May 1989.

10 WMO/UNEP, *IPCC Working Group III (Response Strategies) — Legal Measures: Report of Topic Co-ordinators*, Geneva/Nairobi, 1989, p. III (mimeographed, internal circulation).

11 *Cf.* *Statement of the International Meeting of Legal and Policy Experts*, Ottawa, 1989, p. 2.

The 1989 Noordwijk Declaration on Climate Change pursued a globalist approach (Cf. §§ 8-9) and expressly stated that "climate change is a common concern of mankind" (§ 7)? In sum, recent trends in environmental protection as well as in human rights protection (*supra*) disclose a clear and progressive tendency from internationalization towards globalization.

3. *The Globalization of Protection and Erga Omnes Obligations*

The globalization of human rights protection and of environmental protection can also be attested from a distinct approach, namely, that of the emergence of *erga omnes* obligations and the consequent decline and end of reciprocity. In the field of human rights protection, reciprocity is overcome and overwhelmed by the notion of collective guarantee and considerations of *ordre public*. This operates a revolution in the postulates of traditional international law. Human rights treaties incorporate obligations of an objective character, turned to the safeguard of the rights of human beings and not of States, on the basis of a superior general public interest (or *ordre public*). Hence the specificity of human rights treaties.

Traces of this new philosophy are found in international humanitarian law: pursuant to common Article 1 of the 1949 Geneva Conventions, Contracting Parties are bound "to respect and to ensure respect" to the four Conventions "in all circumstances", i.e., irrespective of considerations of reciprocity. Provisions with analogous effects can be found in human rights treaties (e.g., U.N. Covenant on Civil and Political Rights, Article 2; European Convention on Human Rights, Article 1; American Convention on Human Rights, Article 1). Those humanitarian instruments have transcended the purely inter-state level in search of a higher degree of protection of the human person, so as to ensure the safeguard of common superior interests protected by them. Hence the universal character of the system of protection of international humanitarian law, which creates for States obligations *erga omnes*.

The evolution of environmental protection likewise bears witness of the emergence of obligations of an objective character without reciprocal advantages for States. The 1972 Stockholm Declaration on the Human Environment refers expressly to the "common good of mankind" (Principle 18). Rules on the protection of the environment are adopted, and obligations to that effect are undertaken, in the common superior interest of man-

kind. This has been expressly acknowledged in some treaties in the field of the environment (e.g., preambles of the 1971 Treaty on the Prohibition of the Emplacement of Nuclear Weapons and Other Weapons of Mass Destruction on the Sea-bed and the Ocean Floor and in the Subsoil Thereof; the 1972 Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on Their Destruction; the 1977 Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques; the 1972 Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter; the 1974 Convention for the Prevention of Marine Pollution from Land-Based Sources; the 1972 Convention for the Prevention of Marine Pollution by Dumping from Ships and Aircraft; the 1972 UNESCO Convention for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage); it is further implicit in references to "human health" in some environmental law treaties (e.g., the 1985 Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer, preamble and Article 2; the 1987 Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, preamble; Article 1 of the three marine pollution Conventions above quoted).

The evolution, from internationalization to globalization, of environmental protection, can also be detected in its spatial dimension. In the beginnings of international environmental regulation, attention was turned to environmental protection in zones under the competence of States of the territorial type. One thus spoke of control of *transboundary* or *transfrontier* pollution (a terminology reminiscent of that employed in the OECD), with an underlying emphasis on the relations between neighbouring countries or on contacts of conflicts between State sovereignties. Soon it became evident that, to face wider threats to the environment—as in, e.g., marine pollution, and atmospheric pollution (acid rain, depletion of the ozone layer, global warming)—it was necessary to consider also principles applicable "*in ubi et ubi*", on a global scale, not only in zones where State interests were immediately affected (transboundary pollution), but also in other areas where State interests appeared not so visibly affected (e.g., protection of the atmosphere and of the marine environment). In this common international law of the environment, principles of a global character are to apply on the territory of States irrespective of any transboundary or transfrontier effect, and are to govern zones which are not under any national territorial competence.¹³

12 Cf. Ministerial Conference on Pollution and Climatic Change, *The Noordwijk Declaration on Climatic Change*, Noordwijk, Nov. 1989, p. 4, and cf. pp. 1-13 (mimeographed, restricted circulation).

13 A.Ch. Kiss, *Droit international de l'environnement*, Paris, Pédone, 1989, pp. 93, 67-68, 70-72 and 8; L.A. Teddlaff, "The Impact of Environmental Concern on the Development of International Law", *International Environmental Law* (ed. L.A. Teddlaff and A.E. Utton), N.Y., Praeger, 1974, p. 251; and cf. Ian Brownlie, "A Survey of International Customary Rules of Environmental Protection", in *ibid.*, p. 5.

In this connection, the Brundtland Commission, reporting to the U.N. General Assembly in 1987, dedicated a whole chapter to the management, in the "common interest", of the so-called "global commons", i.e., those zones falling outside or beyond national jurisdictions¹⁴. Likewise, the Centre for Studies and Research in International Law and Relations of the Hague Academy of International Law, dwelling upon the issue of transfrontier pollution and international law in its 1985 session, singled out the gradual evolution from a transboundary or "transterritorial" to a global perspective of the preservation of the environment (and action in favour of resources of the common heritage of mankind)¹⁵.

That international law is no longer exclusively State-oriented can be seen from reiterated references to "mankind", not only in doctrinal writings¹⁶, but also and significantly in various international instruments, possibly pointing towards an international law of mankind, pursuing preservation of the environment and sustainable development on behalf of present and future generations. Thus, the notion of cultural heritage of mankind can be found, e.g., in the UNESCO Conventions for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict (1954) and for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage (1974). The legal principle of the common heritage of mankind has found expression in the realms of the law of the sea (1982 U.N. Convention on the Law of the Sea, Part XI, especially Articles 136-145 and 311(6)); 1970 U.N. Declaration of Principles Governing the Sea-Bed and the Ocean Floor, and the Subsoil Thereof, Beyond the Limits of National Jurisdiction) and of the law of outer space (1979 Treaty Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies, Article 11; and cf. 1967 Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and Other Celestial Bodies; Article 1⁷). The

14 World Commission on Environment and Development, *Our Common Future*, Oxford, University Press, 1987, chapter 10 ("Managing the Commons"), pp. 261-289.

15 P.M. Dupuy, "Bilan de recherches de la section de langue française du Centre d'Etude et de Recherche de l'Académie", *La pollution transfrontière et le droit international* - 1985. La Haye, Sijthoff/Académie de Droit International, 1986, pp. 68-70, 65-66 and 81.

16 Cf., e.g., C.W. Jenks, *The Common Law of Mankind*, London, Stevens, 1958, pp. 1-442; R.J. Dupuy, *La communauté internationale entre le mythe et l'histoire*, Paris, Economica/UNESCO, 1986, pp. 11-182; among others.

17 N.J. Schrijver, "Permanent Sovereignty over Natural Resources versus the Common Heritage of Mankind: Complementary or Contradictory Principles of International Economic Law?", *International Law and Development* (ed. P. De Waart, P. Peters and E. Deters), Dordrecht, Nijhoff/Kluwer, 1988, pp. 95-96, 98 and 101.

reconsideration of the basic postulates of international law bearing in mind the superior common interest of mankind has been the object of attention of general works on the subject at doctrinal level (e.g., Jenks, Dupuy)¹⁸.

Despite semantic variations in international instruments on environmental protection when referring to mankind, a common denominator underlying them all appears to be the common interest of mankind. There seems to be occurring lately an evolution from the notion of common heritage of mankind (as emerged in the contexts of the law of the sea and space law) to that of common concern of mankind. The latter has been the object of consideration by the UNEP Group of Legal Experts, which convened in Malta on 13-15 December 1990, in order to examine the implications of the concept of "common concern of mankind" on global environmental issues. In fact, it is not at all casual that the U.N. General Assembly resolution 43/53, of December 6, 1988, introduced the recognition that climate change was a "common concern" of mankind, since, in the wording of its first operative paragraph, climate was "an essential condition which sustains life on earth".

Such essential or fundamental condition is inextricably linked to the new idea of "commonness". The newly-proposed notion is inspired in considerations of international *ordre public*. It appears as a derivative of the earlier "common heritage" approach, meant to shift emphasis from the sharing of benefits from exploitation of environmental wealths to fair or equitable sharing of burdens in environmental protection, and the needed concerted actions to that effect with a social and a temporal dimensions¹⁹. It could hardly be doubted, as UNEP itself has acknowledged, that environmental protection is "decisively linked" to the "human rights issue"²⁰, to the very fulfilment of the fundamental right to life in its wide dimension (right to live — cf. section III, *infra*).

Resort to the very notion of mankind, human kind, immediately brings into the fore, or places the whole discussion within, the human rights framework, — and this should be properly emphasized, it should not

18 Cf. references in n. (16), *supra*.

19 On this last point, cf. UNEP/Executive Director and Secretariat, *Note to the Group of Legal Experts to Examine the Implications of the "Common Concern of Mankind" Concept on Global Environmental Issues*, Malta Meeting, 13-15 December 1990, document UNEP/ELIU/WG.1/1/2, PP. 1-2, §4, AND CF. PP. 4-5, §§ 8-9 (mimeographed, internal circulation).

20 *Ibid.*, p. 14 § 22.

be left implicit or neglected as allegedly redundant. Just as law, or the rule of law itself, does not operate in a vacuum, mankind, the human kind, is neither a social nor a legal abstraction: it is composed of human collectivities, of all human beings of flesh and bone, living in human societies.

If it is conceded that, if and once the concept of common concern of mankind becomes widely and unequivocally accepted, rights and obligations are bound to flow from it, then one is led to consider as its manifestation or even materialization the right to a healthy environment: within the ambit of the *droit de l'humanité*, the common concern of the human kind finds expression in the exercise of the recognized right to a healthy environment, in all its dimensions (individual, groupal, social or collective, and inter-generational—*cf.* section V-*infra*), precisely as mankind is not a social or legal abstraction and is formed by a multitude of human beings living in societies and extended in time. The human rights framework is ineluctably present in the consideration of the regime of protection of the human environment in all its aspects; we are here ultimately confronted with the crucial question of survival of the human kind, with the assertion—in face of the threats to the human environment—of the fundamental human right to live.

Just as a couple of decades ago there were questions which were “withdrawn” from the domestic jurisdiction of States to become matters of international concern (essentially, in cases pertaining to human rights protection and self-determination of peoples)²¹, there are nowadays global issues such as climate change which are being erected as common concern of mankind. Here, again, the contribution of human rights protection in piercing the so-called reserved domain of States can be perceived in historical perspective. The globalization of the regimes of human rights protection and environmental protection heralds the end of reciprocity and the emergence of *erga omnes* obligations.

The prohibition of the invocation of reciprocity as an excuse for non-compliance of *erga omnes* obligations is confirmed in unequivocal terms by the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties: in providing for the conditions in which a breach of a treaty may bring about its suspension or termination, the Vienna Convention (Article 60 (5)) expressly excepts “provisions relating to the protection of the human person contained in treaties

of a humanitarian character”. This provision pierces a domain of international law—the law of treaties—traditionally so markedly infiltrated by the voluntarism of States, and constitutes a clause of safeguard or defense of the human beings. Thus, the contemporary law of treaties itself, as attested by Article 60 (5) of the Vienna Convention, discards the principle of reciprocity in the implementation of treaties of a humanitarian character. The obligations enshrined therein generate effects *erga omnes*. The over-coming of reciprocity in human rights protection and in environmental protection has taken place in the constant search for an expansion of the ambit of protection (for the safeguard of an increasingly wider circle of beneficiaries, human beings and ultimately mankind), for a higher degree of the protection due, and for the gradual strengthening of the mechanisms of supervision, in the defense of common superior interests. Yet another affinity, in the recent developments of human rights protection and environmental protection, which has not been sufficiently examined so far and to which we shall now turn, lies in the incidence of the temporal dimension in both domains of protection.

III. FURTHER AFFINITIES IN THE EVOLUTIONS OF HUMAN RIGHTS PROTECTION AND OF ENVIRONMENTAL PROTECTION

1. *Protection of the Human Person and Environmental Protection: Mutual Concerns.*

Just as concern for human rights protection can be found in the realm of international environmental law (Preamble and Principle 1 of the 1972 Stockholm Declaration on the Human Environment, Preamble and Principles 6 and 23 of the 1982 World Charter for Nature, Principles 1 and 20 proposed by the World Commission in its 1987 report²², concern for environmental protection can also be found in the express recognition of the right to a healthy environment in two recent human rights instruments, namely: the 1988 Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights (Article 11), and the 1981 African Charter on Human and Peoples' Rights (Article 24); in the former, it is recognized as a right of “everyone” (§ 1), to be protected by

21 A.A. Cançado Trindade, “The Domestic Jurisdiction of States in the Practice of the United Nations and Regional Organisations”, 25 *International and Comparative Law Quarterly* (1976) pp. 723, 731, 737, 742, 761-762 and 765.

22 Cf. A.A. Cançado Trindade, “The Contribution of International Human Rights Law to Environmental Protection, with Special Reference to Global Environmental Change”, in *International Law and Global Environmental Change: New Dimensions* (ed. E. Brown Weiss), United Nations University (UNU) Project, 1991-1992, 93pp. (in print).

the States Parties (§ 2), whereas in the latter it is acknowledged as a peoples right²³.

Concern for the protection of the environment can nowadays be likewise found in the realm of international humanitarian law, namely: Articles 35(3) and 55 of the 1977 Additional Protocol I to the 1949 Geneva Conventions (prohibition of methods or means of warfare severely damaging the environment), added to the 1977 U.N. Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques, and to the 1982 World Charter for Nature (paragraphs 5 and 20), among other provisions²⁴. Likewise, recent developments in international refugee law are worthy of attention, such as the possible assimilation of victims of environmental disasters to protected (displaced) persons under refugee law (e.g., the 1984 Cartagena Declaration on Refugees, recommending for use in Central America an expanded concept of refugee)²⁵.

Furthermore, the protection of vulnerable groups (e.g., indigenous populations, ethnic and religious and linguistic minorities, mentally and physically handicapped persons) appears today at the confluence of international human rights law and international environmental law: as we have indicated in another study, concern for the protection of vulnerable groups can nowadays be found in international instruments and initiatives pertaining to both human rights protection and environmental protection, where the issue has been approached on the basis of both human and environmental considerations²⁶.

2. Incidence of the Temporal Dimension in Environmental Protection and in Human Rights Protection

The temporal dimension, so noticeable in the field of environmental protection, is likewise present in other domains of international law (e.g., law of treaties, peaceful settlement of international disputes, international economic law, law of the sea, law of outer space, State succession, etc.). The notion of time, the element of foreseeability, inhere in legal science as such. The predominantly **preventive** character of the normative corpus on envi-

23 Cf. *ibid.* (in print).

24 Cf. *ibid.*

25 Cf. *ibid.*

26 Cf. references and sources in A.A. Cançado Trindade, "The Contribution...", *op. cit. supra* n. (22), 93pp. (in print).

ronmental protection, stressed time and time again²⁷, and reiterated in clear and emphatic terms in the reference to the temporal dimension in the 1990 Ministerial Declaration of the II World Climate Conference (paragraph 7), is also present in the field of human rights protection.

Its incidence can be detected at distinct stages or levels, starting with the *travaux préparatoires*, the underlying conceptions and the adopted texts of human rights instruments (e.g., the three recent Conventions—the Inter-American, the U.N. and the European—against Torture, of an essentially preventive character; the 1948 Convention against Genocide, the 1973 Convention against *Apartheid*, besides other international instruments turned to the prevention of discrimination of distinct kinds)²⁸. The temporal dimension is further present in international refugee law (e.g., the elements for the very definition of "refugee" under the 1951 Convention and the 1967 Protocol on the Status of Refugees, namely, the well-founded fear of persecution, the threats or risks of persecutions,—besides the recent U.N. "early warning" efforts of prevention or forecasting of refugee flows)²⁹. Secondly, the incidence of the temporal dimension can also be detected in the "evolutionary" interpretation of human rights treaties, which has ensured that they remain living instruments: there has been occurring a dynamic process of evolution of international human rights law through interpretation³⁰.

And thirdly, also in respect of the **application** of human rights treaties, the practice of international supervisory organs (e.g., at global level, that of the Human Rights Committee under the Covenant on Civil and Political Rights and its Optional Protocol), affords illustrations of the temporal dimension in human rights protection. Thus, the *jurisprudence constante* of the European Commission and Court of Human Rights under the European Convention on Human Rights has in recent years upheld, in numerous cases, the notion of **potential** or **prospective** victims, *i.e.*, victims claiming a valid potential personal interest under the Convention, thus enhancing the condition of individual applicants³¹. Likewise, the Inter-American Court of Human Rights, in its judgments of 1988 in two of the three

27 Cf. *ibid.* (in print).

28 *Ibid.*

29 *Ibid.*

30 A.A. Cançado Trindade, "Co-existence and Co-ordination...", *op. cit. supra* n. (2), pp. 91-112.

31 *Ibid.*, Pp. 243-299.

Honduran cases where it found a breach of the American Convention (*Velaquez Rodriguez* and *Godinez Cruz* cases), stressed the States' duty of due diligence to prevent violations of protected human rights³².

In fact, the incidence of the temporal dimension can be detected not only in the interpretation and application of norms pertaining to guaranteed rights but also in the conditions of their exercise (as in, e.g., public emergencies); it can further be detected in the protection not only of civil and political rights, but also—and perhaps even more pronounced—of economic, social and cultural rights (e.g., right to education, right to cultural integrity), or else of the right to development and the right to a healthy environment,—extending in time³³. Manifestations of the temporal dimension become quite concrete in particular precisely in the field of human rights protection, where they do not appear as soft law. Here, more clearly than in other chapters or fields of international law, the evolving jurisprudence (e.g., on the notion of potential victims, on the duty of prevention of violations of human rights) may serve of inspiration also for environmental protection.

IV. THE RIGHTS TO LIFE AND TO HEALTH AT THE BASIS OF THE RATIO LEGIS OF INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW AND OF ENVIRONMENTAL LAW

1. *The Fundamental Right to Life in Its Wide Dimension.*

The right to life is nowadays universally acknowledged as a basic or fundamental human right. It is basic or fundamental because "the enjoyment of the right to life is a necessary condition of the enjoyment of all other human rights"³⁴. As indicated by the Inter-American Court of Human Rights in its Advisory Opinion on *Restrictions to the Death Penalty* (1983), the human right to life encompasses a "substantive principle" whereby every human being has an inalienable right to have his life respected, and a "procedural principle" whereby no human being shall be arbitrarily deprived of his life³⁵.

32 Cf. A.A. Cancado Trindade, "The Contribution...", *op. cit. supra* n. (22) (in print).

33 *Ibid.* (in print).

34 F. Przetacznik, "The Right to Life as a Basic Human Right", 9 *Revue des droits de l'homme/Human Rights Journal* (1976) pp. 589 and 603.

35 I.A. Court H.R., Advisory Opinion OC-3/83, of 08 September 1983, Series A, n^o3, p.59, 53.

The Human Rights Committee, operating under the U.N. Covenant on Civil and Political Rights (and Optional Protocol), qualifying the human right to life as the "supreme right of the human being", has warned that fundamental human right *ne peut pas être entendu de façon restrictive* and its protection *exige que les Etats adoptent des mesures positives*³⁶. The Inter-American Commission on Human Rights, likewise, has drawn attention to the binding character of the right to life³⁷. In its recent resolution n^o 3/87, on case n^o 9647, concerning the United States, the Inter-American Commission, after identifying a norm of *jus cogens* which "prohibits the State execution of children", warned against "the arbitrary deprivation of life" on the basis of a patchwork scheme of legislation which subjects the severity of the punishment (of the offender) to the "fortuitous element of where the crime took place"³⁸.

Under international human rights instruments, the assertion of the inherent right to life of every human being is accompanied by an assertion of the legal protection of that basic human right and of the negative obligation not to deprive arbitrarily of one's life (e.g., U.N. Covenant on Civil and Political Rights, Article 6(1); European Convention on Human Rights, Article 2; American Convention on Human Rights, Article 4(1); African Charter on Human and Peoples' Rights, Article 4)³⁹. But this negative obligation is accompanied by the positive obligation to take all appropriate measures to protect and preserve human life. This has been acknowledged by the European Commission of Human Rights, whose case-law has evolved to the point of holding (Association X versus United Kingdom case, 1978) that Article 2 of the European Convention on Human Rights imposed on States also a wider and positive obligation *de prendre des mesures adéquates pour protéger la vie*⁴⁰.

Taken in its wide and proper dimension, the fundamental right to life comprises the right of every human being not to be deprived of his life

36 Cf. in J.G.C. Van Aggelen, *Le rôle des organisations internationales dans la protection du droit à la vie*, Bruxelles Story-Scientia, 1986, p.23.

37 Cf. in *ibid.*, p. 38.

38 OAS, *Annual Report of the Inter-American Commission on Human Rights - 1986-1987*, pp. 170 and 172-173.

39 Th. Desch, "The Concept and Dimensions of the Right to Life (As Defined in International Standards and in International and Comparative Jurisprudence)", 36 *Osterreichische Zeitschrift für Öffentliches Recht und Völkerrecht* (1985) pp. 86 and 99.

40 Cf. in J.G.C. Van Aggelen, *op. cit. supra* n. (36), p.32.

(right to life) and the right of every human being to have the appropriate means of subsistence and a decent standard of life (preservation of life, right of living). As well pointed out by Przetaczniak, "the former belongs to the area of civil and political rights, the latter to that of economic, social and cultural rights"⁴¹. The fundamental right to life, thus properly understood, affords an eloquent illustration of the indivisibility and inter-relatedness of all human rights⁴².

In fact, some members of the Human Rights Committee have expressed the view that Article 6 of the U.N. Covenant on Civil and Political Rights requires the State

"to take positive measures to ensure the right to life, including steps to reduce the infant mortality rate, prevent industrial accidents, and protect the environment (...)"⁴³.

Taking the essential requirements of the right of living (*supra*) as a corollary of the right to life, Desch argued that inequitable distribution of food or medicaments by public authorities, or even the toleration of malnutrition or failure to reduce infant mortality would constitute violations of Article 6 of the Covenant if there results an arbitrary deprivation of life⁴⁴.

During the drafting of the 1948 Universal Declaration of Human Rights, attempts were made to make its Article 3, which proclaims the right to life, more precise⁴⁵. A number of issues was the object of discussion in the drafting of corresponding provisions on the right to life of human rights treaties⁴⁶, but it was the views and decisions more recently rendered by

41 F. Przetaczniak, *op. cit. supra* n. (34), p. 603, *e cf.* p. 586.

42 On the right to life bearing witness of the indivisibility of all human rights, *cf.* W.F. Gornley, "The Right to a Safe and Decent Environment", 20 *Indian Journal of International Law* (1988) pp. 23-24.

43 *Cit.* in Th. Desch, *op. cit. supra* n.(39), p.101.

44 *Ibid.*, p.101.

45 Cf. H. Kanger, *Human Rights in the U.N. Declaration*, Uppsala/Stockholm, Almqvist & Wiksell, 1984, pp. 81-82.

46 On the legislative history of Article 6 of the U.N. Covenant on Civil and Political Rights, *cf.* [B.G. Ramcharan] "The Drafting History of Article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights", in *The Right to Life in International Law* (ed. B.G. Ramcharan), Dordrecht, Nijhoff/Kluwer, 1985, pp. 42-56; on the legislative history of Article 2 of the European Convention on Human Rights, *cf.* B.G. Ramcharan, "The Drafting History of Article 2 of the European Convention on Human Rights", in *ibid.*, pp. 57-61; and on the legislative history of Article 4 (and antecedents) of the American Convention on Human Rights, *cf.* J. Colon-Collazo, "A Legislative History of the Right to Life in the Inter-American Legal System", in *ibid.*, pp. 33-41.

international supervisory organs that have gradually given more precision to the right to life as enshrined in the respective human rights treaties (*cf. supra*). Even those who insist on regarding the right to life strictly as a civil right⁴⁷ cannot fail to admit that, ultimately, without an adequate standard of living (as recognized, *e.g.*, in Articles 11-12 of the U.N. Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, following Article 25(1) of the 1948 Universal Declaration) the right to life could not possibly be realized in its full sense⁴⁸ (*e.g.*, in its close relationships with the right to health and medical care, the right to food, and the right to housing⁴⁹). Thus, both the U.N. General Assembly (resolution 37/189A, of 1982) and the U.N. Commission on Human Rights (resolutions 1982/7, of 1982, and 1983/43, *cf.* 1983) have unequivocally taken the firm view that all individuals and all peoples have an inherent right to life, and that the safeguarding of this foremost right is an essential condition for the enjoyment of the entire range of civil and political, as well as economic, social and cultural rights⁵⁰.

Two points are deserving of particular emphasis here. First, it has not passed unnoticed that the provision of the U.N. Covenant on Civil and Political Rights on the fundamental and inherent right to life (Article 6(1)) is "the only Article of the Covenant where the inherency of a right is expressly referred to"⁵¹. Secondly, the United Nations has formed its conviction that not only all individuals but also all peoples have an inherent right to life (*supra*). This brings to the fore the safeguard of the right to life of all persons as well as of human collectivities, with special attention to the requirements of survival (as component of the right to life) of vulnerable groups (*e.g.*, the displaced and deprived, disabled or handicapped persons, children and the elderly, ethnic minorities, indigenous populations, migrant workers - *cf.* section III, *supra*)⁵².

47 *Cf.* to this effect, the analysis by Y. Dinstein, "The Right to Life, Physical Integrity, and Liberty", *The International Bill of Rights* (ed. L. Henkin, N.Y., Columbia University Press, 1981, pp. 114-137.

48 Th. Van Boven, *People Matter - Views on International Human Rights Policy*, Amsterdam, Meulenhoff, 1982, p.77.

49 On this latter, *cf.* S. Leckie, "The U.N. Committee on Economic, Social and Cultural Rights and the Right to Adequate Housing: Towards an Appropriate Approach", 11 *Human Rights Quarterly* (1989) pp. 522-560.

50 *Cit.* in B.G. Ramcharan, "The Right to Life", 30 *Netherlands International Law Review* (1983) p. 301.

51 *Ibid.*, p. 316.

52 *Cf. ibid.*, p. 305, and *cf.* p. 306; and Th. Van Boven, *op. cit. supra* n. (48), pp. 179 and 181-183.

From this perspective, the right to a healthy environment and the right to peace appear as extensions or corollaries of the right to life.⁵³ The fundamental character of the right to life renders inadequate narrow approaches to it in our days; under the right to life, in its modern and proper sense, not only is protection against any arbitrary deprivation of life upheld, but furthermore States are under the duty "to pursue policies which are designed to ensure access to the means of survival"⁵⁴ for all individuals and all peoples. To this effect, States are under the obligation to avoid serious environmental hazards or risks to life, and to set into motion "monitoring and early warning systems" to detect such serious environmental hazards or risks and "urgent action systems" to deal with such threats.⁵⁵

In the same line, in the I European Conference on the Environment and Human Rights (Strasbourg, 1979), the point was made that mankind needed to protect itself against its own threats to the environment, in particular when those threats had negative repercussions on the conditions of existence—life itself, physical and mental health, the well-being of present and future generations.⁵⁶ In a way, it was the right to life itself, in its wide dimension, which entailed the needed recognition of the right to a healthy environment; this latter appears as *le droit à des conditions de vie qui assurent la santé physique, morale, mentale et sociale, la vie elle-même, ainsi que le bien-être des générations présentes et futures*⁵⁷. In other words, the right to a healthy environment safeguards human life itself under two aspects, namely, the physical existence and health of human beings, and the dignity of that existence, the quality of life which renders it worth living.⁵⁸ The right to a healthy environment thus encompasses and enlarges the right to health and the right to an adequate or sufficient standard of living, and has furthermore a wide temporal dimension: as, *en matière d'environnement,*

53 B.G. Ramcharan, *op. cit. supra* n. (5), pp. 303 and 308-310.

54 *Ibid.*, p. 302.

55 *Ibid.*, pp. 304 and 329. Views reproduced in B.G. Ramcharan, "The Concept and Dimensions of the Right to Life", *The Right to Life in International Law* (ed. B.G. Ramcharan), Dordrecht, Nijhoff/Kluwer, 1985, pp. 1-32.

56 P. Kromarek, "Le droit à un environnement équilibré et sain, considéré comme un droit de l'homme: sa mise-en-oeuvre nationale, européenne et internationale", *1 Conférence européenne sur l'environnement et les droits de l'homme*, Strasbourg, Institute for European Environmental Policy, 1979, pp. 2-3, 31 and 34 (mimeographed, restricted circulation).

57 *Ibid.*, pp. 13 and 5 (emphasis added).

58 *Ibid.*, p. 12.

certaines atteintes à l'environnement ne produisent d'effets sur la vie et la santé de l'homme qu'à long terme, (...) la reconnaissance d'un droit à l'environnement (...) devrait donc admettre une notion large des atteintes.⁵⁹

Thus, the wide dimension of the right to life and the right to a healthy environment entails the consequent wider characterization of attempts or threats against those rights, which in turn calls for a higher degree of their protection. An example of those threats is provided by, *e.g.*, the effects of global warming on human health: skin cancer, retinal eye damage, cataracts and eventual blindness, neurological damage, lowered resistance to infections, alteration of the immunological system (through damaged immune cells); in sum, depletion of the ozone layer may result in substantial injury to human health as well as the environment (harm to terrestrial plants, destruction of the zooplankton, a key link in the food chain)⁶⁰, thus disclosing the needed convergence of human health protection and environmental protection.

In the realm of international environmental law, the 1989 Hague Declaration on the Atmosphere, for example, states that "the right to live is the right from which all other rights stem" (§ 1), and adds that "the right to live in dignity in a viable global environment" entails the duty of the "community of nations" *vis-à-vis* "present and future generations" to do "all that can be done to preserve the quality of the atmosphere" (§ 5). The use of the expression the right to live (rather than right to life) seems well in keeping with the understanding that the right to life entails negative as well as positive obligations as to preservation of human life (*cf. supra*). The *Institut de Droit International*, while drafting its Resolution on Transboundary Air Pollution (Session of Cairo, 1987), was attentive to include therein provisions referring to the protective and human health.⁶¹

Together with the right to a healthy environment, the right to peace appears also as a necessary prolongation or corollary of the right to life. In fact, both the Inter-American Commission on Human Rights⁶² and the U.N.

59 *Ibid.*, pp. 43 and 21.

60 J.T.B. Tripp, "The UNEP Montreal Protocol: Industrialized and Developing Countries Sharing the Responsibility for Protecting the Stratospheric Ozone Layer", 20 *New York University Journal of International Law and Politics* (1988) p. 734. Ch. B. Davidson, "The Montreal Protocol: The First Step Toward Protecting the Global Ozone Layer", *in ibid.*, pp. 807-809.

61 Cf. preamble and Articles 10(2) and 11; text in: 62 *Annuaire de l'Institut de Droit International* (1987) II, pp. 204-207-208 and 211.

62 Cf. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, *Diez Años de Actividades - 1971-1981*, Washington, Secretaría General de la OEA, 1982, pp. 338-339, 321 and 329-330.

General Assembly⁶³ have been attentive to address the requirements of survival as component of the right to life. In this connection, in its general comment 14 (23), of 1985, in Article 6 (on the right to life) of the U.N. Covenant on Civil and Political Rights, the Human Rights Committee, after recalling its earlier general comment 6(16), of 1982, on Article 6(1) of the Covenant—to the effect that the right to life, as enunciated therein, is “the supreme right from which no derogation is permitted even in time of public emergency”—went on to relate the current proliferation of weapons of mass destruction to “the supreme duty of States to prevent wars”. The Committee associated itself with the growing concern, expressed during successive sessions of the U.N. General Assembly by representatives from all geographical regions, at what represented one of the “greatest threats to the right to life which confronts mankind today”. In the words of the Committee, “the very existence and gravity of this threat generate a climate of suspicion and fear between States, which is in itself antagonistic to the promotion of universal respect for and observance of human rights” in accordance with the U.N. Charter and the U.N. Covenants on Human Rights⁶⁴. The Committee, accordingly, “in the interest of mankind”, called upon “all States, whether Parties, to take urgent steps, unilaterally and by agreement, to rid the world of this menace”⁶⁵.

The maintenance of peace is an imperative for the preservation of human life; the Final Act of the 1968 Teheran Conference on Human Rights contains several references to the relationship of observance of human rights and maintenance of peace⁶⁶. In this connection, reference can further be made to the preambles of the two 1966 U.N. Covenants on Human Rights. More recently the “right to peace” has formed the object of a number of U.N. resolutions, which relate it to disarmament and détente, thus disclosing the temporal dimension of the underlying duty of prevention of conflicts⁶⁷ (e.g., *inter alia*, G.A. resolutions 33/73, of 1978, and 34/88 of 1979). The States’ duty to co-exist in peace and to achieve disarmament is acknowledged in the 1974 Charter on Economic Rights and Duties of States (Articles 26 and 15, respectively).

63 B.G. Ramcharan, *op. cit. supra* n. (50), p.303.

64 U.N. Report of the Human Rights Committee, G.A.O.R. 40th Session (1985), suppl. n°40-(A/40/40), p.162.

65 *Ibid.*, p.162.

66 Cf. U.N., Final Act of the International Conference on Human Rights (1968), U.N. doc. A/CONF. 32/41, N.Y., U.N., 1968, pp. 4, 6, 9, 14 and 36.

67 Cf. J.M. Becet and D. Colard, *Les droits de l'homme*, Paris, Economica 1982, pp. 128-131.

The right to peace entails as a corollary the “right to disarmament”⁶⁸; attention has in this regard been drawn to the fact that limitations or violations of human rights are often associated with the outbreak of conflicts, the process of militarization and the expenditure on arms⁶⁹, especially nuclear weapons and other weapons of mass-destruction⁷⁰, which have led and may unfortunately still lead to arbitrary deprivation of human life. The conception of “sustainable development”, as propounded by the Brundtland Commission, points to the ineluctable relationship between the rights to a healthy environment, to peace and to development⁷¹.

The relationship between the right to life and the right to development as a human right becomes clearer as one moves from the traditional, narrow approach to the right to life (as strictly a civil right) into the wider and modern approach to it, as encompassing also the minimum conditions for an adequate and dignified standard of living (*cf. supra*). Then the inter-relatedness of the right to life and the right to development as a human rights becomes self-evident, as this latter purports to demand all possible endeavours to overcome obstacles (of destitution and underdevelopment) preventing the fulfilment of basic human needs⁷². Not surprisingly, the U.N. Working Group of Governmental Experts on the Right to Development recommended in 1984 *inter alia* that particular attention be paid to the basic needs and aspirations of vulnerable or disadvantaged and discriminated groups⁷³.

68 To this effect, *cf. ibid.*, pp. 129-131; Ph. Alston, *op. cit. infra* n. (69), pp. 324-325 and 329-330.

69 Ph. Alston, “Peace, Disarmament and Human Rights”, *Armement, Développement, Droits de l'homme, Désarmement* (Colloque à l'UNESCO, 1982) (ed. G. Fischer), Paris/Bruxelles, Bruylant, 1984, pp. 325-330.

70 Cf. discussion in, e.g., A.A. Tikhonov, “The Inter-relationship between the Right to Life and the Right to Peace: Nuclear Weapons and Other Weapons of Mass-Destruction and the Right to Life”, *The Right to Life in International Law* (ed. B.G. Ramcharan), Dordrecht, Nijhoff/Kluwer, 1985, pp. 97-113.

71 Cf. World Commission on Environment and Development, *Our Common Future*, Oxford, University Press, 1987, pp. 19 and 290-3, and *cf. in particular* pp. 294-300 on conflicts as a “cause of unsustainable development”.

72 P.J.M. De Waart, “The Inter-Relationship between the Right to Life and the Right to Development”, *The Right to Life in International Law* (ed. B.G. Ramcharan), Dordrecht, Nijhoff/Kluwer, 1985, pp. 89 and 91-92.

73 *Cit. in ibid.*, p. 91.

In sum, the basic right to life, encompassing the right of living, entails negative as well as positive obligations in favour of preservation of human life. Its enjoyment is a precondition of the enjoyment of other human rights. It belongs at a time to the realm of civil and political right and to that of economic, social and cultural rights, thus illustrating the indivisibility of all human rights. It establishes a "link" between the domains of international human rights law and environmental law. It inheres in all individuals and all peoples, with special attention to the requirements of survival. It has as existences or corollaries the right to a healthy environment and the right to peace (and disarmament). It is closely related, in its wide dimension, to the right to development as a human right (right to live with fulfillment of basic human needs). And it lies at the basis of the ultimate ratio legis of the domains of international human rights law and environmental law, turned to the protection and survival of the human person and mankind.

2. *The Right to Health as the Starting-Point Towards the Right to a Healthy Environment*

Like the right to life (right of living, *supra*), the right to health entails negative as well as positive obligations. In fact, the right to health is inextricably interwoven with the right to life itself, and exercise of freedom. The right to life implies the negative obligation not to practice any act which can endanger one's health, thus linking this basic right to the right to physical and mental integrity and to the prohibition of torture and of cruel, inhuman or degrading treatment (as recognized and provided for in the U.N. Covenant on Civil and Political Rights, Article 7; the European Convention on Human Rights, Article 3; the American Convention on Human Rights, Articles 4 and 5). But this duty of abstention (so crucial, e.g., in the treatment of detainees and prisoners) is accompanied by the positive obligation to take all appropriate measures to protect and preserve human health (including measures of prevention of diseases).

Such positive obligation (as recognized and provided for in, e.g., the U.N. Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Article 12, and the European Social Charter, Article 11, besides WHO and ILO resolutions on specific aspects), linking the right to life to the right to an adequate standard of life⁷⁴, discloses the fact that the right to health, in its proper and

74 As proclaimed by the 1948 Universal Declaration of Human Rights, Article 25(1). On the "negative" and "positive" aspects of the right to health, cf. M. Bohre, "Les concepts fondamentaux du droit à la santé: le point de vue juridique" *Le droit à la santé en l'homme - Colloque 1978* (Académie de Droit International de la Haye), The Hague, Sijthoff, 1979, pp. 14-29; Scalabrino-Spadaa, "Le droit à la santé. Inventaire de normes et principes de droit international", in *Le médecin face aux droits de l'homme*, Padova, Cedam, 1990, pp. 97-98.

wide dimension, partakes the nature of at a time an individual and social right. Belonging, like the right to life, to the realm of basic or fundamental rights, the right to health is an individual right in that it requires the protection of the physical and mental integrity of the individual and his dignity; and it is also a social right in that it imposes on the State and society the collective responsibility for the protection of the health of the citizenry and the prevention and treatment of diseases⁷⁵. The right to health, thus properly understood, affords, like the right to life, a vivid illustration of the indivisibility and inter-relatedness of all human rights.

3. *The Right to a Healthy Environment as an Extension of the Right to Health*

The right to life in its "positive" aspect (*supra*) found expression, at global level, in Article 12 of the U.N. Covenant on Economic, Social and Cultural Rights; that provision, in laying down the guidelines for the implementation of the right to health, singled out, *inter alia* ("b"), "the improvement of all aspects of environmental and industrial hygiene". The way seemed thereby paved for the future recognition of the right to a healthy environment (*infra*).

This point was object of attention at the 1978 Colloquy of the Hague Academy of International Law on "The Right to Health as a Human Right", where the issue of the human right to environmental salubrity was raised. On the occasion, after warning that the degradation of the environment constituted nowadays a *menace collective à la santé des hommes*⁷⁶, P.M. Dupuy pertinently advocated the needed assertion or proclamation of the human right to environmental salubrity as the "supreme guarantee of the right to health"⁷⁷. Pondering that the environment ought to be protected *en fonction de l'ensemble des intérêts de la collectivité*, he justified:

— "Il nous paraît que la chance fournie par l'affirmation d'un droit à la salubrité du milieu est justement de donner l'occasion à l' "environnement" de cesser d'être d'abord perçu en termes économiques, ainsi qu'un bien susceptible d'exploitation, afin d'apparaître au moins autant comme un patrimoine de l'individu, nécessaire à l'épanouissement de son droit fondamental à la vie, et donc à la santé"⁷⁸.

75 R. Roemer, "El Derecho a la Atención de la Salud", in OMS, *El Derecho a la Salud en las Américas* (ed. H.L. Fuenzalida-Puelma and S.S. Connor), Washington, OPA, publ. n°509, p.16.

76 P.M. Dupuy, *op. cit.* infra n. (78), p. 406 and cf. p. 351.

77 *Ibid.*, p. 412, and cf. p. 409.

78 P.M. Dupuy, "Le droit à la santé et la protection de l'environnement", *Le droit à la santé... Colloque...*, *cit. supra* n. (74), p.410.

The protection of the whole of the biosphere as such entails "indirectly but necessarily" the protection of human beings, in so far as the object of environmental law and hence of the right to a healthy environment is "protéger les humains en leur assurant un milieu de vie adéquate"⁷⁹. The right to a healthy environment, in the perspicacious observation by Kiss, "completes" other recognized human rights also from another point of view, namely,

"il contribue à établir une égalité entre citoyens ou, du moins, à atténuer les inégalités dans leurs conditions matérielles. On sait que les inégalités entre humains de conditions sociales différentes sont accentuées par la dégradation de l'environnement: les moyens matériels dont disposent les mieux nantis leur permettent d'échapper à l'air pollué, aux milieux dégradés et de se créer un cadre de vie sain et équilibré, alors que les plus démunis n'ont guère de telles possibilités et doivent accepter de vivre dans des agglomérations devenues inhumaines, voire des bidonvilles, et de supporter les pollutions.

L'exigence d'un environnement sain et équilibré devient ainsi en même temps un moyen de mettre en oeuvre d'autres droits reconnus à la personne humaine.

Mais, par ses objectifs mêmes, le droit à l'environnement apporte aussi une dimension supplémentaire aux droits de l'homme dans leur ensemble"⁸⁰.

The interrelatedness between environmental protection and the safeguard of the right to health is clearly evidenced in the implementation of Article 11 (on the right to protection of health) of the 1961 European Social Charter. The Committee of Independent Experts, operating under the Charter, has in recent years been attentive, in the consideration of national reports, to measures taken at domestic level, pursuant to Article 11 the Charter, to prevent, limit or control pollution⁸¹. With regard to the removal of causes of ill-health (Article 11(1)), the Committee has concentrated on measures taken to prevent or reduce pollution of the atmosphere⁸². Thus, in the consideration of a French report, the Committee took note of "the inter-

79 A.Ch. Kiss, "Le droit à la qualité de l'environnement: un droit de l'homme", in *Le droit à la qualité de l'environnement: un droit en devenir, un droit à définir* (ed. N. Duplé), Vieux-Montréal (Québec), Ed. Québec/Amérique, 1988, pp. 69-70.

80 *Ibid.*, p.71.

81 Cf., e.g., Council of Europe/European Social Charter, *Committee of Independent Experts - Conclusions IX-2*, Strasbourg, C.E., 1986, p. 71 (Austrian and Cypriot reports). *Ibid.*, Conclusions XI-1, Strasbourg, C.E., 1989, p. 119 (Swedish and British reports).

82 E.g., German and Italian reports, in *ibid.*, Conclusions IX-2, cit. *supra* n. (81), pp. 71-72.

tion of the public authorities to achieve a 50% reduction in sulphur dioxide emissions into the atmosphere during the period 1980-90"⁸³, and in the consideration of the latest Danish report, the Committee noted the measures taken to reduce air pollution, in particular that "emissions of nitrogen oxide into the atmosphere was to be reduced by 50% before 2005 and of sulphur dioxide by 40% before 1995"⁸⁴.

The collection *Case Law on the European Social Charter* contains other pertinent indications. The Committee of Independent Experts has manifested its wish to find in forthcoming national reports information, under Article 11 of the Charter, on "the measures taken to reduce the release of sulphur dioxide and other acid pollutants in the atmosphere"⁸⁵. The Committee has called for amplified measures for control of environmental pollution⁸⁶. The Committee has further expressed the opinion that States bound by Article 11 of the Charter should be considered as fulfilling their obligations in that respect if they provide evidence of the existence of a medical and health system comprising *inter alia* "general measures aimed in particular at the prevention of air and water pollution, protection from radio-active substances, noise abatement, the food control environmental hygiene, and the control of alcoholism and drugs"⁸⁷.

An attempt has in fact been made, in the European continent, to extend the protection of the rights to life and health so as to include well-being, under the realm of the European Convention of Human Rights itself: prior to the convening of the 1973 European Ministerial Conference on the Environment, a Draft Protocol to the European Convention on Human Rights to that effect was prepared by H. Stelger. The Draft Protocol, con-

83 In *ibid.*, p. 71-72.

84 In *ibid.*, Conclusions XI-1, cit. *supra* n.(81), p.118.

85 Council of Europe/European Social Charter, *Case Law on the European Social Charter-Supplement*, Strasbourg, C.E., 1986, p. 37.

86 Council of Europe/European Social Charter, *Case Law on the European Social Charter*, Strasbourg, C.E., 1982, p.105.

87 *Ibid.*, p.104 - On the protection of health vis-à-vis the environment under Article 11 of the European Social Charter, cf. further: Council of Europe doc. 6030, of 22.03.1989, p.9; C.E.; *Comité Gouvernemental de la Charte Sociale Européenne 10 rapport* (1989), p. 28 (control of atmospheric pollution); Conseil de l'Europe/Charte Sociale Européenne, *Comité d'Experts Indépendants-Conclusions X-2*, Strasbourg, C.E., 1988, pp. 111-112 (reduction of atmospheric pollution); Council of Europe/European Social Charter, *Committee of Independent Experts-Conclusion X-1*, Strasbourg, C.E., 1987, 108 (reduction of atmospheric pollution, air and water pollution control).

taining two articles, provides for the protection of life and health as encompassing well-being (Article 1(1)) and admits limitations on the right to a healthy environment (Article 1(2)); it further provides for the protection of individuals against the acts of other private persons (Article 2(1) and (2)). This point (*Drittwirkung*), though giving rise to much debate and controversy, has been touched upon by the European Commission of Human Rights, which, in its 1979 report in the *Young, James and Webster* cases, admitted that the European Convention contained provisions that *non seulement protègent l'individu contre l'Etat, mais aussi obligent l'Etat à protéger l'individu contre les agissements d'autrui*⁸⁸. Although Steiger's proposed Draft Protocol, purporting to place under the machinery of implementation of the European Convention the provisions above referred to (Article 1 and 2), was not at the time accepted by member States, it remains the sole existing proposal on the matter (in so far as the European Convention system is concerned) and its underlying ideas deserve today further and deeper consideration⁸⁹ (*cf. infra*). Though the question remains an open one, there has however been express recognition of the right to a healthy environment in more recent human rights instruments, as we have already seen (*cf. section III, supra*).

V. THE QUESTION OF THE IMPLEMENTATION (MISE EN OEUVRE) OF THE RIGHT TO A HEALTHY ENVIRONMENT

1. The Issue of Justiciability

It can hardly be doubted that the appropriate formulation of a right may facilitate its implementation. But given that certain concepts escape any scientific definition, it becomes necessary to relate them to a given context for the sake of normative precision and effective implementation (*mise-*

en-oeuvre); thus, e.g., the term "environment" may be taken to cover from the immediate physical milieu surrounding the individual concerned to the whole of the biosphere, and it may thus be necessary to add qualifications to the term⁹⁰. In the implementation of any right one can hardly make abstraction of the context in which it is invoked and applies: relating it to the context becomes necessary for its vindication in the *cas d'espèce*⁹¹.

This applies not only to the right to a healthy environment, but also to any other "category" of rights. But such "new" rights as the right to a healthy environment and the right to development present admittedly a greater challenge when one comes to implementation: while many of the previously crystallized civil and political, and economic, social and cultural rights had at a much earlier stage found expression also in domestic law and had been formally recognized in national constitutions and other legislation, the above-mentioned "new" rights, on their turn, were still "maturing" in their process of transformation into law, were "conceived directly in international forums" (such as the United Nations system), and had "not had the benefit of careful prior scrutiny at the national level"⁹². Many rights, whether classified as civil and political, or else as economic, social and cultural rights, "can only be defined with specificity when located in a given context"⁹³.

While the element of *formal justiciability* is taken as an "indispensable attribute" of a right in positivist thinking⁹⁴, international human rights law has distinctly considered that "an international system for the 'supervision' of States' compliance with international human rights obligations is sufficient to satisfy the requirement of 'enforceability'"⁹⁵. In short, international

90 A.Ch. Kiss, "La mise-en oeuvre du droit à l'environnement: problématique et moyens", *II Conférence européenne sur l'environnement et les droits de l'homme*, Salzburg, Institute for European Environmental Policy, 1980, p.4 (mimeographed, restricted circulation).

91 *Ibid.*, p.5.

92 Ph. Alston, "Conjuring up New Human Rights: A Proposal for Quality Control", 78 *American Journal of International Law* (1984) p.614.

93 For example, "it would not seem inherently more difficult for a particular society to define a 'right to primary education' (an economic right) than a 'right to take part in the conduct of public affairs' (a political right)". Ph. Alston, "Making Space for New Human Rights: The Case of the Right to Development", 1 *Harvard Human Rights Yearbook* (1988) p.35.

94 *Ibid.*, p.33.

95 *Ibid.*, p.38.

88 *Cit.* in J.P. Jaqué, "La protection du droit à l'environnement au niveau européen ou régional", *Environnement et droits de l'homme* (ed. P. Kromarek), Paris, UNESCO, 1987, pp. 74-75, and *cf. pp.* 72-73. And, on Steiger's proposed Draft Protocol, *cf.* W.P. Gornley, *Human Rights and Environment: The Need for International Co-operation*, Leyden, Sijthoff, 1976, pp. 90-95; P.M. Dupuy, *op. cit. supra* n. (78), pp. 408-413.

89 W.P. Gornley, *op. cit. supra* n. (88), pp. 112-113; J.P. Jaqué, *op. cit. supra* n. (88), pp. 73 and 75-76; P.M. Dupuy, *op. cit. supra* n. (78), pp. 412-413. For the complete text of Steiger's 1973 proposed Draft Protocol, *cf.* Working Group for Environmental Law (Bonn - rapporteur, H. Steiger), "The Right to a Humane Environment/Das Recht auf eine menschenwürdige Umwelt", in *Beitrag zur Umweltgestaltung* (Heft A 13), Berlin, Erich Schmidt Verlag, 1973, pp. 27-54.

human rights law has "clearly adopted the notions of 'implementation' and 'supervision' as its touchstones, rather than those of justiciability or enforceability"⁹⁶. International human rights law counts largely on means of implementation other than the purely judicial one⁹⁷, besides recourse to such judicial organs as the European and the Inter-American Courts of Human Rights, there occurs most often resort to various other means—non-judicial means—of implementation of guaranteed human rights (e.g., friendly settlement, conciliation, factfinding)⁹⁸.

Formal justiciability or enforceability is by no means a definitive criterion to ascertain the existence of a right under international human rights law. The fact that many recognized human rights have not yet achieved a level of elaboration so as to render them justiciable does not mean that those rights simply do not exist: enforceability is not to be confounded with the existence itself of a right⁹⁹. Attention is to be focused on the *nature* of obligations; it is certain that, for example, obligations under the U.N. Covenant on Economic, Social and Cultural Rights were elaborated in such a way (e.g., the basic provisions of Articles 2 and 11) that they "cannot easily be made justiciable (manageable by third-party judicial settlement). Nevertheless, the obligations exist and can in no way be neglected"¹⁰⁰.

One is to reckon, in sum, as far as the issue of justiciability is concerned, that there are rights which simply cannot be properly vindicated before a tribunal by their active subjects (*titulaires*). In the case specifically of the right to a healthy environment, however, if, as pertinently pointed out by Kiss, this latter is interpreted not as the—virtually impossible—right to an ideal environment but rather as the right to the conservation—i.e., protection and improvement—of the environment, it can then be implemented like any other individual right. It is then taken as a "procedural" right, the right to a due process before a competent organ, and thus

96 *Ibid.*, p.35.

97 K. Vasak, "Pour les droits de l'homme de la troisième génération: les droits de solidarité", *Résumés des Cours de l'Institut International des Droits de l'Homme* (X Session d'Enseignement, 1979), Strasbourg, IIDH, 1979, p.6 (mimeographed).

98 For a recent study of the operation of international mechanisms of human rights protection, cf. A.A. Cancado Trindade, "Co-existence and Co-ordination of Mechanisms of International Protection of Human Rights (At Global and Regional Levels)", 202 *Recueil des Cours de l'Académie de Droit International* (1987) pp. 21-435.

99 A. Eide, "Realization of Social and Economic Rights and the Minimum Threshold Approach", 10 *Human Rights Law Journal* (1989) pp. 36 and 38.

100 *Ibid.*, p.41.

assimilated to any other right guaranteed to individuals and groups of individuals. This right entails, as corollaries, the right of the individual concerned to be informed of projects and decisions which could threaten the environment (the protection of which counting on preventive measures), and the right of the individual concerned to participate in the taking of decisions which may affect the environment (active sharing of responsibilities in the management of the interests of the whole collectivity)¹⁰¹. To such rights to information and to participation one can add the right to available and effective domestic remedies. And it should not in this connection be overlooked that some economic and social rights were made enforceable in domestic law once their component parts were "formulated in a sufficiently precise and detailed manner"¹⁰².

Focussing on the subjects of the right to a healthy environment, we see first that it has an individual dimension, as it can be implemented, as just indicated, like other human rights. But the beneficiaries of the right to a healthy environment are not only individuals, but also groups, associations, human collectivities, and indeed, the whole of mankind. Hence its collective dimension as well. The right to a healthy environment, like the right to development, discloses an individual and a collective dimensions at a time. If the subject is an individual or a private group, the legal relationship is exhausted in the relation between the individual (or group of

101 A. Ch. Kiss, "Le droit à la qualité de l'environnement: un droit de l'homme?", *Le droit à la qualité de l'environnement: un droit en devenir, un droit à définir* (ed. N. Duplé), Vieux-
Montreal/Quebec, Ed. Québec/Americque, 1988, pp. 69-87. As the environment is a
common good ("le bien de tous"), "l'ensemble du corps social aussi bien que les
groupes ou que les individus qui le composent sont appelés à participer à sa gestion,
et à sa protection"; P. Kromarek, "Le droit à un environnement équilibré et sain,
considéré comme un droit de l'homme: sa mise-en-œuvre nationale, européenne et
internationale", 1 *Conférence européenne sur l'environnement et les droits de l'homme*,
Strasbourg, Institute for European Environmental Policy, 1979, p.15 (mimeographed,
restricted circulation). On the remedies (in domestic comparative law) for the exer-
cise of the right of information and the right of participation, cf. L.P. Suetens, "La
protection du droit à l'information et du droit de participation: les recours", 11
Conférence européenne sur l'environnement et les droits de l'homme, Salzburg, Institute for
European Environmental Policy, 1980, pp. 1-13 (mimeographed, restricted circula-
tion); and, on private recourses for environmental harm (in domestic comparative
law), cf. S.C. McCaffrey and R.E. Lutz (eds.), *Environmental Pollution and Individual
Rights: An International Symposium*, Deventer, Kluwer, 1978, pp. XVII-XXIII and 3-162.

On the "procedural" conception of the right to the conservation of the environment,
cf. A. Ch. Kiss, "Peut-on parler d'un droit à l'environnement?", *Le droit et
l'environnement - Actes des Journées de l'Environnement du C.N.R.S.* (1988) pp. 309-317.

102 A. Eide, *op. cit. supra* n. (99), p.36.

individuals) and the State; but if we have in mind mankind as a whole, the legal relationship is not exhausted in that relation. This is probably why the distinction between individual and collective dimensions is often resorted to.

If we focus on **implementation**, it is conceded that all rights, whether "individual" or "collective", are exercised in a societal context, having all a "social" dimension in that sense, since their vindication requires the intervention—in varying degrees—of public authority for them to be exercised. There is, however, yet another approach which can shed some light on the problem at issue: to focus on the object of protection. Taking as such an **object** a common good, a *bien commun* such as the human environment, not only are we thereby provided with objective criteria to approach the subject, but also we can better grasp the proper meaning of "collective" rights.

Such rights pertain at a time to each member as well as to all members of a given human collectivity, the object of protection being the same, a common good (*bien commun*) such as the human environment, so that the observance of such rights benefits at a time each member and all members of the human collectivity, and the violation of such rights affects or harms at a time each member and all members of the human collectivity at issue. This reflects the essence of "collective" rights, such as the right to a healthy environment in so far as the **object** of protection is concerned.

The multi-faceted nature of the right to a healthy environment becomes thus clearer: the right to a healthy environment has individual and a collective dimensions—being at a time an "individual" and a "collective" right—in so far as its **subjects or beneficiaries** are concerned. Its "social" dimension becomes manifest in so far as its **implementation** is concerned (given the complexity of the legal relations involved). And it clearly appears in its "collective" dimension in so far as **object** of protection is concerned (a *bien commun*, the human environment).

This matter has not been sufficiently studied to date, and considerable in-depth reflection and research are required to clarify the issues surrounding the implementation of the right to a healthy environment and the very conceptual universe in which it rests. In so far as the subjects and the relationships involved are concerned, one has moved from the individuals and groups to the whole of mankind, and in this wide range of *titulaires* one has also spoken of **generational rights** (rights of future generations—*cf. supra*). In so far as the methods of protection are concerned, it still has to be carefully explored to what extent can the mechanisms of protection

evolved under international human rights law (essentially the petitioning, the reporting and the factfinding systems)¹⁰³ be utilized also in the realm of environmental protection.

It seems that the experience accumulated in this respect in the last decades in human rights protection can, if properly assessed, be of assistance to the development of methods of environmental protection. Some inspiration can indeed be derived from the experience of application of mechanisms of international implementation of human rights for the improvement of international implementation of instruments on environmental protection. It is, in this connection, reassuring to note that the conclusions of a recent Forum on International Law of the Environment, held in Siena, Italy, in April 1990, recognize *inter alia* that "certain procedures used for the protection of human rights could serve as models in the field of the protection of the environment"¹⁰⁴. Likewise, expert writing on international environmental law has suggested that U.N. international environmental organs could be given "powers similar to those" of the U.N. Committee on Economic, Social and Cultural Rights "to study and comment on reports submitted by States since the right to a good environment is similar to and partakes of all the difficulties and drawbacks of social and economic rights"¹⁰⁵. Such acknowledgements are quite understanding and beneficial to environmental protection, given the fact that human rights protection antedates it in time and the experience with the implementation of the latter can be of use and value to the implementation of the former.

2. *The Issue of Protection Erga Omnes: "Drittverikung"*

In the fields of both human rights protection and environmental protection there occur variations in the obligations: some norms are susceptible of direct applicability, others are rather programmatic in nature. Attention ought thus to be turned to the nature of the obligations. An important issue, in this connection, is that of the *erga omnes* protection of cer-

103 On their functioning and co-ordination, *cf.* A.A. Cangado Trindade, "Co-existence and Co-ordination of Mechanisms of International Protection of Human Rights (At Global and Regional Levels)", 202 *Recueil des Cours de l'Académie de Droit International* (1987) pp. 13-435.

104 *Conclusions of the Siena Forum on International Law of the Environment* (April 1990), p.8, § 23 in fine (mimeographed, restricted circulation)

105 L.A. Teclaf, "The Impact of Environmental Concern on the Development of International Law", in *International Environmental Law* (ed. L.A. Teclaf and A.E. Utton), N.Y., Praeger, 1975, p.252.

tain guaranteed rights, which raises the issue of third-party applicability of conventional provisions. This issue, called *Drittwirkung* in German legal literature, can be examined in the domains of both human rights protection and environmental protection.

In the former, *Drittwirkung* is still evolving in, e.g., the case-law under the European Convention on Human Rights¹⁰⁶ (*infra*). Bearing in mind the considerable variety of rights guaranteed under human rights treaties, there are provisions in these latter which seem to indicate that at least some of the rights are susceptible of third-party applicability (*Drittwirkung*). Thus, Article 2(1) (d) of the U.N. Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination prohibits racial discrimination "by any persons, group or organization". By Article 2(1) of the U.N. Covenant on Civil and Political Rights States Parties undertake not only "to respect" but also "to ensure" to all individuals subject to their jurisdictions the rights guaranteed under the Covenant, —what may be interpreted as at least the States Parties' duty of due diligence to prevent deprivation or violation of the rights of one individual by others. And it has been argued that Article 17 of the Covenant (right to privacy) would cover protection of the individual against interference by public authorities as well as private organizations or individuals¹⁰⁷. In addition, Article 29 of the Universal Declaration of Human Rights refers to "everyone's duties to the community".

The European Convention on Human Rights, in its turn, states in Article 17 that nothing in the Convention may be interpreted as implying "for any State, group or person", any right to engage in any activity or perform any act aimed at the destruction of the guaranteed rights. Articles 8-11 indicate that account is to be taken of the protection of other people's rights, and from Article 2, whereby "everyone's right to life is protected by law", it may be inferred the State's duty of due diligence of prevention and of making its violation a punishable offence¹⁰⁸. It can in fact be forcefully added that the supreme values underlying fundamental human rights are such

106 Cf. A.Z. Drzemczewski, *European Human Rights Convention in Domestic Law - A Comparative Study*, Oxford, University Press, 1983, ch.8, pp. 199-228; and cf. J. Rivero, "La protection des droits de l'homme dans les rapports entre personnes privées", *Revue Cassin Anticorum Disciplinarumque Liber*, vol. III, Paris, Pedone, 1971, pp. 311ss.

107 Y. Dinstein, "The Right to Life, Physical Integrity, and Liberty", in *The International Bill of Rights* (ed. L. Henkin), N.Y., Columbia University Press, 1981, p.119; Jan De Meyer *op. cit.* *infra* n. (111), p.263.

108 E.A. Alkema, *op. cit.* *infra* n.(109), pp.35-37.

that they deserve and require protection *erga omnes*, against any encroachment, by public or private bodies or by any individual¹⁰⁹.

Even though the issue of *Drittwirkung* was not considered when the European Convention was drafted, the subject-matter of the Convention lends itself to *Drittwirkung*, in the sense that some of the recognized rights deserve protection against public authorities as well as private individuals, and States have to secure everyone—in the relations between individuals—also—against violations of guaranteed rights by other individuals¹¹⁰. Thus, e.g., with regard to the right to privacy (Article 8 of the Convention, on respect for private life), there is need to protect this right also in the relations between individuals (persons, groups, institutions, besides States). Situations have in fact occurred in practice where the State may be involve in the relations between individuals (e.g., custody of a child, clandestine recording of a conversation by a private individual with the help of the police)¹¹¹. Certain human rights have validity *erga omnes*, in that they are recognized in relation to the State but also and necessarily "in relation to other persons, groups or institutions which might prevent the exercise thereof"¹¹².

Thus, a human rights violation by individuals or private groups can be sanctioned indirectly, when the State fails, in "its duty to provide due protection", to take the necessary steps to prevent or punish the offence¹¹³. Article 8 of the European Convention pertinently illustrates the "absolute effect" of that right to privacy; the need for its protection *erga omnes*, against frequent interferences or violations not only by public authorities but also by private persons or the mass media¹¹⁴.

109 E.A. Alkema, "The Third-Party Applicability or 'Drittwirkung' of the European Convention on Human Rights", in *Protecting Human Rights: The European Dimension - Studies in Honour of G.J. Wiarda* (ed. F. Malscher and H. Petzold), Köln, C. Heymanns, 1988, pp. 33-34.

110 This has led one to speak of a sort of "indirect *Drittwirkung*", since "it is realized *via* an obligation of the State". P. van Dijk and G.J.H. van Hoof, *Theory and Practice of the European Convention on Human Rights*, Deventer, Kluwer, 1984, pp. 14-18.

111 Jan De Meyer, "The Right to Respect for Private and Family Life, Home and Communications in Relations between Individuals, and the Resulting Obligations for States Parties to the Convention", in A.H. Robertson (ed.), *Privacy and Human Rights*, Manchester, University Press, 1973, pp. 267-269.

112 *Ibid.*, p.271, and cf. p.272.

113 *Ibid.*, p.273.

114 *Ibid.*, pp. 274-275.

In the same line, it has been forcefully argued that the right to a healthy environment ought to be "opposable aux tiers, avoir un effet direct à leur égard", ought to be "opposablement aux particuliers de façon à assurer la protection des intérêts des individus et des groupes en matière d'environnement"¹¹⁵. *Drittwirkung* amounts to the situation whereby everyone is beneficiary of that right and everyone has duties *vis-à-vis* the other citizens and *vis-à-vis* the whole community; "tout le monde est bénéficiaire de ce droit, mais en même temps tout le monde assume aussi des obligations de son fait: Etat, collectivités, individus"¹¹⁶.

VI. THE RIGHT TO A HEALTHY ENVIRONMENT AND THE ABSENCE OF RESTRICTIONS IN THE EXPANSION OF HUMAN RIGHTS PROTECTION AND OF ENVIRONMENTAL PROTECTION

1. No Restrictions Ensuing from the Co-existence of International Instruments on Human Rights Protection

In the field of the international protection of human rights, restrictions are not to be inferred from the possible effects of multiple co-existing instruments of human rights protection upon each other: on the contrary, in the present context, international law has been made use of in order to improve and strengthen the degree of protection of recognized rights. In fact, the interpretation and application of certain provisions of one human rights instrument have at times been resorted to as orientation for the inter-

115 P. Kromarek, "Le droit à un environnement équilibré et sain, considéré comme un droit de l'homme: sa mise-en-oeuvre nationale, européenne et internationale", in *Conférence européenne sur l'environnement et les droits de l'homme*, Strasbourg, Institute for European Environmental Policy, 1979, p.38(mimeographed), restricted circulation).

116 A. Ch. Kiss, "Le droit à la qualité de l'environnement: un droit de l'homme?", in *Le droit à la qualité de l'environnement: un droit en devenir, un droit à définir* (ed. N. Duplé), Vieux-Montreal/Québec, Ed. Québec/Amérique, 1988, p.80, and *cf.* p.83. - "En ce qui concerne le droit à l'environnement, tout le monde est 'créancier' et 'débiteur' en même temps: Etat, collectivités, individus". A.Ch. Kiss, "La mise en oeuvre du droit 'à l'environnement: problématique et moyens'", in *II Conférence européenne sur "Environnement et droits de l'homme"*, Salzburg, Institut pour une Politique Européenne de l'Environnement, 1980, p.8, and *cf.* pp. 6-9 (mimeographed, restricted circulation).

pretation of corresponding provisions of other—usually newer—human rights instruments¹¹⁷.

Normative advances in one human rights treaty may indeed have a direct impact upon the application of other human rights treaties, to the effect of enlarging or strengthening the States Parties' obligations of protection and restricting the possible invocation or application of restrictions to the exercise of recognized rights. Multiple human rights instruments appear complementary to each other; and their complementarity reflects the specificity of the international protection of human rights, a domain of international law characterized as being essentially a *droit de protection*. Where States have undertaken obligations under multiple co-existing instruments of human rights protection, it may be taken to have been the intention to accord individuals a more extended and effective protection. In sum, there is here a clear trend towards the expansion and enhancement of the degree and extent of protection of rights recognized under co-existing human rights instruments¹¹⁸.

2. No Restrictions Ensuing from the Co-Existence of International Instruments on Environmental Protection

Likewise, in the field of international environmental law, restrictions are not to be implied from the possible effects upon each other of multiple co-existing instruments on environmental protection. To this effect, in its well-known 1987 report, the World Commission on Environment and Development, in propounding the elaboration of a Universal Declaration and a Convention on Environmental Protection and Sustainable Development, stressed the need "to consolidate and extend relevant legal principles" on the matter in order "to guide State behaviour in the transition to sustainable development", and warned that multiple co-existing as well as new international conventions and agreements in the area were to strengthen and extend environmental protection¹¹⁹. As in human rights protection (*supra*), there is no room for [implied] restrictions in the present domain of environmental protection either.

117 A.A. Cancado Trindade, "Co-existence and Co-ordination of Mechanisms of International Protection of Human Rights (At Global and Regional Levels)", 202 *Recueil des Cours de l'Académie de Droit International* (1987) pp.401 and 101, and *cf.* p.104.

118 *Ibid.*, pp. 110, 121-122 and 125.

119 World Commission on Environment and Development, *Our Common Future*, Oxford, Oxford University Press, 1987, pp. 332-333.

Having thus considered the point at issue from the perspective, on the one hand, of the effects of human rights instruments upon each other, and, on the other hand, of the effects of environmental protection instruments upon each other, we have found no room for the incidence of restrictions, as those instruments, in one and the other domain, were meant to re-inforce each other and strengthen the degree of protection due. It now remains to examine the point at issue from the perspective of the effects of norms or instruments of human rights protection and of environmental protection *inter se*, or, more precisely, of the effects of the recognition of the right to a healthy environment upon the *corpus* of human rights already recognized.

3. *No Restrictions Ensuing from the Expansion of Systems of Protection (As Evidenced by the Recognition of the Right to a Healthy Environment) in Their Effects upon Each Other*

A fairly recent trend of thought has visualized in the emergence of environmental policies of States the incidence of **restrictions** upon the exercise of certain recognized human rights. It has further justified these latter to the effect of protecting the environment. It has suggested that, while some of the more classical civil and political rights are not apparently affected, certain economic and social rights are susceptible of suffering restrictions. As examples, reference has been made to the rights of free circulation, of choice of residence, and to property, in face of protected areas or zones; the right to work, in face of anti-pollution measures; the right to equality, in face of disparities in administrative measures as to the environment; the freedom of association, in face of measures against noise pollution; the right to family, in face of birth-control measures; the rights to development and to leisure, in face of measures for conservation of nature.¹²⁰

This approach, it is submitted, is inadequate and short-sighted, even though it cannot fail to admit that the right to a healthy environment comes ultimately to guarantee and re-inforce such basic rights as the right to life and the right to health.¹²¹ In historical perspective, the emergence of new

120 Cf. F. Doré, "Conséquences des exigences d'un environnement équilibré et sain sur la définition, la portée et les limitations des différents droits de l'homme - Rapport instructif", *I Conférence européenne sur l'environnement et les droits de l'homme*, Strasbourg, Institute for European Environmental Policy, 1979, pp. 3-5, 7-12 and 14 (mimeographed, restricted circulation); and cf. F. Doré [Interventions] *in ibid.*, pp. 25-27 and 37-38 (mimeographed, restricted circulation).

121 Cf. F. Doré, "Conséquences des exigences...", *op. cit. supra* n.(120), pp. 16-19; F. Doré, [Intervention] *in op. cit. supra* n. (120), p.27.

rights has generated the need of their "adaptation" to the *corpus* of rights already recognized. Thus, *e.g.*, economic, social and cultural rights had an impact on classical civil and political rights, and what appeared to be restrictions to the exercise of these latter amounted rather to conditions of the effective exercise of the former, of the new rights.¹²² And this helped to enlarge the scope of protection of human rights. In the same way, it became clear that the exercise of recognized rights was to take place bearing in mind the exigencies of *ordre public* or the general welfare.¹²³ The apparent restrictions amounted rather to adjustments to render effective new rights¹²⁴ and thus to strengthen the degree of the protection due. From this perspective, it becomes clearer that the right to a healthy environment, once asserted as a **human right**, rather than entailing restrictions to the exercise of other rights, comes to enrich the *corpus* of recognized human rights.¹²⁵

Hence the appropriateness of the anthropocentric outlook and the need to place the theme of the environment within a human rights framework. There is no antagonism between international human rights law and environmental law, and the latter helps to clarify the social framework within which all rights are inserted.¹²⁶ The recognition of the right to a healthy environment enriches and re-inforces existing human rights and discloses other rights in new dimensions, *e.g.*, the much-needed right of citizen participation, which, in turn, requires the effectiveness of the rights to information and to education (in environmental matters).¹²⁷

122 Cf., to this effect, A.Ch. Kiss [Interventions], in *I Conférence européenne sur l'environnement et les droits de l'homme*, Strasbourg, Institute for European Environmental Policy, 1979, pp. 43-45; and in *Résumé des débats*, *ibid.*, p.20 (mimeographed, restricted circulation).

123 P. Kromarek, "Le droit à un environnement équilibré et sain, considéré comme un droit de l'homme: sa mise-en-oeuvre nationale, européenne et internationale", in *I Conférence européenne...*, *cit. supra* n.(122), p.26 (mimeographed, restricted circulation).

124 M. Ali Mekouar, "Le droit à l'environnement dans ses rapports avec les autres droits de l'homme", *Environnement et droits de l'homme* (ed. P. Kromarek), Paris, UNESCO, 1987, pp. 95-96.

125 Cf., to this effect, K. Vasak, [Interventions], in *I Conférence européenne...*, *op. cit. supra* n.(122), pp. 68-69; and in *Résumé des débats*, *ibid.*, p.22 (mimeographed, restricted circulation).

126 *I Conférence européenne...*, *cit. supra* n.(122), *Conclusions*, pp. 72-73 (mimeographed, restricted circulation).

127 *Ibid.*, p.73; and cf. F. Doré, "Conséquences des exigences...", *op. cit. supra* n.(12), pp. 21-22 (mimeographed, restricted circulation).

4. *The Recognition of the Right to a Healthy Environment and the Consequent Enhancement, Rather than Restriction, of Pre-Existing Rights*

International human rights law, in short, is unequivocal in indicating that limitations or retractions to the exercise of guaranteed rights are to be restrictively interpreted. This ensues, to begin with, from interpretative principles enshrined in human rights treaties themselves (e.g., U.N. Covenant on Civil and Political Rights, Article 5(1), American Convention on Human Rights, Article 29), discarding a restrictive interpretation of human rights obligations. As we have upheld in our lectures at the Hague Academy of International Law in 1987, the *restrictive interpretation of restrictions* to the exercise of recognized rights is sanctioned by the application of the test of primacy of the most favourable norm to the alleged victims in respect of the same rights guaranteed by two or more human rights treaties to which the State concerned is a Party, thus discarding undue limitations or restrictions to the exercise of a given right (recognized in another treaty to a lesser extent).¹²⁸

The international supervisory organs themselves have delivered pertinent warnings to that effect. To recall but a few significant ones: the European Court of Human Rights maintained in its Judgment in the *Goldetzki versus United Kingdom* case (1975) that there was no room for implied limitations under the European Convention on Human Rights; the same was upheld by the Inter-American Court of Human Rights in its Advisory Opinions in the cases of *Compulsory Membership in an Association of Journalists* (1985) and of the *Word "Larus" in Article 30 of the American Convention on Human Rights* (1986); likewise, in its Report of 1987 on a recent case concerning the observance by the Federal Republic of Germany of the 1958 ILO Discrimination (Employment and Occupation) Convention (n°111), the Commission of Inquiry (appointed under Article 26 of the ILO Constitution) clarified that no implied exceptions were admissible under ILO Convention n° 111.¹²⁹

The gradual recognition of "new" human rights cannot possibly have the effect of lowering the degree of protection accorded to existing rights. The emergence of "new" human rights cannot possibly undermine the protection extended to pre-existing rights. That would simply go against the course of historical evolution of the process of expansion of international human rights law, which has consistently pointed towards the enlarge-

ment, improvement and strengthening of the degree and extent of protection of recognized rights. In sum, the only permissible limits to the exercise of recognized rights are those expressly provided for under human rights treaties themselves (in whichever form, namely, as limitations or retractions), or as exceptions, or as derogations, or as reservations; such limits are to be restrictively interpreted, bearing always in mind the accomplishment of the object and purpose of those treaties.

It is to be regretted that the recognition of the right to a healthy environment has led some to the misunderstanding that it might clash with other rights, or the object of these latter. This can only result from an inadequately fragmented or atomized outlook of the *corpus* of international human rights law. Instead, human rights are indivisible and the mechanisms devoted to their protection complement each other, so as to expand and strengthen the degree of the protection due. Rights belonging to distinct "categories" have more in common than one may *prima facie* assume, let alone the fact of their being inter-related.

The emergence of "new" rights is followed by their "adaptation" to the *corpus* of existing rights and their means of implementation. No restrictions on existing rights can be justified by the recognition of "new" rights, as these cannot possibly have been articulated to lower the prevailing degree of protection. Rights belonging to such distinct domains as the civil and political, or the economic, social and cultural, have found their way to co-existence. Likewise, as regards newly-emerged rights, what may at first sight appear as restrictions on pre-existing rights, are in reality not more than needed adjustments entailed by the "new" rights.¹³⁰

Given the continuing expansion of international human rights law and the multiplicity of co-existing rights, it may well happen that in given circumstances "priorities may have to be set and limited resources devoted to fulfilling one right which is at more risk or more significant in the circumstances than another"¹³¹. And this does not mean that the other rights are restricted or contradicted or ignored; there is a balance between the various recognized rights, set by the human rights treaties and instruments themselves, which, e.g., define or indicate the considerations or circumstances relevant to restrictions or limitations on the recognized rights, in-

128 A.A. Cancado Trindade, "Co-existence and Co-ordination...", *op. cit. supra* n.(117), p.104, and *cf.* pp. 104-108.

129 Cases *cit. in ibid.*, pp. 106-107 and 116.

130 M. Ali Mekouar, "Le droit à l'environnement dans ses rapports avec les autres droits de l'homme", *Environnement et droits de l'homme* (ed. P. Kromarek), Paris, UNESCO, 1987, P.96, and *cf.* pp. 94-95.

131 J. Crawford, "The Rights of Peoples: Some Conclusions", *The Rights of Peoples* (ed. J. Crawford), Oxford, Clarendon Press, 1988, p.167.

cluding in times of public emergency.¹³² And restrictions, as already pointed out, are to be restrictively interpreted.

A key role is here reserved to the international supervisory organs themselves. This issue of the balancing between rights may arise not only with regard to such "new" rights as the right to a healthy environment, but also between any other rights (*e.g.*, reconciling the right to freedom of expression and the right to privacy, the freedoms of association and of movement, the right to property and certain social rights, etc.)¹³³. Furthermore, the recognition of such "new" rights as the right to a healthy environment can only have the effect not of restricting, but rather of complementing, enriching and enhancing pre-existing rights (*e.g.*, the right to work, the freedom of movement, the right to education, the right to participation, the right to information, etc.)¹³⁴.

One last remark remains to be made on the matter at issue. It should not pass unnoticed that rights which are at the basis of the *ratio legis* of both environmental protection and human rights protection—such as the right to life and the right not to be subjected to inhumane or degrading treatment—are asserted by human rights treaties¹³⁵ as non-derogable. They admit no restrictions whatsoever, they are truly fundamental rights. As for the other recognized rights, in the "balancing" between them dictated by circumstances, "new" rights such as the right to a healthy environment have emerged ultimately to enhance rather than to restrict them, in the same way as they enhance the fundamental non-derogable rights.

132 *Ibid.*, pp. 167-168.

133 *Cf. ibid.*, p. 168.

134 M. Ali Mekouar, *op. cit. supra* n.(124), pp. 96-100 and 103-104.

135 *E.g.*, U.N. Covenant on Civil and Political Rights, Article 4(2); European Convention on Human Rights, Article 15(2); American Convention on Human Rights, Article 27.

LE DROIT A LA CONSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT

Alexandre Kiss

François, Vice-président de l'Institut International des Droits de l'Homme

Sommaire

- I. FORMULATIONS DU DROIT A L'ENVIRONNEMENT
- II. CONTENU DU DROIT A L'ENVIRONNEMENT

Le concept même de droit à l'environnement apparaît pour la première fois sur le plan international avec la Déclaration adoptée à Stockholm en juin 1972 par la Conférence des Nations Unies sur l'environnement. Le premier principe de ce texte, fondement de toute action ultérieure dans le domaine de la protection de l'environnement proclame que:

"L'homme a un droit fondamental à la liberté, à l'égalité et à des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être. Il a le devoir solennel de protéger et d'améliorer l'environnement pour les générations présentes et futures"¹.

Tous les éléments qui caractérisent le "droit à l'environnement" se trouvent réunis dans ces deux phrases: l'assimilation aux droits de l'homme et les conséquences qui en découlent pour les Etats, la définition du contenu du droit ainsi formulé, le devoir de chacun de protéger

¹ Résolution 37/7 du 28 octobre 1982.

l'environnement et la finalité du tout: les générations présentes et futures désignées comme bénéficiaires.

Une autre déclaration solennelle, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 28 octobre 1982, la Charte mondiale de la Nature, donne des indications détaillées sur la mise en oeuvre des principes ainsi formulés, précisant les obligations qui en découlent pour les Etats et les différentes autorités, mais aussi pour les individus et leurs groupements.

Ces deux textes n'ont, toutefois, pas de caractère obligatoire. Cette lacune est comblée par deux instruments régionaux protégeant les droits de l'homme, mais en partie seulement, puisque, bien entendu, leur portée géographique est limitée. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, adoptée en 1981, proclame dans son article 24 que

"Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement".

Ce texte est important non seulement car il constitue la première énonciation obligatoire du droit à l'environnement, mais aussi car il a été élaboré par des pays du Tiers Monde qui au départ n'étaient pas tous favorables à la protection de l'environnement.

Le même principe se retrouve dans un instrument relativement récent, le Protocole additionnel à la Convention américaine des droits de l'homme dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels, adopté à San Salvador, le 14 novembre 1988.

"Article 11. Le droit à un environnement sain.

1. Chacun a le droit de vivre dans un environnement sain et de bénéficier des services publics essentiels.
2. Les Etats contractants s'engagent à promouvoir la protection, la préservation et l'amélioration de l'environnement".

On peut également rappeler que la Convention sur les droits de l'enfant, du 20 novembre 1989, impose aux Etats l'obligation d'adopter des mesures appropriées pour protéger la santé des enfants, notamment en prenant en considération les dangers et les risques causés par la pollution de l'environnement (article 24). De même, la convention 169 du 27 juin 1989 de l'Organisation internationale du travail, relative aux peuples indigènes dans des pays indépendants, engage les Etats contractants à prendre des mesures spéciales pour sauvegarder l'environnement de ces peuples (article 4 alinéa 1).

Parallèlement à cette évolution, le "droit à l'environnement" a été de plus en plus reconnu dans les législations internes. Dans l'ensemble on peut dire qu'actuellement des clauses relatives à la protection de l'environnement figurent dans la Constitution nationale de 44 Etats², dans celle de 11 Etats membres des Etats-Unis³, ainsi que dans des lois générales de plusieurs Etats⁴.

- 2 Constitutions de l'Albanie du 26 décembre 1976, art. 20; de l'Autriche, de 1929 révisée le 20 juin 1984, art. 10; de Bahrein, du 26 mai 1973, 2e partie, art. 2; de Birmanie, du 3 janvier 1974, art. 132; Belgique, état du 29 septembre 1971, chapitre II, art. 4; de Brésil, du 5 octobre 1988, art. 225; de Bulgarie, état du 1er janvier 1979, art. 4; de Chine, du 11 août 1980, art. 19; de Chine, du 6 septembre 1982, art. 26; des Comores, du 1er octobre 1978; du Costa Rica, état du 15 juin 1977, art. 89; des Emirats Arabes unis, du 2 décembre 1971, art. 23; de l'Equateur, du 1er septembre 1983, art. 19; de l'Espagne, du 29 décembre 1978, art. 45; de l'Ethiopie, du 1er février 1987, art. 55; de la Grèce, du 7 juin 1975, art. 24; du Guatemala, du 31 mai 1985, art. 64; de la Guinée équatoriale, mai 1982, art. 60; de la Guyane, acte no. 2 de 1980, art. 25 et 36; de Haïti, de 1987, art. 52 et 253-258; du Honduras, du 11 janvier 1982, art. 145; de la Hongrie, du 19 avril 1972, art. 57; de l'Inde, du 26 novembre 1946, état de 1985, art. 48A et 51A; de l'Iran, du 24 octobre 1979, art. 50; de la Namibie, du 21 mars 1990, art. 95; du Nicaragua, du 9 janvier 1987, art. 60 et 102; du Panama, de 1972, état de 1983, art. 114 à 117; de la Papouasie, du 16 septembre 1975, état du 13 juillet 1982, chapitre IV, par 1-3; des Pays-Bas du 17 février 1983, art. 21; du Pérou, du 12 juillet 1979, art. 119 et 123; des Philippines, du 15 octobre 1986, art. 12; de la Pologne, du 22 juillet 1982, révisée en 1976; du Portugal du 2 avril 1976, révisée le 30 septembre 1982; de la République de Corée, du 25 février 1988, art. 35; du Salvador, du 15 décembre 1983, art. 69; du Sri Lanka, du 22 mai 1972, état du 24 août 1984, art. 27-29; de la Suède, du 1er janvier 1975, état de 1978; de la Suisse, de 1884, état du 20 mai 1973, art. 24 sixties; de Thaïlande, du 22 décembre 1978, chapitre V, sec. 65 et 69; de la Tchécoslovaquie, de 1960, état de 1978, art. 15; de l'U.R.S.S., du 7 octobre 1977, art. 18; du Viet-Nam, du 18 décembre 1980, art. 20 et 36; du Yémen, du 31 octobre 1978, art. 16; de la Yougoslavie, du 28 février 1974, préambule, V. al 6 et art. 87, 114, 117, 192, 193.

La plupart de ces dispositions sont reproduites dans Edith Brown Weiss, *In Fairness to Future Generations*, Transnational Publishers, 1988, p. 297 et s. Voir également UNESCO, *Environnement et droits de l'homme*, ouvrage collectif dirigé par Pascale Kromarek, Paris, 1987.

3 Constitutions des Etats de Floride de 1968, état du 1er février 1988, art. 9; de Hawaï, de 1959, état du 7 novembre 1978, art. 9; d'Illinois, état de 1970, art. 11; du Massachusetts, amendement de 1972; du Michigan, du 1er novembre 1964, art. 4; du Montana, du 6 juin 1972, état de 1987, art. 9; du Nouveau-Mexique, du 21 juin 1911, état de 1986, art. 20; de New York, état de 1986, art. 14; de Pennsylvanie, état de 1969, art. 8; de Rhode Island, état de 1976, art. 37; et de Virginie, état du 3 novembre 1970, art. 11 (E. Brown-Weiss, précité, p. 316 et s.) Voir aussi entre autres, la Constitution de l'Etat brésilien du Mato Grosso do Sul, de 1989, art. 22.

4 Ainsi, on peut citer la loi française du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, art. 1er; la loi fédérale américaine sur la politique nationale de l'environnement (National Environmental Policy Act), de 1969, art. 101 c; la loi générale vénézuélienne sur l'environnement, du 15 juin 1976, art. 1; le code colombien de la protection de l'environnement, du 19 décembre 1979, etc.

Fait peut-être encore plus significatif: pratiquement aucun Etat qui a modifié sa Constitution ou en a adopté une nouvelle depuis le début de l'"ère écologique" - donc depuis la fin des années 1960 - n'a omis de prévoir au moins un principe relatif à la protection de l'environnement, proclamé comme le devoir de l'Etat et des individus ou le droit de l'individu. Les formulations sont différentes d'un texte à l'autre, si bien qu'il convient de les examiner afin de pouvoir ensuite définir le contenu de ce nouveau droit.

I. FORMULATIONS DU DROIT A L'ENVIRONNEMENT

En passant en revue les différentes dispositions se rapportant au droit à l'environnement, on peut considérer qu'elles peuvent être classées en trois catégories. Toutefois, ces différents types de dispositions peuvent se combiner à l'intérieur du même document législatif ou constitutionnel.

- a) La première catégorie proclame que l'Etat a le devoir de protéger l'environnement. L'exemple le plus typique en est l'article 24 de la Constitution grecque du 9 juin 1975, adoptée après la chute du régime des colons:

"La protection de l'environnement naturel et culturel constitue une obligation de l'Etat. L'Etat est tenu de prendre des mesures spéciales, préventives ou répressives, dans le but de sa conservation".

Il est naturel que cela soit une Constitution qui prescrive une telle obligation. C'est aussi le cas de la Constitution de 40 autres Etats (Albanie, Autriche, Bahreïn, Belgique, Birmane, Brésil, Bulgarie, Chine, Comores, Costa Rica, Emirats arabes unis, Espagne, Ethiopie, Guatemala, Guinée équatoriale, Guyane, Haïti, Honduras, Hongrie, Inde, Iran, Namibie, Panama, Papouasie, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, République de Corée, Salvador, Sri Lanka, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Thaïlande, U.R.S.S., Viet-Nam et Yougoslavie), sans parler de celles de la Bavière et de dix Etats membres des Etats-Unis (Floride, Hawaii, Illinois, Michigan, Montana, New Mexico, New York, Pennsylvanie, Rhode Island, Virginia). Toutefois, dans certains pays ce devoir est proclamé par des lois auxquelles une importance particulière est reconnue (Colombie, Etats-Unis, Roumanie).

- b) Ce principe est souvent accompagné d'un autre qui proclame que les citoyens ont également le devoir de protéger l'environnement, eux aussi. Il en était ainsi dans les Constitutions des pays socialistes (Albanie, Bulgarie, Ethiopie, Pologne, U.R.S.S., Viet-Nam, Yougoslavie). Toutefois, des obligations constitutionnelles à la charge des citoyens existent aussi dans ce

domaine en Espagne, en Guyane, en Inde, dans la République de Corée, dans la République islamique d'Iran et au Sri Lanka. Dans un certain nombre d'autres pays c'est une loi, souvent ayant un caractère spécial, qui proclame la responsabilité des citoyens pour la sauvegarde de l'environnement (Colombie, Hongrie, Indonésie, Roumanie). La France rejoint ce dernier groupe: on peut rappeler le deuxième alinéa de l'article premier de la loi du 10 juillet 1976 qui proclame que:

"Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde du patrimoine naturel dans lequel il vit. Les activités publiques ou privées d'aménagement et de production doivent se conformer aux mêmes exigences".

- c) Enfin, dans douze Etats, ainsi que dans cinq Etats membres d'un Etat fédéral, un droit subjectif est reconnu aux citoyens à ce que l'environnement soit protégé, à l'instar des textes internationaux rappelés dans l'introduction du présent article. Les formes peuvent être différentes dans les différents pays. Cette reconnaissance est parfois le fait de la Constitution (Brésil, Chili, Equateur, Espagne, Nicaragua, Pérou, Pologne, Portugal, République de Corée, Sri Lanka, ainsi que, parmi les Etats américains Illinois, Massachusetts, Pennsylvanie, Rhode Island et Virginie), parfois celui d'une loi (Colombie, Etats-Unis, Hongrie et la province canadienne de Québec).

Quel enseignement peut-on tirer de cette variété de situation et de formes? En dehors de la constatation d'une évidente préoccupation qui est commune à de nombreux constituants et de législateurs, c'est moins une conclusion qu'une question qui s'impose. Dans quelle mesure ces différentes formulations peuvent-elles être reliées entre elles ou même, y a-t-il une correspondance entre les devoirs proclamés et les droits reconnus?

Dans la recherche d'une réponse on doit prendre en compte avant tout une donnée qui est partout présente: la sauvegarde de l'environnement est considérée comme une tâche particulièrement importante; le recours à des dispositions constitutionnelles ou à celles inscrites dans des lois ayant un caractère particulier l'atteste. Il y a donc reconnaissance d'une nouvelle valeur sociale, estimée essentielle. Dès lors, on fera inévitablement le rapprochement avec d'autres valeurs, reconnues comme ayant une primauté absolue par rapport aux autres: les droits et les libertés fondamentaux de tout être humain. Il en est ainsi d'autant plus que très souvent, la consécration explicite des droits de l'homme par des Constitutions est un phénomène relativement récent. On arrive donc à conjuguer les deux nouvelles valeurs sociales, droits de l'homme et environnement, au sommet de celles qui doivent être protégées avant tout; il n'est pas exagéré de penser qu'il s'agit des deux principaux axes de l'avenir de la planète. Ce n'est pas un hasard si dès la Déclaration de

Stockholm, autrement dit, dès le commencement de l' "ère écologique", le lien a été fait on ne peut plus explicitement entre droits de l'homme et environnement, en proclamant le droit de l'homme à l'environnement.

Ce lien entre deux valeurs fondamentales de la société humaine présente et à venir permet de comprendre les différentes formulations qui viennent d'être passées en revue. Les instruments internationaux tendant à protéger les droits de l'homme montrent qu'il y a une correspondance étroite entre les devoirs de l'Etat et les droits subjectifs de l'individu, donc entre la première et la troisième des catégories exposées plus haut. Inévitablement, au droit subjectif reconnu à l'individu, un devoir de protection de l'Etat doit correspondre. Ainsi, l'article 6 du Pacte relatif aux droits civils et politiques, qui consacre le plus fondamental de tous les droits, le droit à la vie, est ainsi formulé:

"Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie".

On pourrait aussi rappeler un autre article essentiel du même instrument, l'article 26, proclamant que toutes les personnes sont égales devant la loi, qui précise que la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination. On trouve dans les articles du Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qui définissent les droits protégés (articles 2 à 15), une démarche comparable: non seulement les Etats reconnaissent le droit énoncé, mais souvent ils s'engagent explicitement à en assurer la jouissance. Il existe donc un lien étroit entre le droit de l'individu et le devoir correspondant de l'Etat. On peut en déduire que la seule définition du devoir de l'Etat sur un point donné correspond nécessairement à un droit subjectif reconnu aux individus. En effet, l'Etat de droit est lié par ses propres règles et doit donc être tenu pour responsable de leur respect devant ses citoyens qui doivent pouvoir réclamer ce respect. La question de savoir comment ces derniers peuvent faire valoir ces droits, est un problème d'organisation des recours. C'est ainsi qu'il convient de se pencher sur la question du contenu du droit à l'environnement.

II. CONTENU DU DROIT A L'ENVIRONNEMENT

Le droit à l'environnement a été contesté principalement sous le prétexte qu'il ne pouvait pas être défini avec suffisamment de précision et que, par voie de conséquence, il ne pouvait pas être mis en oeuvre par des

instances judiciaires. L'examen de ces deux arguments peut permettre de définir le contenu même du droit à l'environnement.

Quant à la première des deux objections, il est certain que le terme "environnement" peut désigner bien des choses, de la biosphère entière jusqu'au milieu physique immédiat d'un individu ou d'un groupe. En outre, l'environnement peut être favorable ou néfaste. Ainsi, le plus souvent les textes qui proclament le droit à l'environnement y ajoutent des qualificatifs. La Déclaration de Stockholm parle d'un environnement dont la qualité permette (à l'homme) de vivre dans la dignité et le bien-être". Les dispositions constitutionnelles ou législatives de différents pays ont recours à des qualificatifs plus ou moins développés, plus ou moins centrés sur l'homme et ses besoins. La formulation qui semble la plus adéquate est celle de la Constitution péruvienne du 12 juillet 1979, dont l'article 123 reconnaît à toute personne "le droit de vivre dans un milieu sain, écologiquement équilibré et approprié au développement de la vie ainsi qu'à la préservation du paysage et de la nature".

D'autres définitions mettent davantage l'accent sur la santé et le bien-être des humains, au risque de pouvoir être taxées exagérément anthropocentrid. En réalité, lorsqu'il existe une jurisprudence chargée de mettre en oeuvre ce droit, elle tiendra normalement compte du contexte social et de la conscience publique qui permettent au juge de donner un contenu suffisamment précis à ce droit, comme à tant d'autres concepts utilisés dans les textes protégeant les droits de l'homme, tels que "ordre public", "moralité publique", "société démocratique". Un arrêt récent de la Cour européenne des droits de l'homme rappelle que la société d'aujourd'hui se soucie sans cesse davantage de préserver l'environnement et reconnaît à cette préoccupation le caractère impératif d'intérêt général de la communauté opposable à des droits individuels.⁵

En examinant le deuxième argument, la difficulté de mettre en oeuvre le droit à l'environnement, on doit se souvenir de la place que tient la procédure dans la garantie de la plupart des droits reconnus à l'individu. Ainsi, un des droits les plus importants, celui à la liberté et à la sécurité des personnes, est nécessairement envisagé à travers ses aspects procéduraux: nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi; tout individu arrêté ou détenu au chef d'une infraction pénale est traduit devant un juge et doit être jugé dans un délai raisonnable ou libéré, etc. Ainsi, le droit à la sécurité

et à la liberté, concept abstrait qui n'est pas nécessairement facile à traduire dans la réalité par des décisions de principe, se matérialise dans des droits procéduraux. Le droit ne peut garantir que l'existence et le bon fonctionnement de certaines procédures qui constituent une protection contre la violence ou l'arbitraire, et pas la sécurité et la liberté en elles-mêmes.

Il semble donc que le droit à l'environnement doit également être conçu non pas comme le droit à un environnement idéal, difficile sinon impossible à définir dans l'abstrait, mais comme le droit à ce que l'environnement soit préservé, protégé de toute détérioration importante, voire amélioré dans certains cas. En somme, ce droit signifie en réalité le droit à la conservation de l'environnement. Ainsi conçu, il peut être assimilé à la plupart des autres droits garantis.

Toutefois, on ne saurait oublier qu'en matière d'environnement la protection doit être nécessairement préventive: l'expérience montre que dans la plupart des cas la réparation du dommage écologique se heurte à des difficultés considérables, et que souvent la détérioration est irréversible. En conséquence, si les voies de recours pour garantir l'exercice de ce droit sont essentielles, elles doivent être précédées d'une possibilité offerte aux individus et à leurs groupements d'intervenir contre la menace qui les touche. Ceci suppose que les personnes pouvant être affectées soient informées des projets ou programmes qui risquent de détériorer leur environnement et qu'elles puissent comprendre la nature et l'étendue du danger, donc qu'elles aient une éducation et une information générale appropriées. Ceci suppose aussi que les intéressés puissent participer aux décisions qui seront prises, ne serait-ce qu'en étant appelés à exprimer leur opinion ou, le cas échéant, leur opposition au projet en cause. Enfin, des recours doivent leur être ouverts contre les dommages qui résulteraient de l'exécution des projets, mais aussi contre le non-respect des procédures ainsi créées.

Le projet de Charte de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe sur les droits et devoirs en matière d'environnement, adopté par des experts réunis à Oslo du 29 au 31 octobre 1990, correspond à cette conception. Il proclame le principe que chacun a droit à un environnement favorable à sa santé et à son bien-être en général. Si, malheureusement cette formulation ne tient compte que des finalités immédiatement humaines et ignore le reste de l'univers, les autres dispositions du projet ne peuvent être qu'approuvées. Non seulement elles reconnaissent le droit d'être renseignés sur certaines activités, mais aussi le droit à l'information

sur l'environnement en général, ainsi que les mesures de protection envisagées, les sources potentielles d'accidents et les plans formés pour leur faire face. Elles affirment aussi le droit à une éducation adéquate en matière d'environnement et à des rapports réguliers sur l'état de l'environnement à tous les niveaux. Le projet proclame aussi le droit de participer au processus décisionnel et de posséder tous les renseignements qui sont nécessaires pour exercer ce droit. Ces principes doivent être appliqués dans les relations avec des pays étrangers. Enfin, sont confirmés non seulement le droit aux recours adéquates pour faire respecter les procédures ou pour obtenir réparation, mais aussi celui de pouvoir faire réduire ou arrêter immédiatement une activité qui est contraire aux règles applicables en matière de conservation de l'environnement.

L'adoption par les Gouvernements d'un nouveau texte international proclamant le droit à l'environnement -et le faisant d'une façon plus détaillée que jamais- sera un pas important vers la généralisation de ce droit, même s'il s'agit d'un texte qui ne sera pas nécessairement obligatoire et qui en tout cas sera régional, n'étant élaboré que pour l'Europe et l'Amérique du Nord. Il n'empêche que cette consécration du nouveau droit devrait aussi trouver des échos dans les différentes Constitutions, à l'instar des droits de l'homme "classiques", dans la mesure où cela n'est pas déjà acquis.

L'importance ainsi reconnue à l'environnement et à sa protection, en tant que valeurs fondamentales, peut avoir des conséquences correspondantes à l'intérêt général, auquel la protection de l'environnement correspond nécessairement, peut être plus facilement opposé à d'autres intérêts ou droits: propriété privée, liberté du commerce, défense nationale, etc. En cas d'arbitrage éventuel entre intérêts opposés, l'environnement sera au moins au même niveau que les autres. Un deuxième avantage de la reconnaissance constitutionnelle du droit à la conservation de l'environnement est que ce principe permet de guider les juges et les administrateurs dans l'accomplissement de leurs tâches, notamment lorsque la solution d'un problème ne ressort pas clairement des règles existantes du droit. Cet aspect est particulièrement important, car dans notre domaine les situations évoluent très vite -amélioration de nos connaissances, intensification des pollutions, nouvelles menaces sur la faune ou la flore sauvages- si bien que la réglementation peut accuser des retards ou des lacunes qu'il convient de combler. Un principe proclamé par la Constitution peut être un guide utile dans ces cas.

Il reste à ajouter un dernier élément essentiel. Le principe même de participation et ses conditions, l'éducation et l'information générales, ont comme conséquence que les individus ont non seulement des droits mais aussi des devoirs dans ce domaine. A cause de ses aspects qui touchent directement à l'intérêt général, le droit à l'environnement est, dans de nombreux textes qui le proclament, explicitement accompagné de l'annonce du devoir de chacun de protéger l'environnement. C'est d'ailleurs dans ce sens que l'on peut comprendre l'article 45 alinéa 1 de la Constitution espagnole qui souligne que dans l'accomplissement de leur devoir de protéger l'environnement, les pouvoirs publics doivent s'appuyer sur la solidarité collective indispensable. Effectivement, comme les droits de l'homme en général, l'environnement ne peut être protégé que s'il existe une conscience collective pour lui servir de fondement et un consensus populaire pour proposer et pour lancer des actions qui sont nécessaires.

Il existe aussi un autre lien entre droit à l'environnement, en tant que garantie particulièrement efficace du respect du droit de l'environnement et droits de l'homme. A commencer avec la Déclaration de Stockholm de 1972, lorsque l'on parle du devoir de chacun de protéger l'environnement, on ajoute généralement que ce devoir concerne aussi la sauvegarde des droits des générations futures. Or, il est évident que parmi ces droits doivent figurer en première ligne les droits économiques, sociaux et culturels de ceux qui viendront après nous. L'épuisement insensé des ressources naturelles, la destruction des équilibres de la planète rendraient impossible d'atteindre les objectifs que proclament ces droits. Ce n'est pas un des aspects les moins importants du droit de l'environnement et du droit à l'environnement.

LOS DERECHOS HUMANOS Y EL PRINCIPIO DE NO INTERVENCIÓN PLANTEAMIENTO SOBRE REGLAS ESCLARECEDORAS Y SANCIONES POR VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

F. Villagrán Kramer

*Guatemalteco, miembro del Comité Jurídico Interamericano
y de la Comisión de Derecho Internacional de N. U.*

Sumario

INTRODUCCION. 1. Principios fundamentales. 2. Proyecciones del esquema internacional. 3. Los alcances de los principios fundamentales. I. LA COMPETENCIA DE LOS ORGANOS Y EL PRINCIPIO DE NO INTERVENCIÓN. 1. Las violaciones a los derechos humanos y la óptica de los Estados. 2. El caso de Nicaragua en Naciones Unidas - 1978. 3. El caso de Nicaragua en la O.E.A. - 1979-. 4. El caso de Bolivia-OEA- 1980. 5. El caso de Argentina -OEA- 1980. 6. El caso de Panamá -OEA- 1989-1990. 7. El caso de México -OEA- 1991. II. LA CONDUCTA DE LOS ESTADOS EN LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS. 1. El accionar de los Estados dentro de una estructura internacional de Derechos Humanos. III. ACCIONES UNILATERALES DE LOS ESTADOS. 1. La potestad soberana del Estado de legislar; efectos internos y externos. 2. Limitaciones a las prácticas de los Estados.-IV. PLANTEAMIENTO.

INTRODUCCION

La preocupación por las violaciones a los Derechos Humanos consignados en las Declaraciones Universal, Americana y Africana de Derechos Humanos y en distintas convenciones internacionales, entre ellas, la Europea, la Interamericana, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la ONU y

los Acuerdos de Helsinki, se ha venido extendiendo y profundizando pese a que son objeto de atención dentro de marcos institucionales. Es decir, dentro de los marcos de las organizaciones internacionales a las que los Estados han atribuido esa responsabilidad y, para ello, les confirieron las competencias requeridas a fin de hacerles señalamientos directos a los Estados o bien formularles recomendaciones a los gobiernos con el objeto de asegurar el debido respeto y la plena observancia de esos derechos.

De manera paralela, los Estados también accionan individualmente en el plano internacional haciéndoles señalamientos directos a otros Estados por violaciones a los derechos humanos o, bien, imputándoles incumplimiento de las normas convencionales que expresamente aceptaron y condicionando, además, en algunos casos, sus relaciones con dichos Estados. Al efecto amparan su proceder no solo en el Derecho Internacional sino en su propio Derecho Interno.

Por consiguiente, es pertinente esclarecer los alcances normativos de la dualidad apuntada y, si, el accionar de los Estados, tanto en su calidad de miembros de los organismos internacionales que tutelan los derechos humanos, como fuera de los marcos de acción de dichos organismos, es o no compatible con las competencias que ejercen. Asimismo, si es o no aconsejable fortalecer las competencias de los organismos internacionales estableciendo, incluso, un régimen de sanciones en casos de reiteradas violaciones a los derechos humanos.

Enmarcan el tema los principios que figuran en la Carta de las Naciones Unidas y en las Cartas de las organizaciones regionales, como la Organización de Estados Americanos y la Organización de la Unidad Africana, y en sus Resoluciones y Declaraciones, así como, en otros importantes tratados y acuerdos internacionales. Para una correcta percepción, conviene pasar revista a esos principios.

1. Principios fundamentales

Básicamente se conjugan en el esquema legal y político de los derechos humanos tres principios fundamentales. El principio de que todos los seres humanos disfrutan, en esa calidad y como gobernados frente a sus gobernantes, de derechos fundamentales, identificados actualmente como Derechos Humanos; luego, el principio que todos los Estados son iguales ante el Derecho Internacional y, finalmente, el principio que ningún Estado, por ende, ningún gobierno, puede intervenir en los asuntos internos de otro u otros Estados.

Dado que estos tres principios están en el mismo nivel ha sido indistinguible compatibilizarlos, por una parte, entre sí y luego, con las acciones pensable concretos, deben tomarse. En particular, conjugar y compatibilizar el principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados y el principio de la observancia, en el ámbito interno de los Estados, de los derechos fundamentales que sus habitantes deben imperativamente gozar, disfrutar y ejercer.

En el fondo, ello ha implicado e implica compatibilizar los derechos fundamentales de los habitantes de los Estados y los derechos de los Estados, incurriendo a lo largo de ese proceso en la histórica y vieja controversia entre el **humanismo** y el **transpersonalismo**; entre **los derechos del hombre y los derechos del Estado**; entre el accionar del Estado a nivel internacional, tomando en cuenta esos factores, y su accionar a nivel nacional; es decir, en su propio territorio o dominio. Asimismo, ha entrañado y entraña retomar la discusión de cuándo y en qué situaciones y condiciones es lícito y, por ende, admisible e incluso, justo, que los organismos internacionales y, también, los Estados puedan incursionar en la esfera que corresponde a la jurisdicción interna de otros Estados. En términos más concretos, moverse en terrenos del debate entre la intervención frente a la no intervención.¹

En buena parte esta controversia se viene superando al acordar los Estados que el ámbito de los derechos humanos ha dejado de ser estrictamente interno, situándolo, por consiguiente, en la esfera internacional y

1. Sobre diferentes puntos de vista en torno a la proyección y los alcances de los derechos humanos y los derechos y privilegios del Estado, véase entre otros: Keisen, Hans, *The Law of the United Nations*, Londres, Stevens and Sons, 1951 (pp. 27-50); Cassin, René (A.D.L.I.) *Problemas de Protección Internacional des Droit de L'Homme*, Paris, Pedone, 1969; García Bauer, Carlos, *Teoría de los Derechos Humanos* en Revista Asociación Guatemalteca de Derecho Internacional, Guatemala, enero, 1971; Uribe Vargas, Diego, *Los Derechos Humanos y el Sistema Interamericano*, Madrid, Instituto de Cultura Hispánica, 1972; Puig, Juan Carlos, *El Principio de no intervención en el Derecho Internacional Público Interamericano -Influencia de las nuevas relaciones internacionales*, Anuario Jurídico Interamericano, OEA, Washington 1979; Gross Espiel, Hector, *Le Systeme Interamericain comme régime regional de protection internationale des Droit de L'Homme*, Collected Courses of the Hague Academy of International Law, 1975 (II); *Estudios sobre Derechos Humanos*, Caracas, Editorial Jurídica Venezolana, 1985 y; Council of Europe, Directorate of Human Rights, *Proceedings of the Colloquy about the European Convention of Human Rights in relation to other international instruments for the protection of human rights, organized by the Government of Greece and the Secretariat General of the Council of Europe* (1978) Strasbourg, 1979.

dando lugar con ello al desarrollo, consolidación y fortalecimiento de lo que hoy se conoce como el Derecho Inter-Humanitario².

2. *Proyecciones del esquema internacional*

Es menester puntualizar que ha sido factible compatibilizar los principios enunciados con el interés de los Estados, utilizando el mecanismo de tratados y de las convenciones internacionales, negociados y aprobados por los Estados en el pleno ejercicio de su soberanía, y mediante su subsiguiente regulación o desarrollo.

El fundamento radica en el hecho que únicamente los Estados soberanos pueden, en el ejercicio de su soberanía, admitir o consentir limitaciones o restricciones a su soberanía. El establecimiento de ese marco de compatibilidades es, pues, potestad exclusiva y soberana de los Estados y, como es bien sabido, descansa en el consentimiento que los Estados prestan al efecto.

Antaño, por ejemplo, algunos Estados le conferían o reconocían mediante la modalidad del *vasallaje* y de los *protectorados*, a otro Estado, el derecho de protegerlos contra los actos de terceros Estados y, como contra partida, intervenir en sus asuntos internos e, incluso, vigilar si se observaban o no los derechos fundamentales que las "naciones civilizadas" — como entonces se autocalificaban — se reconocían entre sí. Las fórmulas limitantes de soberanía que las distintas variantes coloniales y

→ Monroy, M. Los Derechos Humanos, Bogotá, Temis, 1980; Aguilar Andrés, La Protección de los Derechos Humanos en el Ambiente Regional, Revista de Derecho Político. Caracas, Venezuela, No. 3, 1980 (pp. 5-22); Vargas Carreño, Edmundo, *La protección de los Derechos Humanos en el sistema interamericano*, Curso de Derecho Internacional, Comité Jurídico Interamericano, OEA, Washington DC 1986 (161-198); Garaniivi, Sadio, *El principio de no intervención en el actual sistema internacional*, Mundo Nuevo, Caracas (número especial: homenaje Juan Carlos Puig) abril-diciembre, 1989; Berghthal, Thomas, Norris E. Robert y Shelton, Dinah, *La protección de los Derechos Humanos en las Américas*, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Editorial Civitas S.A., Madrid, 1990. Nikken, Pedro (editor) *Agenda para la consolidación de la Democracia en América Latina*, Costa Rica, IIDH, 1990.

2 Véase: Coursier, Henri, *L'Evolution du Droit International Humanitaire*, Recueil de Cours, Académie de Droit International, La Haye, Tomo 99, Leyde, 1960; Pictet, Jean, *Les principes du Droit International Humanitaire*, Comité International de la Croix-Rouge, Ginebra, 1969; Goldman, Robert K., *The protection of Human Rights in the Americas: past, present and future*, International Studies Policy Papers, Vol. 5, N.2, New York Center for International Studies, 1972; *asimismo*, su *Curso sobre Derecho Humanitario* en el Curso de Derecho Internacional, Comité Jurídico Interamericano, Rio de Janeiro, 1990.

sunticoloniales instrumentaron, dieron lugar al establecimiento de diferentes regímenes, incluyendo fueros y tribunales privilegiados para los nacionales de las potencias coloniales o de sus aliados, y tribunales comunes para los habitantes de las colonias o de los protectorales, presididos, con frecuencia, por jueces designados por la potencia protectora o colonial³.

Sin embargo, al estructurarse y organizarse en 1945 la ONU no sólo desaparecieron esas modalidades de protección e intervención, sino se fortalecieron los principios fundamentales a que antes nos referimos. En adición, se consolidaron otros, acordando los Estados fundadores de las Naciones Unidas actuar, en unos casos, de consumo: es decir, colectivamente; principalmente, en terrenos de la seguridad internacional y en aquellas otras áreas o esferas que les interesaban o que en el futuro podrían interesarles; y, en otras áreas, de manera individual, como por ejemplo, tratándose de la auto y legítima defensa y la cooperación internacional.

Para la debida seguridad de los Estados se consignó en los Propósitos y Principios de las Naciones Unidas que ninguna disposición de la Carta autorizaría a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados — art. 2 párrafo 7 — y, luego, se estipuló en el artículo 55 párrafo (c) que la Organización promovería:

"el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y libertades".

Finalmente, se asentó en el artículo 56:

"Todos los Miembros se comprometen a tomar medidas conjuntas o separadamente en cooperación con la Organización para la realización de los propósitos consignados en el artículo 55".

En términos bien claros los Estados aceptaron el compromiso de actuar, ya fuere conjunta o separadamente en cooperación con las Naciones Unidas, a fin de asegurar, sin distinción, el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos.

Sobre esas bases se incorporaron al quehacer de las Naciones Unidas asuntos tan trascendentales como la efectividad de los derechos humanos, la descolonización en África, Asia y América Latina, el desarme y la defini-

3 Sobre el tema en general véase, por ejemplo: Oppenheim's International Law, Longmans, Londres, 1948 (Tomo I); Sibert, Marcel, *Traité de Droit International Public*, Paris, Dalloz, 1951.

ción de lo que constituye agresión. Podría decirse que el proceso se inicia en 1948 a partir de la adopción de la trascendental Declaración Universal de los Derechos Humanos, dado que con ello también se incorporaron a la agenda de los organismos especializados, como la OIT, UNESCO, FAO, OMS, etc., áreas específicas de derechos humanos. Por su lado, las organizaciones de naturaleza y alcance regional previstas en el capítulo VIII de la Carta de la ONU para el arreglo pacífico de controversias, cobraron relevancia en este terreno; sobre todo, al esclarecerse que también en esos esquemas deben observarse los principios fundamentales consignados en la Carta de la ONU.

La Carta de la OEA consigna en el artículo 3 inciso k) que los Estados Americanos proclaman los derechos fundamentales de la persona humana sin hacer distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo y acordaron en el artículo 16 el parámetro que "cada Estado tiene el derecho de desenvolver libre y espontáneamente su vida cultural, política y económica", para luego esclarecer: "[e]n este libre desenvolvimiento, el Estado respetará los derechos de la persona humana y los principios de la moral universal". Utilizando el sistema de "pesos y contra pesos", los Estados del sistema interamericano prescribieron, sin embargo, en el artículo 3 inciso e) en primer lugar, que:

"Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga. Y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro Estado".

De ahí, con meridiana claridad consignaron en el artículo 18:

"Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho a intervenir, directa o indirectamente y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la fuerza armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen".

Finalmente, con el correr de los años agregaron:

"Ningún Estado podrá aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado y obtener de éste ventajas de cualquier naturaleza".

Se distinguen, pues, en la Carta de la OEA—como en la de la ONU— los derechos y los deberes de los Estados en calidad de Estados y como miembros de dichas organizaciones y, entre los deberes, específicamente, el de no intervenir en los asuntos internos de otros Estados. Luego se esclare-

cen las atribuciones y restricciones de la Organización en su quehacer en relación con los Estados, figurando, entre ellas, no intervenir en asuntos de la jurisdicción interna de los Estados (art. 1 parf. 2).

No se excluyó ni se restringió, sin embargo, la competencia *rationae materiae* de la Organización en cuanto a su potestad de examinar y señalar las violaciones a los derechos humanos que ocurrieren en cualesquiera de los Estados miembros en tanto que los Estados Americanos aceptaron la restricción que ninguno de ellos aplicará o estimulará, individualmente, medidas coercitivas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado y obtener de éste ventajas de cualquier naturaleza.

Se colige que tanto la Carta de las NN. UU. como la de la OEA reafirman la efectividad de los derechos fundamentales del hombre, y la fe en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas. Asimismo, el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados, dejando a salvo, sin embargo, el accionar de las estructuras internacionales con claras competencias en esta materia.

3. *Los alcances de los principios fundamentales*

Cabe destacar que a lo largo de los años se viene insistiendo en la conveniencia de esclarecer y depurar el contenido y alcances de los principios contenidos en la Carta de la ONU y de la OEA, principalmente, los principios antes identificados. Pueden traerse a cuenta, entre otras, la Declaración sobre la Inadmisibilidad de la Intervención en los asuntos internos de los Estados y la protección de su independencia y soberanía de la Asamblea General en 1965 -Resolución No. 2131-; la Declaración sobre los Principios de Derecho Internacional referentes a las Relaciones de Amistad y Cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las NN. UU. aprobada en 1970 -Resolución No. 2625-; la Definición de Agresión de 1974 -Resolución No. 3314-; la Resolución sobre No Injerencia en los Asuntos Internos de los Estados de 1976 -Resolución No. 31-91-; La Declaración sobre Afirmación y Consolidación de la Distensión Internacional de 1977 -Resolución No. 32-155-; la Resolución No. 36-106 de 1981 sobre Inadmisibilidad de la Intervención e Injerencia en los Asuntos Internos de los Estados.

En la OEA sobresalen la Resolución de la V Reunión de Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores -Santiago de Chile, 1959- y los Dictámenes del Comité Jurídico Interamericano del 23 de octubre de 1959 sobre

casos que constituyen violaciones al Principio de no intervención; del 23 de septiembre de 1965 sobre "Diferencias entre Intervención y Acción Colectiva" y del 12 de febrero de 1974, así como, las reformas a la Carta aprobadas por el Protocolo de Cartagena de Indias del 5 de diciembre de 1985 — Preámbulo, y artículos 2 y 3 de la Carta—.

Estos textos constituyen vivos testimonios de esa preocupación y lo imperioso que ha sido y es, depurar el contenido y los alcances de la prohibición de no intervención. De allí que sea dable señalar que precisamente ha sido dentro de ese contexto normativo que en buena medida se ha logrado esclarecer cuando y en que casos un acto de esas Organizaciones y los actos individuales de sus Estados miembros constituyen o no intervención en la esfera interna de otros Estados.

Más aún, la Asamblea General de las NN.UU. aprobó el 21 de diciembre de 1965 la Declaración sobre la Inadmisibilidad de la Intervención en los Asuntos Internos de los Estados y protección de su independencia y soberanía, en la que señaló que son contrarias a los principios de las Naciones Unidas, y violatorios de la Carta, la *intervención directa, la subversión y todas las formas de intervención indirecta*. De allí que todo Estado "debe respetar el derecho de libre determinación e independencia de los pueblos y naciones, el cual ha de ejercerse sin trabas ni presiones extrañas y con absoluto respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales".

La Declaración sobre los principios de Derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de la ONU, aprobada por la Asamblea General el 12 de Noviembre de 1970, añadió que "el principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos constituye una importante contribución al derecho internacional contemporáneo, y de que su aplicación efectiva es de suprema importancia para fomentar entre los Estados las relaciones de amistad dadas en el respeto del principio de la igualdad soberana" y, en materia de derechos humanos esclareció que:

"Todo Estado tiene el deber de promover, mediante acción conjunta o individual, el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales y la efectividad de tales derechos y libertades de conformidad con la Carta".

La promoción, mediante acción conjunta o de manera individual, de los derechos humanos es, por consiguiente, compatible con el principio de la igualdad soberana de los Estados por cuanto se le considera como un deber de los Estados.

I

LA COMPETENCIA DE LOS ORGANOS Y EL PRINCIPIO DE NO INTERVENCIÓN

Hasta ahora ha sido factible establecer que el examen y discusión de las violaciones de los derechos humanos y el incumplimiento o la inobservancia de los compromisos establecidos en los tratados internacionales en los que estos derechos se consignan es competencia de la ONU y de algunos organismos regionales, como el Consejo de Europa, la OEA, sus Comisiones y sus Cortes de Derechos Humanos, así como, las violaciones a los derechos y deberes establecidos en los convenios internacionales de trabajo lo son de la OIT; en materia cultural, de la UNESCO, y así por el estilo distintos tratados asignan competencias específicas a ciertos organismos internacionales. Cada tratado constitucional establece, pues, los alcances y las proyecciones normativas de esas competencias.

Sin embargo, no todos los tratados constitucionales establecen esas competencias con similares alcances y proyecciones. De allí la importancia del notable avance en este campo de ciertos tratados internacionales que, en casos específicos, han asignado o atribuido a algunos órganos internacionales competencias más amplias y más precisas. Destacan en este terreno en la ONU, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo; en Europa, la Comisión y la Corte Europea de Derechos Humanos; en el continente americano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Jurídicamente, los tratados y convenciones internacionales constituyen el común denominador de esas estructuras, por cuanto ha sido y es mediante este tipo de mecanismo que se le han asignado y atribuido a dichos órganos internacionales competencias específicas, así como al desarticular los Estados dichos instrumentos internacionales.

En consecuencia, el ejercicio de las competencias atribuidas o conferidas a organismos internacionales, incluyendo los Tribunales Internacionales (o regionales) de Derechos Humanos, no constituye intervención en la esfera interna de los Estados que son objeto o motivo de señalamientos por violaciones a los derechos humanos, ni lo son las recomendaciones por los órganos competentes les formulan a los Estados o las reflexiones que les adelantan los relatores o asesores de los Estados, designados al efecto por dichos órganos internacionales.

De ahí que el principio de no intervención no sea invocable, cuando del accionar de los órganos establecidos en tratados internacionales se trata; tampoco lo es tratándose del accionar de los Estados que se ajustan a dichas reglas dentro de los marcos o el seno de dichas estructuras internacionales. Desde luego, quedan a salvo las situaciones en las que jurídicamente puede haber abuso o exceso de poder —*abus de pouvoir*— e, incluso, desviación de poder, y aquellas otras que se califican como *ultras vires*.

Dentro de esos claros y precisos marcos convencionales el Estado al que se imputan o atribuyen violaciones a los derechos humanos en su territorio, o bien, se le sindicada de incumplimiento a lo establecido en los tratados o, a lo resuelto por los órganos en el ejercicio de sus competencias, disfruta siempre del derecho al debido proceso legal —*due process of law*—. Esto es, el Estado —como los individuos— no debe ser objeto de condena alguna sin antes haber sido “citado y oído” disfrutando del derecho de defensa. Este es, en todo caso, un importante parámetro jurídico y político.

Finalmente, cabe recordar que las violaciones a los derechos humanos y el incumplimiento de los compromisos internacionales, pueden producirse tanto por gobiernos *de facto* como por gobiernos *de jure*, existiendo o no situaciones o regímenes de excepción —restricción de derechos constitucionales o regímenes de excepción, internamente, estados de alerta, alarma, estado de sitio— o bien, ocurrir dentro del contexto de una compleja situación nacional e internacional en la que existen tanto factores de índole interna o nacional como factores externos o internacionales. Asimismo, se distinguen situaciones graves, otras menos graves y otras más graves y, si trata de violaciones esporádicas o, por el contrario, sistemáticas y si existe o no una deliberada política de violaciones a los derechos humanos y el consiguiente incumplimiento a los compromisos internacionales.

1. *Las violaciones a los derechos humanos y la óptica de los Estados*

Lo anterior conduce a terrenos de la óptica bajo la cual se aprecian las violaciones a los derechos humanos y, desde luego, los hechos, los elementos y los factores que son motivo de ponderación y examen a fin de adoptar una decisión. La colindancia de lo jurídico con lo político, es, por supuesto, evidente, al grado que pueden darse situaciones en las que no sólo se examinen las violaciones a los derechos humanos imputables a un Estado sino, también, el entorno socio económico o político dentro del que se producen, incluyendo, hechos y factores internacionales conexos o interrelacionados⁴.

Los factores de naturaleza internacional le dan, pues, a estos problemas, una dimensión muy distinta. Se plantean así, distintos cursos de acción a seguir y, desde luego, se plantea, en toda su dimensión, la acción coordinada e, incluso, conjunta, frente al principio de no intervención.

Se aprecian estas diferencias cuando un órgano internacional examina de las violaciones a los derechos humanos imputables a un Estado, —su gobierno, sus fuerzas de seguridad, sus tribunales, etc. etc.—, por ejemplo: la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, la Comisión Europea de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que luego formulan sus recomendaciones o elevan sus informes a otro órgano: la Asamblea General de las N.N.UU., al Comité de Ministros del Consejo de Europa o al Consejo Permanente o a la Asamblea General de la OEA. Tal ha sido, en el continente americano, por ejemplo, el caso de Chile durante el gobierno militar del General Pinochet ante la ONU y ante la OEA; de Argentina, de El Salvador, Guatemala y Uruguay a lo largo del período de intensos conflictos internos y, luego, con posterioridad, en la ONU y en la OEA; los de Paraguay, Perú, Haití y México en la OEA y el de otros países africanos ante la ONU y la Organización de Unidad Africana.

Sin embargo, estos cursos de acción se diferencian de los seguidos con ocasión del tratamiento de aquellas otras situaciones que han demandado, sobre todo, adoptar, a nivel de órganos con poder de decisión las correspondientes medidas que deben traducirse en acciones legales y políticas.

De allí que en la discusión de estas últimas, sobre relevancia jurídica y política el principio de no intervención. Los casos de Nicaragua, Bolivia, Argentina, Panamá y México en el contexto hemisférico, permiten examinar esta sensitiva problemática con objetividad y claridad.

2. *El caso de Nicaragua en Naciones Unidas -1978-*

El caso de Nicaragua, objeto de acción en y por las Naciones Unidas en 1978, ilustra la compatibilidad que se logró en el plano internacional entre los derechos humanos y el principio de no intervención en los asuntos internos de un Estado miembro de esa organización. En efecto, la Asamblea General, por iniciativa de los Presidentes de Costa Rica, Colombia y Venezuela tomó conocimiento de la situación imperante en ese país en el que se registraban tanto actos de guerra civil y violaciones a los derechos humanos por el gobierno de ese país presidido, entonces, por el General Anastasio Somoza, como incursiones de la aviación militar de Nicaragua en el territorio de Costa Rica. Preocupaba, asimismo, el *deshbordamiento* de la

4 Al respecto véase CIDH, *Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Haití*, OEA, Washington DC, 1990.

situación nicaragüense en la región centroamericana y la contratación de mercenarios.

Las graves violaciones a los derechos humanos eran, pues, uno de los componentes de esa difícil y compleja situación, examinada por la Asamblea General precisamente bajo la óptica de situación conforme a los términos de los artículos 35 y 36 de la Carta⁵.

Mediante la Resolución 33-78 del 15 de diciembre de 1978 la Asamblea General aprobó siete puntos que ameritan transcripción:

1. **Censura** la represión contra la población civil de Nicaragua y la violación de la soberanía de Costa Rica por parte de la aviación militar de Nicaragua.
2. **Expresa** su honda preocupación por la gravedad que ha alcanzado la situación interna de Nicaragua y por sus repercusiones para la paz y la seguridad de la región.
3. **Exige** a las autoridades de Nicaragua que cesen las acciones militares o de otra índole, que pongan en peligro la seguridad de la región, en particular las que amenazan la soberanía y la inviolabilidad territorial de los países vecinos.
4. **Urge** a las autoridades de Nicaragua que aseguren el respeto a los derechos humanos de sus ciudadanos, en cumplimiento de sus compromisos internacionales y los postulados de la Carta de las Naciones Unidas.
5. **Pide** a todos los Estados que, de acuerdo con sus procedimientos constitucionales, adopten las medidas necesarias para desalentar el reclutamiento y la participación de sus nacionales en calidad de mercenarios en el conflicto que tiene lugar en Nicaragua.
6. **Insta** a que se prosigan a los esfuerzos internacionales emprendidos para lograr una solución pacífica al conflicto interno de Nicaragua.
7. **Pide** al Secretario General que, a través de los cauces correspondientes, siga atentamente el desarrollo de la situación de Nicaragua y preste la asistencia que sea del caso a los efectos del logro de las finalidades de la presente resolución.

5 Asamblea General, Trigesimo Tercer periodo de sesiones. Resolución No. 33/76 85a Reunión Plenaria, 15 de diciembre de 1978. Asimismo, Villagrán Kramer, F. *El Papel de la ONU y los organismos regionales en la solución pacífica de los conflictos regionales*. Estudios para el 40 aniversario de las Naciones Unidas - Montevideo, Uruguay, 1985 y en Revista de la Universidad de San Carlos, No. 2, Guatemala, 1988.

Es evidente que la Asamblea General no invadió, por así decirlo, **dominios reservados** de Nicaragua, instando al cambio de gobierno sino a que se resolviese la situación mediante soluciones pacíficas. La Asamblea General no estimulaba la guerra civil ni tampoco el triunfo del sandinismo que, entonces, luchaba por derrocar al gobierno del General Somoza. Estimulaba sí, una solución pacífica que no excluía la negociación entre las fuerzas contendientes. Por lo demás, era un hecho que el movimiento sandinista disfrutaba de apoyo y simpatías internacionales.

El enfoque del conflicto interno bajo la óptica de situación fue lo que le permitió a la Asamblea General **examinar** dicha situación y **formular sus observaciones y pedimentos**, sin que ello diere lugar a que se le señalare exceso o abuso de poder e, incluso, inmiscuirse en asuntos que correspondían a la esfera doméstica del gobierno de Nicaragua al tenor del párrafo 7o. del artículo 2 de la Carta.

3. *El caso de Nicaragua en la O.E.A. -1979-*

Dado que la situación en Nicaragua continuó deteriorándose, sobre todo, en razón de atrocidades cometidas por las fuerzas de seguridad de Nicaragua contra la población civil en Nicaragua y actos hostiles en territorio de Costa Rica, se puso en movimiento el sistema interamericano. Se convocó a la 17a. Reunión de Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores, a fin de considerar y analizar las medidas que deberían adoptarse.

La reunión tuvo lugar en el transcurso del mes de junio de 1979. Cabe destacar que en las deliberaciones de los Ministros de Relaciones Exteriores influyeron algunos acontecimientos que precisamente en esos días ocurrieron en Nicaragua, entre ellos: bombardeos por la fuerza aérea de Nicaragua a poblaciones civiles y el asesinato, por miembros de la Guardia Nacional, de un periodista norteamericano, hechos que fueron debidamente documentados en "video tape" y transmitidos por televisión, incluyendo en la sala en la que los canceliers americanos se encontraban reunidos discutiendo el caso de Nicaragua.

El gobierno del General Somoza gozaba de escasas simpatías a nivel de gobiernos americanos y de la prensa continental, de suerte que la opinión pública pesaba fuertemente en su contra en las deliberaciones del sistema interamericano. Aún no se perfilaban, al menos claramente, las tendencias ideológicas en juego ni los antagonismos que posteriormente afloraron en el plano internacional entre la Unión Soviética y Estados Unidos y regionalmente entre el gobierno de Estados Unidos y algunos gobiernos latinoamericanos, incluyendo el gobierno-sandinista de Nicaragua. El

caso de Nicaragua ofrecía, por consiguiente, fuertes acentos políticos y elementos tanto de carácter internacional —regional— como internos. Se entrelazaban factores políticos estrictamente internos, graves violaciones a los derechos humanos, problemas fronterizos entre Nicaragua y Costa Rica y la posibilidad de que la situación continuase desbordándose.

El 23 de junio de 1979 la 17ª Reunión de Consulta estimó pertinente dividir la **continencia de la causa**, aprobando, por una parte, en sesión plenaria y por mayoría sustancial, una **Declaración** en la que sentó las bases de solución y definió el curso político a seguir y, luego, una **Resolución** en la que precisó el curso jurídico a seguirse por los Estados miembros de la Organización pero, haciendo la debida referencia a las bases políticas de solución⁶.

En el texto de la **Declaración** se asentó:

1. Reemplazo inmediato y definitivo del régimen somocista.
2. Instalación en el territorio de Nicaragua de un gobierno democrático cuya composición incluya los principales grupos representativos opositores al régimen de Somoza y que refleje la libre voluntad del pueblo de Nicaragua.
3. Garantía del respeto a los derechos humanos a todos los nicaragüenses sin excepción.
4. Realización de libres elecciones a la brevedad posible que conduzcan al establecimiento de un gobierno auténticamente democrático que garantice la paz, la libertad y la justicia.

Por su lado, la **Resolución** se orientó, fundamentalmente, a establecer la pauta de conducta general a seguir por los Estados miembros, al **instarlos**

“a realizar las gestiones que estén a su alcance para facilitar una solución duradera y pacífica al problema nicaragüense sobre las bases señaladas, respetando escrupulosamente el principio de no intervención y absteniéndose de cualquier acción que fuere contraria a esas bases, o incompatible con la solución pacífica y duradera del problema”.

6 O.E.A. Décimo séptima reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores. Resolución No. II — aprobada el 23 de junio de 1979.— Doc. 40-79 rev. 2. El proyecto de resolución fue presentado por las delegaciones de Barbados, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Grenada, Jamaica, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Suriname y Venezuela. Sobre el caso de Nicaragua véase también: Vasquez Carrizosa, Alfredo. *El caso de Nicaragua en la XVII Reunión de Consulta: Los derechos humanos como fundamento de la acción internacional*. OEA. Anuario Jurídico Interamericano, 1979 y Villagran Kramer, F. op. cit. pp.47-49. Nikken, op. cit. pp 493-526.

La perspectiva *stricta iuris* obliga, desde luego, a tomar en cuenta, tanto la Declaración como de la Resolución y la naturaleza y el alcance de las competencias que ejerce, conforme a los tratados interamericanos, la Reunión de Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores. A la luz de esos elementos se aprecia que dicho órgano interamericano debe, fundamentalmente, perseguir soluciones a los problemas políticos y de seguridad que aquejan a la región y a los países miembros, por lo que disfruta de competencias flexibles que le permiten, incluso, incursionar, cuando así lo deciden sus miembros con la mayoría requerida, en evidentes terrenos políticos. El principal valladar ciertamente es el principio de no intervención pero éste, a su vez, cobra en situaciones como la de Nicaragua en 1979, por razones políticas, una dimensión distinta. La Resolución de los Ministros de Relaciones Exteriores citando este principio, ilustra el punto.

4. El caso de Bolivia en la OEA-1980.

El 22 de julio de 1980 Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela solicitaron la convocatoria de una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, a fin de considerar “asuntos relacionados con la situación de los derechos humanos en la República de Bolivia”. En su comunicación precisaron que escasos días antes —el 17 de agosto— había ocurrido en ese país un golpe de Estado, que numerosas personas eran víctimas de violaciones a sus derechos fundamentales, así como que diversas instituciones habían sido o estaban siendo privadas del ejercicio de los derechos garantizados. El golpe de Estado fue posterior a las elecciones nacionales que dieron lugar a la instauración de un gobierno popularmente electo. El representante de Bolivia, entre otras explicaciones, expuso:

“El reciente ejercicio pseudo-democrático es nulo de pleno derecho y el pueblo de Bolivia no ha hecho otra cosa que reencontrarse el camino de su historia al detener la avalancha extremista que se precipitaba sobre esta patria en la ficción electoral decretada por el fraude con apenas un 20 por 100 de la totalidad de los votos”.

“Las naciones americanas conocen estos avatares, y es indudable que su amistosa preocupación por la situación boliviana no dará paso a temperamentos intervencionistas. En este punto, consideramos necesario referirnos al inciso 7 del artículo 2o. de la Carta de las Naciones Unidas que establece que “ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados”. Debemos también referirnos al artículo 18 de la Carta de la Organización de Estados Americanos que establece que “Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho a intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo en los asuntos internos y externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la fuerza armada sino también cualquier otra forma de inherencia o tendencia atentoria de la personalidad del

Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen⁷.

En la sesión extraordinaria del Consejo celebrada el siguiente 25 de julio de 1980, se discutió tanto en torno a la preocupación de los países que convocaron a dicha sesión extraordinaria para tratar sobre las violaciones a los derechos humanos en Bolivia como las objeciones de las representaciones de entonces de Argentina y Chile basadas en el argumento que ello implicaría violar el principio de no intervención.

En concreto, el representante de Argentina sostuvo:

"En primer término, quisiera decir que con este debate el Consejo está entrando en un terreno sumamente peligroso, en el que muy pocas veces había incursionado, al pronunciarse sobre el proceso político interno que vive un Estado miembro".

"Una de las disposiciones más sabias de la Carta de nuestra Organización que casi todos los Estados miembros han defendido siempre con pasión, es la que establece que ningún Estado o grupo de Estados tienen derecho de intervenir, directa o indirectamente y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos y externos de cualquier otro. El texto de esta norma es muy metuculoso al afirmar que el principio excluye cualquier forma de injerencia que sea atentador de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen".

"Esta disposición contenida en el artículo 18 de la Carta tiene una larga historia y una muy amplia justificación. Trata de evitar la repetición de hechos tristes que han afectado la marcha de muchas naciones de nuestro continente".

(...)

El principio de no intervención, avalado por una larga y constante tradición en nuestra Organización, es sostenido muy celosamente por la Argentina, que lo considera indivisible e irrenunciable. Sobre la base de esos criterios, creemos que la presente resolución se aparta peligrosamente de ese principio".

La situación nos preocupa más aún porque algunas delegaciones han avanzado la nueva teoría de que el principio de no intervención debe condicionarse a otros que hoy se califican como trascendentales. Esta erosión del principio que siempre ha sido el pilar de las relaciones interamericanas, puede tener consecuencias muy serias para nuestra organización y tenemos que resolver como la que estamos considerando, que pretende calificar el

proceso político de un Estado miembro, lleven en sí la semilla del resquebrajamiento del sistema regional⁸.

La Resolución 308 (432/80) del 25 de julio de 1980 del Consejo Permanente por una parte, invoca en el preámbulo los principios consagrados en la Carta de la OEA, especialmente los enunciados en el art. 3 inciso d) y j), luego, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y por último la Declaración de La Paz aprobada por consenso en el noveno período ordinario de sesiones de la Asamblea General, que precisamente se había reunido en esa ciudad escasos días antes del derrocamiento del gobierno de ese país, estando aún en La Paz funcionarios de la OEA y de algunos de los Estados miembros. Por la otra, trae a cuenta el derecho de todo Estado a la libre determinación consiguando al respecto:

"En este libre desenvolvimiento respetará los derechos de la persona humana y los principios de la moral universal, tal como se consagra en el artículo 16 de la Carta de la Organización y que este precepto ha sido conculcado por el golpe militar ocurrido en Bolivia al desconocer las elecciones recientemente celebradas en ese país, dentro del estricto respeto al principio de no intervención".

En la parte resolutive el Consejo Permanente primero, deploró el golpe que suspendía indefinidamente el proceso de institucionalización democrática que estaba culminando en Bolivia y luego bajo numeral

"2. Manifiestar su profunda preocupación por la pérdida de vidas humanas y por las graves violaciones de los derechos humanos del pueblo boliviano, como consecuencia directa del golpe de Estado.

3. Solicitar, que en el plazo más breve posible, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos examine la situación de los derechos humanos en Bolivia".

Finalmente, al reunirse la Asamblea General de la OEA en su décimo período ordinario de sesiones, aprobó en el curso de la Sexta Sesión Plena celebrada el 27 de noviembre de 1980, por una parte, "hacer suya" la resolución 308 del Consejo Permanente de la OEA y, por la otra, "reiterar" a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el pedido de preparar un informe sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia, "para ser considerado por el órgano competente del sistema regional"⁹.

⁸ Acta Sesión Extraordinaria 25-VII-1980-OEA-Ser G.C.P. Acta 432-80.

⁹ Resoluciones aprobadas por la Asamblea General en su Décimo Período Ordinario de Sesiones. OEA-Ser. P. AG Doc. 1350-80 rev. 14 dic. 1980, p.31. Subrayado en el texto es nuestro.

5. *El caso de Argentina en la OEA -1980-*

En el curso de 1980, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la nos rindió un "Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en la Argentina" (OEA Ser L.V. 49 doc. 19 corre. 1 11 abril 1980) destacando diversos hechos y situaciones que se registraron en ese país y, la naturaleza de las violaciones a los derechos humanos imputados al gobierno militar de ese país. En el transcurso de la Décima Asamblea General de la OEA— en el que, asimismo, se analizó la Resolución del Consejo Permanente de la OEA sobre Bolivia— la Delegación Argentina consideró pertinente aducir que la OEA no podía ni debería identificar en sus resoluciones a ningún país por violaciones a los derechos humanos, dando a entender que podría retirarse de la Organización si no se atendía esa preocupación. Sobre ese asunto, el Canciller argentino expuso:

"Si nuestra Organización llega a creer que tiene jurisdicción supranacional, que puede juzgar a los gobiernos y asumir la actitud de cuerpo político superior a los mismos gobiernos, habremos encontrado la mejor manera de destruirlo".

El debate que luego tuvo lugar sobre la resolución que perseguía arribar a un consenso sobre el fondo del problema planteado, involucró a México, Barbados, Jamaica, Uruguay, Venezuela, Perú y a Argentina. La delegación de este último país expresó que su propósito era "encontrar en un esfuerzo común, fórmulas que permitieran hacer más efectiva la promoción de los derechos de la persona humana, mediante una resolución amplia y comprensiva que diera respuesta a los problemas existentes en este tema". De ahí añadió:

"Otro punto importante es que la Organización de Estados Americanos ha adoptado un nuevo enfoque global para el tratamiento de estos asuntos tan sensitivos, eliminando así la práctica del enjuiciamiento a Estados Miembros y evitando las condenas que caracterizan otras resoluciones aprobadas en las últimas Asambleas Generales. El respeto de la soberanía y de las dignidades nacionales y del principio de no intervención, así lo exigen. Confiamos en que tanto la Asamblea como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconozcan el significado de este cambio"¹⁰.

En la Resolución AG-RES 510 (X), 80 aprobada por la Asamblea General se señalaron, en primer término, los avances que a criterio de los gobiernos eran significativos en materia del respeto a los derechos humanos y

luego, sin identificar a los países, se señala que la CIDH recomienda se ponga fin inmediatamente a las graves violaciones de los derechos humanos, precisando que, en el curso de esa Asamblea se adoptaron nuevos procedimientos para la consideración de los informes sobre derechos humanos en el Hemisferio. Asimismo, se tomó nota de los informes anuales que incluyen la consideración de la situación de los derechos humanos en Chile, El Salvador, Paraguay y Uruguay, y de los informes especiales sobre la situación de los derechos humanos en la Argentina y en Haití, formulando recomendaciones de carácter general y específicos sin identificar a los países.

6. *El caso de Panamá en la OEA -1989/1990-*

Para efectos de análisis de los "derechos humanos y el principio de no intervención", es apropiado distinguir, por un lado, los hechos que condujeron a la consideración del caso de Panamá por la OEA en el curso del mes de mayo y junio de 1989 y, por el otro, la intervención militar en ese país por el gobierno de Estados Unidos y la subsiguiente consideración de esa acción unilateral por la OEA y por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1989. Sobre el particular creemos que se deben analizar y ponderar los siguientes factores.

PRIMERO: la acción de la OEA en Panamá en el curso de los meses de mayo y junio de 1989 fue de carácter institucional y la motivó la crisis que se generó en ese país a raíz de cuestionadas elecciones nacionales y la integración de un nuevo gobierno y las violaciones a los derechos políticos que, por su lado, fueron constatadas, incluso, por un equipo de observadores que dirigió el ex Presidente de Estados Unidos Sr. James Carter, ampliamente documentadas por la televisión del continente.

La acción armada del gobierno de los Estados Unidos en diciembre de 1990 fue, por el contrario, unilateral y no se basó y tampoco el gobierno de ese país invocó violaciones a los derechos humanos por el régimen del Gral. Manuel Antonio Noriega para fundamentar su acción sino, la necesidad de proteger a sus nacionales en Panamá y lograr la detención y procesamiento del Gral. Manuel Antonio Noriega por actos estrechamente relacionados con el tráfico de estupefacientes.¹¹

10

Informe del Grupo de Trabajo, Primera Comisión, Asuntos Jurídicos y Políticos. Acta de la séptima Sesión OEA Ser P. AG. I-Acta 7-80 1 nov. 1980.

11

OEA. XXI Reunión de Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores Washington DC, 1989. Sobre el caso de Panamá en la OEA donde según Nikken, tanto la resolución de la XXI Reunión de Consulta como las declaraciones de su presidente, "pusieron en evidencia una fuerte confusión principista" véase Nikken, op cit. 506-507. Sobre la acción unilateral del gobierno de Estados Unidos, véase: Farer, Tom. *Beyond the Charter Paradigm*. American Journal of International Law, Vol. 84, No.2.

EN SEGUNDO LUGAR, la acción de la XXI Reunión de Consulta, canalizada a través de la Misión del Secretario General de la OEA y de los Ministros de Relaciones Exteriores de Ecuador, Guatemala y Trinidad y Tobago aprobada el 17 de mayo de 1989 se orientó, básicamente, según el criterio dominante en la XXI Reunión de Consulta, en dirección del conocimiento de los hechos y a la búsqueda de soluciones de común acuerdo con el Gral. Manuel Antonio Noriega. De esta suerte, el propósito común de los gobiernos fue buscar una fórmula consensual de solución y no imponerle al gobierno de Panamá una decisión política —como en el caso de Nicaragua de 1979—, formularle señalamientos públicos con la subsiguiente acción de la CIDH —como se hizo en el caso de Bolivia de 1980—. Era evidente, entonces, que subyacente estaba el principio de legitimidad del gobierno que se había instaurado en ese país.

Desde este punto de vista y de la defensa de los derechos humanos, en particular, los derechos políticos de los ciudadanos panameños, el esfuerzo de los Cancilleres no produjo ningún resultado, en tanto que la posterior acción unilateral del gobierno de Estados Unidos dio lugar al colapso del gobierno panameño, a la detención y procesamiento del Gral. Manuel Antonio Noriega Noriega, y a la instauración de un nuevo gobierno civil en Panamá con las consiguientes protestas de la Asamblea General de la ONU, de la OEA, y del Parlamento Europeo¹².

EN TERCER LUGAR, la Reunión de Consulta fue convocada para conocer de la situación descrita, por lo que ésta quedó enmarcada por las reglas existentes en la Carta y sus reformas. Entre ellas, el párrafo 2 del art. 1- La OEA

→ 1990. Sobre los alcances del artículo 18 de la Carta (Ningún Estado tiene el derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la fuerza armada sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen) tengase presente la opinión de Buergenthal, Norris y Shelton, y el análisis de Nikken

El distinguido profesor de American University, Tom Farer, refuta en *Beyond the Charter Paradigm* el punto de vista del profesor Anthony A. D'Amato según lo expuesto en *The Invasion of Panama was a lawful response to tyranny*. A.J.I.L., p.516 y sigs. Véanse, además, las Resoluciones del Consejo Permanente de la OEA - 22 y 29 de diciembre 1990- y de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el caso de Panamá, 29 de diciembre, 1990 y del Parlamento Europeo 25 de mayo y 13 de octubre de 1989 y 18 de enero de 1990.

12 Véase: IRELA. *Crisis e intervención en Panamá: antecedentes y consecuencias*. Dossier No.21, IRELA, Madrid, enero 1990. En este texto figuran, asimismo, las resoluciones del Parlamento Europeo sobre el caso de Panamá.

"no tiene más facultades que aquellas que expresamente le confiere la presente Carta, ninguna de cuyas disposiciones la autoriza a intervenir en asuntos de la jurisdicción interna de los Estados" y el inciso b) del art. 2 relacionado con el propósito de la OEA de "Promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención".

Desde la perspectiva de las violaciones a los derechos políticos del pueblo panameño y del principio de legitimidad del gobierno se observa la insuficiencia normativa existente en el sistema interamericano para resolver ambas situaciones más allá de lo señalado en el caso de Bolivia. Y ello, porque con posterioridad a los casos de Nicaragua y de Bolivia —y con el beneplácito de los gobiernos militares de la época— se introdujo en la Carta en 1985 el mandato de no intervenir en lo concerniente a la promoción y consolidación de la democracia representativa en el continente. *Stricto juris* y no en terrenos de *lege ferenda* esa insuficiencia no daba lugar, incluso, a suspender, por ejemplo, los derechos de membresía de Panamá. Es decir, la suspensión temporal de derechos de membresía en la OEA —como se prevé en el art. 8 del Convenio Constitutivo del Consejo de Europa— cuando un gobierno no se conforma a las pautas de conducta o a las reglas establecidas por la Organización como condición de su membresía activa en ella.

Ciertamente en oposición a esa observación se puede invocar el caso de Cuba -OEA-enero 1962 —en el que, para unos, se le impusieron a ese país sanciones que aparejaron la suspensión en su membresía y, para otros, exclusión de la Organización, aun cuando en ambas alternativas fue por razones ideológicas y de seguridad continental que se aplicó esa medida junto con la suspensión parcial del comercio y tráfico con Cuba.

Conviene recordar, sin embargo, que esas medidas fueron adoptadas en la Octava Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores para servir de Órgano de Consulta en aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca -TIAR- precisamente, porque el gobierno de Cuba, a criterios de los otros gobiernos, se identificó con los principios de la ideología marxista-leninista, estableció un régimen político, económico y social fundado en esa doctrina y aceptaba cualquier ayuda militar de las potencias comunistas extracontinentales e, inclusive, según se adujo, existía la amenaza de intervención armada de la URSS¹³ y no por violaciones a

13

Al respecto véase: Instituto Interamericano de Estudios Jurídicos Internacionales, *El Sistema Interamericano- Estudio sobre su desarrollo y fortalecimiento*. Madrid, 1966, pp. 206-215.

los derechos humanos y no satisfacer el gobierno cubano el principio de legitimidad.

Es de señalar que en el caso de Panamá la reunión de Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores estuvo enmarcada por el principio de no intervención, principio que, en ese caso iba de la mano con la insuficiencia normativa antes señalada. Ello obstruía, pues, adoptar una decisión encaiminada a obligar al gobierno panameño a buscar su legitimación o exponerse al curso de acción que se le delineare. Por otra parte, es correcto señalar que no figuraron en esa etapa importantes factores de carácter internacional como aconteció en el caso de Nicaragua de 1979. Sin embargo, con posterioridad a las elecciones nacionales de 1989 si surgieron fuertes tensiones entre el gobierno de Estados Unidos de América y el gobierno de entonces de Panamá así como controversias de diversa naturaleza: políticas, financieras, militares y las relacionadas con el tratamiento hostil que, según el gobierno de Estados Unidos, el gobierno panameño dispensaba a sus nacionales residentes en ese país.

En este orden de ideas conviene recordar que la acción militar del gobierno de Estados Unidos estuvo precedida de acciones financieras, incluyendo de carácter legal, relacionadas con el "congelamiento" y control de activos propiedad del Estado panameño en bancos de Estados Unidos y de los ingresos que, conforme a los tratados Torrijos-Carter sobre el Canal de Panamá, correspondían al Estado panameño, los que, asimismo, fueron motivo de medidas de seguridad. Estas acciones, claramente orientadas a forzar al "hombre fuerte" de Panamá a dejar el poder, al igual que otro tipo de presiones ejercidas que sobre el poder gubernamental de ese país tampoco produjeron resultados.

Se aprecia, entonces, que el principio de no intervención, limitó la acción decisoria de los Cancilleres. Sin embargo, y ello es útil subrayarlo, dicho principio no limitó la consideración del caso ni el análisis de los hechos. Tampoco obstruyó la designación e integración de la Misión de alto nivel - Secretario General y tres Cancilleres- ni su activa presencia en Panamá, sus entrevistas y discusiones con funcionarios del gobierno panameño, con dirigentes políticos panameños de la oposición y dirigentes religiosos, empresariales y sindicales, hechos todos que precisamente tuvieron lugar en territorio panameño.

Se ha señalado que políticamente los gobiernos latinoamericanos no estaban persuadidos que la situación de Panamá hubiere cobrado la gravedad que tuvo en 1979 la de Nicaragua, así como, que faltó claridad de propósitos entre los principales actores para acordar un curso de acción a

seguir, curso que hubiere obstruido, o detenido la acción unilateral del gobierno de Estados Unidos.

Lo importante para el análisis jurídico no son las consideraciones políticas ni las hipótesis sino, el marco legal en el que se produjo el tratamiento del caso. Ciertamente las consideraciones de orden político tienen relevancia e importancia y en experiencia del autor, no se deben minimizar. Sin embargo, sobresale en el caso de Panamá la impresión que los gobiernos latinoamericanos no consideran apropiado accionar colectivamente, de manera contraria al artículo 19 es decir, el principio de no intervención.

El texto de la Resolución del 18 de noviembre de 1989 aprobado en el décimo noveno período de sesiones ordinarias de la Asamblea General de la OEA ilustra sobre los distintos puntos anteriormente tratados.

1. **Reafirmar** la urgente necesidad de que el pueblo panameño exprese su voluntad en el más breve plazo posible, por medio de un auténtico proceso democrático, con todas las garantías necesarias para el ejercicio pleno del sufragio universal, que conduzca al establecimiento de un gobierno electo libremente y sin ingerencias externas.
2. **Manifiestar** su apoyo y solidaridad al hermano pueblo panameño y expresar su honda preocupación por las serias violaciones de los derechos y las libertades fundamentales en Panamá, especialmente los referidos a la plena vigencia de los derechos civiles y políticos como lo ha expresado la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en su Informe Especial sobre ese país presentado a la consideración de esta Asamblea General.
3. **Reafirmar** los principios de respeto a la libre determinación de los pueblos y de no injerencia en los asuntos internos de los Estados.
4. **Exortar** a todos los Estados a que se abstenga nde acciones unilaterales que dificulten una solución justa y negociada.
5. **Reiterar** la importancia que los Estados miembros asignan al estricto cumplimiento del espíritu y de la letra de los Tratados Torrijos-Carter.
6. **Tener en cuenta** que numerosos Estados miembros han tomado medidas diplomáticas que expresan su preocupación por la situación prevaliente en Panamá.
7. **Encomendar** al Consejo Permanente de conformidad con el artículo 81 de la Carta, que mantengan bajo permanente consideración la situación de Panamá.

7. *El caso de México en la OEA-1991-*

México impugnó en la reunión de la Asamblea General de la OEA celebrada en Santiago de Chile—junio de 1991—, el examen—en los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos— de la legislación interna de un país. En concreto, se refirió al análisis por la CIDH de la legislación electoral del Estado de Nuevo León, incluido en el informe anual de la CIDH a conocerse en y por esa Asamblea.

El planteamiento generó debate, centrado, desde luego, en los aspectos jurídicos relacionados con las competencias que disfruta, a la luz de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, esa Comisión y sobre si la Comisión debería o no abstenerse de examinar violaciones a los derechos humanos cuando con ello se cuestione la legislación interna de los países y, menos aún cuando una ley interna ha sido aprobada conforme a los procedimientos constitucionales internos y por legisladores democráticamente electos.

Políticamente, para México, el Informe de la CIDH era inoportuno por cuanto se presentó en momentos en que negocia un importante tratado comercial con Estados Unidos que se espera tendrá extraordinarias proyecciones y, luego, porque, como es bien sabido, México es sumamente sensitivo en todo lo que concierne a su esfera doméstica. Quizás ello sirve para explicar por qué su delegación rechazó en forma categórica el señalamiento de violación de derechos políticos por aplicación de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León.

Chile y otros países estimaron, por su lado, que en algunas ocasiones no basta que una ley sea aprobada por parlamentarios legalmente electos, toda vez que pueden existir casos en los que esas leyes igualmente violen derechos humanos, y que, precisamente, la Convención Interamericana de Derechos Humanos establece mecanismos para analizar y señalar tales situaciones, figurando entre ellos, la obligación de informar a la OEA. Por su parte Uruguay hizo observar que ese debate no debería dar lugar a poner en tela de juicio a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ni sus funciones, estimando que debería existir mayor claridad "entre la tutela de los derechos humanos y su protección, pues ambas responsabilidades tienen un mecanismo diferente", distinción que es importante retener¹⁴.

14 Didier Opperti. -Delegado del Uruguay-. Agence France Press. Santiago de Chile, 7 de junio de 1990. Como antecedente puede señalarse que el 17 de mayo de 1990 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resolvió sobre los casos Nos. 9766, 9780 y 9828 concernientes a denuncias de fraudes electores en México. -CIDH- Informe anual 1989-1990 pp. 101128, señalando que a su juicio no existe en México un

Subyacente en esas discusiones estuvo el principio de no intervención, traído a cuenta en sesiones privadas. El elemento sobresaliente fue si la competencia conferida a los órganos internacionales conlleva, a la luz del respectivo instrumento internacional conforme al que se creó o estableció el órgano, la atribución de cuestionar la legislación interna de un país y si es o no lícito señalarlo en los informes de esos órganos. En otros términos, si ello constituye o no intervención en la esfera doméstica de un Estado.

Evidentemente dos son los temas de fondo. Uno, si el órgano internacional tiene o no competencia para examinar la legislación interna de un país que restringe o viola los derechos establecidos en las Declaraciones Universal y Americana de Derechos Humanos y en convenciones internacionales como la Interamericana de Derechos Humanos. La otra, si el órgano internacional, como resultado del ejercicio de sus competencias, puede o no señalar en sus informes a los organismos internacionales a los cuales debe rendirlos, las violaciones a los derechos humanos que constate en las legislaciones internas de los Estados. Es, pues, distinta la atribución de examinar y constatar las violaciones a que da lugar determinada legislación de un país y la de informar de ello a los organismos internacionales competentes¹⁵.

Desde luego, políticamente también se puede dimensionar este asunto sosteniendo que si las normas en cuestión son producto de un gobierno no democrático o de un cuerpo legislativo no electo ni integrado democráticamente, el señalamiento de violación de los derechos humanos por esa legislación es, entonces, ilícito y permisible, en tanto que, el señalamiento de la legislación en cuestión emitida o aprobada por un gobierno democrático o por un cuerpo legislativo democráticamente electo, sería ilícito y no permisible. El enfoque del *doble standard* requeriría, para su validez, de la existencia de una regla que permitiere hacer esa distinción o calificación de cuándo y en qué circunstancias el poder que emite las normas de derecho

→ "recurso sencillo y rápido" que ampare a las personas contra las violaciones a sus derechos políticos recomendándole al Gobierno de México que adoptara las medidas legislativas o de otro orden tendientes a subsanar esa situación" El gobierno de México rechazó dicha resolución. Véase: "OEA Ser 1/11 77, rev 1 Doc 7.17 mayo 1990.

15 Tanto el Comité de Derechos Humanos de la ONU como la Comisión Europea y la Corte Europea de Derechos Humanos han analizado casos de violaciones a los derechos humanos, resultantes de la aplicación de leyes nacionales que no se conforman a los respectivos instrumentos internacionales. Véase al respecto: Lauterbach, *International Law Reports y Publications de la Cour Européenne des Droit de l'Homme*, Serie A-Arrets et Décisions. O'Donnell, Daniel, *Protección Internacional de los Derechos Humanos*, IIDH-Fundación Friedrich Naumann, Lima Perú, 1988.

interno es o no democrático, a fin de determinar la viabilidad de la información.

En todo caso, la discusión de este asunto pone de relieve la relación que subsiste entre los derechos humanos y el principio de no intervención, acentuándose cada vez más el fino uso del escalpelo jurídico entre diplomáticos, políticos y juristas.

Se collige, entonces, que uno es el accionar de los órganos establecidos en los tratados y convenciones internacionales, de acuerdo con sus competencias, funciones y atribuciones, por ejemplo, de la Comisión y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de las Comisiones Europea e Interamericana de Derechos Humanos y de las Cortes Europea y Americana de Derechos Humanos y, otro, el accionar de los Estados miembros de las Organizaciones Internacionales que han establecido dichos órganos o que las crearon directamente.

De esta manera se puede argumentar que para enfocar en correcta perspectiva la efectividad de los derechos humanos y el juego del principio de no intervención, es pertinente distinguir entre el accionar de los órganos internacionales, de conformidad con sus competencias y el accionar de los Estados, como partes integrantes de dichos órganos. Ello, obviamente induce o invita a mediar sobre el accionar de los Estados propiamente dichos, dentro y fuera de los marcos de los tratados internacionales de los que son parte, a fin de precisar si están o no sujetos a regulaciones y limitaciones, entre otras, por el principio de no intervención.

El siguiente tema es, pues, la conducta o el proceder individual de los Estados en el terreno de los derechos humanos y si los Estados son libres o no de tomar, al margen de los órganos internacionales competentes en materia de derechos humanos, medidas individuales que pueden afectar directamente a otro u otros Estados.

II

LA CONDUCTA DE LOS ESTADOS EN LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS

La Declaración de la Asamblea General sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación de los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas de 1970, fijó un importante parámetro al establecer que todo Estado tiene el deber de promover, mediante acción conjunta o individual, el respeto

universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales y la efectividad de tales derechos y garantías de conformidad con la Carta.

Dado que el anterior parámetro abarca tanto el accionar conjunto como el individual, conviene distinguir entre el proceder de un Estado en el seno de un órgano internacional, con competencias específicas en materia de derechos humanos y, su proceder fuera de los marcos de esos órganos. En otros términos: el accionar de los Estados en su carácter de miembros de un órgano internacional que se aboca al conocimiento de violaciones a los derechos humanos en otro Estado, y el accionar de los Estados fuera de los marcos de acción de dichos órganos. Con más claridad deslindar la conducta *intra* y *extra muros* de los Estados.

1. El accionar de los Estados dentro de una estructura internacional de Derechos Humanos

La conducta de los Estados que son miembros de estructuras institucionales con competencias en materia de derechos humanos, en buena medida ha sido objeto de esclarecimiento. Por una parte, no se trata únicamente de ejercer un derecho sino de cumplir el deber de promover el respeto universal de los derechos humanos y la efectividad de tales derechos. Por la otra, conforme al derecho internacional, los Estados, y por su puesto, los gobiernos, no deben actuar en su calidad de miembros de un órgano internacional sino en la modalidad prevista en dichos tratados, observando y ajustándose en todo caso, a los cánones que rigen las relaciones entre Estados soberanos e iguales.

Como integrantes de un órgano o partes de una estructura organizativa mundial o regional, los Estados pueden, alternativamente, llevar a la atención de los órganos competentes o bien, examinar las violaciones a los derechos humanos que ocurren en otros Estados, así como distinguir hechos y omisiones, e, incluso, situaciones a cuales más complejas que se presentan en el seno del o de los Estados a los que se imputan violaciones a los derechos humanos o se le atribuyen responsabilidades específicas en este terreno. Lo importante es que en esos casos no actúan como integrantes de un tribunal internacional ni como fiscales. Examinan hechos y denuncias y en más de un sentido pasan revista a situaciones que corresponden al orden interno de otros Estados. Pero, no para sancionar sino a fin de contribuir al restablecimiento de los derechos afectados en ese País o, bien, inducir un cambio de actitud de las autoridades de ese Estado respecto a los derechos que sus habitantes deben disfrutar. Cumplen por consiguiente, una importante función en el plano internacional, función

que, por lo demás y como se ha visto les asigna las reglas contenidas en tratados internacionales¹⁶.

Es evidente que entre los miembros de un órgano internacional con competencias en este terreno, no existe jurídicamente ninguno que tenga la calidad de *primus inter pares*. El principio de la igualdad soberana entre Estados persiste y en manera alguna se ve afectado. Tampoco el Estado, cuyos actos u omisiones son objeto de análisis y discusión, sufre, *stricta jure*, por ello, ninguna *capitis diminutio*. La sindicación o el examen desde luego, afecta políticamente. Sin embargo, jurídicamente la conducta de los Estados miembros hacia otro Estado y hacia sus autoridades debe ser congruente con la competencia que ejerce el órgano del que son parte, tomando en cuenta, como antes se señaló, que su función no es condenar sino contribuir a asegurar la efectividad y el respeto a los derechos humanos. Los principios de la efectividad y de las relaciones de amistad y de cooperación por el otro, también constituyen parámetros jurídicos a cuales más importantes en este terreno.

III

ACCIONES UNILATERALES DE LOS ESTADOS

A lo largo de las últimas dos décadas progresivamente ha venido en aumento la preocupación de los gobiernos, de los parlamentos y de los distintos agrupamientos económicos, sociales, culturales y políticos por la plena observancia de los derechos humanos en distintas partes del mundo. Las Comisiones de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de Europa y de la O.E.A., así como Cortes Europea y Americana de Derechos Humanos y algunas organizaciones no gubernamentales como Amnesty International y America's Watch, entre otras, han contribuido notoriamente a concientizar y estimular la preocupación de los ciudadanos por la observancia de los derechos humanos.

Como respuesta a ese interés y a la presión que internamente se desarrolla, varios Estados han adoptado o adoptan legislación especial en materia de derechos humanos, destinada en unos casos, a producir efectos

internamente y en otros, fuera de su territorio. Por ejemplo, se le requiere al poder ejecutivo presentar informes periódicos o informes especiales a su parlamento o congreso sobre la observancia de los derechos humanos en distintos países o, en particular, sobre algunos países. Se condiciona la asistencia económica o militar que se proporciona a otros gobiernos o el voto del gobierno en organismos financieros multilaterales —como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo— para el otorgamiento de préstamos concesionales por esos bancos, a determinada conducta de parte del, o de los gobiernos sindicados, o bien se condicionan las preferencias o los privilegios fiscales que esos países otorgan a terceros, a la observancia de los Derechos Humanos en esas sociedades, o a la efectiva aplicación de la legislación laboral e, incluso, el reconocimiento y aplicación de los beneficios de la cláusula de la nación más favorecida se sujeta a la observancia o tolerancia de determinados derechos individuales, entre ellos, el derecho de emigración a otros países.

La preocupación de los sectores interesados en la adopción de esa clase de medidas y, en la puesta en marcha de las políticas orientadas a esos fines, es, en esos países, genuina. El argumento en favor de su adopción es precisamente, que las acciones internacionales son insuficientes y requieren, para su eficacia, de acciones nacionales complementarias. Desde luego, no puede excluirse en este terreno el juego de las ideológicas ni de los intereses económicos y políticos de determinados grupos de presión. Pero, lo determinante, es la prevalencia de un genuino interés, incorporan a la legislación nacional de los países que acogen esas prácticas, motivan, por su lado, diversas reacciones en los Estados señalados de violaciones a los derechos humanos, en razón de que, en algunos de los países que son objeto de esa clase de señalamientos y condicionamientos o, de las medidas contempladas en esas legislaciones, la efectividad de los derechos humanos no tiene, internamente, la misma relevancia e importancia que en otros países, estimándose que no es por esa vía como se logra un cambio de perspectiva o de actitudes en las sociedades donde ocurren esas violaciones.

Al situarse estos hechos y fenómenos en el plano de las relaciones entre Estados soberanos que ante el Derecho Internacional son soberanos e iguales, así como, frente al principio de no intervención surge la interrogante de si ese proceder se conforma o no a las reglas vigentes del Derecho Internacional.

Lo medular no es, desde luego, cuestionar los motivos o los fines que se persiguen o poner en tela de juicio la intención o los propósitos de los grupos nacionales que favorecen ese tipo de acciones y políticas, sino las

16 Véase, por ejemplo: Buergenthal, Norris y Shelton, op. cit. pp. 58-60. Asimismo: Buergenthal, Grossmann y Nikken, *Manual Internacional de Derechos Humanos*, IIDH-San José-Caracas, Editorial Jurídica Venezolana, 1990.

reglas jurídicas bajo las cuales los Estados que adoptan o aprueban esas medidas se pueden amparar y, si, en ese accionar individual, los gobiernos resultan o no interviniendo en la esfera doméstica de otro u otros Estados de manera contraria al Derecho Internacional.

1. *La potestad soberana del Estado de legislar.
Efectos internos y externos*

Desde el punto de vista estrictamente jurídico es imperioso distinguir entre los actos de derecho interno que condicionan o hacen mandatoria la conducta de sus respectivos gobiernos en su esfera interna de acción, de aquellos otros actos unilaterales que producen efectos en la esfera internacional. La distinción es útil, tanto desde el punto de vista jurídico como político.

En el primer caso, se está frente a actos de derecho interno o actos que surten sus efectos, principalmente, en el orden interno del Estado que los emite, aprueba o ejecuta. Son propios de la jurisdicción interna de esos Estados por lo que corresponden a lo que se conoce como su esfera doméstica. En este sentido, los órganos competentes de los Estados disfrutaban de la querida libertad para adoptarlos. Entra en juego la potestad normativa del Estado y, por supuesto, el ejercicio de su soberanía. En todo caso, se trata del ejercicio del derecho de legislar.

Sin embargo, tratándose de actos de derecho interno que surten efectos en la esfera internacional, es decir, fuera del territorio del Estado y, que por ello afectan principalmente los intereses de terceros Estados, se está frente a actos jurídicos y políticos que trascienden el ámbito interno y se trasladan al plano internacional. De allí que, *prima facie* se considere que los Estados deben observar las mismas reglas de conducta que están obligados a observar dentro de marcos de acción de los órganos internacionales competentes.

La línea que separa la inaplicabilidad del principio de no intervención y la posibilidad de un exceso o abuso de poder tratándose de los órganos con competencias específicas en materia de violaciones a los derechos humanos, también se perfila en estas otras situaciones; pero, de manera diferente. El accionar individual de los Estados no se ampara en una regla convencional de derecho internacional sino en reglas de derecho interno. Es decir, descansa únicamente en la potestad normativa que en su territorio disfrutaban los Estados, potestad que ciertamente reconoce el derecho internacional pero con límites.

Como es bien sabido, no todos los actos unilaterales de los Estados producen los mismos efectos en el plano internacional ni todos los actos unilaterales y las políticas de los Estados están supeditados a la observancia de reglas internacionales. Ciertamente existen actos unilaterales de derecho interno que condicionan en el plano internacional, el proceder o la conducta del Estado; pero, que legalmente no deben hacerse valer, precisamente, por sus efectos en el ámbito interno de terceros Estados. Es decir, por la posibilidad o por el hecho mismo que entrañan interferencia en los asuntos internos de los Estados a los que van o están expresamente dirigidos. Desde luego, casos hay en que tácita o expresamente estas interferencias se toleran por los Estados afectados, pero esa tolerancia no se convierte inexorablemente en regla de derecho.

2. *Limitaciones a las prácticas de los Estados*

El tema central es si existen o no limitaciones al derecho de los Estados de legislar en materias de derechos humanos, cuando tales actos están destinados a producir efectos en y sobre terceros Estados. La ley interna en todo caso autoriza o le impone al Estado determinada actuación o práctica que puede o no ser contraria a las reglas internacionales o a las de una organización internacional de la que el Estado es miembro.

Es menester recordar que, conforme a la Declaración sobre los principios de Derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad y cooperación entre los Estados, los Estados —como dice el texto— “deben conducir sus relaciones internacionales en las esferas económica, social, cultural, técnica y comercial, de conformidad con los principios de la igualdad soberana y la no intervención”. El acento en los principios de la igualdad y la no intervención es clara y evidente.

El asunto cobró trascendencia por lo que la Asamblea General de la ONU se abocó al examen de las prácticas que entrañan injerencias —francas o disimuladas y directas o indirectas— en los asuntos internos de los Estados. Al efecto, primero reafirmó en la Resolución No. 31-91 del 14 de diciembre de 1976 el derecho de todo Estado a “elegir su propio sistema económico, cultural y social, de conformidad con la voluntad soberana de su pueblo, libre de toda forma de intervención, coerción o amenaza del exterior”.

Luego, identificó una “extensa gama de técnicas directas o indirectas, —inclusive suspensión de prestaciones de asistencia y la amenaza de suspenderla, y otras formas sutiles y refinadas de coerción económica, de subversión y difamación con fines de desestabilización— contra gobiernos que

tratan de liberar a su economía del control y las maniobras extranjeras, de reestructurar sus sociedades y de ejercer una soberanía permanente sobre sus recursos naturales.

Por último, reafirmó "el derecho soberano e inalienable de todos los Estados a determinar libremente y sin ninguna forma de injerencia extranjera, su sistema político, social y económico y sus relaciones con los otros Estados y las organizaciones internacionales" y, por aparte, le solicitó al Secretario General que invitara a todos los Estados miembros de Naciones Unidas a expresar sus opiniones sobre los medios que permitirían conseguir que se observe más escrupulosamente el principio de no injerencia en los asuntos internos de los Estados".

A raíz de la adopción de esa Resolución se consideró pertinente continuar, en los siguientes períodos de sesiones y hasta el año de 1981, con el examen del tema de la intervención y la injerencia en los asuntos internos de los Estados". En tal virtud, tomando en cuenta anteriores Declaraciones y Resoluciones, así como, las experiencias de algunos Estados, se estimó conveniente aprobar, el 9 de diciembre de 1981, la **Declaración sobre la Inadmisibilidad de la Intervención y la Injerencia en los Asuntos Inter-nos de los Estados**, en la que se contemplan y comprenden, diversas categorías y clases de actos que deben condenarse. Entre ellos, bajo romanos II, la Asamblea General aprobó dos importantes incisos:

k) "El deber de todo Estado, en la conducción de sus relaciones internacionales en las esferas económica, social, técnica y comercial, de abstenerse de adoptar medidas que constituyan una injerencia en los asuntos internos y externos de otro Estado impidiéndole así determinar libremente su desarrollo político, económico y social; esto incluye, entre otras cosas, el deber de un Estado de no utilizar sus programas de asistencia económica externa, adoptar medidas de represalia o de bloqueo económico multilaterales y unilaterales y de impedir el uso de empresas transnacionales y multinacionales bajo su jurisdicción y control como instrumentos de presión y coerción política contra otro Estado, en violación de la Carta de las Naciones Unidas.

17 A fin de apreciar la evolución en la Asamblea General, hasta llegar a la aprobación del numeral romano II incisos (k) y (l) véase: Asamblea General de Naciones Unidas. Resoluciones 31/91 del 14 de diciembre de 1976; 32/153 del 19 de diciembre de 1977; 33/74 del 15 de diciembre de 1978 y 35/159 del 12 de diciembre de 1980 relativas a la no injerencia en los asuntos internos de los Estados.

La Declaración adoptada en la 91a. sesión plenaria del 9 de diciembre de 1981 fue sobre la base del Informe de la Primera Comisión. Bajo romanos III inciso 3 se consignó el punto de vista de los Estados miembros de Naciones Unidas presentes y votando afirmativamente, en el sentido que "Los derechos y deberes enunciados en esta Declaración están interrelacionados y son conformes a la Carta". El record de la votación ilustra sobre el particular.

h) El deber de todo Estado de abstenerse de explotar y deformar las cuestiones de derechos humanos como medio de injerencia en los asuntos internos de los Estados, ejercer presión sobre otros Estados o de crear desconfianza y desorden dentro de los Estados o grupos de Estados".

El desarrollo de la Carta de la ONU a través del mecanismo de las Resoluciones y de las Declaraciones de la Asamblea General muestra una clara tendencia en dirección de salvaguardar a los Estados de los efectos de las medidas coercitivas que otros Estados pueden individualmente adoptar. Los textos transcritos evidencian la preocupación de la Asamblea General y apuntan en dirección de la tendencia de reducir al máximo la injerencia unilateral de los Estados en los asuntos internos de otros Estados.

Por lo que al organismo regional americano-OEA- se refiere, conviene traer a cuenta el artículo 19 de la Carta: "Ningún Estado podrá aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado y obtener de éste ventajas de cualquier naturaleza".

Ese texto admite, desde luego, interpretación restrictiva, en el sentido que no es aplicable a presiones económicas y políticas de un Estado sobre otro u otros cuando de derechos humanos se trate. Y, ello, en razón de que dicho precepto vincula directamente esa prohibición a la búsqueda u **obtención de ventajas de cualquier naturaleza**, y los efectos de las medidas restrictivas que un Estado adopta, en virtud de violaciones a los derechos humanos, en principio, no conllevan la búsqueda u obtención de ventajas.

Ciertamente se puede llevar el argumento a terrenos axiológicos en los que el valor derechos humanos, tiene mayor relevancia y concluirse que tratándose de ese valor, la prohibición es inaplicable. De la misma manera, se puede, sin construir una "filigrana jurídica", buscar el correcto sentido del mandato, tomando en cuenta que la Carta fue aprobada originalmente en 1948, año en el que también se aprobó la Declaración Americana de Derechos Humanos y, que, el actual artículo 19 se incorporó a la Carta vía el Protocolo de Buenos Aires de 1967.

Por otra parte, las prácticas objeto de consideración en la Declaración de 1981 de la Asamblea General de Naciones Unidas, se hicieron patentes con posterioridad a la suscripción del Protocolo de Buenos Aires. Es decir, durante la década de los años setenta, constituyendo en algunos casos,—el de Estados Unidos— una política importante del gobierno de ese país durante la presidencia del Sr. James Carter. Por otro lado, la adopción de simi-

lares medidas en Canadá y, en algunos países europeos, ocurrió posteriormente a instancias, fundamentalmente, de agrupamientos nacionales de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales.

No pasa desapercibido en este contexto que los Estados americanos, como miembros de Naciones Unidas, están sometidos al imperio del Derecho de las Naciones Unidas, dentro del que figuran los preceptos contenidos en la Declaración sobre la inadmisibilidad de la intervención y la injerencia en los asuntos internos de los Estados por lo que esa norma también es invocable y aplicable entre Estados Americanos.

Resulta, entonces, admisible la argumentación que el derecho internacional contemporáneo no conoce otras reglas expresas —más que las contenidas en tratados y convenciones internacionales— que faculten a un Estado a actuar unilateralmente, en forma tal que su proceder implique o conlleve intervención en los asuntos internos de otro Estado. Y a la luz de ello sostenerse que el derecho internacional contemporáneo no ampara los actos individuales de los Estados en el terreno de los derechos humanos fuera de los marcos de acción de los organismos internacionales competentes cuando estos entrañen o impliquen coerción. El punto es interesante por cuanto ya no se trata de intervención sino de coerción.

Por consiguiente, los Estados entre sí, deben observar, por una parte, las reglas de amistad y cooperación y, por la otra, tener presente que el accionar de manera compatible con los organismos internacionales no constituye intervención en la esfera doméstica de los Estados afectados, mientras que el accionar individual de uno o más Estados, que surte o produce efectos en otro u otros Estados, dependiendo de las circunstancias, y de los efectos, sí puede caer en ese terreno.

Se puede argumentar, asimismo, en sentido contrario: que no existen normas expresas vinculantes que prohíban esa clase de acciones o de políticas, por lo que los Estados son libres de adoptar tanto esa clase de legislación como ese tipo de políticas y, que lo único que se está haciendo en esos casos es complementar y fortalecer la efectividad de los derechos humanos, y la acción de los organismos internacionales competentes. Lo fundamental del argumento radica en que el derecho internacional contemporáneo no excluye las acciones unilaterales complementarias cuando éstas están destinadas a complementar o fortalecer las acciones de los órganos internacionales competentes. En abono de este punto de vista, puede citarse el artículo 56 de la Carta de la ONU.

Cierto es que en la historia de las relaciones internacionales se encuentran ejemplos en los que los Estados han asumido, individualmente, determinadas posiciones y, asimismo, ejecutado unilateralmente determinados actos amparándose precisamente en la ausencia de normas internacionales. Lo interesante es que ese proceder, en buena medida, contribuyó a la **internacionalización** de esos asuntos y con ello a la adopción de claras reglas de Derecho Internacional.

Lo medular radica, sin embargo, en la conveniencia de fortalecer el campo de acción de los organismos internacionales a fin de superar esa peculiar modalidad de "deshdoblamiento funcional" que se presenta y que, al utilizar ese concepto del profesor George Scelle¹⁸, ilustra claramente el fenómeno que se examina. En todo caso, la discusión de esta problemática es útil, por cuanto contribuye a poner de relieve que el *accionar individual* de los gobiernos en el campo de los derechos humanos, está sometido y sujeto a las reglas que, como miembros de Naciones Unidas, del Consejo de Europa, de los Acuerdos de Helsinki o de la OEA o de la OUA, deben observar y cumplir, toda vez que de lo contrario, pueden incurrir en violación del principio de no intervención en los asuntos internos de terceros Estados.

Cabe agregar, que la discusión permite esclarecer los efectos legales que produce la conducta individual de los gobiernos cuando se considere que se **extralimitan** en el ejercicio de su derecho de hacer señalamientos y calificaciones a otro u otros Estados en materia de derechos humanos o bien, imponerles o aplicarles unilateralmente sanciones a los Estados a los que imputan violaciones a los derechos humanos, ya que ello puede entrañar, según el caso, una separación de las reglas de amistad y cooperación.

De la misma manera, algunos actos unilaterales como los señalamientos públicos que representantes oficiales de un gobierno hacen a otros gobiernos, en el territorio de estos últimos —cual el caso de los agentes diplomáticos— pueden entrañar, según su naturaleza y alcances, separación del principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados. Como se aprecia, el asunto tiene ribetes políticos.

lares medidas en Canadá y, en algunos países europeos, ocurrió posteriormente a instancias, fundamentalmente, de agrupamientos nacionales de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales.

No pasa desapercibido en este contexto que los Estados americanos, como miembros de Naciones Unidas, están sometidos al imperio del Derecho de las Naciones Unidas, dentro del que figuran los preceptos contenidos en la Declaración sobre la inadmisibilidad de la intervención y la injerencia en los asuntos internos de los Estados por lo que esa norma también es invocable y aplicable entre Estados Americanos.

Resulta, entonces, admisible la argumentación que el derecho internacional contemporáneo no conoce otras reglas expresas —más que las contenidas en tratados y convenciones internacionales— que faculten a un Estado a actuar unilateralmente, en forma tal que su proceder implique o conlleve intervención en los asuntos internos de otro Estado. Y a la luz de ello sostenerse que el derecho internacional contemporáneo no ampara los actos individuales de los Estados en el terreno de los derechos humanos fuera de los marcos de acción de los organismos internacionales competentes cuando estos entrañen o impliquen coerción. El punto es interesante por cuanto ya no se trata de intervención sino de coerción.

Por consiguiente, los Estados entre sí, deben observar, por una parte, las reglas de amistad y cooperación y, por la otra, tener presente que el accionar de manera compatible con los organismos internacionales no constituye intervención en la esfera doméstica de los Estados afectados, mientras que el accionar individual de uno o más Estados, que surte o produce efectos en otro u otros Estados, dependiendo de las circunstancias, y de los efectos, sí puede caer en ese terreno.

Se puede argumentar, asimismo, en sentido contrario: que no existen normas expresas vinculantes que prohíban esa clase de acciones o de políticas, por lo que los Estados son libres de adoptar tanto esa clase de legislación como ese tipo de políticas y, que lo único que se está haciendo en esos casos es complementar y fortalecer la efectividad de los derechos humanos, y la acción de los organismos internacionales competentes. Lo fundamental del argumento radica en que el derecho internacional contemporáneo no excluye las acciones unilaterales complementarias cuando éstas están destinadas a complementar o fortalecer las acciones de los órganos internacionales competentes. En abono de este punto de vista, puede citarse el artículo 56 de la Carta de la ONU.

Cierto es que en la historia de las relaciones internacionales se encuentran ejemplos en los que los Estados han asumido, individualmente, determinadas posiciones y, asimismo, ejecutado unilateralmente determinados actos amparándose precisamente en la ausencia de normas internacionales. Lo interesante es que ese proceder, en buena medida, contribuyó a la **internacionalización** de esos asuntos y con ello a la adopción de claras reglas de Derecho Internacional.

Lo medular radica, sin embargo, en la conveniencia de fortalecer el campo de acción de los organismos internacionales a fin de superar esa peculiar modalidad de "desdoblamiento funcional" que se presenta y que, al utilizar ese concepto del profesor George Scelle¹⁸, ilustra claramente el fenómeno que se examina. En todo caso, la discusión de esta problemática es útil, por cuanto contribuye a poner de relieve que el *accionar individual* de los gobiernos en el campo de los derechos humanos, está sometido y sujeto a las reglas que, como miembros de Naciones Unidas, del Consejo de Europa, de los Acuerdos de Helsinki o de la OEA o de la OUA, deben observar y cumplir, toda vez que de lo contrario, pueden incurrir en violación del principio de no intervención en los asuntos internos de terceros Estados.

Cabe agregar, que la discusión permite esclarecer los efectos legales que produce la conducta individual de los gobiernos cuando se considere que se **extralimitan** en el ejercicio de su derecho de hacer señalamientos y calificaciones a otro u otros Estados en materia de derechos humanos o bien, imponerles o aplicarles unilateralmente sanciones a los Estados a los que imputan violaciones a los derechos humanos, ya que ello puede entrañar, según el caso, una separación de las reglas de amistad y cooperación.

De la misma manera, algunos actos unilaterales como los señalamientos públicos que representantes oficiales de un gobierno hacen a otros gobiernos, en el territorio de estos últimos —cual el caso de los agentes diplomáticos— pueden entrañar, según su naturaleza y alcances, separación del principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados. Como se aprecia, el asunto tiene ribetes políticos.

18 *Precis de Droit des Gens Principes et systematique*; Paris, Recueil Sirey, 1932.

IV

PLANTEAMIENTO

Dada la preocupación por la observancia y pleno respeto de los derechos humanos que se acentúa y proyecta en distintos países, entre ellos, los países miembros del Sistema Interamericano, es conveniente precisar dentro de este último **reglas o pautas esclarecedoras** de cuando y en que situaciones el accionar de organismos internacionales y, el de los Estados individualmente, pueden entrañar violación del principio de no intervención en la esfera interna de los Estados¹⁹.

Es, asimismo, importante fortalecer las competencias de los organismos internacionales a efectos de compatibilizar su ejercicio, en materia de la efectividad y el respeto a los derechos humanos y, las acciones unilaterales que, en ese mismo sentido, adoptan y ejecutan individualmente los Estados, asegurando con ello el propósito común que se observen y respeten los derechos humanos y, que se preserven inalterables, entre los Estados, las relaciones de amistad y cooperación.

Se plantea, en adición, la adopción de criterios y parámetros que orienten sobre la ampliación o extensión de las competencias de los organismos del Sistema Interamericano, a fin de establecer, de manera compatible con los propósitos y fines de la OEA, un **régimen de sanciones por violaciones a determinados derechos humanos imputables a los Estados**; sanciones que podrían consistir en la suspensión temporal de los derechos de membresía en la OEA en esos casos y, a aplicarse, asimismo, en el marco de situaciones irregulares, entre otras, aquellas en las que se ve envuelto el principio de legitimidad.

Este "planteamiento" es, en todo caso, seguimiento del que hizo el Comité Jurídico Interamericano en su Dictamen sobre "Derechos Humanos

19 Tomando como base el Dictamen del Comité Jurídico Interamericano del 23 de octubre de 1959 -casos constituyen violaciones al principio de no intervención- y el Dictamen del 23 de Septiembre de 1965- "Diferencias entre intervención y Acción Colectiva", se pueden identificar violaciones al principio de no intervención en el área de la Tutela y de la Defensa de los Derechos humanos. La reforma a la Carta de la OEA aprobada en virtud del protocolo de Cartagena de Indias -1985- añadió en el art. 3 inciso e) que los Estados americanos cooperaran entre sí teniendo presente el deber de no intervenir en los asuntos de otros Estados.

y Ejercicio de la Democracia" del 30 de octubre de 1959, al señalar que un régimen legal de derechos humanos demandaría, no solo de un instrumento internacional que fijare con claridad los derechos humanos y de una Corte de Derechos Humanos sino, el establecimiento de sanciones para su efectividad.

Se adelanta, por consiguiente, la proposición que se examine un régimen inicial de sanciones -suspensión temporal del derecho de membresía para los países miembros de la OEA que incurran en reiteradas violaciones a determinados derechos humanos- debidamente constatadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, examinar su aplicación en aquellas situaciones en las que resulte afectado el Principio de Legitimidad en conjunción con violaciones a los derechos humanos, a constatarse ya sea por el Consejo Permanente de la OEA u otro órgano que se considere tiene competencia para ello, resolviendo sobre la procedencia de esa modalidad de sanción la Reunión Conjunta de Ministros de Relaciones Exteriores o a la Asamblea General de la OEA.

Dado que la modalidad planteada produciría efectos únicamente dentro de la Organización Internacional sin proyecciones normativas fuera de ella, convendría examinar la utilización del mecanismo de una **Declaración con efectos vinculante entre los Estados miembros** que expresamente acepten ese régimen, o, en su defecto, el mecanismo de un **Acuerdo Simplificado**, o "Acuerdos o Convenios Ejecutivos"²⁰.

La ampliación sugerida de las competencias de los organismos internacionales fortalecería su papel en materia de derechos humanos, suprimiría o reduciría las fricciones que se generan entre Estados cuando se considera que violan el principio de no intervención en materia de los derechos humanos y aseguraría, indirectamente, mayor efectividad a esos derechos en el ámbito interno de los Estados sin que por ello la Organización Internacional invada, incurriere o viole la esfera doméstica de los Estados miembros.

Esta propuesta o "planteamiento" es, en todo caso un seguimiento a la que el Comité Jurídico Interamericano hizo en su Dictamen sobre "Derechos Humanos y Ejercicio a la Democracia", adelantando la iniciativa de considerar una sanción específica: Suspensión del Derecho de Membresía. Tanto en el caso de reiteradas violaciones a los Derechos Humanos, como cuando se afecta o viola en un Estado miembro, el Principio de Legitimidad.

A reserva que el Comité Jurídico Interamericano estudie esta problemática y, en su oportunidad, recomiende claras pautas sobre ella, la Corte Interamericana de Derechos Humanos podría, asimismo, emitir a instancias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA o de algún Estado miembro, Opinión Consultiva sobre aquellos puntos que fueren de su competencia. De la misma manera, el Comité Jurídico Interamericano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos podrían, conjuntamente, ahondar sobre esta temática sirviéndose para ello de los planteamientos contenidos en este estudio u otros que estime pertinente examinar.

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

ACTIVIDADES DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

ENERO-JUNIO 1991

Durante este semestre, la Corte celebró en su sede en San José, Costa Rica, el XXIII Período Ordinario de Sesiones del 9 al 17 de enero de 1991. Todos los jueces titulares estuvieron presentes, a saber: Héctor Fix-Zamudio (México), Presidente; Orlando Tovar Tamayo (Venezuela), Vicepresidente; Thomas Buergenthal (Estados Unidos de América); Rafael Nieto Navia (Colombia); Policarpo Callejas Bonilla (Honduras); Sonia Picado Sotela (Costa Rica) y Julio A. Barberis (Argentina). Estuvo, además, presente el Secretario, Licenciado Manuel E. Ventura Robles (Costa Rica).

El trabajo del Tribunal, durante esta sesión, estuvo centrado en la emisión de la resolución del 17 de enero de 1991 sobre las medidas provisionales solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto del Perú (CASO BUSTOS-ROJAS) y en la discusión y aprobación del nuevo Reglamento de la Corte.

En el caso Bustos-Rojas, el Tribunal resolvió lo siguiente:

1. Tomar nota de las medidas adoptadas por el Gobierno del Perú en cumplimiento de la resolución de 8 de agosto de 1990.
2. Requerir al Gobierno del Perú que, además de las medidas ya tomadas, establezca autoridades civiles de enlace en Lima, Ayacucho y Huanta para recibir las comunicaciones de urgencia de las personas bajo protección.
3. Devolver las presentes diligencias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y encomendarle la verificación del cumplimiento por parte del Perú de las medidas provisionales adoptadas.

En lo que al nuevo Reglamento de la Corte se refiere, el mismo fue aprobado durante esta sesión, pero por disposición transitoria, su entrada en vigor será a partir del 1 de agosto de 1991.

También inició la Corte, durante este período de sesiones, la consideración de los casos "Aloboeote y Otros" y "Gangaram Panday" contra Suriname y "Neira Alegria y Otros" contra el Perú. Por tal razón, participaron en las sesiones correspondientes los jueces ad hoc designados por Suriname y Perú, doctores Antonio Cançado Trindade y Jorge Orihuela Ibero, respectivamente.

**CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE INDEMNIZACION
COMPENSATORIA DE 21 DE JULIO DE 1989 EN LOS CASOS
"VELÁSQUEZ RODRIGUEZ" Y "GODINEZ CRUZ"**

Por medio de notas de fechas 14 de febrero y 8 de abril de 1991, el Gobierno de Honduras informó que, en acatamiento de lo dispuesto por las sentencias de indemnización compensatoria de 21 de julio de 1989 en los casos "Velásquez Rodríguez" y "Godínez Cruz", el Procurador General de la República y Presidente de la Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos, señor Leonardo Matute Murillo, firmó el 14 de febrero de 1991, a nombre del Estado hondureño, juntamente con el Gerente General del Banco Central de Honduras, un fideicomiso por la suma de 562,500.00 lempiras a favor de los hijos de Manfredo Velásquez Rodríguez y, otro fideicomiso por la suma de 487,500.00 lempiras a favor de la hija de Saúl Godínez Cruz. Asimismo informó que el 17 de octubre de 1990, la señora Emma Guzmán de Velásquez, recibió su correspondiente indemnización compensatoria por la suma de 187,500.00 lempiras y el 18 de octubre de ese mismo año, la señora Enmrida Escoto de Godínez, recibió de igual manera, su parte compensatoria correspondiente a 162,500.00 lempiras.

**SOMETTIMIENTO A LA CORTE DE
LA OPINION CONSULTIVA OC-12.**

El 28 de febrero de 1991 el Gobierno de la República de Costa Rica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sometió a la Corte una solicitud de opinión consultiva sobre la compatibilidad del proyecto de ley, en trámite ante la Asamblea Legislativa, de reforma a los artículos 474 y 475 del Código de Procedimientos Penales y de Creación del Tribunal Superior de Casación Penal, con el artículo 8.2.h de la citada Convención. La consulta se hace con el propósito de adecuar a la Convención lo relativo a la segunda instancia en materia penal. El Presidente de la Corte fijó el 15 de julio de 1991 como fecha límite para que los Estados Miembros y órganos de la OEA presenten sus observaciones al respecto.

**RECONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA DE
LA CORTE POR PARTE DE NICARAGUA**

El 12 de febrero de 1991 el Gobierno de Nicaragua depositó en la Secretaría General de la OEA el instrumento de declaración mediante el cual reconoce como obligatoria de pleno derecho la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de acuerdo con el artículo 62.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En la misma declaración dejó constancia de que la aceptación se hace por plazo indefinido, con carácter general, bajo condición de reciprocidad y con la reserva de que los casos para los que se reconoce la competencia comprenden solamente hechos posteriores o hechos cuyo principio de ejecución sean posteriores a la fecha del depósito de esta declaración.

**ADHESION A LA CONVENCIÓN Y RECONOCIMIENTO
DE LA COMPETENCIA DE LA CORTE POR PARTE
DE TRINIDAD Y TOBAGO**

El 28 de mayo de 1991, el Gobierno de la República de Trinidad y Tobago entregó en la Secretaría General de la OEA el instrumento mediante el cual dicho Estado adhiere a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y reconoce como obligatoria la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El Gobierno formuló, con esa declaración, dos reservas: la primera con respecto al artículo 4.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por cuanto en las leyes de ese país no existe la prohibición de aplicar la pena de muerte a una persona de más de setenta años de edad. La otra reserva es con respecto al artículo 62 de la convención, en el sentido de que Trinidad y Tobago reconoce la jurisdicción obligatoria de la Corte en la medida en que tal reconocimiento sea compatible con las secciones pertinentes de la Constitución de ese país y siempre que una sentencia de la Corte no contravenga, establezca o anule derechos o deberes existentes de ciudadanos particulares.

Actualmente, 23 Estados Miembros de la OEA han ratificado la Convención Americana, a saber: Argentina, Barbados, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. De ellos, los siguientes 14 han aceptado la competencia obligatoria del Tribunal: Argentina, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras,

Nicaragua, Panamá, Perú, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

VISITA DEL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO A LA SEDE
DE LA OEA EN WASHINGTON D.C.

Del 17 al 19 de abril de 1991, el Presidente de la Corte Juez Héctor Fix-Zamudio y el Secretario, Lic. Manuel E. Ventura Robles, visitaron la sede de la OEA en Washington D.C., con el fin de presentar a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente de la Organización, el informe anual de labores correspondiente al año 1990. En su discurso ante esa Comisión, además de informar sobre las labores realizadas por el Tribunal durante el período que abarca ese informe, el Presidente enfatizó la necesidad de dotar de recursos económicos suficientes a la Corte para que pueda cumplir con el difícil e improporcionable reto de cumplir con su papel de proteger real y eficazmente los derechos humanos dentro del marco del sistema interamericano.

El Consejo Permanente, con fundamento en el informe que le presentó la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, aprobó la siguiente resolución:

1. Acoger y transmitir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las observaciones y recomendaciones que el Consejo Permanente de la Organización hizo al Informe Anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
2. Exhortar a los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, que aún no lo hayan hecho, a que ratifiquen o se adhieran a la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", así como a que reconozcan la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 62, párrafo 2, de la mencionada Convención.
3. Reiterar a los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos la exhortación para que ratifiquen los demás instrumentos interamericanos en materia de derechos humanos o se adhieran a ellos.
4. Dar el apoyo financiero y funcional necesario a la Corte para que pueda llevar a cabo las altas funciones que le ha asignado la Convención Americana sobre Derechos Humanos y cumpla con lo que al efecto establece su Estatuto.
5. Expresar su reconocimiento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la labor desarrollada en el período que comprende este informe, e instarla a que continúe con su importante función.

En esa misma visita a Washington, el Presidente pronunció un discurso en la Subcomisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios de la OEA sobre el proyecto de presupuesto para el bienio 1992-1993, en el que fundamentó el incremento solicitado en el proyecto en razón del aumento considerable de trabajo que ha generado la introducción de tres nuevos casos por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, además, por el anuncio hecho por ésta, en el sentido de que seguirá sometiendo casos a la Corte regularmente.

ASUNCIÓN DE LA NUEVA SECRETARIA ADJUNTA

El 5 de mayo de 1991 asumió su cargo en el Tribunal la nueva Secretaria Adjunta, Ana María Reina Daract, de nacionalidad argentina. La señora Reina es abogada y fue funcionaria de la Organización de las Naciones Unidas, para la cual prestó sus servicios en Asunción, Paraguay y en Bangkok, Tailandia. Anteriormente se dedicó en su país a la docencia y a la investigación en el campo del derecho internacional.

XXI PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE
LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA

La Corte estuvo representada en el XXI Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, celebrado en Santiago de Chile del 3 al 8 de junio de 1991, por su Presidente, Juez Héctor Fix-Zamudio, por su Vicepresidente, Juez Orlando Tovar Tamayo y por el Juez Rafael Nieto Navia, miembro de la Comisión Permanente. Estuvo también presente el Secretario de la Corte, Licenciado Manuel E. Ventura Robles.

La Asamblea, al conocer el Informe Anual de Labores de la Corte, aprobó la siguiente resolución:

1. Tomar nota del Informe Anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
2. Acoger y transmitir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos las observaciones y recomendaciones que el Consejo Permanente de la Organización hizo al Informe Anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
3. Exhortar a los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, que aún no lo hayan hecho, a que ratifiquen o se adhieran a la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", así como a que reconozcan la jurisdicción obligatoria de la Corte

Interamericana de Derechos Humanos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 62, párrafo 2, de la mencionada Convención.

4. Reiterar a los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, la exhortación para que ratifiquen los demás instrumentos interamericanos en materia de derechos humanos.
5. Dar el apoyo financiero y funcional necesario a la Corte para que pueda llevar a cabo las altas funciones que le ha asignado la Convención Americana sobre Derechos Humanos y cumpla con lo que al efecto establece su Estatuto.
6. Expresar su reconocimiento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la labor desarrollada en el período que comprende este informe, e instarla a que continúe con su importante función.

MODIFICACION AL ARTICULO 8.1 DEL ESTATUTO DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

También, durante este período ordinario de sesiones de la Asamblea General, se acordó modificar el artículo 8.1 del Estatuto de la Corte, debido al cambio de fecha para la celebración de los períodos ordinarios de sesiones de la Asamblea General. Su redacción final quedó de la siguiente manera:

Artículo 8 - Elección: Procedimiento Previo

1. Seis meses antes de la celebración del período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, previa a la terminación del mandato para el cual fueron elegidos los jueces de la Corte, el Secretario General de la OEA pedirá por escrito a cada Estado Parte en la Convención, presentar sus candidatos dentro de un plazo de noventa días.

ELECCION DE NUEVOS JUECES

Durante el Vigésimo Primer Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, los Estados Partes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos eligieron como nuevos jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a las siguientes personas: Dr. Alejandro Montiel Argüello (Nicaragua), Dr. Máximo Pacheco (Chile) y Dr. Hernán Salgado Pesantes (Ecuador). Además, fue reelecto juez el actual Presidente de la Corte, Dr. Héctor Fix-Zamudio (México). Los tres primeros sustituirán en sus cargos a los jueces Thomas Buergenthal (Estados Unidos de América), Policarpo Callejas Bonilla (Honduras) y Julio A. Barberis (Argentina), quienes finalizarán su período el 31 de diciembre de 1991. El

período para el cual fueron elegidos es de seis años a partir del primero de enero de 1992.

SOLICITUD DE MEDIDAS PROVISIONALES RESPECTO DE GUATEMALA

Mediante comunicación de 27 de junio de 1991, recibida en la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al día siguiente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó a la Corte, de acuerdo con lo que establece el artículo 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 76 del Reglamento de la Comisión, que adoptara medidas provisionales con respecto a la seguridad personal e integridad física de 14 personas que, según la petición de la Comisión, "han sido amenazados o han sido testigos de abusos cometidos por las patrullas de auto-defensa civil" en el pueblo de Chunimá, Departamento de El Quiché, Guatemala. Estas personas son miembros del Consejo de Comunidades Etnicas Runujel Junam (CERI), familiares de ellos y funcionarios judiciales que han investigado y actuado en causas relacionadas con asesinatos de integrantes de organismos de derechos humanos en Chunimá.

Esta solicitud de medidas provisionales fue inmediatamente puesta en conocimiento del Presidente de la Corte por la Secretaría para los efectos pertinentes.

Interamericana de Derechos Humanos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 62, párrafo 2, de la mencionada Convención.

4. Reiterar a los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, la exhortación para que ratifiquen los demás instrumentos interamericanos en materia de derechos humanos.
5. Dar el apoyo financiero y funcional necesario a la Corte para que pueda llevar a cabo las altas funciones que le ha asignado la Convención Americana sobre Derechos Humanos y cumpla con lo que al efecto establece su Estatuto.
6. Expresar su reconocimiento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la labor desarrollada en el período que comprende este informe, e instarla a que continúe con su importante función.

MODIFICACION AL ARTICULO 8.1 DEL ESTATUTO DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

También, durante este período ordinario de sesiones de la Asamblea General, se acordó modificar el artículo 8.1 del Estatuto de la Corte, debido al cambio de fecha para la celebración de los períodos ordinarios de sesiones de la Asamblea General. Su redacción final quedó de la siguiente manera:

Artículo 8 - Elección: Procedimiento Previo

1. Seis meses antes de la celebración del período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, previa a la terminación del mandato para el cual fueron elegidos los jueces de la Corte, el Secretario General de la OEA pedirá por escrito a cada Estado Parte en la Convención, presentar sus candidatos dentro de un plazo de noventa días.

ELECCION DE NUEVOS JUECES

Durante el Vigésimo Primer Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, los Estados Partes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos eligieron como nuevos jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a las siguientes personas: Dr. Alejandro Montiel Argüello (Nicaragua), Dr. Máximo Pacheco (Chile) y Dr. Hernán Salgado Pesantes (Ecuador). Además, fue reelecto juez el actual Presidente de la Corte, Dr. Héctor Fix-Zamudio (México). Los tres primeros sustituirán en sus cargos a los jueces Thomas Buergenthal (Estados Unidos de América), Policarpo Callejas Bonilla (Honduras) y Julio A. Barberis (Argentina), quienes finalizarán su período el 31 de diciembre de 1991. El

período para el cual fueron elegidos es de seis años a partir del primero de enero de 1992.

SOLICITUD DE MEDIDAS PROVISIONALES RESPECTO DE GUATEMALA

Mediante comunicación de 27 de junio de 1991, recibida en la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al día siguiente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó a la Corte, de acuerdo con lo que establece el artículo 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 76 del Reglamento de la Comisión, que adoptara medidas provisionales con respecto a la seguridad personal e integridad física de 14 personas que, según la petición de la Comisión, "han sido amenazados o han sido testigos de abusos cometidos por las patrullas de auto-defensa civil" en el pueblo de Chunimá, Departamento de El Quiché, Guatemala. Estas personas son miembros del Consejo de Comunidades Etnicas Runujel Junam (CERI), familiares de ellos y funcionarios judiciales que han investigado y actuado en causas relacionadas con asesinatos de integrantes de organismos de derechos humanos en Chunimá.

Esta solicitud de medidas provisionales fue inmediatamente puesta en conocimiento del Presidente de la Corte por la Secretaría para los efectos pertinentes.

RECONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA DE LA CORTE POR PARTE DE NICARAGUA

Señor Secretario:

Tengo a bien dirigirme a usted para poner en su conocimiento y en el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el ilustrado Gobierno de Nicaragua depositó el 12 de febrero de 1991, el Instrumento de Declaración mediante el cual reconoce la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de acuerdo con el Artículo 62, inciso 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuyo texto es el siguiente:

I. El Gobierno de Nicaragua reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial, la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre todo los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, "Pacto de San José de Costa Rica", de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 62, inciso 1 de la misma.

II. El Gobierno de Nicaragua al consignar lo referido en el punto I de esta declaración, deja constancia que la aceptación de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se hace por plazo indefinido, con carácter general, bajo condiciones de reciprocidad y con la reserva de que los casos en que se reconoce la competencia, comprenden solamente hechos posteriores o hechos cuyo principio de ejecución sean posteriores a la fecha del depósito de esta declaración ante el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos.

Aprovecho la oportunidad para saludar a usted con las expresiones de mi distinguida consideración.

Joao Clemente Baena Soares

Secretario General

27 de febrero de 1991

*Al señor Licenciado Manuel E. Ventura Robles, Secretario,
Corte Interamericana de Derechos Humanos; San José, Costa Rica.*

TRINIDAD Y TOBAGO, DEPOSITÓ INSTRUMENTO DE ADHESIÓN A LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y RECONOCIÓ LA COMPETENCIA DE LA CORTE

Señor Secretario:

Tengo a bien dirigirme a usted para poner en su conocimiento y en el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el 28 de mayo de 1991, el Excelentísimo señor Angus Albert Kahn, Embajador, Representante Permanente de Trinidad y Tobago, depositó el Instrumento de Adhesión a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, "Pacto de San José de Costa Rica" de 1969.

El instrumento de adhesión antes mencionado tiene fecha 3 de abril de 1991 y contiene las siguientes reservas:

1. Con respecto al Artículo 4(5) de la Convención, el Gobierno de la República de Trinidad y Tobago formula una reserva por cuanto en las leyes de Trinidad y Tobago no existe prohibición de aplicar la pena de muerte a una persona de más de setenta (70) años de edad.
2. Con respecto al Artículo 62 de la Convención, el Gobierno de la República de Trinidad y Tobago reconoce la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se estipula en dicho artículo sólo en la medida en que tal reconocimiento sea compatible con las secciones pertinentes de la Constitución de la República de Trinidad y Tobago, y siempre que una sentencia de la Corte no contravenga, establezca o anule derechos o deberes existentes de ciudadanos particulares.

Aprovecho la oportunidad para saludar a usted con las expresiones de mi distinguida consideración.

Joao Clemente Baena Soares

Secretario General

24 de junio de 1991

*Al señor Licenciado Manuel E. Ventura Robles, Secretario,
Corte Interamericana de Derechos Humanos; San José, Costa Rica.*

RESOLUCION DE LA
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS
HUMANOS DE 17 DE ENERO DE 1991

MEDIDAS PROVISIONALES SOLICITADAS
POR LA COMISION INTERAMERICANA
DE DERECHOS HUMANOS RESPECTO DEL PERU
(CASO BUSTIOS-ROJAS)

La Corte Interamericana de Derechos Humanos,

Visto:

1. La resolución de la Corte de 8 de agosto de 1990 otorgó al Perú un plazo de 30 días para adoptar cuantas medidas fueren necesarias para proteger el derecho a la vida y a la integridad personal de Eduardo Rojas Arce, de Margarita Patiño y de los testigos del asesinato de Hugo Bustíos Saavedra, en especial Artemio Pacheco Aguado, Teodosio Gálvez Porras, Amelia Onofre Anaya, Florinda Morote Cartagena y Paulina Escalante y solicitó a aquel Estado que informara por escrito al Presidente de la Corte acerca de las medidas adoptadas.

La Corte requirió también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la remisión de toda la información de que dispusiera sobre el cumplimiento por parte del Perú de esa resolución.

A su vez, el Presidente fue autorizado para que, en consulta con la Comisión Permanente, tomara las medidas provisionales adicionales que estimara necesarias para asegurar el fiel cumplimiento de la resolución de la Corte y se encomendó a la Comisión Permanente, como comisión especial, que verificara la ejecución de la resolución.

2. El representante del Perú presentó a la Corte el 6 de septiembre de 1990 un informe acerca de las medidas adoptadas en cumplimiento de la resolución de la Corte, el cual fue completado por una nota del 5 de octubre de 1990.

3. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó a la Corte dos notas, fechadas el 16 de octubre de 1990 y el 11 de diciembre de 1990, que contienen comunicaciones de los reclamantes y la opinión de dicha Comisión sobre las medidas tomadas por el Perú.
4. El Perú, a solicitud del Presidente de la Corte, presentó el 15 de diciembre de 1990 sus observaciones a la nota de la Comisión del 16 de octubre e informó acerca de otras medidas adoptadas.
5. La Comisión Permanente, en su carácter de comisión especial, ha analizado las presentaciones de las Partes y ha informado a la Corte sobre ellas en su XXIII período ordinario de sesiones.

Considerando:

1. Según lo informado por la Comisión Permanente, las medidas adoptadas por el Perú cumplen, dentro de las circunstancias, el fin perseguido por la resolución de la Corte de 8 de agosto de 1990.
2. Sin embargo, la Comisión Permanente sugiere también en su informe que, así como el Gobierno del Perú ha establecido en Lima y en Ayacucho entidades militares de enlace para recibir las comunicaciones de urgencia de las personas bajo protección, sería conveniente que estableciera, con los mismos fines, autoridades civiles de enlace en Lima, Ayacucho y Huanta.
3. Las medidas tomadas hasta ahora por el Gobierno del Perú para dar cumplimiento a la resolución de 8 de agosto están referidas principalmente a las fuerzas armadas. Si bien ello puede resultar eficaz ante la situación que se vive en ciertas zonas de ese país, es conveniente también brindar a las personas protegidas la posibilidad de comunicarse de manera inmediata con las autoridades civiles y que puedan hacerlo incluso en la localidad de Huanta.
4. Según el artículo 63.2 de la Convención la jurisdicción de la Corte se limita a "casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario, evitar daños irreparables a las personas...". En un caso aún no sometido a la Corte una vez que el Estado ha adoptado las medidas provisionales y a menos que existan circunstancias apremiantes en contrario, ésta debe devolver las diligencias a la Comisión. Esta decisión no inhibe, sin embargo, a la Comisión, si la gravedad y urgencia así lo requirieren, de solicitar a la Corte, en cualquier momento, la aplicación del artículo 63.2.
5. El Gobierno del Perú debe seguir brindando protección a las personas indicadas. Sin embargo, dado que el caso aún se encuentra en trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la verificación de las medidas de protección corresponde a ella.

Por tanto:

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en uso de los poderes que le atribuye el artículo 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,

Resuelve:

1. Tomar nota de las medidas adoptadas por el Gobierno del Perú en cumplimiento de la resolución de 8 de agosto de 1990.
2. Requerir al Gobierno del Perú que, además de las medidas ya tomadas, establezca autoridades civiles de enlace en Lima, Ayacucho y Huanta para recibir las comunicaciones de urgencia de las personas bajo protección.
3. Devolver las presentes diligencias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y dejar en sus manos la verificación del cumplimiento por parte del Perú de las medidas adoptadas.

Redactada en español e inglés, haciendo fe el texto en español, en la sede de la Corte en San José, Costa Rica, el día 17 de enero de 1991.

La Corte estuvo integrada de la siguiente manera: Héctor Fix-Zamudio, *Presidente*; Orlando Tovar Tamayo, *Vicepresidente*; Thomas Buergenthal, *Juez*; Rafael Nieto Navia, *Juez*; Policarpo Callejas Bonilla, *Juez*; Sonia Picado Sotela, *Juez*; Julio A. Barberis, *Juez*; presentes, además; Manuel E. Ventura Robles, *Secretario*.

RULES OF PROCEDURE OF
THE INTER-AMERICAN COURT
OF HUMAN RIGHTS

Adopted by the Court at its
Twenty-Third Regular Session,
held January 9-18, 1991

Article 1. Purpose

1. These Rules regulate the organization and establish the procedures of the Inter-American Court of Human Rights.
2. The Court may adopt such other Rules as are necessary to carry out its functions.
3. In the absence of a provision in these Rules or in case of doubt as to their interpretation, the Court shall decide.

Article 2. Definitions

For the purposes of these Rules:

- a. the term "Court" means the Inter-American Court of Human Rights;
- b. the term "Convention" means the American Convention on Human Rights (Pact of San Jose, Costa Rica);
- c. the term "Statute" means the Statute of the Court approved by the General Assembly of the Organization of American States on October 31, 1979 (AG/RES. 448 [IX-0/79], as amended);

REGLAMENTO DE LA
CORTE INTERAMERICANA
DE DERECHOS HUMANOS

Aprobado por la Corte en su
Vigesimotercer Período Ordinario de Sesiones
celebrado del 9 al 18 de enero de 1991

Artículo 1. Objeto

1. El presente Reglamento tiene por objeto regular la organización y procedimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
2. La Corte podrá dictar los reglamentos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
3. A falta de disposición en este Reglamento o en caso de duda sobre su interpretación, la Corte decidirá.

Artículo 2. Definiciones

Para los efectos de este Reglamento:

- a. el término "Corte" significa la Corte Interamericana de Derechos Humanos;
- b. el término "Convención" significa la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica);
- c. el término "Estatuto" significa el Estatuto de la Corte aprobado por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos el 31 de octubre de 1979 (AG/RES 448 [IX-0/79]) con sus enmiendas;

- d. the expression "Permanent Commission" means the Permanent Commission of the Court;
- e. the expression "titular judge" means any judge elected in pursuance of Articles 53 and 54 of the Convention;
- f. the expression "*ad hoc* judge" means any judge appointed in pursuance of Article 55 of the Convention;
- g. the expression "interim judge" means any judge appointed in pursuance of Articles 6(3) and 19(4) of the Statute;
- h. the expression "Contracting States" means the States which have ratified or adhered to the Convention;
- i. the expression "Member States" means the States which are Members of the Organization of American States;
- j. the expression "parties to the case" means the parties in a case before the Court;
- k. the term "Commission" means the Inter-American Commission on Human Rights;
- l. the expression "Delegates of the Commission" means the persons designated by the Commission to represent it before the Court;
- m. the term "Agent" means the person designated by a State to represent it before the Court;
- n. the expression "original claimant" means the person, group of persons, or nongovernmental entity that instituted the original petition with the Commission pursuant to Article 44 of the Convention;
- o. the term "victim" means the person whose rights under the Convention are alleged to have been violated;
- p. the expression "Report of the Commission" means the report provided for in Article 50 of the Convention;
- q. the acronym "OAS" means the Organization of American States;
- r. the expression "General Assembly" means the General Assembly of the OAS;
- s. the expression "Permanent Council" means the Permanent Council of the OAS;
- t. the expression "Secretary General" means the Secretary General of the OAS;
- u. the term "Secretary" means the Secretary of the Court;

- d. la expresión "comisión permanente" significa la comisión permanente de la Corte;
- e. la expresión "juez titular" significa cualquier juez elegido de acuerdo con los artículos 53 y 54 de la Convención;
- f. la expresión "juez *ad hoc*" significa cualquier juez nombrado de acuerdo con el artículo 55 de la Convención;
- g. la expresión "juez interino" significa cualquier juez nombrado de acuerdo con los artículos 6.3 y 19.4 del Estatuto;
- h. la expresión "Estados Contratantes" significa aquellos Estados que han ratificado o han adherido a la Convención;
- i. la expresión "Estados Miembros" significa aquellos Estados que son Miembros de la Organización de los Estados Americanos;
- j. la expresión "partes en el caso" significa las partes en un caso ante la Corte;
- k. el término "Comisión" significa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos;
- l. la expresión "delegados de la Comisión" significa las personas designadas por ella para representarla ante la Corte;
- m. el término "agente" significa la persona designada por un Estado para representarlo ante la Corte;
- n. la expresión "denunciante original" significa la persona, grupo de personas o entidad no gubernamental que haya introducido la denuncia original ante la Comisión, en los términos del artículo 44 de la Convención;
- o. el término "víctima" significa la persona de la cual se alega han sido violados los derechos protegidos en la Convención;
- p. la expresión "informe de la Comisión" significa el informe previsto en el artículo 50 de la Convención;
- q. la sigla "OEA" significa la Organización de los Estados Americanos;
- r. la expresión "Asamblea General" significa la Asamblea General de la OEA;
- s. la expresión "Consejo Permanente" significa el Consejo Permanente de la OEA;
- t. la expresión "Secretario General" significa el Secretario General de la OEA;
- u. el término "secretario" significa el secretario de la Corte;

- v. the term "Deputy Secretary" means the Deputy Secretary of the Court;
- w. the term "Secretariat" means the Secretariat of the Court.

TITLE I. ORGANIZATION AND FUNCTIONING OF THE COURT

Chapter 1. The Presidency

Article 3. Election of the President and Vice-President

1. The President and Vice-President are elected by the Court for a period of two years. Their terms begin on July 1 of the corresponding year. The election shall be held during the regular session nearest to that date.
2. The election referred to in this Article shall be by secret ballot of the titular judges present. The judge who wins four or more votes shall be deemed elected. If no candidate receives the required number of votes, a ballot shall take place between the two judges who have received the most votes. In the case of a tie vote, the judge having precedence in accordance with Article 13 of the Statute shall be deemed elected.

Article 4. Functions of the President

1. The functions of the President are:
 - a. to represent the Court;
 - b. to preside over the meetings of the Court and to submit for its consideration the topics of the agenda;
 - c. to direct and promote the work of the Court;
 - d. to rule on points of order that may arise during the meetings of the Court. If any judge so requests, the point of order shall be decided by a majority vote;
 - e. to present, at the beginning of each regular or special session, a report to the Court on the activities he has carried out as President during the recess between sessions;

- v. la expresión "secretario adjunto" significa el secretario adjunto de la Corte;
- w. el término "secretaría" significa la secretaría de la Corte.

TITULO I. DE LA ORGANIZACION Y DEL FUNCIONAMIENTO DE LA CORTE

Capítulo I. De la Presidencia

Artículo 3. Elección del presidente y del vicepresidente

1. El presidente y el vicepresidente son elegidos por la Corte y duran dos años en el ejercicio de sus cargos. Su período comienza el primero de julio del año correspondiente. La elección tendrá lugar en el período ordinario de sesiones más próximo a esa fecha.
2. Las elecciones a que se refiere el presente artículo se efectuarán por votación secreta de los jueces titulares presentes y se proclamará electos a quienes obtengan cuatro o más votos. Si no se alcanzaren esos votos, se procederá a una nueva votación para decidir por mayoría de votos entre los dos jueces que hayan obtenido más. En caso de empate, éste se resolverá en favor del juez que tenga precedencia al tenor del artículo 13 del Estatuto.

Artículo 4. Atribuciones del presidente

1. Son atribuciones del presidente:
 - a. representar a la Corte;
 - b. presidir las sesiones de la Corte y someter a su consideración las materias que figuren en el orden del día;
 - c. dirigir y promover los trabajos de la Corte;
 - d. decidir las cuestiones de orden que se suscitien en las sesiones de la Corte. Si algún juez lo solicitare, la cuestión de orden se someterá a la decisión de la mayoría;
 - e. rendir un informe a la Corte, al iniciar ésta sus sesiones ordinarias o extraordinarias, sobre las actuaciones que haya cumplido, en ejercicio de la presidencia, durante los recesos de aquélla;

- f. to exercise such other functions as are conferred upon him by the Statute or these Rules, or entrusted to him by the Court.
2. In specific cases, the President may delegate the representation to which paragraph 1(a) of this Article refers to the Vice-President or any of the judges or, if necessary, to the Secretary or Deputy Secretary.
3. If the President is a national of one of the parties to a case before the Court or in special situations in which he considers it appropriate, he shall relinquish the Presidency for that particular case. The same rule shall apply to the Vice-President or to any judge called upon to exercise the Presidency.

Article 5. Functions of the Vice-President

1. The Vice-President shall replace the President in the latter's temporary absence and shall assume the Presidency when the absence is permanent. In the latter case, the Court shall elect a Vice-President to serve out that term. The same procedure shall be followed if the absence of the Vice-President is permanent.
2. In the absence of the President and the Vice-President, their functions shall be assumed by the other judges in the order of precedence established in Article 13 of the Statute.

Article 6. Commissions

1. The Permanent Commission is composed of the President, the Vice-President and a third judge appointed by the President. The President may appoint a fourth judge for specific cases or on a permanent basis. The Permanent Commission assists the President in the exercise of his functions.
2. The Court may appoint other commissions for specific matters. In urgent cases, they may be appointed by the President if the Court is not in session.
3. In performing their functions, the commissions shall be governed, wherever relevant, by the provisions of these Rules.

- f. las demás que le correspondan conforme al Estatuto o al presente Reglamento, así como las que le fueren encomendadas por la Corte.
2. El presidente puede delegar, para casos específicos, la representación a que se refiere el párrafo 1.a. de este artículo, en el vicepresidente o en cualquiera de los jueces o, si fuera necesario, en el secretario o en el secretario adjunto.
3. Si el presidente es nacional de una de las partes en un caso sometido a la Corte o cuando por circunstancias excepcionales así lo considere conveniente, cederá el ejercicio de la presidencia para ese caso. La misma regla se aplica al vicepresidente o a cualquier juez llamado a ejercer las funciones del presidente.

Artículo 5. Atribuciones del vicepresidente

1. El vicepresidente suple las faltas temporales del presidente y lo sustituye en caso de falta absoluta. En este último caso, la Corte elegirá un vicepresidente para el resto del período. El mismo procedimiento se aplicará en todo otro caso de falta absoluta del vicepresidente.
2. En caso de falta del presidente y del vicepresidente, sus funciones serán desempeñadas por los otros jueces en el orden de precedencia establecido en el artículo 13 del Estatuto.

Artículo 6. Comisiones

1. La comisión permanente está integrada por el presidente, el vicepresidente y un tercer juez, designado por el presidente. Este podrá designar para casos específicos o en forma permanente un cuarto juez. La comisión permanente asiste al presidente en el ejercicio de sus funciones.
2. La Corte podrá designar otras comisiones para asuntos específicos. En casos de urgencia, si la Corte no estuviere reunida, podrán ser designadas por el presidente.
3. Las comisiones se registrarán por las disposiciones del presente Reglamento, en cuanto fueren aplicables.

Chaple II. The Secretariat

Article 7. Election of the Secretary

1. The Court shall elect its Secretary. The Secretary must possess the legal qualifications required for the position, a good command of the working languages of the Court and the experience necessary to carry out his functions.
2. The Secretary shall be elected for a period of five years and may be reelected. He may be freely removed at any time if the Court so decides by the vote of no less than four judges. The vote shall be by secret ballot.
3. The Secretary shall be elected in the manner provided for in Article 3(2) of these Rules.

Article 8. Deputy Secretary

1. The Deputy Secretary shall be appointed on the proposal of the Secretary of the Court, in the manner provided for in the Statute. He shall assist the Secretary in the performance of his functions and substitute for him in his temporary absences.
2. If the Secretary and Deputy Secretary are both unable to perform their functions, the President may appoint an Acting Secretary.

Article 9. Oath

1. The Secretary and Deputy Secretary shall take an oath before the President.
2. The staff of the Secretariat, including any persons carrying out interim or temporary functions, shall, upon assuming their functions, take an oath before the President undertaking to respect the confidential nature of any facts that may come to their attention in performing such functions. If the President is not present at the seat of the Court, the Secretary shall administer the oath.
3. All oaths shall be recorded in a document that shall be signed by the person being sworn and the person administering the oath.

Article 10. Functions of the Secretary

The functions of the Secretary are:

Capítulo II. De la Secretaría

Artículo 7. Elección del secretario

1. La Corte elegirá su secretario. El secretario deberá poseer los conocimientos jurídicos requeridos para el cargo, conocer los idiomas de trabajo de la Corte y tener la experiencia necesaria para el desempeño de sus funciones.
2. El secretario será elegido por un período de cinco años y podrá ser reelecto. Podrá ser removido en cualquier momento si así lo decidiese la Corte por mayoría no menor de cuatro jueces en votación secreta.
3. Para la elección del secretario se aplicará lo dispuesto en el artículo 3.2 de este Reglamento.

Artículo 8. Secretario adjunto

1. El secretario adjunto será designado de conformidad con lo previsto por el Estatuto, a propuesta del secretario de la Corte. Asistirá al secretario en el ejercicio de sus funciones y suplirá sus faltas temporales.
2. En caso de que el secretario y el secretario adjunto se encuentren imposibilitados de ejercer sus funciones, el presidente podrá designar un secretario interino.

Artículo 9. Juramento

1. El secretario y el secretario adjunto prestarán juramento ante el presidente.
2. El personal de la secretaría, aun si está llamado a desempeñar funciones interinas o transitorias, deberá prestar juramento ante el presidente al tomar posesión del cargo sobre la reserva que está obligado a guardar a propósito de los hechos de los que tenga conocimiento en ejercicio de sus funciones. Si el presidente no estuviere presente en la sede de la Corte, el secretario tomará el juramento.
3. De toda juramentación se levantará acta que firmarán el juramentado y quien haya tomado el juramento.

Artículo 10. Atribuciones del secretario

Son atribuciones del secretario:

- a. to notify the judgments, advisory opinions, decisions and other rulings of the Court;
- b. to announce the hearings of the Court;
- c. to record the minutes of the meetings of the Court;
- d. to attend all meetings of the Court held at the seat or away from it;
- e. to deal with the correspondence of the Court;
- f. to direct the administration of the Court, pursuant to the instructions of the President;
- g. to prepare the draft programs, regulations and budgets of the Court;
- h. to plan, direct and coordinate the work of the staff of the Court;
- i. to carry out the tasks assigned to him by the Court or the President;
- j. to perform any other duties provided for by the Statute or these Rules.

Chapter III. Functioning of the Court

Article 11. Regular Sessions

The Court shall meet in two regular sessions each year, one in each semester, on the dates decided upon by the Court at the immediately preceding session. The President may change these dates in exceptional circumstances.

Article 12. Special Sessions

Special sessions may be convoked by the President on his own initiative or at the request of a majority of the judges.

Article 13. Quorum

The quorum for the deliberations of the Court is five judges.

Article 14. Hearings, Deliberations and Decisions

1. The hearings shall be public and shall be held at the seat of the Court. When exceptional circumstances warrant it, the Court may decide to hold a hearing in private or at some other location. The Court shall decide who is permitted to attend such hearings. Even in these exceptional

- a. notificar las sentencias, opiniones consultivas, resoluciones y demás decisiones de la Corte;
- b. anunciar las audiencias de la Corte;
- c. llevar las actas de las sesiones de la Corte;
- d. asistir a todas las reuniones que celebre la Corte dentro o fuera de su sede;
- e. tramitar la correspondencia de la Corte;
- f. dirigir la administración de la Corte, de acuerdo con las instrucciones del presidente;
- g. preparar los proyectos de programas de trabajo, reglamentos y puestos de la Corte;
- h. planificar, dirigir y coordinar el trabajo del personal de la Corte;
- i. ejecutar las tareas que le sean encomendadas por la Corte o por el presidente;
- j. las demás establecidas en el Estatuto o en este Reglamento.

Capítulo III. Del funcionamiento de la Corte

Artículo 11. Sesiones ordinarias

Se celebrarán dos períodos ordinarios de sesiones al año, uno en cada semestre, en las fechas que la Corte decida en su sesión ordinaria inmediatamente anterior. El presidente podrá modificar esas fechas cuando así lo impongan circunstancias excepcionales.

Artículo 12. Sesiones extraordinarias

Las sesiones extraordinarias serán convocadas por el presidente por propia iniciativa o a solicitud de la mayoría de los jueces.

Artículo 13. Quórum

El quórum para las deliberaciones de la Corte es de cinco jueces.

Artículo 14. Audiencias, deliberaciones y decisiones

1. Las audiencias serán públicas y tendrán lugar en la sede de la Corte. Cuando circunstancias excepcionales así lo justificaren, podrá cele-

cases, however, minutes shall be kept in the manner prescribed in Article 42 of these Rules.

2. The Court shall deliberate in private and its deliberations shall remain secret. Only the judges shall take part in the deliberations, although the Secretary and Deputy Secretary or their substitutes may be present, as well as such other Secretariat staff as may be required. No other persons may be admitted except by special decision of the Court and after having taken an oath.

3. Any question which is to be voted upon shall be formulated in precise terms in one of the working languages. At the request of any of the judges, the text thereof shall be translated by the Secretariat into the other working languages and distributed prior to the vote.

4. The minutes of the deliberations of the Court shall be limited to a statement of the subject of the discussion and the decisions that were taken. Dissenting votes and declarations made for the record shall also be noted.

Article 15. Decisions and Voting

1. The president shall present, point by point, the matters to be voted upon. Each judge shall vote either in the affirmative or the negative; abstentions shall not be permitted.

2. The votes shall be cast in inverse order to the order of precedence established in Article 13 of the Statute.

3. The decisions of the Court shall be made by a majority of the judges present.

4. In the event of a tie, the President shall have a second and casting vote.

Article 16. Continuation in Office by the Judges

Judges whose terms have expired shall continue to exercise their functions in cases that they have begun to hear and that are still pending. However, in the event of death, resignation, inability to sit, withdrawal, or exemption from sitting, the judge in question shall be substituted by the judge who was selected to replace him, if applicable, or by the judge who has precedence among the new judges elected upon expiration of the term of the judge to be replaced.

brar audiencias privadas o fuera de su sede. La Corte decidirá quiénes podrán asistir a ellas. Sin embargo, aún en estos casos, se levantarán actas en los términos previstos por el artículo 42 de este Reglamento.

2. La Corte deliberará en privado y sus deliberaciones permanecerán secretas. En ellas sólo participarán los jueces, aunque podrán estar también presentes el secretario y el secretario adjunto o quienes hagan sus veces, así como el personal de secretaría requerido. Nadie más podrá ser admitido a no ser por decisión especial de la Corte y previo juramento.

3. Toda cuestión que deba ser puesta a votación se formulará en términos precisos en uno de los idiomas de trabajo. El texto será traducido por la secretaría a los otros idiomas de trabajo y se distribuirá antes de la votación, a petición de cualquiera de los jueces.

4. Las actas referentes a las deliberaciones de la Corte se limitarán a mencionar el objeto del debate y las decisiones aprobadas, así como los votos salvados y las declaraciones hechas para constar en acta.

Artículo 15. Decisiones y votaciones

1. El presidente pondrá los asuntos a votación punto por punto, de modo que el voto de cada juez sea afirmativo o negativo, sin abstenciones.

2. Los votos se emitirán en el orden inverso al sistema de precedencia establecido en el artículo 13 del Estatuto.

3. Las decisiones de la Corte se tomarán por mayoría de los jueces presentes en el momento de la votación.

4. En caso de empate, el voto del presidente decidirá.

Artículo 16. Continuación de los jueces en sus funciones

Los jueces cuyo mandato se haya vencido continuarán conociendo de los casos de los que ya hubieren tomado conocimiento y se encuentren en estado de sentencia. Sin embargo, en caso de fallecimiento, renuncia, impedimento, excusa o inhabilitación, se proveerá a la sustitución del juez de que se trate por el juez que haya sido elegido en su lugar si fuere éste el caso, o por el juez que tenga precedencia entre los nuevos jueces elegidos en la oportunidad en que se venció el mandato del que debe ser sustituido.

Article 17. Interim Judges

Interim judges, appointed in pursuance of Articles 6(3) and 19(4) of the Statute, shall have the same rights and functions as titular judges, except for the limitations expressly established.

Article 18. Ad hoc Judges

1. In a case arising under Articles 55(2) or 55(3) of the Convention and 10(2) or 10(3) of the Statute, the President, acting through the Secretariat, shall invite the States referred to in those provisions to appoint an *ad hoc* judge within thirty days following the Agent's receipt of the written invitation. The invitation may also be delivered to the Embassy of the State in question in Costa Rica or, if the State is not represented there, to its Delegation to the OAS in Washington, D.C., United States of America. The President shall also bring the relevant provisions to the attention of the States concerned.

2. When it appears that two or more States have a common interest, the President shall invite them to appoint a single *ad hoc* judge in accordance with Article 10 of the Statute. If no agreement has been communicated to the Court within the thirty-day period following receipt of the written invitation by the last of these States to receive it at the location stipulated in the preceding paragraph, each State shall have fifteen days in which to submit a candidate. Thereafter, and if several candidates have been presented, the President shall choose by lot one *ad hoc* judge, and shall communicate the result to the interested parties.

3. If the interested States fail to exercise their rights within the periods provided for in the preceding paragraphs they shall be deemed to have waived such rights.

4. The Secretary shall communicate the appointment of the *ad hoc* judges to the parties to the case.

5. *Ad hoc* judges shall take an oath at the first meeting devoted to the consideration of the case for which they have been appointed.

6. *Ad hoc* judges shall receive honoraria for days worked, consistent with the budgetary policies of the Court.

Artículo 17. Jueces interinos

Los jueces interinos nombrados de conformidad con los artículos 6.3 y 19.4 del Estatuto tendrán los mismos derechos y atribuciones de los jueces titulares, salvo limitaciones expresamente establecidas.

Artículo 18. Jueces ad hoc

1. Cuando se presente un caso de los previstos en los artículos 55.2 y 55.3 de la Convención y 10.2 y 10.3 del Estatuto, el presidente, por medio de la secretaría, invitará a los Estados mencionados en dichos artículos a designar un juez *ad hoc* dentro de los treinta días siguientes a la recepción por el agente de la invitación escrita, la cual podrá ser entregada también en la Embajada de dicho Estado en Costa Rica o, de no existir ésta, en su delegación ante la OEA en Washington, D.C., Estados Unidos de América. El presidente les informará asimismo sobre las disposiciones pertinentes.

2. Cuando apareciere que dos o más Estados tienen un interés común, el presidente los invitará a designar en conjunto un juez *ad hoc* en la forma prevista en el artículo 10 del Estatuto. Si dentro de los treinta días siguientes a la recepción de la invitación escrita, por el último de dichos Estados en recibirla, en la sede prevista en el párrafo anterior, no hubieren comunicado su acuerdo a la Corte, cada Estado podrá someter dentro de los quince días siguientes su candidato. Pasado ese tiempo, y si se hubieren presentado varios, el presidente escogerá por sorteo un juez *ad hoc* y lo comunicará a los interesados.

3. Si los Estados interesados no hacen uso de sus derechos dentro de los plazos señalados en los párrafos precedentes, se considerará que han renunciado a su ejercicio.

4. El secretario comunicará a las demás partes en el caso la designación de jueces *ad hoc*.

5. El juez *ad hoc* prestará juramento en la primera sesión dedicada al examen del caso para el cual hubiese sido designado.

6. Los jueces *ad hoc* percibirán emolumentos por los días efectivamente trabajados, dentro de las disponibilidades presupuestarias de la Corte.

Article 19. Disqualification, Withdrawal or Exemption

1. Disqualifications, withdrawals or exemptions of the judges shall be governed by the provisions of Article 19 of the Statute.
2. Motions for disqualifications and withdrawal must be filed prior to the first hearing of the case. However, if the grounds therefor were not known at that time, such motions may be submitted to the Court at the first possible opportunity to enable it to rule on the matter immediately.
3. When, for whatever reason, a judge is not present at one of the hearings or at other stages of the proceedings, the Court may decide to exempt him from continuing to hear the case, taking into account all the circumstances it deems relevant.

TITLE II. PROCEDURE**Chapter I. General Rules***Article 20. Official Languages*

1. The official languages of the Court are those of the OAS.
2. The working languages shall be those agreed upon by the Court every three years, taking into account the languages spoken by the judges. In a specific case, however, the language of one of the parties may also be adopted as a working language, provided it is one of the official languages.
3. The working languages shall be determined at the beginning of the proceedings in each case, unless they are the same as those already being employed by the Court.
4. The Court may authorize any person appearing before it to use his own language if he does not have sufficient knowledge of the working languages. In these circumstances, however, the Court shall make the necessary arrangements to ensure that an interpreter is present to translate that testimony into the working languages.
5. The Court shall, in all cases, determine the authentic text.

Artículo 19. Impedimentos, excusas e inhabilitación

1. Los impedimentos, las excusas y la inhabilitación de los jueces se registrarán por lo dispuesto en el artículo 19 del Estatuto.
2. Los impedimentos y excusas deberán alegarse antes de la celebración de la primera audiencia del caso. Sin embargo, si la causal de impedimento o excusa sólo fuere conocida posteriormente, dicha causal podrá hacerse valer ante la Corte en la primera oportunidad, para que ésta decida de inmediato.
3. Cuando por cualquier causa un juez no esté presente en alguna de las audiencias o en otros actos del proceso, la Corte podrá decidir su inhabilitación para continuar conociendo del caso habida cuenta de todas las circunstancias que, a su juicio, sean relevantes.

TITULO II. DEL PROCESO**Capítulo I. Reglas generales***Artículo 20. Idiomas oficiales*

1. Los idiomas oficiales de la Corte son los de la OEA.
2. Los idiomas de trabajo serán los que acuerde la Corte cada tres años conforme a los idiomas hablados por los jueces. Sin embargo, para un caso determinado, podrá adoptarse también como idioma de trabajo el de una de las partes siempre que sea oficial.
3. Al iniciarse el examen de cada caso, se determinarán los idiomas de trabajo, salvo si han de continuarse empleando los mismos que la Corte utilizaba previamente.
4. La Corte podrá autorizar a cualquier persona que comparezca ante ella a expresarse en su propia lengua, si no conoce suficientemente los idiomas de trabajo, pero en tal supuesto adoptará las medidas necesarias para asegurar la presencia de un intérprete que traduzca esa declaración a los idiomas de trabajo.
5. En todos los casos se dará fe del texto auténtico.

Article 21. Representation of the States

1. The States parties to a case shall be represented by an Agent, who may be assisted by any person of his choice.
2. If a State replaces its Agent, it shall notify the Court of that fact. The substitution shall only take effect once the notification has been received at the seat of the Court.
3. A Deputy Agent may be designated. His actions shall have the same validity as those of the Agent.
4. When appointing its Agent, the State in question shall notify the address to which all relevant communications shall be deemed to have been officially transmitted.

Article 22. Representation of the Commission

1. The Commission shall be represented by the Delegates whom it shall have designated for that purpose. The Delegates may be assisted by any person of their choice.
2. If the attorneys retained by the original claimant, by the alleged victim or by the next of kin of the victim are among the persons selected by the Delegates to assist them pursuant to the preceding paragraph, this fact shall be brought to the attention of the Court.

Article 23. Cooperation by the States

1. The States parties to a case have the obligation to cooperate in order to ensure that all notices, communications or summonses addressed to persons subject to their jurisdiction are duly executed. They shall also expedite compliance with summonses by persons who either reside in or need to pass through their territory.
2. The same rule shall apply to any proceedings that the Court decides to carry out or order in the territory of a State party to the case.
3. When the performance of any of the measures referred to in the preceding paragraphs requires the cooperation of any other State, the President shall request the government in question to provide the requisite assistance.

Artículo 21. Representación de los Estados

1. Los Estados que sean partes en un caso serán representados por un agente, que podrá ser asistido por cualesquiera personas de su elección.
2. Cuando el Estado sustituya a su agente, tendrá que notificarlo a la Corte. La sustitución tendrá efecto desde que sea notificada a la Corte en su sede.
3. Podrá acreditarse un agente alterno, cuyas actuaciones tendrán igual valor que las del agente.
4. Al acreditar a su agente, el Estado interesado deberá informar la dirección a la cual se entenderán oficialmente remitidas las comunicaciones pertinentes.

Artículo 22. Representación de la Comisión

1. La Comisión será representada por los delegados que al efecto designe. Estos delegados podrán hacerse asistir por cualesquiera personas de su elección.
2. Si entre quienes asisten a los delegados conforme al párrafo precedente figuran abogados representantes designados por el denunciante original, por la presunta víctima o por los familiares de ésta, esta circunstancia deberá comunicarse a la Corte.

Artículo 23. Cooperación de los Estados

1. Los Estados partes en un caso tienen el deber de cooperar para que sean debidamente ejecutadas todas aquellas notificaciones, comunicaciones o citaciones dirigidas a personas que se encuentren bajo su jurisdicción, así como el de facilitar la ejecución de órdenes de comparecencia de personas residentes en su territorio o que deban atravesarlo.
2. La misma regla es aplicable respecto de toda diligencia que la Corte decida practicar u ordenar en el territorio del Estado parte en el caso.
3. Cuando la ejecución de cualquiera de las actuaciones a que se refieren los párrafos precedentes requiera de la cooperación de cualquier otro Estado, el presidente se dirigirá al gobierno respectivo para solicitar las facilidades necesarias.

Article 24. Interim Measures

1. At any stage of the proceedings involving cases of extreme gravity and urgency and when necessary to avoid irreparable damage to persons, the Court may, at the request of a party or on its own motion, order whatever provisional measures it deems appropriate, pursuant to Article 63(2) of the Convention.
2. With respect to matters not yet submitted to it, the Court may act at the request of the Commission.
3. Such request may be presented to the President, to any judge of the Court or to the Secretariat, by any means of communication. The recipient of the request shall immediately bring it to the attention of the President.
4. If the Court is not sitting, the President shall convene it immediately. Pending the meeting of the Court, the President, in consultation with the Permanent Commission and, if possible, with the other judges, shall call upon the government concerned to adopt the necessary urgent measures and to act so as to permit any provisional measures subsequently ordered by the Court to have the requisite effect.
5. In its Annual Report to the General Assembly the Court shall include a statement regarding the provisional measures ordered during the period covered by the report. If such measures have not been duly executed, the Court shall make whatever recommendations it deems appropriate.

Article 25. Procedure by Default

1. When a party fails to appear in or to continue with a case, the Court shall, on its own motion, take whatever measures are necessary to complete consideration of the case.
2. When a party enters a case at a later stage of the proceedings, it shall take the proceedings at that stage.

Artículo 24. Medidas provisionales

1. En cualquier estado del procedimiento, siempre que se trate de casos de extrema gravedad y urgencia y cuando se haga necesario para evitar daños irreparables a las personas, la Corte, de oficio o a instancia de parte, podrá ordenar las medidas provisionales que considere pertinentes, en los términos del artículo 63.2 de la Convención.
2. Si se tratare de asuntos aún no sometidos a su conocimiento, podrá actuar a solicitud de la Comisión.
3. La solicitud puede ser presentada al presidente, a cualquiera de los jueces o a la secretaría, por cualquier medio de comunicación. En todo caso, quien reciba la solicitud la pondrá de inmediato en conocimiento del presidente.
4. Si la Corte no estuviere reunida, el presidente la convocará sin demora. Pendiente la reunión, el presidente, en consulta con la comisión permanente y, de ser posible, con los demás jueces, requerirá del gobierno interesado que tome las medidas urgentes necesarias y que actúe de manera tal que las medidas provisionales que después pueda tomar la Corte, tengan los efectos pertinentes.
5. La Corte incluirá en su informe anual a la Asamblea General una relación de las medidas provisionales que haya ordenado en el período del informe y, cuando dichas medidas no hayan sido debidamente ejecutadas, formulará las recomendaciones que estime pertinentes.

Artículo 25. Procedimiento por incomparecencia o falta de actuación

1. Cuando una parte no compareciere o se abstuviere de actuar, la Corte, de oficio, impulsará el proceso hasta su finalización.
2. Cuando una parte se apersonare tardíamente tomará el procedimiento en el estado en que se encuentre.

Chapter II. Institution of the Proceeding

Article 26. Filing of the Application

For a case to be referred to the Court under Article 61(1) of the Convention, an application shall be filed with the Secretariat, in ten copies, indicating:

1. the appointment of the Agent or Delegates, pursuant to Articles 21 and 22 of these Rules;
2. when the case is referred by a State, it shall, if pertinent, present its objections to the opinion of the Commission;
3. when the case is referred by the Commission, it shall include, in addition, the report referred to in Article 50 of the Convention;
4. when the case is before the Commission, the following information shall also be provided:
 - a. the parties to the case;
 - b. the date of the report of the Commission to which Article 50 of the Convention refers.
5. the purpose of the application, a statement of the facts, the supporting evidence, the legal arguments and relevant conclusions.

Article 27. Preliminary Review of the Application

When during a preliminary review of the application the President finds that the basic requirements have not been met, he shall request the Applicant to correct any deficiencies within twenty days.

Article 28. Communication of the Application

1. On receipt of the application, the Secretary shall give notice thereof and transmit copies to the following:

- a. the President and the judges of the Court;
- b. the respondent State;
- c. The Commission, when it is not also the Applicant;
- d. the original claimant, if known;
- e. the victim or his next of kin, if applicable.

Capítulo II. Inicio del proceso

Artículo 26. Presentación de la demanda

La introducción de una causa ante la Corte de conformidad con el artículo 61.1 de la Convención, se hará mediante la presentación en diez ejemplares de la demanda ante la secretaría, en la cual se expresará:

1. la designación del agente o de los delegados, en los términos de los artículos 21 y 22 de este Reglamento;
2. cuando el que introduce la demanda es un Estado, presentará si fuere menester, las objeciones elevadas contra la opinión de la Comisión;
3. cuando es la Comisión la que introduce la demanda deberá acompañar, además, el informe a que se refiere el artículo 50 de la Convención;
4. cuando el caso se encuentre ante la Comisión, se indicará además:
 - a. las partes del caso;
 - b. la fecha del informe de la Comisión a que se refiere el artículo 50 de la Convención;
5. el objeto de la demanda, una exposición de los hechos, las pruebas aducidas, los fundamentos de derecho y las conclusiones pertinentes.

Artículo 27. Examen preliminar de la demanda

Si en un examen preliminar de la demanda el presidente advierte que los requisitos fundamentales no han sido cumplidos solicitará al demandante que subsane los defectos dentro de un plazo de veinte días.

Artículo 28. Notificación de la demanda

1. Tan pronto se haya recibido la demanda, el secretario de la Corte la comunicará, junto con una copia de la misma, a:

- a. el presidente y los jueces de la Corte;
- b. el Estado demandado;
- c. la Comisión, si no es ella la demandante;
- d. el denunciante original si se conoce;
- e. la víctima o sus familiares, si fuere el caso.

2. The Secretary shall inform the other Contracting States and the Secretary General of the filing of the application.
3. When giving the notice, the Secretary shall request that, within a period of two weeks, the respondent States designate their Agent and, if appropriate, the Commission appoint its Delegates, in accordance with Articles 21 and 22 of these Rules. Until the Delegates are duly appointed, the Commission shall be deemed to be properly represented by its President for all purposes in the case.

Chapter III. Examination of Cases

Article 29. Written Proceedings

1. The respondent State shall always have the right to file a written answer to the application within three months following notification thereof.
2. The President shall consult the Agents and the Delegates on whether they consider other steps in the written proceedings to be necessary. If the response is in the affirmative, he shall fix the deadlines for the filing of the documents.
3. The documents to which this article refers shall be filed with the Secretariat in ten copies. The Secretary shall transmit them to the persons indicated in Article 28(1) of these Rules.

Article 30. Joinder of Cases

1. The Court may, at any stage of the proceedings, direct the joinder of cases that are interrelated.
2. It may also order the joinder of the written or oral proceedings of several cases, including the examination of witnesses.
3. After consulting the Agents and the Delegates, the President may direct that the proceedings in two or more cases be conducted simultaneously, without prejudice to the decision of the Court regarding the joinder of the cases.

2. El secretario de la Corte informará sobre la presentación de la demanda a los otros Estados Contratantes y el Secretario General de la OEA.
3. Junto con la notificación, el secretario solicitará a los estados demandados que designen el agente respectivo y a la Comisión, en su caso, el nombramiento de sus delegados de conformidad con los artículos 21 y 22 de este Reglamento para lo cual concederá un plazo de dos semanas. Mientras los delegados no hayan sido nombrados, la Comisión se tendrá por suficientemente representada por su presidente para todos los efectos del caso.

Capítulo III. Del examen de los casos

Artículo 29. Procedimiento escrito

1. El Estado demandado tendrá siempre el derecho de responder por escrito la demanda dentro de los tres meses siguientes a la notificación de la misma.
2. El presidente consultará a los agentes y a los delegados de la Comisión si estiman necesario otros actos del procedimiento escrito. En caso afirmativo, fijará los plazos para el depósito de los documentos.
3. Los documentos mencionados en este artículo se depositarán en la secretaría en diez ejemplares. El secretario los comunicará a las personas mencionadas en el artículo 28.1 de este Reglamento.

Artículo 30. Acumulación de casos

1. La Corte puede, en cualquier estado de la causa, ordenar la acumulación de casos conectados entre sí.
2. También puede ordenar que las diligencias escritas u orales de varios casos, comprendida la presentación de testigos, se cumplan conjuntamente.
3. Previa consulta con los agentes y los delegados, el presidente podrá ordenar que dos o más casos sean instruidos conjuntamente sin prejuzgar sobre la decisión de la Corte sobre su acumulación.

Article 31. Preliminary Objections

1. Preliminary objections may be filed only within thirty days following notification of the application.
2. The document setting out the preliminary objections shall be filed with the Secretariat in ten copies and shall set out the facts on which the objection is based, the legal arguments, and the conclusions and supporting documents, as well as any evidence which the party filing the objection may wish to produce.
3. The Secretary shall immediately transmit the preliminary objections to the persons indicated in Article 28(1) of these Rules.
4. The presentation of preliminary objections shall not cause the suspension of the proceedings on the merits, unless the Court expressly decides otherwise.
5. Any parties to the case wishing to submit briefs regarding the preliminary objections may do so within thirty days after receipt of the communication.
6. The Court may, if it deems it appropriate, convene a special hearing relating to the preliminary objections, after which it shall rule on the objections or order that they be joined to the merits.

Article 32. Oral Proceedings

The President shall, after consulting the Agents and the Delegates, fix the date for the opening of the oral proceedings.

Article 33. Conduct of the Hearings

The President shall direct the hearings. He shall prescribe the order in which the persons listed in Articles 21 and 22 of these Rules shall be heard.

Article 34. Measures for Taking Evidence

1. The Court may, at the request of a party or on its own motion, obtain any evidence which it considers likely to clarify the facts of the case. In particular, it may decide to hear as a witness or expert witness, or in any other capacity, any person whose evidence, statements or opinion it deems useful.

Artículo 31. Excepciones preliminares

1. Las excepciones preliminares sólo podrán ser opuestas dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la demanda.
2. El escrito mediante el cual se opongan excepciones preliminares, se presentará ante la secretaría en diez ejemplares y contendrá la exposición de los hechos referentes a las mismas, los fundamentos de derecho, las conclusiones y los documentos que las apoyen, así como la mención de los medios de prueba que el excepcionante contempla eventualmente hacer valer.
3. El secretario notificará de inmediato el escrito de las excepciones preliminares a las personas a las que se refiere el artículo 28.1 de este Reglamento.
4. La presentación de excepciones preliminares no suspenderá el procedimiento sobre el fondo, a menos que la Corte así lo decida expresamente.
5. Las partes en el caso que deseen presentar alegatos escritos sobre las excepciones preliminares, podrán presentarlos dentro de un plazo de treinta días contado a partir de la recepción de la comunicación.
6. La Corte podrá, si lo considera pertinente, convocar una audiencia especial para las excepciones preliminares, después de la cual decidirá sobre las excepciones u ordenará que sean resueltas junto con la cuestión de fondo.

Artículo 32. Procedimiento oral

El presidente fijará la fecha de apertura del procedimiento oral, previa consulta con los agentes y los delegados.

Artículo 33. Dirección de los debates

El presidente dirigirá los debates. A él corresponde determinar el orden en que tomarán la palabra las personas mencionadas en los artículos 21 y 22 de este Reglamento.

Artículo 34. Medidas de instrucción

1. La Corte podrá procurarse, sea de oficio o a instancia de parte, todo medio de prueba que juzgue útil para esclarecer los hechos en causa.

2. The Court may, at any time during the proceedings, request the parties to provide any type of evidence available to them or any explanation or statement that, in its judgment, would be likely to clarify the facts of the case.
3. The Court may, at any time during the proceedings, designate any person, office, commission or authority of its choice to obtain information, express an opinion or make a report on any given point. These reports may not be published without the authorization of the Court.
4. The Court may, at any time during the proceedings, designate one or more of its members to conduct an inquiry, carry out an investigation on the spot or take evidence in some other manner.

Article 35. Cost of Requested Evidence

The party requesting the production of evidence shall defray the cost thereof.

Article 36. Convocation of Witnesses, Expert Witnesses and Other Persons

1. Witnesses, expert witnesses, or other persons whom the Court decides to hear, shall be summoned by the Secretary.
2. The summons shall indicate:
 - a. the name, status and other particulars of the person summoned;
 - b. the name of the parties;
 - c. the object of the inquiry, expert opinion, or any other measure ordered by the Court or by the President;
 - d. the provisions made for the reimbursement of the expenses incurred by the person summoned.

Article 37. Oath or Solemn Declaration by Witnesses and Expert Witnesses

1. After his identity has been established and before giving evidence, every witness shall take an oath or make a solemn declaration as follows:

En particular podrá oír en calidad de testigo, de perito o por otro título, a cualquier persona cuyo testimonio, declaraciones u opinión estime útiles.

2. La Corte podrá, en cualquier estado de la causa, requerir de las partes el suministro de cualquier medio de prueba que esté a su alcance o de cualquier explicación o declaración que, a su juicio, pueda ser útil para esclarecer los hechos en causa.
3. La Corte podrá, en cualquier estado de la causa, confiar a cualquier cuerpo, oficina, comisión o autoridad de su elección, el encargo de recoger informaciones, expresar una opinión o hacer un informe sobre un punto determinado. Los informes así preparados no serán publicados mientras la Corte no lo autorice.
4. La Corte podrá, en cualquier estado de la causa, encargar a uno o varios de sus miembros que procedan a una averiguación, una inspección judicial o a cualquier otra medida de instrucción.

Artículo 35. Gastos de la prueba

La parte que proponga una prueba correrá con los gastos que ella ocasiona.

Artículo 36. Citación de testigos, peritos u otras personas

1. Los testigos, peritos u otras personas que la Corte decida oír, serán citados por el secretario.
2. La citación indicará:
 - a. el nombre y calidades del citado;
 - b. el nombre de las partes;
 - c. el objeto del interrogatorio del peritaje o de cualquier otra medida ordenada por la Corte o por el presidente;
 - d. las disposiciones tomadas con referencia al pago de los gastos a la persona citada.

Artículo 37. Juramento o declaración solemne de los testigos y peritos

1. Después de verificada su identidad y antes de testificar, todo testigo prestará juramento o hará una declaración solemne en los términos siguientes:

"I swear"—or "I solemnly declare"—"upon my honor and conscience that I will speak the truth, the whole truth and nothing but the truth".

2. After his identity has been established and before carrying out his task, every expert witness shall take an oath or make a solemn declaration along the following lines:

"I swear"—or "I solemnly declare"—"that I will discharge my duty as an expert witness honorably and conscientiously".

3. This oath shall be taken or this declaration made before the Court or before the President or any of the judges who have been so delegated by the Court.

Article 38. Disqualification of a Witness

1. The disqualification of a witness shall take place before he testifies, unless the grounds for the disqualification become known only thereafter.

2. If the Court considers it necessary, it may nevertheless hear, for purposes of information, a person who is not qualified to be heard as a witness.

3. The Court shall assess the value of the testimony and of the disqualification.

Article 39. Objection to an Expert Witness

1. The grounds for disqualification applicable to judges under Article 19(1) of the Statute shall also apply to expert witnesses.

2. Objections shall be presented within fifteen days following notification of the appointment of the expert witness in question.

3. If the expert witness who has been challenged contests the grounds invoked against him, the Court shall decide, except that when the Court is not in session the President, in consultation with the Permanent Commission, may order the evidence to be presented. The Court shall be informed thereof and shall have the final decision on the value of the evidence.

4. When it becomes necessary to appoint a new expert witness, the Court shall decide. Nevertheless, if there is urgency in obtaining the evidence, the President, in consultation with the Permanent Commission, shall make the appointment and inform the Court accordingly. The Court shall have the final decision in assessing the value of the evidence.

"Juro"—o "declaro solemnemente"—"por mi honor y en conciencia, que diré la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad".

2. Después de verificada su identidad y antes de desempeñar su oficio, todo perito prestará juramento o hará una declaración solemne en los términos siguientes:

"Juro"—o "declaro solemnemente"—"que ejerceré mis funciones de perito con todo honor y con toda conciencia".

3. El juramento o declaración a que se refiere este artículo se cumplirán ante la Corte o ante el presidente u otro de los jueces que actúe por delegación de ella.

Artículo 38. Tachas de un testigo

1. El testigo deberá ser tachado antes de prestar declaración, salvo conocimiento sobreviniente de la causal.

2. En todo caso, la Corte siempre podrá, si lo estimare útil, oír a título informativo a una persona que no esté calificada para declarar como testigo.

3. El valor de las declaraciones y el de las tachas será apreciado por la Corte.

Artículo 39. Recusación de un perito

1. Las causales de impedimento para los jueces previstas en el artículo 19.1 del Estatuto serán aplicables a los peritos.

2. La recusación deberá proponerse dentro de los quince días siguientes a la notificación de la designación del perito.

3. Si el perito recusado estuviere en desacuerdo con la causal invocada, la Corte decidirá. Sin embargo, no estando reunida la Corte, el presidente, en consulta con la comisión permanente, podrá ordenar que se evacúe la prueba, dando de ello cuenta a la Corte, la cual resolverá en definitiva sobre el valor de la prueba.

4. Cuando fuere necesario designar un nuevo perito, la Corte decidirá. Sin embargo, si existiere urgencia en evacuar la prueba, el presidente, en consulta con la comisión permanente, hará la designación dando de ello cuenta a la Corte, la cual resolverá en definitiva sobre el valor de la prueba.

Article 40. Failure to Appear or False Evidence

1. When, without good reason, a witness or any other person who has been duly summoned fails to appear or refuses to give evidence, the State having jurisdiction over such witness or other person shall be informed accordingly. The same provision shall apply when a witness or expert witness has, in the opinion of the Court, violated the oath or solemn declaration mentioned in Article 37 of these Rules.

2. States shall not institute proceedings nor take reprisals against any persons on account of their testimony before the Court. However, the Court may request the States to take the measures provided for in their domestic legislation against those who, in the opinion of the Court, have violated their oath.

Article 41. Questions Put During the Hearings

1. The judges may ask any person appearing before the Court whatever questions they deem appropriate.

2. The witnesses, expert witnesses and any other persons referred to in Article 36 of these Rules may, subject to the control of the President, be examined by the Agents and the Delegates or, at their request, by the persons referred to in Articles 21 and 22 of these Rules.

3. The President is empowered to rule on the relevance of the questions posed and to excuse the person to whom the questions are addressed from replying, unless the Court shall decide otherwise.

Article 42. Minutes of the Hearings

1. Minutes shall be made of each hearing and shall contain the following:
 - a. the names of the judges present;
 - b. the names of those persons referred to in Articles 21 and 22 of these Rules who are present at the hearing;
 - c. the names and other relevant information concerning the witnesses, expert witnesses and other persons appearing at the hearing;
 - d. the declarations expressly made for insertion in the minutes by the States parties or the Commission;
 - e. the declarations of the witnesses, expert witnesses and other persons appearing at the hearing, as well as the question put to them and their replies;

Artículo 40. Incomparecencia o falsa deposición

1. Cuando, sin motivo legítimo, un testigo o cualquier otra persona debidamente citada no compareciere o rehusare deponer, se dará cuenta al Estado a cuya jurisdicción esté sometida la persona. Se procederá de igual manera cuando un testigo o un perito, según el parecer de la Corte, hubieren violado el juramento o la declaración solemne previstos en el artículo 37 de este Reglamento.

2. Los Estados no podrán enjuiciar ni ejercer represalias a causa de sus declaraciones en estrados, contra las personas que comparezcan ante la Corte. Sin embargo, la Corte puede solicitar a los Estados que tomen las medidas que su legislación disponga contra quienes, en el parecer de la misma Corte, hayan violado el juramento.

Artículo 41. Preguntas durante los debates

1. Los jueces podrán formular las preguntas que estimen pertinentes a toda persona que comparezca ante la Corte.

2. Los testigos, los peritos y toda persona mencionada en el artículo 36 de este Reglamento pueden ser interrogados por los agentes y los delegados o, si éstos lo solicitan así, por las personas a quienes se refieren los artículos 21 y 22 de este Reglamento, bajo la moderación del presidente.

3. El presidente está facultado para resolver sobre la pertinencia de las preguntas formuladas y para dispensar de responderlas a la persona a quien vayan dirigidas, a menos que la Corte resuelva otra cosa.

Artículo 42. Acta de las audiencias

1. De cada audiencia se levantará un acta que expresará:
 - a. el nombre de los jueces presentes;
 - b. el nombre de las personas mencionadas en los artículos 21 y 22 de este Reglamento que hubieren estado presentes;
 - c. los nombres y datos personales de los testigos, peritos y demás personas que hayan comparecido;
 - d. las declaraciones hechas expresamente para constar en acta por los Estados partes o por la Comisión;
 - e. las declaraciones hechas por los testigos, peritos y demás personas que hayan comparecido, así como las preguntas que se les formularon y las respuestas que a ellas dieran;

- f. the text of the questions put by the judges and the responses thereto;
- g. the text of any decisions rendered by the Court during the hearing.
2. The Agents and Delegates, as well as the witnesses, expert witnesses and other persons appearing at the hearing, shall receive a copy of their arguments, statements or testimony, to enable them, subject to the control of the Secretary, to correct any material errors appearing in the transcript of the hearing. The Secretary, in accordance with the instructions of the President, shall fix the time limits granted for this purpose.
3. The minutes shall be signed by the President and the Secretary, who shall attest to their accuracy.
4. Copies of the minutes shall be transmitted to the Agents and to the Delegates.

Article 43. Discontinuance

1. When the party which has filed the case notifies the Court of its intention not to proceed with it, the Court, after having obtained the opinions of the other parties thereto and the persons referred to in Article 22(2) of these Rules, shall decide whether it is appropriate to approve the discontinuance and, accordingly, to strike the case off its list.
2. When the parties to a case inform the Court that there exists a friendly settlement, arrangement or other fact capable of providing a solution of the matter, the Court may strike the case off its list after having obtained the opinion of the persons referred to in article 22(2) of these Rules.
3. Notwithstanding the existence of the conditions indicated in the two preceding paragraphs, the Court, mindful of its responsibility to protect human rights, may decide that it should proceed with the consideration of the case.

Article 44. Application of Article 63(1) of the Convention

1. Article 63(1) of the Convention may be invoked at any stage of the proceedings, even when reference thereto was not made in the application.
2. The Court may invite the persons referred to in Article 22(2) of the Rules to submit briefs regarding the application of Article 63(1) of the Convention.

- f. el texto de las preguntas hechas por los jueces y las respuestas que a ellas se dieron;
- g. el texto de toda decisión de la Corte tomada durante la audiencia.
2. Los agentes y delegados así como los testigos, peritos y demás personas que hayan comparecido, recibirán copia de sus argumentos, declaraciones o testimonios a fin de que, bajo el control del secretario, puedan corregir los errores materiales en la transcripción de la audiencia. El secretario fijará, según las instrucciones que reciba del presidente, los plazos de que dispondrán para ese fin.
3. El acta será firmada por el presidente y el secretario, quien dará fe de su contenido.
4. Se enviará copia del acta a los agentes y a los delegados.

Artículo 43. Sobreseimiento del caso

1. Cuando la parte demandante notificare a la Corte su intención de desistir, ésta resolverá, oída la opinión de las otras partes en el caso, así como la de las personas mencionadas en el artículo 22.2 de este Reglamento, si hay lugar al desistimiento y, en consecuencia, si procede sobreseer el caso y archivar el expediente.
2. Cuando las partes en un caso ante la Corte comunicaren a ésta la existencia de una solución amistosa, de una avenencia o de otro hecho apto para proporcionar una solución al litigio, la Corte podrá, llegado el caso y después de haber oído a las personas mencionadas en el artículo 22.2 de este Reglamento, sobreseer el caso y archivar el expediente.
3. La Corte, teniendo en cuenta las responsabilidades que le incumben de proteger los derechos humanos, podrá decidir que prosiga el examen del caso, aún en presencia de los supuestos señalados en los dos párrafos precedentes.

Artículo 44. Aplicación del artículo 63.1 de la Convención

1. La aplicación del artículo 63.1 de la Convención podrá ser invocada en cualquier estado de la causa, aún si dicha invocación hubiere sido omitida en la demanda.
2. La Corte podrá invitar a las personas mencionadas en el artículo 22.2 de este Reglamento a que presenten alegatos en relación con la aplicación del artículo 63.1 de la Convención.

Article 45. Decisions

1. The judgments and interlocutory decisions for discontinuance of a case shall be rendered by the Court.
2. All other decisions shall be rendered by the Court, if it is sitting, or by the President, if it is not, unless otherwise provided. The decisions of the President may be appealed to the Court.

Chapter IV. Judgments*Article 46. Contents of the Judgment*

1. A judgment shall contain:
 - a. the names of the President, the judges who rendered it, and the Secretary and Deputy Secretary;
 - b. the date on which it was delivered at a hearing;
 - c. the identification of the parties;
 - d. the names of the persons referred to in Articles 21 and 22 of these Rules;
 - e. a description of the proceedings;
 - f. the submissions of the States parties to the case and of the Commission;
 - g. the facts of the case;
 - h. the legal arguments;
 - i. the operative provisions of the judgment;
 - j. the allocation of compensation, if any, without prejudice to what is provided for in the Article that follows;
 - k. the decision, if any, in regard to costs;
 - l. the names of the judges constituting the majority;
 - m. a statement indicating which text is authentic.
2. Any judge who has taken part in the consideration of the case is entitled to append to the judgment a dissenting or concurring opinion. These opinions shall be submitted within a time-limit to be fixed by the President, to enable the other judges to take cognizance thereof before the judgment is handed down.

Artículo 45. Resoluciones

1. Las sentencias y las resoluciones interlocutorias que pongan término al proceso, quedan reservadas a la decisión de la Corte.
2. Las demás resoluciones serán dictadas por la Corte, si estuviere reunida, o, si no lo estuviere, por el presidente, salvo disposición en contrario. Toda decisión del presidente es recurrible ante la Corte.

Capítulo IV. De las sentencias*Artículo 46. Contenido de las sentencias*

1. La sentencia contendrá:
 - a. El nombre del presidente, de los jueces que la hubieren adoptado, del secretario y del secretario adjunto;
 - b. la fecha de su lectura en audiencia;
 - c. la indicación de las partes;
 - d. los nombres de las personas mencionadas en los artículos 21 y 22 de este Reglamento;
 - e. una relación del procedimiento;
 - f. las conclusiones de los Estados partes en el caso y de la Comisión;
 - g. la descripción de los hechos;
 - h. los fundamentos de derecho;
 - i. la parte dispositiva;
 - j. la condenatoria por daños y perjuicios, si procede, sin perjuicio de lo previsto en el artículo siguiente;
 - k. el pronunciamiento sobre las costas, si procede;
 - l. la indicación de los jueces que haya constituido la mayoría;
 - m. la indicación sobre cuál de los textos hace fe.
2. Todo juez que haya participado en el examen de un caso tiene derecho a unir a la sentencia su opinión disidente o individual. Estas opiniones deberán ser consignadas dentro del plazo fijado por el presidente, de modo que puedan ser conocidas por los jueces antes de la comunicación de la sentencia.

Article 47. Judgment Relating to Article 63(1) of the Convention

1. When the Court finds that there is a breach of the Convention, it shall in the same judgment decide on the application of Article 63(1) of the Convention if that question is ready for decision. If the question is not ready for decision, the Court shall reserve its decision thereon in whole or in part and shall determine the further proceedings.
2. For the purposes of ruling on the application of Article 63(1) of the Convention, the Court shall, as far as possible, be composed of the same judges who rendered the judgment on the merits of the case. However, in the event of death, resignation, disability, withdrawal or exemption, the judge concerned shall be replaced in the manner provided for in Article 16 of these Rules.
3. If the Court is informed that the injured party and the party adjudged to be responsible have reached an agreement that conforms to its judgment on the merits, it shall verify the fairness of the agreement and, pursuant to Article 43 of these Rules, decide accordingly.

Article 48. Deliberation and Communication of the Judgment

1. When the case is ready for a decision, the Court shall meet in private. A preliminary vote shall be taken and a date fixed for the deliberation and final vote.
2. After the final deliberation, the Court shall take a final vote, approve the wording of the judgment, and fix the date of the public hearing at which it shall be communicated to the parties.
3. Until the aforementioned communication, the texts, the legal arguments and the votes shall all remain secret.
4. The judgments shall be signed by all of the judges who participated in the voting and by the Secretary. A judgment signed by only a majority of the judges shall, however, be valid.
5. The dissenting or concurring opinions referred to in Article 44(2) of these Rules shall be signed by the judges who support them and by the Secretary.
6. The judgment shall conclude with an order, signed by the President and the Secretary and sealed by the latter, providing for the communication and execution of the judgment.
7. The originals of the judgments shall be deposited in the archives of the Court. The Secretary shall send certified copies to the States parties

Artículo 47. Sentencia relativa al artículo 63.1 de la Convención

1. Cuando la Corte determine que ha habido una violación de la Convención decidirá en la misma sentencia sobre la aplicación del artículo 63.1 de la Convención si el asunto estuviere en estado de ser resuelto. Si no lo estuviere, la Corte reservará su decisión al respecto, en todo o en parte, y determinará el procedimiento posterior.
2. Para decidir sobre la aplicación del artículo 63.1 de la Convención, la Corte se reunirá, si es posible, con la misma composición con que sentenció el fondo del caso. Sin embargo, en caso de fallecimiento, renuncia, impedimento, excusa o inhabilitación, se proveerá a la sustitución del juez de que se trate según el artículo 16 de este Reglamento.
3. Si la Corte fuere informada de que el lesionado y la parte responsable han llegado a un acuerdo conforme a su sentencia sobre el fondo, verificará que el acuerdo sea justo y dispondrá lo conducente, con arreglo al artículo 43 de este Reglamento.

Artículo 48. Pronunciamiento y comunicación de la sentencia

1. Listos los autos para el fallo, la Corte deliberará en privado. Se tomará una votación preliminar y se fijará la fecha para la deliberación y votación finales.
2. Tras la deliberación final, se tomará la votación definitiva, se aprobará la redacción de la sentencia y se fijará la fecha de la audiencia pública en que se comunicará a las partes.
3. Mientras no se haya hecho esa comunicación los textos, los razonamientos y las votaciones permanecerán secretos.
4. Las sentencias serán firmadas por todos los jueces que participaron en la votación y por el secretario. Sin embargo, será válida la sentencia firmada sólo por mayoría de los jueces.
5. Las opiniones disidentes o individuales a que se refiere el artículo 46.2 de este Reglamento, serán firmadas por los jueces que las sustenten y por el secretario.
6. Las sentencias concluirán con una orden de comunicación y ejecución firmada por el presidente y por el secretario y sellada por éste.
7. Los originales de las sentencias quedarán depositados en los archivos de la Corte. El secretario expedirá copias certificadas a los Estados partes en el caso, a la Comisión, al presidente del Consejo Permanente, al

to the case, to the Commission, to the President of the Permanent Council, to the Secretary General, to the persons referred to in Article 22(2) of these Rules, and to any interested persons who request them.

8. The Secretary shall transmit the judgment to all the Contracting States.

Article 49. Publication of Judgments and Other Decisions

1. The Secretary shall be responsible for the publication of:
 - a. the judgments and other decisions of the Court;
 - b. documents relating to the proceedings, including the report of the Commission, but excluding any particulars bearing on attempts to reach a friendly settlement and any documents which the President considers irrelevant or inappropriate to publish;
 - c. the record of the hearings;
 - d. any other document whose publication the President considers useful.
2. The judgments shall be published in the working languages used in each case; all other documents shall be published in their original language.
3. Documents deposited with the Secretariat regarding cases already adjudicated shall be accessible to the public, unless otherwise decided by the Court.

Article 50. Application for an Interpretation of a Judgment

1. Applications for an interpretation pursuant to Article 67 of the Convention shall be filed with the Secretariat in ten copies and shall state with precision the issues relating to the meaning or scope of the judgment on which the interpretation is requested.

2. The Secretary shall transmit the application for interpretation to the States parties to the case and to the Commission, as appropriate, and shall invite them to submit, in ten copies, any written comments they deem relevant within a time-limit laid down by the President.

3. When considering an application for interpretation, the Court shall be composed whenever possible, of the same judges who adjudicated the case whose interpretation is being sought. However, in the event of death, resignation, disability, withdrawal or exemption, the judge affected shall be replaced in accordance with Article 16 of these Rules.

Secretario General, a las personas mencionadas en el artículo 22.2 de este Reglamento y a toda otra persona interesada que lo solicite.

8. El secretario comunicará la sentencia a todos los Estados Contratantes.

Artículo 49. Publicación de las sentencias y de otras decisiones

1. Corresponde al secretario la publicación de:
 - a. las sentencias y otras decisiones de la Corte;
 - b. las piezas del proceso, comprendido el informe de la Comisión, con exclusión de las indicaciones concernientes a la tentativa de solución amistosa y de los documentos cuya publicación sea considerada irrelevante o inconveniente por el presidente;
 - c. las actas de las audiencias;
 - d. todo documento cuya publicación considere conveniente el presidente.
2. Las sentencias se publicarán en los idiomas de trabajo del caso; los demás documentos se publicarán en su lengua original.
3. Los documentos depositados en la secretaría de la Corte, concernientes a casos ya sentenciados, serán accesibles al público, salvo que la Corte haya resuelto otra cosa.

Artículo 50. Demanda de interpretación de una sentencia

1. Las demandas de interpretación que se presenten en los términos del artículo 67 de la Convención, se depositarán en la secretaría en diez ejemplares e indicarán con precisión las cuestiones relativas al sentido o alcance de la sentencia cuya interpretación se pida.

2. El secretario comunicará la demanda de interpretación a los Estados partes en el caso y a la Comisión, según corresponda, y les invitará a presentar las alegaciones escritas que estimen pertinentes, con diez ejemplares, dentro del plazo fijado por el presidente.

3. Para el examen de la demanda de interpretación, la Corte se reunirá si es posible, con la misma composición con que sentenció el fondo del caso. Sin embargo, en caso de fallecimiento, renuncia, impedimento, excusa o inhabilitación, se proveerá a la sustitución del juez de que se trate según el artículo 16 de este Reglamento.

4. An application for interpretation shall not suspend the effect of the judgment.
5. The Court shall determine the procedure to be followed and shall render its decision by means of a judgment.

TITLE III. ADVISORY OPINIONS

Article 51. Interpretation of the Convention

1. Requests for an advisory opinion under Article 64(1) of the Convention shall state with precision the specific questions on which the opinion of the Court is sought.
2. Requests for an advisory opinion submitted by a Member State or by the Commission shall, in addition, identify the provisions to be interpreted, the considerations giving rise to the request, and the names and addresses of the Agent or of the Delegates appointed under Articles 21 and 22 of these Rules.
3. If the advisory opinion is sought by an OAS organ other than the Commission, the request shall also specify, in addition to the information listed in the preceding paragraph, how it relates to its sphere of competence.

Article 52. Interpretation of Other Treaties

1. If the interpretation requested refers to other treaties concerning the protection of human rights in the American states, as provided for in Article 64(1) of the Convention, the application shall indicate the name of, and parties to, the treaty, the specific question on which the opinion of the Court is sought, and the considerations giving rise to the request.
2. When the request is submitted by one of the organs of the OAS, the application shall also indicate how the request relates to its sphere of competence.

Article 53. Interpretation of Domestic Laws

1. Requests for advisory opinions presented pursuant to Article 64(2) of the Convention shall indicate the following:

4. La demanda de interpretación no suspenderá la ejecución de la sentencia.
5. La Corte determinará el procedimiento que se seguirá y resolverá mediante una sentencia.

TITULO III. DE LAS OPINIONES CONSULTIVAS

Artículo 51. Interpretación de la Convención

1. Las solicitudes de opinión consultiva previstas en el artículo 64.1 de la Convención, deben formular con precisión las preguntas específicas sobre las cuales se pretende la opinión de la Corte.
2. Las solicitudes de opinión consultiva, interpuestas por un Estado Miembro o por la Comisión, deberán indicar, además, las disposiciones a ser interpretadas, las consideraciones que originan la consulta y el nombre y dirección del agente o de los delegados designados según los artículos 21 y 22 de este Reglamento.
3. Si la iniciativa de la opinión consultiva es de otro órgano de la OEA distinto de la Comisión, la solicitud deberá precisar, además de lo mencionado en el párrafo anterior, de qué manera la consulta se refiere a su esfera de competencia.

Artículo 52. Interpretación de otros tratados

1. Si la solicitud se refiere a la interpretación de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos, tal como está previsto en el artículo 64.1 de la Convención, deberá identificarse el tratado y las partes en él, las preguntas específicas sobre las cuales se pretende la opinión de la Corte y las consideraciones que originan la consulta.
2. Si la solicitud emana de uno de los órganos de la OEA, deberá expresarse, además, de qué manera la consulta se refiere a su esfera de competencia.

Artículo 53. Interpretación de leyes internas

1. La solicitud de una opinión consultiva presentada de conformidad con el artículo 64.2 de la Convención deberá señalar:

- a. The provisions of domestic law and of the Convention or of other treaties concerning the protection of human rights to which the request relates;
- b. the specific questions on which the opinion of the Court is sought;
- c. the name and address of the Applicant's Agent, appointed pursuant to Article 21 of these Rules.
2. Copies of the domestic laws referred to in the request shall accompany the application.

Article 54. Procedure

1. On receipt of a request for an advisory opinion, the Secretary shall transmit copies thereof to all the Member States, to the Commission, to the Secretary General and to the OAS organs whose spheres of competence relate to the subject of the request, if appropriate.
2. The President shall fix the time-limits for the filing of written comments by interested parties.
3. The President may invite or authorize any interested party to submit a written opinion on the issues covered by the request. If the request is governed by Article 64(2) of the Convention, he may do so after consulting with the Agent.
4. At the conclusion of the written proceedings, the Court shall decide whether there should be oral proceedings and shall fix the date for such a hearing, unless it delegates the latter task to the President. In cases governed by Article 64(2) of the Convention, a prior consultation with the Agent is required.

Article 55. Application by Analogy

The Court shall apply the provisions of Title II of these Rules to advisory proceedings, to the extent that it deems them to be compatible.

Article 56. Adoption and Content of Advisory Opinions

1. The adoption of advisory opinions shall be governed by Article 48 of these Rules.
2. Advisory opinions shall contain the following:

- a. las disposiciones de derecho interno así como las de la Convención o de otros tratados concernientes a la protección a los derechos humanos, que son objeto de la consulta;
- b. las preguntas específicas sobre las cuales se pretende la opinión de la Corte;
- c. el nombre y la dirección del agente del solicitante designado según el artículo 21 de este Reglamento.
2. A la solicitud se acompañará copia de las disposiciones internas a que se refiera la consulta.

Artículo 54. Procedimiento

1. Una vez recibida una solicitud de opinión consultiva, el secretario transmitirá copia a todos los Estados Miembros, a la Comisión, al Secretario General de la OEA y a los órganos de ésta a cuya esfera de competencia se refiera el tema de la consulta, si fuere del caso.
2. El presidente fijará un plazo para que los interesados remitan sus observaciones escritas.
3. El presidente podrá invitar o autorizar a cualquier persona interesada para que presente su opinión escrita sobre los puntos sometidos a consulta. Si la solicitud es de aquéllas a que se refiere el artículo 64.2 de la Convención, lo podrá hacer previa consulta con el agente.
4. Una vez concluido el procedimiento escrito, la Corte decidirá si considera conveniente la realización del procedimiento oral y fijará la audiencia, a menos que delegue este último cometido en el presidente. En el caso de lo previsto en el artículo 64.2 de la Convención se hará previa consulta con el agente.

Artículo 55. Aplicación analógica

La Corte aplicará al trámite de las opiniones consultivas las disposiciones del Título II de este Reglamento en la medida en que las juzgue compatibles.

Artículo 56. Adopción y contenido de las opiniones consultivas

1. La adopción de las opiniones consultivas se regirá por lo dispuesto en el artículo 48 de este Reglamento.
2. Las opiniones consultivas tendrán el contenido siguiente:

- a. the names of the President, the judges who rendered the opinion, and the Secretary and Deputy Secretary;
 - b. the date on which it was delivered at a public hearing, if applicable;
 - c. the issues presented to the Court;
 - d. a summary of the considerations giving rise to the request;
 - e. a description of the proceedings;
 - f. the legal arguments;
 - g. the names of the judges constituting the majority;
 - h. the opinion of the Court;
 - i. a statement indicating which text is authentic.
3. Any judge who has taken part in the deliberations on the advisory opinion request is entitled to append to the opinion of the Court a concurring or dissenting opinion. These opinions shall be submitted within a time-limit to be fixed by the President, to enable the other judges to take cognizance thereof before the advisory opinion is rendered.
 4. Advisory opinions may be delivered in public.

TITLE IV. FINAL AND TRANSITORY PROVISIONS

Article 57. Abrogation and Modification of the Rules of Procedure

These Rules may be amended by the vote of an absolute majority of the titular judges of the Court. Upon entry into force, they shall abrogate the previous Rules of Procedure.

Article 58. Entry into Force

These Rules, whose Spanish and English versions are equally authentic, shall enter into force on August 1, 1991. They shall only apply for cases brought before the Court after that date.

- a. el nombre del presidente, de los jueces que la hubieren adoptado, del secretario y del secretario adjunto;
 - b. la fecha de su lectura en sesión pública, si se hiciere;
 - c. los asuntos sometidos a la Corte;
 - d. un resumen de las consideraciones que originaron la consulta;
 - e. una relación del procedimiento;
 - f. los fundamentos de derecho;
 - g. la indicación de los jueces que haya constituido la mayoría;
 - h. la opinión de la Corte;
 - i. la indicación de cuál de los textos hace fe.
3. Todo juez que haya participado en el examen de una consulta tiene derecho a unir a la de la Corte su opinión disidente o individual. Estas opiniones deberán ser consignadas dentro del plazo fijado por el presidente, de modo que puedan ser conocidas por los jueces antes de la comunicación de la opinión consultiva.
 4. Las opiniones consultivas podrán ser leídas en público.

TITULO IV. DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

Artículo 57. Reformas al Reglamento y derogatoria

El presente Reglamento podrá ser reformado por el voto de la mayoría absoluta de los jueces titulares de la Corte y deroga, a partir de su entrada en vigor, las normas reglamentarias anteriores.

Artículo 58. Entrada en vigor

El presente Reglamento, cuyos textos en español e inglés son igualmente auténticos, entrará en vigor el 1 de agosto de 1991. Sólo se aplicará a los casos que se sometan a la Corte con posterioridad a esa fecha.

**COMISION INTERAMERICANA
DE DERECHOS HUMANOS**

ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

ENERO - JUNIO 1991

El 22 de febrero de 1991 concluyó el 19 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En este período, la Comisión eligió a su nueva mesa directiva, la que quedó integrada por el doctor Patrick Lipton Robinson como Presidente, el doctor Marco Tulio Bruni Celli como Primer Vicepresidente y el doctor Oscar Luján Fappiano como Segundo Vicepresidente. Asistieron a este período de sesiones los miembros doctora Gilda M.C.M. de Russomano, Embajador Oliver Jackman, doctor Leo Valladares Lanza y Profesor Michael Reisman.

En el curso de sus sesiones, la Comisión aprobó su Informe Anual que será presentado a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.

En relación con la visita realizada por una Misión Especial que visitó Colombia del 3 al 7 de diciembre de 1990, la Comisión recibió el informe correspondiente y decidió, a la luz de la preocupante situación existente en materia de derechos humanos, realizar una visita in loco a Colombia, aceptando la invitación que en tal sentido le formulará el Gobierno de ese país.

Con respecto a la situación de los derechos humanos en Cuba, la Comisión analizó con preocupación los hostigamientos, procesos y condenas dirigidos por el Gobierno de ese país contra los activistas de derechos humanos. La Comisión también observó con preocupación la situación de los presos políticos, en especial la de Mario Chanes de Armas, el preso político más antiguo del mundo, y de Ernesto Días Rodríguez, privados de su libertad por 29 y 22 años respectivamente. Junto con señalar la responsabilidad principal del Gobierno en adoptar medidas tendientes a resolver los problemas de derechos humanos que afectan a Cuba, la Comisión ha considerado que es a través de procedimientos democráticos y con la participación

de todos los ciudadanos cubanos sin excepciones que podrán superarse las actuales dificultades de manera pacífica y con el menor costo social para la población.

En lo relativo a El Salvador, la Comisión ha encontrado que persisten problemas que afectan gravemente la situación de los derechos humanos en ese país, de manera particular en lo referido a la muerte violenta de quince campesinos y a la de activistas políticos ocurridas recientemente. También preocupa a la Comisión la situación de los presos políticos y a las condiciones en que tanto éstos como los presos comunes sufren en los establecimientos donde se encuentran privados de su libertad. La Comisión encuentra negativo, asimismo, la lentitud con que se desarrollan los procesos destinados a individualizar y sancionar a los responsables de numerosas y graves violaciones a los derechos humanos, en particular, la muerte de los seis sacerdotes jesuitas y las dos empleadas. La Comisión ha encontrado positivo que se mantengan las negociaciones entre el Gobierno y el FMLN bajo los auspicios del Secretario General de Naciones Unidas y espera que ellas creen condiciones para lograr una mayor vigencia de los derechos humanos, incluidos los derechos políticos en el curso del proceso electoral actualmente en marcha. En este período de sesiones, la Comisión avanzó sus conversaciones con el Gobierno de El Salvador, a fin de fijar la fecha de una próxima visita in loco a ese país por parte del pleno de la Comisión.

En relación con Estados Unidos, en el curso del período de sesiones que acaba de finalizar, la Comisión tomó conocimiento con satisfacción de la conmutación de la pena de muerte del señor Joseph Giarratano a la de cadena perpetua por parte del gobernador del Estado de Virginia. La Comisión había dirigido al gobernador una solicitud de conmutación de la pena basándose "en razones humanitarias y a fin de evitar un daño irreparable", por considerar que tal conmutación "estaría de acuerdo con el espíritu de los más importantes instrumentos internacionales sobre derechos humanos y con la tendencia universal hacia la abolición de la pena de muerte". La ejecución del señor Giarratano estaba prevista para el 22 de febrero pasado y el caso respectivo estaba en trámite ante la Comisión desde junio de 1987.

En relación con Guatemala, la Comisión ha seguido observando con preocupación la grave situación de los derechos humanos en ese país y ha decidido comenzar a elaborar un informe especial sobre la misma. La Comisión encuentra especialmente preocupante la ausencia de investigaciones serias a fin de identificar a los responsables de muy graves violaciones

a los derechos humanos en un contexto caracterizado por la falta de control de la institución militar, lo cual contraría los fundamentos básicos del ordenamiento democrático. En este sentido, la Comisión recibió testimonios sobre la masacre en diciembre de 14 campesinos en Santiago Atitlán, así como testimonios adicionales sobre el caso de la masacre de campesinos en El Aguacate, y testimonio sobre el asesinato de la señora Myrna Mack, distinguida antropóloga guatemalteca, ocurrido en el mes de septiembre pasado. De allí que la Comisión manifieste su esperanza de que el Gobierno recientemente elegido pueda adoptar las medidas requeridas con urgencia, a fin de traer la paz y la irrestricta vigencia de los derechos humanos a Guatemala.

En relación con Haití, la Comisión ha observado con satisfacción la culminación del proceso electoral y la transferencia pacífica del poder realizada el pasado 7 de febrero, lo cual constituye un paso trascendente en la historia de ese país. La Comisión espera que el nuevo Gobierno adoptará todas las medidas necesarias para garantizar la paz social, el irrestricto respeto a los derechos humanos de todos los habitantes y el fortalecimiento del sistema democrático. La Comisión continuará colaborando con el Gobierno de Haití y observando con detenimiento la situación, a fin de efectuar las recomendaciones que estime necesario.

La Comisión manifiesta su profunda preocupación por la evolución reciente de la situación de los derechos humanos en Nicaragua. La Comisión reconoce la voluntad del Gobierno de ese país de fortalecer el respeto de esos derechos en el país, muestra de lo cual ha sido el depósito del reconocimiento de la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Debe señalar, sin embargo, que a lo largo del período cubierto por el informe anual, la Comisión ha observado en Nicaragua una preocupante situación en materia de derechos humanos originada en actos de miembros de las fuerzas de seguridad. La muerte reciente de un connotado dirigente de la Resistencia Nicaragüense viene a agregar un nuevo elemento de particular gravedad a la situación en Nicaragua que, a juicio de la Comisión, debe encausarse definitivamente por el camino de la paz, la democracia y el imperio de la ley, todos ellos elementos imprescindibles para lograr el irrestricto respeto a los derechos humanos.

En lo referido a Panamá, la Comisión Interamericana estudió en esta oportunidad los distintos elementos de juicio recabados durante el período que cubre su informe anual a la Asamblea General, incluidos aquellos obtenidos durante la visita in loco que realizara a ese país en el mes de julio de 1990. La Comisión en esta oportunidad debe reconocer que el Gobierno de

ese país está realizando esfuerzos para superar los problemas que confronta en materia de derechos humanos y que las instituciones establecidas por la Constitución están comenzando a funcionar en Panamá, tal como lo demuestran las elecciones complementarias realizadas el 27 de enero pasado. También estima la Comisión que debe resolverse la situación de las personas privadas de su libertad que se encuentran en condiciones de hacinamiento y por largos períodos, por lo cual espera que la anunciada reforma del Código Procesal Penal conducirá a tal fin. También la Comisión ha efectuado un conjunto de recomendaciones referidas a la necesidad de compensar a las personas que han sufrido pérdidas con motivo de la invasión de Estados Unidos al país en diciembre de 1989. La Comisión espera continuar trabajando con el Gobierno de Panamá, a fin de resolver los problemas suscitados.

En el curso de este período de sesiones, la Comisión examinó la solicitud de medidas cautelares presentada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con el caso del periodista Hugo Bustos Rojas, muerto en Perú en el curso de 1988. También adoptó diversos informes sobre casos individuales referidos a ese país, recibió importantes testimonios sobre la situación de los derechos humanos en ese país y confirmó su decisión de realizar una visita in situ a fin de investigar las graves situaciones de derechos humanos que han venido siendo denunciadas a la Comisión.

La Comisión ha recibido con consternación los informes sobre el golpe de estado en Suriname que interrumpió el desarrollo del proceso democrático en ese país. La Comisión estima que el restablecimiento de la democracia representativa en ese país a través de las elecciones previstas, debe estar precedida del logro de la efectiva vigencia de los derechos humanos y del cese del clima de intimidación creado por las fuerzas de seguridad, ya que sólo tales condiciones pueden conceder autenticidad a las elecciones convocadas. La Comisión, asimismo, continuará con los procedimientos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con relación a casos de violaciones de derechos humanos cometidas por fuerzas de seguridad de Suriname.

Elección de nuevos miembros

La Asamblea General en su vigésimo primer período ordinario de sesiones reeligió a los miembros de la Comisión Dr. Leo Valladares Lanza, Sr. Patrick Robinson, Sr. W. Michael Reisman, por el período reglamentario de cuatro años, a partir del 1 de enero de 1992, y además eligió al Dr. Alvaro Tirado Mejía, de Colombia como miembro de la Comisión a partir de la misma fecha, en substitución de la Dra. Hilda M. Russamado, miembro saliente.

PRESENTATION OF THE ANNUAL REPORT OF THE INTER-AMERICAN COMMISSION ON HUMAN RIGHTS

BY THE CHAIRMAN DR. PATRICK ROBINSON

Mr. Chairman:
Distinguished delegates:

Allow me to begin by congratulating you on your well-deserved appointment as Chairman of the Committee on Juridical and Political Affairs of the General Assembly of the Organization of American States. I have had the pleasure of working with you on several occasions over the past eighteen years both at the multilateral and bilateral level. I feel sure that the qualities of wisdom, patience and a highly developed sense of fairness which have been the hallmark of your work in the past and which you will undoubtedly bring to your new role, will guarantee the success of your Chairmanship of this Committee.

I am here today to introduce the Annual Report of the Inter-American Commission on Human Rights, pursuant to the provisions of Article 41.g of the American Convention on Human Rights. The Protocol of Amendment to the Charter of the Organization has entered into force, and consequently, there is a new procedure for presenting the Annual Report of the Inter-American Commission on Human Rights. In accordance with this procedure which is set forth in Article 90.f of the Charter of the Organization, the Commission's report has been considered by the Permanent Council for observations and comments.

This is the first year this new procedure has been employed by the Organization. Next year, when the adjustments so natural to a period of transition such as the one that precedes this session of the General Assembly have all been made, I am convinced that the new system will provide an opportunity to establish even closer contact than that which the Commission now enjoys with the representatives of the Member States. This will surely strengthen the American system for the promotion and protection of human rights.

Mr. Chairman: It is a source of great satisfaction for me to present this Annual Report to distinguished diplomats whose governments are living proof of the advance of democracy in the hemisphere. This circumstance creates new and promising conditions for the defense and promotion of human rights. One of these is the genuine interest of our democratic governments in taking up these tasks. The shared values of governments with those of the Commission constitute a solid base from which problems of human rights, which democracies also face, might be confronted. What this new situation generates is the possibility of an environment of cooperation and mutual respect, which will improve prospects for achieving constructive solution to problems. This is the approach, Mr. Chairman, that inspired the comments, evaluations and findings of the Commission in the Annual Report which I am presenting today, and it is, I would like to suggest, the background against which those comments, evaluations and findings should be assessed by Member States.

The Commission was created by Resolution VI of the Fifth Meeting of Consultation of Ministers of Foreign Affairs in Santiago, Chile in 1959. The competence that it now enjoys is set out in the American Convention on Human Rights, and as such it is to the Convention that one must look for its processes and functions, although its Statute mandates that it apply the American Declaration of the Rights and Duties of Man in relation to States not parties to the American Convention. But the primary role given to the Commission is that which is set out in Article 41 of the Convention: the promotion and protection of human rights. The Commission's Annual Report is a statement of account to Member States of the Organization of its stewardship in the field of human rights. In the conduct of its activities, in the decisions, comments and evaluations that it makes, the Commission at all times is sensitive to the need to ensure that it act within the terms of the American Convention, that is, that its acts are always *intra vires* that Convention, which is the master whom it serves. Apart from the duty to comply with the Convention, the Commission must, of course, ensure that it act in accordance with the dictates of good sense.

At the outset of my report I feel obliged to explain the format of this presentation. As mentioned earlier, this is the first time the procedure under the amended Charter has been put into practice requiring consideration of the Commission's Report by the Permanent Council. On this occasion I intend to present the Annual Report and to address some of the questions raised in the Committee on Juridical and Political Affairs by offering answers and clarifications in relation to the relevant chapters on specific issues that were referred to by the Representatives.

Since several questions were raised in the Juridical and Political Affairs Committee of the Permanent Council, I will necessarily have to respond with some degree of detail. I apologize in advance for what may appear to be the excessive attention to minor details but I do so in the interest of thoroughness and out of respect for the procedure adopted by the Permanent Council, and in any event, I had promised the Committee to give such a response. Of course, reference to these matters does not preclude additional questions which the distinguished Representatives may wish to pose upon the conclusion of my remarks. Dr. Márquez, Executive Secretary of the Commission, has already responded to some of the issues raised by the representatives during the meetings of the Permanent Council's Committee on Juridical and Political Affairs. Mr. Chairman, I also apologize in advance for the length of this report, but this is a direct consequence of the new procedure which obliges the Commission not merely to present a general report but also to respond to points raised earlier in the Permanent Council.

As I explained to the Juridical and Political Affairs Committee of the Council, this Annual Report of the Commission consists of five chapters and has been prepared in accordance with General Assembly Resolution AG/RES. 331 (VIII-0-78), and Article 63 of the Commission's Rules of Procedure.

Chapter I contains a brief summary of the Commission's origins and its legal foundation. It also contains a succinct description of the Commission's relations with other agencies of the inter-American system and with the regional and world organizations that defend and promote human rights.

Chapter II deals with the activities of the Commission during the period covered in this Annual Report, including the status of cases that it brought to the Inter-American Court of Human Rights, the *in loco* visits to Panama and Haiti and the preliminary visit to Colombia.

Regarding queries about the status of the matters mentioned in operative paragraphs 14 and 18 of the General Assembly Resolution AG/RES. 1044 (XX-0/90), I should mention that the Chapter also reports the progress that the Commission has made in acting upon recommendations made by the General Assembly, as in the case of the study on the judiciary and the drafting of an international instrument on the rights of indigenous peoples.

If I may, Mr. Chairman, I should like to address the questions raised in connection with the recommendations made in operative paragraphs 15 and 17 of that Resolution. The systematic study of the status of economic, social and cultural rights in the hemisphere, recommended in operative paragraph 15, has not yet gotten underway because the Commission's Executive Secretariat has but a small staff to handle the enormous volume of work that is reflected in the Annual Report you have before you. Nevertheless, it is the intention of the Commission to contract an expert during the course of this year to begin to address this important issue. At the same time, I wish to point out that this situation illustrates the chronic problem of scarce resources which the Commission faces.

As the Representatives will recall, operative paragraph 17 is a recommendation that the Commission continue with a study of the actual effectiveness of the rights included in the American Convention on Human Rights, the difficulties that stand in the way of their effectiveness, the legal obstacles to observance of the Convention in terms of the advisability of incorporating new individual or collective human rights and the possibility of changing the means and procedures presently in the Convention to make them more effective in ensuring better protection of human rights. This is a sweeping recommendation that covers virtually all of the functions that the Commission discharges. Chapters II and IV of the Annual Report will provide the reader with information on how the Commission is conducting the activities indicated in the recommendation in question.

With regard to that recommendation, I would like to point out that the Commission is ever vigilant of the observance of human rights in all the Member States, identifying the practical and legal impediments to their enjoyment. It reports its observations in special reports, case reports, public communications and confidential messages to the governments, its talks with authorities, *in loco* visits, and reports on the situation of human rights in specific countries, published in its Annual Report. The Commission also examines situations with the idea of proposing that new rights be

established and incorporated, or that improvements be made to the legal and institutional instruments that guarantee the exercise of existing rights. Evidence of this is the work done in connection with the Inter-American Convention to Prevent and Punish Torture, the Additional Protocol to the American Convention in the Area of Economic, Social and Cultural Rights, the Additional Protocol to abolish the Death Penalty; the draft Convention on the Forced Disappearance of Persons, and the work currently in progress to put together a draft Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. All these instruments resulted from initiatives taken by the Commission to supplement the regime of rights set out in the Convention. What is needed now is for Member States to become parties to those instruments that have been adopted to enable them to come into force so that the peoples of the Region can benefit from the rights they establish. In related activities, the Commission meets with the Inter-American Court of Human Rights to improve the two institutions' practices and rules of procedure and, eventually, the Convention itself, and conducts joint studies to that end.

Mr. Chairman, since the American Convention on Human Rights is the basic treaty applied by the Commission, I am, naturally, keen to ensure the widest regional participation in the Convention. In this regard, the Commission welcomes the recent accession to the Convention by Trinidad and Tobago, and I would like to report that I attended a recent meeting of Foreign Ministers of the Caribbean Common Market, at which, following my exhortation, the Foreign Ministers adopted a decision urging those Governments that had not yet done so to accede to the American Convention without delay.

It is the hope of the Commission that in the very near future all Member States will be parties to the Convention as well as to the other instruments of the Inter-American System on Human Rights.

Chapter III of the Annual Report contains the decisions adopted by the Commission on individual cases that have been processed.

Without intending to reargue the case, the Permanent Representative of Mexico presented his Government's views on the Report the Commission prepared in connection with Case N°10,180. I have examined the points raised by the Permanent Representative with particular care and will bring them to the attention of the Commission, which will continue to consider those issues when conducting its future business.

The Representative of Guatemala made reference to Case Nº10.400, published in the Commission's Annual Report and known as the "El Aguate" case. It concerns the death of 21 "campesinos" in Guatemala. In the Commission's final report on this case, contained in the Annual Report now under study, the Commission concludes that "grounds for the petition do not exist, and accordingly orders the record to be closed". Since the Special Commission charged with the investigation of this case was of the view that the claimants had been unable to prove the responsibility of the Armed Forces, the Commission decided to close the case pursuant to Article 48.1.b of the American Convention.

Chapter IV of the Annual Report, 1990-1991, contains sections on the human rights situation in Cuba, El Salvador, Guatemala, Haiti, Nicaragua, Panama and Suriname. These are updates of special reports done in the past on the situation of human rights in those countries. In the section on El Salvador and in the section on Guatemala, the Commission makes reference, as it has been doing for some time now, to the activities of irregular armed groups as it called for by the recommendation made in General Assembly Resolution AG/RES. 1043 (XX-0/90).

Mr. Chairman, some delegates felt that the inclusion of certain countries in Chapter IV is discriminatory. This concern will be conveyed to the full Commission so that it might give the matter the attention it deserves. Allow me to point out, however, that traditionally, the countries included in Chapter IV of the Commission's Annual Report have been those whose human rights situations, in the judgment of the Commission, warrant further consideration and have been the subject of previous special reports, which are then updated in the Annual Report. No adverse inference should necessarily be drawn from the inclusion of a country in Chapter IV of the Commission's Annual Report.

As for the human rights situation in Cuba, the Commission in its Annual Report, devoted special consideration to the Cuban Government's harassment, trial and conviction of human rights activists. The Commission was concerned by the situation of the political prisoners, particularly that of Mario Chanes de Armas, the longest-standing political prisoner in the world, who has been held 29 years. The Commission has urged his prompt release and urges the release of all political prisoners in Cuba.

While the Cuban Government must bear the bulk of the responsibility for remedying the human rights problem in Cuba, the Commission believes that it is through the democratic process, with the

participation of all Cuban citizens -without exception- that Cuba will succeed in correcting its problems peacefully and at the least social cost to its people.

In the case of El Salvador, the Commission finds in its Report that there are still problems that seriously influence the situation of human rights in that country, particularly in relation to cases affecting the right to life. The Commission is also disturbed by the situation of the political prisoners and the conditions in which political and common prisoners are held. Another concern is the slow pace of the proceedings being conducted to identify and punish those responsible for the many grave violations of human rights, such as the death of the six Jesuit priests, their cook and her daughter. The Commission welcomes the fact that negotiations between the Government and the FMLN continue under the auspices of the United Nations Secretary General. It hopes that those negotiations will help create the conditions for better observance of human rights.

The Permanent Representative of El Salvador said that the Commission's reference to the peace process in his country is a dangerous duplication of functions being performed by the Secretary General, and that it is unnecessary for the Commission "to be making pronouncements on a matter that is under discussion at this time and for which the United Nations is the responsible organization and not the OAS". Suffice it to say that for many years the Inter-American Commission on Human Rights has been examining the evolution of the conflict in El Salvador and has advocated a negotiated settlement because it believes that peace is a precondition for the achievement of human rights, the promotion and defense of which is the Commission's mandate under Article 41 of the Convention. There is no reason why the Commission should now alter its long-standing practice. Quite the contrary: one of the most important accomplishments of the negotiation process now underway has been the Human Rights Agreement, signed on July 26, 1990, in San José, Costa Rica. It is eloquent proof that the human rights issue is inextricably linked to the peaceful settlement of the conflict. It would be difficult for the Commission to make reference to the activities of armed irregular groups, as recommended by the General Assembly without considering the conflict in El Salvador.

With respect, therefore, the Commission cannot accept that it has no responsibility in this matter since the American Convention gives it a clear mandate in this area; acceptance that it has no responsibility in matters

concerning peace would be tantamount to an abdication by the Commission of its mandate under the Convention.

As the Commission was unable to make its visit to El Salvador in late May of this year, a new, mutually agreeable date will be set for that visit, which will be conducted once the scheduled preparatory visits have been completed. I would like to take this opportunity to express the Commission's appreciation for the many courtesies accorded to the official from the Executive Secretariat who has been making the arrangements for the visit.

As for Guatemala, the Commission in its Report, continues to observe the human rights situation in that country with great concern and has decided to begin preparing a special report thereon. The Commission is particularly disturbed by the lack of genuine investigations to identify those responsible for the very serious violations of human rights. The Commission hopes that the recently elected Government will be able to adopt the measures so urgently needed to bring peace to Guatemala and respect for human rights.

One of the points raised by the Representative of Guatemala is that the Report makes reference to events that did not occur during the period covered by the Report. One must bear in mind that when the Commission examines or analyzes situations in a given country, it must look at the political and historical context in which those situations occur if it is to have a complete picture of the human rights situation it is studying, and this way require it to look at a period prior to that covered by the Report. This has been a long standing, and I believe, reasonable practice of the Commission.

In the case of Haiti, the Commission, in its Report, noted with pleasure the culmination of the election process and the peaceful transfer of power on February 7, 1991. This is an extraordinary step in that country's history. The Commission hopes that the new Government will adopt all measures necessary to guarantee social peace, absolute respect for the human rights of all its people and to strengthen the democratic system. The Commission will continue to cooperate with the Government of Haiti and to follow the situation closely in order to make whatever recommendations it deems necessary.

In its Report, the Commission expressed appreciation of the Nicaraguan Government's willingness to improve respect for human rights in that country, demonstrated, *inter alia*, by its acceptance of the

mandatory jurisdiction of the Inter-American Court of Human Rights. It must, however, point out that throughout the period covered in the Annual Report, the Commission has observed a disturbing human rights situation in the form of acts committed by members of the security forces. It is the Commission's hope that Nicaragua will continue to adopt measures aimed at peace, democracy and the rule of law as these are all essential elements to achieving respect for human rights.

The Permanent Representative of Nicaragua raised a number of questions. I shall only address those matters that have a bearing on the Commission's Annual Report, and will begin with some questions that can be attributed to a misreading of the Report.

For example, reference was made by the Representative of Nicaragua to the Commission's allusion in its Annual Report to the relatively slow pace of the return of confiscated private property in that country. This affirmation is not the Commission's but rather is a direct quote from a speech given by the President of Nicaragua, Doña Violeta Chamorro, in which she stated that of 6,000 filed claims, 300 had been settled as of January of this year.

Another example of the misreading of the Commission's Report is the Representative's reference to the various labour strikes held in Nicaragua and mentioned in that Report. The Report is not, as was contended, critical of the fact that there have been general strikes. Rather is simply mentions them as part of the general context in which the Human Rights situation in Nicaragua is unfolding.

I will turn now to some additional issues raised by the Representative of Nicaragua.

With regard to the invitation to the Commission to visit Nicaragua, no conditions have ever been dictated for visits made by the Inter-American Commission on Human Rights. When the Commission is invited to visit a country, it is the Commission that necessarily must decide the modalities of the visit, lest its independence, credibility and the objectivity of its findings be called into question. This has always been the procedure in the past. Naturally, this does not mean that the Commission does not consult with and cooperate with the Government in making the necessary arrangements. Coordination and cooperation as between the Commission and the Government are clearly necessary in order to attain the best results of the visit.

The Commission views very seriously any charge that it has been unfair in the discharge of its functions. It is not clear what the Representative of Nicaragua intended when he questioned the Commission's fairness. If by "unfair" was meant unbalanced, I would note that there are several statements contained in the section of the Annual Report dealing with Nicaragua which point to the improvement of the human rights situation. One such statement, for example, notes: "Since the new Government took over on April 25, 1990, the Inter-American Commission has noted some positive developments in relation to the observance of human rights".

The Commission welcomes the statement of the Minister of Foreign Affairs of Nicaragua made to the Plenary yesterday, and notes in particular his support for the work of the Commission and the need for Member States to work to strengthen its independence and impartiality.

In the case of Panama, the Inter-American Commission, in its Report, examined the information obtained during the period covered by the Annual Report including data received during its on site visit in June 1990. At present the Commission must recognize that the Government is seeking to overcome its human rights problems and that the institutions established by the Constitution are beginning to function in Panama as reflected by the elections of January 27, 1991.

The Commission also considers it important that the Government address and alleviate the situation of overcrowding of long-term prisoners. It is hoped that the new Code of Criminal Procedure will help remedy the problem. The Commission intends to continue working with the Government of Panama to assist it in resolving its problems.

In relation to Suriname, the Commission considers of great importance the reestablishment of representative democracy in Suriname through last week's elections and the effective enforcement of human rights as well as an end to the climate of intimidation created by the armed forces. Likewise, the Commission will continue to prosecute the cases of violations of human rights committed by the armed forces of Suriname before the Inter-American Court of Human Rights.

I shall refer now to Chapter V of the Commission's Annual Report: "Areas in which steps need to be taken towards full observance of the Human Rights, in the American Declaration of the Rights and Duties of Man in the American Convention on Human Rights". There the Commission includes two studies: one on armed irregular groups and

human rights, and the other on human rights, political rights and representative democracy in the inter-American system. Numerous references have been made to these topics, so that I shall confine my comments to but a few of them at this time.

The Permanent Representative of Mexico raised questions concerning the origin and scope of Chapter V of the Annual Report. He asked which provision gives the Commission the competence to present reports or studies of the kind included in this Annual Report and what were the implications of the Commission's observations. As was indicated, the provisions that are the legal foundation for the Commission's competence in that respect are Article 41.b and c of the American Convention, which states:

The main function of the Commission shall be to promote respect for and defense of human rights. In the exercise of its mandate, it shall have the following functions and powers:

- b) to make recommendations to the governments of the Member States, when it considers such action advisable, for the adoption of progressive measures in favor of human rights within the framework of their domestic law and constitutional provisions as well as appropriate measures to further the observance of those rights.
- c) to prepare such studies or reports as it considers advisable in the performance of its duties.

That provision also appears in the Article 18.b of the Commission's Statute. Article 63 of the Commission's Rules of Procedure formalized the results of the process through which the Commission gradually determined what the content of its Annual Report would be.

Both the Commission and the Member States have attributed particular importance to the content of this Chapter. Over the years, the issues addressed in this Chapter have often led to the drafting of inter-American conventions such as the Convention on Torture and Forced Disappearances or have pointed up issues which, when given special attention, have helped to improve the system for protecting human rights in the hemisphere. The recommendations that the Commission makes in Chapter V are intended to assist the Members in their deliberations on measures that might be adopted to advance human rights in the hemisphere.

In this Annual Report, Chapter V contains the Commission's views on the relationship between human rights, political rights and representative democracy. It presents the position that the Commission has arrived at after

examining the issue in a variety of situations over a long period of time, demonstrating that the exercise of political rights as defined in Article 23 of the American Convention is intimately tied to the exercise of other rights. It was indeed timely for this issue to be addressed, as the General Assembly of the Organization was about to meet in Santiago, Chile, where the Inter-American Commission on Human Rights was created and the Declaration of Santiago adopted, to formalize principles and attributes of the democratic system. I have no doubt that the purposes of the Declaration of Santiago will be well served here, as the General Assembly examines the important question of consolidating democracy in the hemisphere.

This Chapter also addresses the topic of armed irregular groups, pursuant to the General Assembly's recommendation to the Commission in Resolution AG/RES. 1043: "to recommend to the Inter-American Commission on Human Rights that in reporting on the status of human rights in the American States, it make reference to the action of irregular armed groups in such States." It has been suggested that there has been reluctance on the part of the Commission in addressing this topic. In this section of Chapter V, the Commission raised certain questions pursuant to that General Assembly recommendation and indicates those matters that would have to be given more deliberate consideration if the American system for protecting and promoting human rights is to function properly. As indicated in the corresponding section, in its previous Annual Reports the Commission has frequently raised the matter of the activities of armed irregular groups. Hence, one could hardly say that the Commission is reluctant to address the issue. However, in view of the difficult and sensitive issues raised by the question of irregular armed groups such as belligerency, recognition and the general impact of international humanitarian law, the Commission has to be extremely careful and painstaking in the treatment of this matter. In particular, the Commission must at all times bear in mind that, as reprehensible as the acts of these groups may be, the American Convention does not treat them as being capable of breaching the rights set forth therein. The obligation to respect and ensure rights in terms of the Convention, is imposed on States.

The Commission also believed that the legal principles underlying the concept of human rights should be reiterated, principles that serve as the basis for the legal instruments of the Organization and the institutions that they create. In short, the Commission felt that this was an important contribution to make in order to be able to move ahead, together with the other organs of the Organization, in perfecting the system for protecting and promoting human rights.

A number of delegations made reference to the principle of non-intervention, in response to the comments in the second section of Chapter V of the Commission's Report. In the inter-American system of law, the principle of non-intervention is perfectly consistent with other principles such as the right of peoples to self determination and fundamental human rights. Pertinent in this regard is the General Assembly's resolutions on strengthening the principle of non-intervention and self-determination of peoples.

States alone have the authority to make exceptions to the principle of non-intervention in respect of their own sovereignty. This is what happens when international agreements are concluded or when competence and jurisdiction are accorded to institutions that come into being by virtue of international agreements. The institution that the States themselves established in the international realm to protect and promote human rights cannot, therefore, be said to be in breach of the principle of non-intervention when they are merely acting in accordance with the terms of their constituent instruments.

The very interesting exchange of views among the delegates concerning the nature and scope of the principle of non-intervention in relation to the other principles embodied in the Charter of the Organization has pointed up the diverse lines of thinking that exist in this regard.

As for the concern that the Commission might become a kind of supreme electoral tribunal determining the validity or authenticity of elections, it is important to point out in this regard that what the Commission does, as explained in the text of the Annual Report, is to assess whether the authorities of a State have violated the rights provided for in Article 23 of the American Convention or any related right.

Mr. Chairman, I wish to close by reiterating my personal satisfaction at having been afforded the opportunity of presenting the Commission's Annual Report to Representatives of Governments formed on the basis of free elections. However, neither the Commission nor the Member States of the Organization, should be lulled into complacency by the phenomenon of freely elected governments in the entire Region, for democracy is a fragile plant, requiring the greatest care and vigilance if it is to flourish. The right to free and fair elections is but one aspect of the political rights guaranteed by the American Convention and political rights are but one of the rights set forth in it. It is therefore incumbent upon Member States of the Organization and the Commission to join forces to ensure that the

whole range of rights in the Convention are enjoyed by all the people of the Region.

In this regard, the Commission pledges its full cooperation with Member States in working for the achievement of the purposes of the American Declaration of the Rights and Duties of Man and the American Convention on Human Rights. As I stated before, the Commission takes its cue from the American Convention as to the steps it adopts to discharge its mandate to promote and protect human rights.

When the Member States adopted the Pact of San Jose, they devised a Commission on Human Rights which was specially adapted to the needs of the Hemisphere. The Commission is perhaps unique in the range of powers and functions assigned to it. I do not believe that any other Human Rights Commission has a similar range of functions and powers. Most human rights commissions are confined by their constituent instruments to the quasi-judicial role of determining whether a State party to a particular instrument has violated any of the rights in that instrument. While the Commission has this duty, it also has a function that is not traditionally assigned to human rights commissions. In order to fulfill its mandate of promoting and protecting human rights, the Convention empowers the Commission, among other things, to make recommendations to governments for the adoption of measures to foster respect for human rights within the framework of their laws. Moreover, the Commission is empowered to make on-site visits to States with a view to examining the situation of human rights in these States. Thus, while the function of traditional human rights commissions is strictly quasi-judicial, the Member States of the OAS thought it best to invest the Commission with other functions which could be described as being of a diplomatic or quasi-diplomatic nature.

I would like to assure the distinguished Representatives here that the Commission is very aware of the need to exercise due care in fulfilling these unique functions. But as sensitive as the role of the Commission in this regard, it cannot, if it is to be faithful to its mandate, shrink from its responsibilities under the Convention. Ultimately, it will not serve to advance the promotion and protection of human rights of the peoples of the Region, and hence, of the interests of Member States if the Commission abdicates its responsibilities and applies as the criterion for its actions convenience and expediency, rather than the principles of the Convention. The promotion and defence of human rights in the Region is best served by a strong but fair Commission one which is firm and consistent but

reasonable in carrying out its work, one which is independent but willing to consult and cooperate.

Both the Commission and Member States must work together to ensure that the Commission continues to perform with efficiency and dignity the unique role given to it by the Convention, as that role was obviously the one which the framers of the Convention considered to be best suited to the promotion and protection of human rights in the Region. There are obviously areas in which the functions of the Commission can be progressively developed so as to better achieve the purposes of the Convention, and the Commission stands ready to participate in any effort with that aim, as the Commission shares with Member States the common goal of the promotion and protection of human rights.

Santiago, June 4, 1991

**ASAMBLEA GENERAL
DE LA O.E.A.**

ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA)

XXI^º PERIODO ORDINARIO DE SESIONES

Transcribimos a continuación algunas de las principales resoluciones y compromisos adoptados durante el XXI^º Período Ordinario de Sesiones, de la Asamblea General de la OEA, celebrado en Santiago, Chile en el mes de junio de 1991, que por su naturaleza guardan relación directa con los derechos humanos, la democracia representativa y la celebración de elecciones en el continente americano.

COMPROMISO DE SANTIAGO CON LA DEMOCRACIA

Y CON LA RENOVACIÓN DEL SISTEMA INTERAMERICANO

(Aprobado en la tercera sesión plenaria,

celebrada el 4 de junio de 1991)

Los Ministros de Relaciones Exteriores y Jefes de Delegación de los países miembros de la Organización de los Estados Americanos, en representación de sus gobiernos democráticamente elegidos, reunidos en Santiago de Chile, con ocasión del vigésimo primer período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA,

Conscientes de que los profundos cambios políticos y económicos internacionales y el fin de la guerra fría abren nuevas oportunidades y responsabilidades para la acción concertada de todos los países a través de los organismos internacionales, tanto mundiales como regionales, así como en sus relaciones bilaterales;

ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA)

XXIº PERIODO ORDINARIO DE SESIONES

Transcribimos a continuación algunas de las principales resoluciones y compromisos adoptados durante el XXIº Período Ordinario de Sesiones, de la Asamblea General de la OEA, celebrado en Santiago, Chile en el mes de junio de 1991, que por su naturaleza guardan relación directa con los derechos humanos, la democracia representativa y la celebración de elecciones en el continente americano.

COMPROMISO DE SANTIAGO CON LA DEMOCRACIA

Y CON LA RENOVACIÓN DEL SISTEMA INTERAMERICANO

(Aprobado en la tercera sesión plenaria,

celebrada el 4 de junio de 1991)

Los Ministros de Relaciones Exteriores y Jefes de Delegación de los países miembros de la Organización de los Estados Americanos, en representación de sus gobiernos democráticamente elegidos, reunidos en Santiago de Chile, con ocasión del vigésimo primer período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA,

Conscientes de que los profundos cambios políticos y económicos internacionales y el fin de la guerra fría abren nuevas oportunidades y responsabilidades para la acción concertada de todos los países a través de los organismos internacionales, tanto mundiales como regionales, así como en sus relaciones bilaterales;

Teniendo presente que los cambios dirigidos hacia un sistema internacional más abierto y democrático, no están plenamente asegurados y que, por lo tanto, es indispensable para preservar dichas tendencias positivas, fortalecer y promover la cooperación;

Reconociendo que es necesario avanzar de modo decidido hacia un orden internacional justo y democrático basado en el pleno respeto al derecho internacional, la solución pacífica de las controversias, la solidaridad y la revitalización de la diplomacia multilateral y de las organizaciones internacionales;

Teniendo presente que la democracia representativa es la forma de gobierno de la región y que su ejercicio efectivo, consolidación y perfeccionamiento son prioridades compartidas;

Reafirmando que los principios consagrados en la Carta de la OEA y los ideales de paz, democracia, justicia social, desarrollo integral y solidaridad constituyen el fundamento permanente del sistema interamericano;

Reconociendo que la cooperación para afianzar la paz y la seguridad del Hemisferio es uno de los propósitos esenciales consagrados en la Carta de la OEA y que la proliferación de armamentos afecta a la seguridad internacional y resta recursos al desarrollo económico y social de los pueblos de los Estados miembros;

Decididos a trabajar para la intensificación de la lucha contra la pobreza crítica y la eliminación de las desigualdades económicas y sociales dentro de cada nación y entre las naciones del Hemisferio;

Tomando nota con interés del informe del Grupo de Reflexión sobre la renovación del sistema interamericano, y

Convincidos de que la OEA es el foro político para el diálogo, el entendimiento y la cooperación entre todos los países del Hemisferio cuyo potencial, acrecentado por la incorporación de nuevos Estados miembros, debe incrementarse a fin de que sea portavoz eficaz en el ámbito mundial de los acuerdos de sus miembros,

Declaran:

Su compromiso indeclinable con la defensa y promoción de la democracia representativa y de los derechos humanos en la región, dentro del respeto a los principios de libre determinación y no intervención.

Su firme voluntad de impulsar el proceso de renovación de la Organización de los Estados Americanos, para hacerla más eficaz y útil para realizar los principios y objetivos que la orientan.

Su determinación de continuar en la elaboración y desarrollo de una agenda relevante de la organización para dar adecuada respuesta a los nuevos desafíos y requerimientos en el contexto mundial y regional y su decisión de conceder especial prioridad en dicha agenda para el presente decenio a las siguientes acciones:

- a. *Intensificar* la lucha solidaria y la acción cooperadora contra la pobreza crítica para contribuir a disminuir las desigualdades económicas y sociales en el Hemisferio, fortaleciendo así el proceso de promoción y consolidación de la democracia en la región;
- b. *Fortalecer* la democracia representativa como expresión de la legítima y libre manifestación de la voluntad popular, dentro del respeto invariable a la soberanía y a la independencia de los Estados miembros;
- c. *Promover* la observancia y defensa de los derechos humanos, conforme a los instrumentos interamericanos vigentes y a través de los órganos específicos existentes; y velar porque ninguna forma de discriminación sea un obstáculo para la participación política de grupos étnicos minorados o minoritarios;
- d. *Promover* la progresiva apertura del comercio y la expansión de la inversión, el acceso al conocimiento científico y tecnológico, y la reducción de la deuda externa de los países de la región y, en esta perspectiva, apoyar la denominada "Iniciativa para las Américas" y las negociaciones de la Ronda Uruguay del GATT;
- e. *Contribuir* a la protección solidaria del medio ambiente para beneficiar a las presentes y futuras generaciones asegurando un desarrollo sustentable en la región;
- f. *Estimular* la adopción y aplicación de medidas adecuadas para prevenir y combatir el consumo, la producción y el tráfico ilícitos de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, los precursores químicos y el lavado de dinero, así como el tráfico clandestino conexas de armas, municiones y explosivos;
- g. *Favorecer* los procesos de integración en la región y, con este propósito, adoptar un programa de trabajo que, entre otros aspectos, tienda a alcanzar en el área jurídica la armonización legislativa en la región y, en particular, la de los sistemas de derecho civil con los de *common law*;
- h. *Promover* e intensificar el intercambio cultural, educativo, científico y tecnológico como instrumentos de la integración, con pleno respeto al patrimonio cultural de cada uno de los países miembros;

- i. *Incrementar* la cooperación técnica y estimular la transferencia de tecnologías para ampliar la capacidad de crecimiento económico de los países de la región.

Su decisión de iniciar un proceso de reflexión conjunta sobre la seguridad hemisférica a la luz de las nuevas circunstancias mundiales y regionales, desde una perspectiva actualizada e integral de la seguridad y del desarme, incluido el tema de todas las formas de proliferación de armas e instrumentos de destrucción masiva, a fin de dedicar el mayor número de recursos al desarrollo económico y social de los Estados miembros; y formular un llamado a nivel mundial a otras organizaciones competentes, para que se unan a los esfuerzos de la OEA.

Su determinación de adoptar un conjunto de procedimientos eficaces, oportunos y expeditos para asegurar la promoción y defensa de la democracia representativa, de conformidad con la Carta de la OEA.

En consecuencia, los Ministros de Relaciones Exteriores y Jefes de Delegación de los Estados miembros de la OEA, en nombre de sus pueblos declaran su más firme compromiso político con la promoción y protección de los derechos humanos y la democracia representativa, condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, así como para el éxito del proceso de cambios y renovación que requiere el sistema interamericano en el umbral del siglo XXI.

AG/RES. 1080 (XXI-O/91)

DEMOCRACIA REPRESENTATIVA

(Resolución aprobada en la quinta sesión plenaria celebrada

el 5 de junio de 1991)

La Asamblea General,

Considerando:

Que el preámbulo de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, establece que la democracia representativa es condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región;

Que según lo establece la Carta, uno de los propósitos fundamentales de la OEA es promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención;

Que es preciso observar el debido respeto a las políticas de cada uno de los Estados miembros en materia de reconocimiento de Estados y gobiernos;

Que teniendo en cuenta la existencia generalizada de gobiernos democráticos en el Hemisferio, es necesario darle efectiva aplicación al principio consignado en la Carta de que la solidaridad de los Estados americanos y los altos fines que con ella se persiguen requieren la organización política de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa, y

Que subsisten en la región serios problemas políticos, sociales y económicos que pueden amenazar la estabilidad de los gobiernos democráticos,

Resuelve:

1. *Instruir* al Secretario General que solicite la convocación inmediata del Consejo Permanente en caso de que se produzcan hechos que ocasionen una interrupción abrupta o irregular del proceso político institucional democrático o del legítimo ejercicio del poder por un gobierno democráticamente electo en cualquiera de los Estados miembros de la Organización para, en el marco de la Carta, examinar la situación, decidir y convocar una reunión ad hoc de Ministros de Relaciones Exteriores, o un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, todo ello dentro de un plazo de 10 días.

2. *Expresar* que la reunión ad hoc de Ministros de Relaciones Exteriores o el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General tenga por objeto analizar colectivamente los hechos y adoptar las decisiones que se estime apropiadas, conforme a la Carta y al derecho internacional.

3. *Encomendar* al Consejo Permanente que elabore un conjunto de propuestas de incentivos a la preservación y fortalecimiento de los sistemas democráticos, sobre la base de la solidaridad y la cooperación internacional, e informe a la Asamblea General en su vigésimo segundo período ordinario de sesiones.

AG/RES. 1087 (XXI-0/91)

EDUCACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN CÍVICA
Y LA DEMOCRACIA

(Resolución aprobada en la novena sesión plenaria,

celebrada el 7 de junio de 1991)

La Asamblea general,

Vista la resolución CIECC 813/91, y

Considerando:

Que la escuela es el medio del que se vale la sociedad para transmitir los principios y valores que constituyen la esencia de su identidad, y

Que la democracia requiere de la coparticipación tanto del Estado como de la comunidad para alcanzar el objetivo del bienestar de la sociedad en su conjunto,

Resuelve:

1. *Recomendar* a los Estados miembros que, de acuerdo con sus prioridades, estudien la posibilidad de incorporar, particularmente en el currículum de los primeros años de la educación básica, cursos de educación cívica que favorezcan en los educandos el sentido de participación en los asuntos de la comunidad y los orienten al mejor cumplimiento de sus responsabilidades como ciudadanos, tanto en la conciencia y el reclamo de sus derechos como en el cumplimiento de sus obligaciones.

2. *Instituir* a la Secretaría General para que busque la colaboración de fuentes externas para financiar proyectos piloto que tengan la finalidad expresada en el punto resolutivo anterior en aquellos Estados miembros que así lo deseen.

AG/RES. 1102 (XXI-O/91)

INFORME ANUAL DE LA

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, 1990

(Resolución aprobada en la décima sesión plenaria,

celebrada el 7 de junio de 1991)

La Asamblea General:

Vistos el informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometido a la Asamblea General conforme al artículo 41 (g) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CP/doc.2144/91) y las observaciones y recomendaciones del Consejo Permanente sobre dicho informe (AG/doc. 2709/91), así como la presentación que sobre el mismo hiciera el Presidente de la Comisión, y

Considerando:

Que los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos han proclamado en su Carta constitutiva, como uno de los principios fundamentales de la Organización, el respeto de los derechos fundamentales de la persona humana sin distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo;

Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene como función principal promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en todos los Estados miembros;

Que el artículo 53 (f) de la Carta de la Organización de los Estados Americanos establece entre las atribuciones de la Asamblea General la de considerar las observaciones y recomendaciones que eleve el Consejo Permanente, de conformidad con el artículo 90 (f) de la Carta sobre los informes de los órganos y entidades de la Organización;

Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conforme al artículo 52 de la Carta, es uno de los órganos a través de los cuales la Organización realiza sus funciones, y

Que el ejercicio efectivo de la democracia representativa es la mejor garantía de la plena vigencia de los derechos humanos,

Resuelve:

1. *Tomar nota* del informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CP/doc. 2144/91).
2. *Acooger y transmitir* a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos las observaciones y recomendaciones que el Consejo Permanente de la Organización hizo a su informe anual.
3. *Tomar nota* de los comentarios y observaciones formulados por los gobiernos respecto del informe de la Comisión y de las medidas que están adoptando para fortalecer la promoción, observancia y defensa de los derechos humanos en sus respectivos Estados.
4. *Reiterar* a la Comisión las solicitudes contenidas en los párrafos dispuestos 14, 15, 17 y 18 de la resolución AG/RES. 1044 (XX-0/90), y solicitar a dicho órgano la presentación de un informe de progreso sobre la ejecución de los mismos en el vigésimo segundo período ordinario de sesiones de la Asamblea General.
5. *Recomendar* a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que de conformidad con el artículo 63, literales (e) y (h) de su Reglamento, destaque en sus informes anuales los progresos alcanzados y las dificultades que han existido en la efectiva observancia y defensa de los derechos humanos.
6. *Exhortar* a los Estados miembros para que, conforme a su Constitución y sus leyes, acopian, en lo pertinente, las recomendaciones contenidas en el informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
7. *Reiterar* a los gobiernos de los Estados miembros la recomendación para que continúen otorgando las garantías y facilidades necesarias a las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y a sus integrantes, a fin de que desarrollen libremente sus actividades dentro del respeto de las normas constitucionales de cada país.
8. *Reiterar* lo establecido en la resolución AG/RES. 1043 (XX-0/90) "Consecuencias de actos de violencia perpetrados por grupos armados irregulares en el goce de los derechos humanos" en el sentido de que la Comisión, al informar sobre la situación de los derechos humanos en los Estados americanos, haga referencia a las acciones de grupos armados irregulares que pudieran operar en tales Estados.

9. *Reiterar* su interés en la pronta aprobación del proyecto de Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, bajo estudio del Consejo Permanente, reafirmando que dicha práctica es una afrenta a la conciencia de los pueblos del Hemisferio.

10. *Reiterar* que la práctica de la tortura constituye un crimen de lesa humanidad que atenta contra la dignidad y naturaleza de la persona humana.

11. *Recomendar* a los Estados miembros que no son partes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", de 1969, que ratifiquen o adhieran a dicho instrumento; asimismo, en el caso de aquellos Estados que aún no lo hayan hecho, que acepten la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para recibir y examinar comunicaciones interestatales de acuerdo con el artículo 45, párrafo 3, de la Convención y reconozcan la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de conformidad con lo establecido en el artículo 62, párrafo 2, de la Mencionada Convención.

12. *Estimular* a la Convención Interamericana de Derechos Humanos para que continúe su importante labor de promoción y defensa de los derechos humanos en el Hemisferio y brindarle el apoyo que requiera para tan destacada y relevante función.

AG/RES. 1102 (XXI-0/91)

ANNUAL REPORT OF

THE INTER-AMERICAN COMMISSION OF HUMAN RIGHTS, 1990

(Resolution adopted at the tenth plenary session,

held on June 7, 1991)

The General Assembly,

Having seen the Annual Report of the Inter-American Commission on Human Rights submitted to the General Assembly pursuant to Article 41. g of the American Convention on Human Rights (CP/doc. 2144/91) and the observations and recommendations of the Permanent Council on that report (AG/doc. 2709/91), as well as the presentation made by the Chairman of the Commission; and

Considering:

That, in the Charter of the Organization of American States, the member states have declared that respect for the fundamental rights of the individual, without distinction as to race, nationality, creed, or sex, is one of the basic principles of the Organization;

That the main purpose of the Inter-American Commission on Human Rights is to promote the observance and defense of human rights in all the member states;

That Article 53.f of the Charter of the Organization of American States establishes that one of the powers of the General Assembly is to consider the observations and recommendations presented by the Permanent Council with regard to the reports of the organs and entities of the Organization, in accordance with Article 90.f of the Charter;

That, under Article 52 of the Charter, the Inter-American Commission on Human Rights is one of the organs by means of which the Organization accomplishes its purposes; and

That the effective exercise of representative democracy is the best guarantee for the full observance of human rights,

Resolves:

1. *To take note of the Annual Report of the Inter-American Commission on Human Rights (CP/doc. 2144/91).*

2. *To welcome and transmit to the Inter-American Commission on Human Rights the observations and recommendations of the Permanent Council of the Organization on the Commission's Annual Report.*

3. *To take note of the comments and observations made by the governments on the Commission's Report and of the measures that they are adopting to strengthen the promotion, observance, and protection of human rights in their respective countries.*

4. *To reiterate to the Commission the mandates contained in operative paragraphs 14, 15, 17, and 18 of resolution AG/RES. 1044 (XX-O/91) and to request that it present a progress report on the execution of those mandates to the General Assembly at its twenty-second regular session.*

5. *To recommend that, pursuant to Article 63, paragraphs (e) and (h), of its Regulations, the Inter-American Commission on Human Rights stress in its annual reports the progress achieved and the difficulties that have existed in the effective observance and defense of human rights.*

6. *To urge the member states to comply with the recommendations contained in the Annual Report of the Inter-American Commission on Human Rights, in accordance with their Constitution and Laws.*

7. *To reiterate to the member state governments the recommendation that they continue to extend the necessary guarantees and facilities to nongovernmental human rights organizations and their members, so that they may conduct their activities freely, in keeping with the constitutional norms of each country.*

8. *To reiterate the provisions of resolution AG/RES. 1043 (XX-0/90), Consequences of Acts of Violence Perpetrated by Irregular Armed Groups in the Enjoyment of Human Rights, to the effect that, in reporting on the status of human rights in the American states, the Commission include reference to the action of irregular armed groups that may be operating in such states.*

9. *To reiterate its interest in the prompt approval of the draft Inter-American Convention on the Forced Disappearance of Persons, which is under study in the Permanent Council, reaffirming that the practice in question is an affront to the conscience of the American peoples.*

10. *To reiterate that the practice of torture is a crime against humanity and violates the dignity and nature of the human person.*

11. *To recommend to those member states that are not parties to the 1969 American Convention on Human Rights, "Pact of San José, Costa Rica," that they ratify or accede to that instrument and in the case of states that have not done so, that they accept the competence of the Interamerican Commission on Human Rights to receive and examine international communications pursuant to Article 45, paragraph 3, of the Convention, and that they recognize the binding jurisdiction of the Inter-American Court of Human Rights, in accordance with Article 62, paragraph 2, of the aforementioned Convention.*

12. *To encourage the Inter-American Commission on Human Rights to continue its important task of promoting and defending human rights in the hemisphere, and to provide it with the support it needs to carry out that eminently important function.*

AG/RES. 1112 (XXI-0/91)

FORTALECIMIENTO DE LA OEA EN MATERIA
DE DERECHOS HUMANOS

(Resolución aprobada en la undécima sesión plenaria,
celebrada el 8 de junio de 1991)

La Asamblea General,

Visto el informe del Consejo Permanente sobre fortalecimiento de la OEA en materia de derechos humanos (AG/doc.2706/91);

Considerando que las resoluciones AG/RES. 986 (XIX-0/89) y AG/RES. 1060 (XX-0/90) encomendaron al Consejo Permanente la elaboración de un Programa de Acción sobre las bases acordadas en la resolución Fortaleci-

miento de la OEA (RTM/FOEA/RES.1/89), aprobada por la Reunión de Trabajo de Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados miembros de la Organización;

Recordando que la resolución RTM/FOEA/RES.1/89 antes citada declaró que "la promoción y defensa de los derechos humanos, basadas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, realizadas conforme a los instrumentos interamericanos, vigentes y a través de los órganos específicos existentes son tareas prioritarias de la Organización que contribuyen a la paz y a la estabilidad del Hemisferio, promueve la democracia representativa dentro del principio de respeto de no intervención, fomentan la solidaridad americana y cuentan con el firme respaldo político de nuestros gobiernos;

Reafirmando que los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales constituyen un todo indisoluble cuya consolidación requiere condiciones nacionales e internacionales propicias al desarrollo;

Reiterando que la democracia representativa constituye la mejor garantía para la vigencia de los derechos humanos y es el firme sustento de la solidaridad entre los Estados del Hemisferio;

Recordando lo dispuesto por la resolución AG/RES. 1043 (XX-0/90), "Consecuencias de actos de violencia perpetrados por grupos armados irregulares en el goce de los derechos humanos";

Expresando que la manipulación del tema de derechos humanos para fines políticos constituye una grave desnaturalización del sistema jurídico internacional de promoción y protección de los derechos humanos y es un obstáculo, más que una ayuda, para lograr la efectiva vigencia de éstos, y

Teniendo en cuenta que en virtud de lo dispuesto en el artículo 53 (a) de la Carta corresponde a la Asamblea General decidir, entre otros aspectos, la acción y la política generales de la organización en materia de derechos humanos, sin mengua de las competencias de la Comisión y de la Corte Interamericanas de Derechos Humanos conforme a la Carta, la Convención Americana de Derechos Humanos y demás instrumentos normativos,

Resuelve:

1. *Tomar nota* con satisfacción del informe presentado por el Consejo Permanentemente sobre fortalecimiento de la OEA en materia de derechos humanos.
2. *Señalar* que el fortalecimiento de la OEA en materia de derechos humanos supone no sólo el diseño de medidas concretas orientadas a dicho propósito

sino el concurso que puedan brindar los Estados miembros y la decisiva acción que emprendan los órganos responsables para su puesta en práctica.

3. *Adoptar* el siguiente Programa de Acción:

**PROGRAMA DE ACCIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LA OEA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS**

Recomendaciones a los Estados miembros

- a. *Reiterar* la exhortación a los Estados miembros para que ratifiquen o adhieran a los instrumentos jurídicos interamericanos sobre protección y defensa de los derechos humanos.
- b. *Reiterar* el pedido a los Estados miembros de aceptar la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para los efectos previstos en el artículo 45 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como de aceptar la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
- c. *Recomendar* a los Estados miembros que reafirmen su compromiso con la protección de los derechos humanos cooperando plenamente con los esfuerzos de la Comisión y de la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, brindando a dicha Comisión apoyo efectivo y facilidades, en el ejercicio de sus competencias específicas, para la realización de sus visitas in situ.
- d. *Recomendar* a los Estados miembros que no lo hubieren hecho que estudien la conveniencia de constituir órganos nacionales que promuevan la observancia y defensa de los derechos humanos, como por ejemplo, el Procurador de Derechos Humanos.
- e. *Exhortar* a los Estados miembros a que reafirmen la condena a las actividades terroristas y su compromiso de luchar contra dicha actividad ilícita dentro del pleno respeto a las normas que caracterizan al estado de derecho.
- f. *Exhortar* a los Estados miembros a proporcionar información sobre su legislación en materia de derechos humanos, las modificaciones a la misma y los mecanismos internos de protección de tales derechos.
- g. *Exhortar* a los Estados miembros que son Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos a que proporcionen información sobre las distintas modalidades de aplicación de dicha Convención en sus respectivas jurisdicciones.
- h. *Solicitar* a los Estados miembros que proporcionen información periódica sobre las medidas que adopten en materia de derechos humanos, así como sobre

las circunstancias que inciden en la efectiva vigencia de esos derechos en su territorio.

Recomendaciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

- a. *Incluir* en su informe anual un capítulo sobre el estado general de los derechos humanos en el Hemisferio, para lo cual tendrá en cuenta la información que suministren los Estados miembros.
- b. *Incluir*, regularmente, en sus informes anuales un panorama general sobre la vigencia de algún derecho específico en el Hemisferio, o sobre alguna situación que incida en la vigencia de los derechos humanos que la Asamblea General designe como de interés prioritario. En la preparación de este informe, entre otras fuentes, se tomará también en cuenta la información suministrada por los Estados miembros.
- c. *Que, al informar* sobre la situación de los derechos humanos en los Estados miembros, haga referencia a las acciones de grupos armados irregulares y el efecto adverso que dichos actos provocan en el goce de tales derechos.
- d. *Efectuar* un estudio sobre el impacto que produce en la promoción, protección y goce de los derechos humanos, la persistencia de condiciones económicas desfavorables que inciden negativamente en los niveles de vida de los países en desarrollo de la región.
- e. *Hacer referencia*, en su informe anual, a las actividades que realiza en materia de promoción y difusión de los derechos humanos en los Estados miembros.
- f. *Continuar realizando* los estudios encomendados mediante anteriores resoluciones de la Asamblea General.
- g. *Prestar especial atención e informar* sobre la observancia de los derechos de los menores, de la mujer, de los minusválidos y de las minorías, así como sobre la discriminación racial en el Hemisferio.
- h. *Prestar*, igualmente, particular atención a la observancia de los derechos humanos de las personas en situación migratoria irregular, así como a la situación de los refugiados, desplazados y a los derechos, en general, de los trabajadores migratorios.
- i. *Establecer*, en forma regular o periódica, mecanismos de consulta y coordinación con la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
- j. *Propiciar* reuniones gubernamentales oficiales vinculadas a la protección y defensa de los derechos humanos en los Estados miembros de la OEA.

- k. *Incrementar* sus actividades de capacitación y asistencia técnica en materia de derechos humanos y para ello apoyar y colaborar, en la medida de lo posible, en las actividades que llevan a cabo el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y otras organizaciones que buscan la promoción de tales derechos.

Recomendaciones a otros órganos de la Organización

- a. *Recomendar* a la Secretaría General, al Consejo Permanente y a la Comisión Preparatoria de la Asamblea General que en la elaboración del programa-pre-supuesto de la Organización se otorgue prioridad a la asignación de recursos suficientes a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que puedan cumplir sus funciones a cabalidad, dentro de la disponibilidad de recursos y sin perjuicio de otras actividades prioritarias en ejecución.
- b. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 76 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y con la finalidad de mejorar y ampliar el sistema de protección de estos derechos, encomendar al Consejo Permanente que estudie la posibilidad y conveniencia de *preparar*, para la consideración de la Asamblea General, propuestas de enmienda a la citada Convención, para lo cual tendrá en cuenta las observaciones que la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos formulen al respecto.
- c. *Solicitar* al Consejo Permanente que realice un estudio tendiente a adoptar e incrementar mecanismos de colaboración jurídica entre los Estados miembros para combatir, con pleno respeto a las normas del estado de derecho, las acciones de grupos armados irregulares y grupos terroristas y sus efectos sobre los derechos humanos en la población y sobre la estabilidad de las instituciones democráticas del Hemisferio.
- d. *Recomendar* al Comité Jurídico Interamericano que en su Curso Anual de Derecho Internacional programe conferencias y seminarios sobre el sistema interamericano de derechos humanos.

AG/RES. 1116 (XXI-0/91)

APOYO AL PROCESO DEMOCRÁTICO
DE LA REPÚBLICA DE SURINAME

(Resolución aprobada en la undécima sesión plenaria,
celebrada el 8 de junio de 1991)

La Asamblea General,

Considerando:

Que a pedido del Gobierno de la República de Suriname se envió una misión de la OEA para observar las elecciones generales en ese Estado miembro;

Que el 25 de mayo de 1991 se realizaron en Suriname elecciones generales que transcurrieron en un clima de paz, orden y respeto a la libre manifestación de la voluntad popular soberana, y

Que la promoción y consolidación de la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención es uno de los propósitos esenciales de la Organización de los Estados Americanos,

Resuelve

1. Felicitar a las autoridades y al pueblo de Suriname por la corrección de la contienda electoral del 25 de mayo de 1991.
2. Congratularse con el Secretario General por el pleno éxito de la reciente misión de observación electoral de la OEA en Suriname, que fue enviada a pedido del Gobierno de ese Estado miembro.
3. Reafirmar su apoyo a la vigencia de las instituciones democráticas en Suriname y su permanente interés por el estrechamiento de los vínculos que unen a Suriname, como país independiente y soberano, con la comunidad hemisférica.

1991]

Asamblea General de la O.E.A.

229

AG/RES. 1117 (XXI-0/91)

APOYO AL PROCESO DEMOCRÁTICO
EN LA REPÚBLICA DE HAÍTI

(Resolución aprobada en la undécima sesión plenaria,
celebrada el 8 de junio de 1991)

La Asamblea General,

Recordando sus resoluciones AG/RES. 824 (XVI-0/86), mediante la cual se creó el Fondo Interamericano de Asistencia Prioritaria a Haití, y AG/RES. 1048 (XX-0/90), "Apoyo al proceso democrático en la República de Haití";
Tomando Nota del informe del Secretario General sobre el apoyo de la Organización al proceso electoral de Haití (AG/doc.2671/91);

Considerando la apremiante necesidad de apoyar la consolidación de la democracia en Haití y, al respecto, el informe oral del Secretario General ante el Consejo Permanente en sesión celebrada el 14 de febrero de 1991, y

Reafirmando que la promoción y consolidación de la democracia con respeto al principio de no intervención, es uno de los propósitos esenciales de la Organización de los Estados Americanos,

Resuelve:

1. Felicitar al pueblo de Haití por el éxito de sus elecciones.
2. Expresar su satisfacción por la contribución efectiva de la OEA en dicho proceso electoral y encomiar la colaboración activa de la OEA/CARICOM en el mismo.
3. Reafirmar su solidaridad con el pueblo de Haití y su apoyo por la determinación de éste de reforzar su sistema democrático sin injerencias externas y en ejercicio de la soberana expresión de su voluntad.
4. Prestar toda la asistencia posible a los programas de emergencia emprendidos por el gobierno haitiano en colaboración con organismos e instituciones regionales tales como CARICOM, el Grupo de Río y el Banco Interamericano de Desarrollo, así como con el sistema de las Naciones Unidas.
5. Reconstituir el Fondo Interamericano de Asistencia Prioritaria a Haití, con vigencia inmediata por un período de cinco años, utilizando recursos derivados de lo siguiente:

- fondos no obligados a ser identificados por el Secretario General,

- aportes voluntarios financieros y técnicos u otras contribuciones de Estados miembros y Estados observadores permanentes, y
- contribuciones de instituciones donantes privadas.

6. *Autorizar* al Secretario General para administrar el Fondo de conformidad con el artículo 86 de las Normas Generales para el Funcionamiento de la Secretaría General y presentar informes trimestrales sobre su utilización al Consejo Permanente, así como un informe exhaustivo al vigésimo segundo período ordinario de sesiones de la Asamblea General.

7. *Determinar* que las cuotas de Belice y Guyana al Fondo Regular para 1991 sean transferidas al Fondo Interamericano de Asistencia Prioritaria a Haití.

AG/RES. 1130 (XXI-0/91)

INFORME ANUAL DE

LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, 1990

*(Resolución aprobada en la undécima sesión plenaria,
celebrada el 8 de junio de 1991)*

La Asamblea General,

Vistos el informe anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CP/dox. 2146/91), así como las observaciones y recomendaciones del Consejo Permanente sobre el informe anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (AG/doc. 2682/91), y la presentación que de éste hiciera el Presidente de la Corte, y

Considerando:

Que el artículo 53 (f) de la Carta de la Organización de los Estados Americanos establece como atribución de la Asamblea General la consideración, entre otras, de las observaciones y recomendaciones que eleve el Consejo Permanente de conformidad con el artículo 90 (f) de la Carta sobre los informes de los órganos y entidades de la Organización;

Que el artículo 65 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que la Corte someterá a la consideración de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos un informe sobre su labor en el año anterior, y

Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos presentó su informe anual al Consejo Permanente y éste ha remitido a la Asamblea General las observaciones y recomendaciones al mismo,

Resuelve:

1. *Tomar nota* del informe anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
2. *Acoger y transmitir* a la Corte Interamericana de Derechos Humanos las observaciones y recomendaciones que el Consejo Permanente de la Organización hizo al informe anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
3. *Exhortar* a los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos que aún no lo hayan hecho a que ratifiquen o adhieran a la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", así como a que reconozcan la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de conformidad con lo establecido en el artículo 62, párrafo 2, de la mencionada Convención.
4. *Reiterar* a los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos la exhortación a que ratifiquen o adhieran a los demás instrumentos interamericanos en materia de derechos humanos.
5. *Dar el apoyo* financiero y funcional necesario a la Corte para que pueda llevar a cabo las altas funciones que le ha asignado la Convención Americana sobre Derechos Humanos y cumpla con lo que al efecto establece su Estatuto.
6. *Expresar* su reconocimiento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la labor desarrollada en el período que comprende este informe, e instarla a que continúe con su importante función.

AG/RES. 1130 (XX-0/91)
ANNUAL REPORT OF

THE INTER-AMERICAN COURT OF HUMAN RIGHTS, 1990

(Resolution adopted at the eleventh plenary session,
held on June 8, 1991)

The General Assembly,

Having seen the Annual Report of the Inter-American Court of Human Rights (CP/doc. 2146/91) as well as the Permanent Council's observations and recommendations on the Annual Report of the Inter-American Court of Human Rights (AG/doc. 2682/91), and the presentation of that report by the Court's President; and

Considering:

That according to Article 53.f of the Charter of the Organization of American States the General Assembly has the power to consider, inter alia, the observations and recommendations presented by the Permanent Council with regard to the reports of the organs and entities of the Organization, in accordance with Article 90.f of the Charter;

The Article 65 of the American Convention on Human Rights provides that the Court shall submit a report on its work during the previous year for consideration by the General Assembly of the Organization of American States; and

That the Inter-American Court of Human Rights has presented its Annual Report to the Permanent Council, which has forwarded its observations and recommendations thereon to the General Assembly,

Resolves:

1. To take note of the Annual Report of the Inter-American Court of Human Rights.
2. To welcome the observations and recommendations made by the Permanent Council of the Organization on the Annual Report of the Interamerican Court of Human Rights and to transmit them to that Court.
3. To urge the member states of the OAS that have not yet done so to ratify or accede to the American Convention on Human Rights "Pact of San José, Costa Rica," and to recognize the binding jurisdiction of the

Inter-American Court of Human Rights in accordance with Article 62.2 of that Convention.

4. To again urge the States Parties to the American Convention on Human Rights to ratify or accede to the other inter-American instruments in the area of human rights.

5. To give the Court the financial and functional support it needs to perform the high functions assigned to it in the American Convention on Human Rights and to comply with the purposes to that effect established in its Statutes.

6. To express its recognition to the Inter-American Court of Human Rights for the work done in the period covered by this report, and to urge it to continue to perform its important functions.

DOCUMENTOS

THE IMPLICATIONS OF THE "COMMON CONCERN OF MANKIND" CONCEPT ON GLOBAL ENVIRONMENTAL ISSUES*

During the discussion at the international fora on climate change, the new concept of "Common concern of mankind" was referred to on several occasions. It was first referred to expressis verbis in the UN General Assembly Resolution 43/53 which in its operative Paragraph 1 "Recognizes that climate change is a common concern of mankind, since climate is an essential condition which sustains life on earth". During 1989 this concept was referred to in several international documents, declarations, decisions and resolutions (Report of 1989 Ottawa meeting, 1989 Noordwijk Declaration, UN General Assembly Resolution 44/207 of December 1989, IPCC First Assessment Report - Overview, August 1990, Declaration of the UNGA Special Session on Development 1990).

The concept of "Common concern of mankind" is closely related to the other international concepts such as "common interest", "global commons", "intergenerational equity /responsibility/rights" and "common heritage of mankind", from which it originally evolved at the General Assembly in 1988. Some elements of the above quoted concepts are finding their reflections in the "common concern of mankind".

There are however, differences between these concepts. It is recommended in the document: Possible Elements for inclusion in a Framework Convention on Climate Change (IPCC Overview - Annex 1) that the Climate Change Convention would contain a preamble which might seek to address among others, the following item: "recognition that climate change is a common concern of mankind, affects humanity as a whole and should be approached within a global framework, without prejudice to the

* Note of the Executive Director of UNEP, Dr. Mostafa K. Tolba, to the Group of Legal Experts meeting, Malta, December 13-15, 1990

sovereignty of states over the airspace superadjacent to their territory as recognized under international law". Taking into account this recommendation it is very important that the concept of "common concern of mankind" is further elaborated to make its contents and scope understandable and clear; it is also important to make sure how this concept can be interpreted in the terms of rights and obligations of states in the process of its implementation. It is understandable that since it is a new concept in international law and international relations it will develop further in the near future and its interpretation given today, will evolve. However, before the negotiations on climate convention start it is needed to identify the main elements of this concept. That is why I would appreciate your contribution to the elucidation of this concept which appears to have significant implications for the planned February 1991 negotiations on the climate change convention.

Please find attached below, note from the Secretariat on this subject which gives detailed information regarding the concept of common concern of mankind.

Note from the Secretariat

1. In the course of the current decade we are up against a new range of global challenges: ozone layer depletion, global climate change, conservation of biological diversity being some of them. The global challenges proved to be difficult, if not impossible, to deal with on the basis of classic postulates of inter-state reciprocity of advantages state-to-state liability, and traditional legal standing.

2. The world community is being faced with the necessity of prompt political and legal responses to cope with global environmental problems, which put at stake the very survival of human civilization, its present and future generations.

3. Some of the possible responses can be found in newly emerged concepts of global commons, common heritage of mankind, intergenerational equity, ecological security. The most recent concept which is appropriate in this context is the concept of common concern of mankind.

4. The concept of "common concern of mankind" is deeply rooted in such concepts as common interest, global commons, common heritage of mankind and closely linked to the concept of inter-generational rights. Indeed, the significant controversies and conflicting interpretations which have appeared during application of the 'common heritage' approach in different areas like the law of the sea and space law inspired governments

to choose another derivative, i.e. common concern, to serve concerted actions in equitable sharing of burdens in environmental protection, rather than of benefits from exploitation of the environmental wealths.

5. "Common concern" concept has at least two important facets: spatial and temporal. Spatial aspect means that common concern implies co-operation of all states on matters being similarly important to all nations, to the whole international community. Temporal aspect arises from long-term implications of major environmental challenges which affect the rights and obligations not only of present but also of future generations. Indeed, a complex interaction of natural environmental factors preconditions a prolonged time-lag between the cause and effect of many human activities. For example, a complete revelation of casual relationship between chlorofluorocarbons emissions and ozone layer destruction or between green house gases emissions and global warming can take the lifetime of several generations.

6. Both facets of the "common concern" conception can be traced in the positive environmental law. The 1972 World Heritage Convention (preamble refers to "the heritage of all the nations of the world", while the 1973 Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna (preamble) recognizes that "wild fauna and flora in their many beautiful and various forms are an irreplaceable part of the natural systems of the earth which must be protected for this and the generations to come. "One more aspect of the "common concern" is a social dimension. Common concern presumes involvement of all structures and sectors of the society into the process of combating global environmental threats, i.e. legislative, judicial and governmental bodies together with private business, non-governmental organizations, citizen groups. This relatively new phenomenon has been manifested via green movements, comprehensive environmental policies introduced by governments and even market forces, but it needs to be supported with stronger legal guarantees.

7. The fundamentals of the "common concern" concept can be traced in various resolutions/declarations of the UN General Assembly. Back in 1972 the Stockholm Declaration on Human Environment expressly referred to the "common good of mankind" (pr. 18). In 1974 the UN Charter on Economic Rights and Duties stressed that the protection and preservation of the environment for present and future generations were the responsibility of all States (art. 30). In 1980 the UN General Assembly adopted a resolution on the historic responsibility of States to protect the environment for the benefit of present and future generations. In 1989 in its resolution 44/

228 on convening a UN Conference on Environment and Development the General Assembly pointed out that environmental problems in their global dimension required action at all levels, involving the commitment and participation of all countries.

8. In December 1988 the UN General Assembly in its resolution 43/53 explicitly stated that climate change was a common concern of mankind. This was partially a way out of the controversies related to the common heritage of mankind concept, which had initially been introduced by Malta as a basis for this resolution. At the same time, the resolution wisely indicated a new path to achieving a consolidated set of legal obligations to protect global climate. A new formula, though well originated in the past, was enthusiastically welcomed in other international fora. In the report of 1989 Ottawa Meeting of Legal and Policy Experts it was attempted to re-formulate this concept by defining the atmosphere as a "common resource of vital interest to mankind". Meanwhile the 1989 Noordwijk Declaration expressly stated that "climate change is a common concern of mankind". In December 1989 the UN General Assembly recalled that climate change had been recognized as a common concern of mankind (UNGA resolution 44/207). In August 1990 the Fourth session of the Intergovernmental Panel on Climate Change adopted the IPCC First Assessment Report Overview, where recommended as an urgent international action the elaboration of an international convention on global climate, which would serve as a "firm basis for effective co-operation to act on green house gas emissions and adapt to any adverse effects of climate change". The report stressed that "the Convention should recognize climate change as a common concern of mankind". The more widely application of such new notion as "common concern of mankind" by the world community undoubtedly appeals to all international agencies to assist to this growing international consensus, which in the long run might reach an 'opinio juris' on the applicability of the concept to a wide range of global environmental matters.

9. The concept of common concern of mankind acquires always more attractiveness, since it liberates from controversial treatment of common heritage objects. The Declaration of the UNGA Special Session on Development Co-operation, adopted on 1 May 1990 (para.29) stated: "The current threat to the environment is the common concern of all. All countries should take effective measures for the protection and enhancement of the environment in accordance with their respective capacities and responsibilities, and taking into account the specific needs of developing countries. As the major sources of pollution, the developed countries have the main responsibility for taking appropriate measures urgently. The economic

growth and development of developing countries are essential in order to address problems of the degradation and protection of the environment. New and additional financial resources will have to be channelled to developing countries. Effective modalities for favorable access to, and transfer of, environmentally sound technologies, in particular to developing countries, including on concessional and preferential terms, should be examined". To certain extent these provisions of the Declaration might serve as a tentative description of the "common concern" concept, since it includes such important aspects as the current paradigm of sustainable development, North/South interrelatedness, subsequent rights and obligations.

10. "Common concern of mankind" about environmental deterioration, which implies relevant concern of the world community as a whole, has also been manifested at the regional level. International practice gives examples of regional application of the "common concern" notion. In some instances it has been applied to such paramount issues as the "balance between socioeconomic development and environmental protection and conservation through sound management of natural resources and control of environmental impacts" (see "Declaration of Brasilia", issued by Ministers of State in charge of environmental management and the representatives of the countries participating in the Sixth Ministerial Meeting on the Environment in Latin America and the Caribbean, Brasilia, March 1989, UN Doc. A/44/683, 25 Oct. 1989). In another case the States expressed their "common interest for the sustainable development" of the region and consciousness that the ecological heritage must be preserved through the rational use of the resources of the region, so that present and future generations may benefit from this legacy of nature" (The Amazon Declaration, adopted on 6 May 1989 by the Presidents of the States Parties to the Treaty for Amazonian Co-operation, UN Doc. A/44/275 E/1989/679, 15 May 1989). The Twentieth South Pacific Forum expressed regional concern "about the possible effects on island countries of rising sea levels resulting from global warming, and emphasized the importance of a regional approach to environmental matters. It agreed that Forum members take decisive action to draw world attention to the way the environmental problem affected the South Pacific, and to represent regional views at appropriate international gatherings, possibly including, by way of a resolution, in the United Nations General Assembly" (Final Communiqué of the Twentieth South Pacific Forum, July 1989, UN Doc. A/44.463, 15 Aug. 1989).

11. The evidence that the environmental concern has been growing as the common concern can be found in a number of recent declarations adopted by different political groups of countries. The Group of 77 in the 1989 Cara-

cas Declaration, though without explicitly referring to "common concern", expressed in clear terms the philosophy of global interdependence, which underlies the common concern concept: "This should be in keeping with contemporary reality, in particular the full recognition of the compulsions of global interdependence. Today's problems can be solved only by nations acting together, not by each of them going its own way. No country or group of countries, however powerful it may be, can isolate itself from the consequence of global social, economic and environmental problems or succeed, without detriment to its own interest, in shifting the burden of solving these problems to the weaker members of the international community" (Caracas Declaration of the Ministers of Foreign Affairs of the Group of 77 on the occasion of the twenty-fifth anniversary of the Group, June 1989, UN Doc. A/44/361, 30 June 1989).

12. The non-aligned countries at their Ninth Conference (Belgrade, September 1989) adopted the Declaration where they stated: "...as we approach the 21st century, protection of the environment has emerged as a major global concern, dramatically emphasizing the growing interdependence of the world. This calls for urgent co-operative measures and global compact ensuring a sustainable and environmentally sound development. Such cooperation should take place within the overall framework of the objective of reviving growth, creating a healthy, clean and sound environment and meeting the basic needs of all. Multilateral approaches need to emphasize supportive measures, while seeking to redress existing asymmetries. The international community must set aside net additional financial resources for environmental cooperation and facilitate developing countries' access to environmentally safe technologies" (UN Doc. A/44/551 S/20870, 29 Sept. 1989).

13. Another large political grouping, the Commonwealth countries, which represents a quarter of the world's population and a broad cross-section of global interest, adopted at their Langkawi Summit (October 1989) a Declaration on Environment where they expressed their deep concern "at the serious deterioration of the environment and the threat this poses to the well-being of present and future generations". The Declaration proceeded that "the current threat to the environment, which is a common concern of all mankind, stems essentially from past neglect in managing the natural environment and resources" (UN Doc. A/44.673, 25 October 1989).

14. In the 1989 Hague Declaration 24 heads of states and environmental ministers of wide geographical representation, inspired with seriousness of

global climate problem, not only expressly referred to the UNGA resolution 43/53 formula, which recognized climate change as a common concern of mankind, but also stressed "the right to live in dignity and a viable global environment, and the consequent duty of the community of nations vis-a-vis present and future generations..." (UN Doc. A/44/340 E/1989/120, 22 June 1989).

15. Another action-oriented Declaration has emerged at the Arch Summit meeting of seven major industrial nations (July 1989). The basics for the declaration were the great concern about the growing pollution of air, lakes, rivers, oceans and seas; acid rain, dangerous substances; and the rapid desertification and deforestation, which endangers species and undermines the well-being of individuals and societies. The declaration called for joint actions to achieve the common goals of preserving a healthy and balanced global environment in order to meet shared economic and social objectives and to carry out obligations to future generations (UN Doc. A/C.2/44/11, 6 December 1989).

16. A general approach to the concept of common concern which has been introduced in a number of international documents, represents at the current stage a holistic paradigm aimed mainly at the global climate issue. The paradigm needs in-depth conceptual elaboration to expand its application to all major environmental challenges.

17. Certain common elements can be tentatively deduced from the analysis of the international documents quoted above. First, they give evidence that the concept of "common concern" serves as consolidating factor for East-West-North-South environmental dialogue in spite of existing geographical, economic and political differences. It can also be stated that the common concern has acquired global character (not excluding its regional manifestations). The obligation to co-operate which stems from the concept should involve all countries and all levels of concerted actions. The ecological inter-dependence, which transpires world community, has obtained not only spatial, but also temporal (inter-generational) parameters. Possible actions, stemming from the common concern, require innovative solutions (Arch Declaration), new approaches and even introduction of new principles of international documents limit themselves by merely expressing a "concern" over environmental deterioration.

18. At the current stage the concept of "common concern" has created only a general framework for possible legal developments to withstand global environmental challenges. This means that many unanswered questions begin to arise. Firstly, the individual elements of the "common

concern of mankind" notion need to be translated into legal terms. From the above mentioned normative material one may deduce that the first element "common" could be interpreted as analogous to a better known concept of "common interest", i.e. as referring to all members of the world community, and to the states in the first place. The analogy between "common concern" and "common interest" raises the question of hierarchy of different categories of interests and concerns. The superiority of common interest of the world community over the interests of individual states or even over the sum of such interests has been widely accepted (Kiss A. Droit International de L'Environnement, 1989). The International Law Commission in its draft Articles on State Responsibility recognized the superiority of fundamental interests of the international community, stating that the breach of an international obligation so essential for the protection of such interests constitutes an international crime. Moreover article. 19 of the draft stated that "an international crime may result, inter alia, from... a serious breach of an international obligation of essential importance for the safeguarding and preservation of the human environment, such as prohibiting massive pollution of the atmosphere or of the seas" (Y.B. Int'l L. Comm'n, 1979). A similar superiority may be easily attributed to the "common concern of mankind".

19. The "concern" element presupposes nothing more than that the states are objectively pushed towards joint and concerted actions. But since the UNGA resolutions 43/53 and 44/207 link "common concern" in the global climate field to possible elaboration of an international convention, the "concern" becomes a basis for specific legal obligations.

20. "Mankind" is the most controversial element of the concept. On the one hand, the legal impersonalization of mankind can be executed through the generally acknowledged subjects of international law - the states. Here it would be expedient to refer to the idea of 'expanded legal standing' on behalf of mankind by the states not directly injured with environmental disturbances, which was recently introduced by F.L. Kirgis Jr. (AJIL, vol. 84, No.2, 1990, p. 525-530). The author's arguments deserve profound analysis and further elaboration. Meanwhile this approach does not cover all possible implications, since it limits itself with vindication for collective interest. Thus, it does not illuminate the temporal (inter-generational) facet of the "common concern of mankind" concept, and therefore it gives no reply on how to institutionalize legal representation of future generations. The current vision of "mankind" does not confine to inter-state system. It includes new 'actors' or 'factors' of international decision-making like non-governmental organizations (some of them have been already well

established in the sphere of international environmental protection); citizen groups, scientific community, public opinion.

21. The source material to which one can address to study the substance and possible legal implications of the concept of "common concern of mankind" is contained basically in the international resolutions and declarations. A disputable issue of normative significance of the UN resolutions (see Sloan B. General Assembly Resolutions Revisited. The British Y.B. Int'l L., 1987, p.31-151), which led a great number of lawyers to the idea of 'soft law' can be evaded by inclusion into a possible global climate convention of a provision giving to global climate the legal status of a matter of common concern of mankind.

22. A number of authoritative international lawyers (W.P. Gormley, Judge R.S. Pathak, A.A. Cançado Trindade) have decisively linked environmental protection to the human rights issue. Indeed, from the 1972 Stockholm Declaration the environmental protection has been always seen in human dimension. This indicates another possibility to consider the common concern concept as applicable to protection of fundamental human rights, in particular, the right to healthy and safe environment. Yet another aspect to be considered are the inter-generational rights (i.e. temporal facet of the common concern of mankind). A number of scholars have already included these rights into the category of 'collective' or 'solidarity' rights. These 'third generation' human rights were described, inter alia, as rights of every human being and of all human beings taken collectively UNESCO Symposium on New Human Rights: The Rights of solidarity, Mexico City, 1980, p.30).

23. One more implication of temporal aspect of the "common concern of mankind" concept consists in the fact that many environmental effects manifest in a long time manner, what makes their predictability and timely mitigation a rather complicated and low-reliable matter. This again reinforces an already established assumption of vital importance and preference of precautionary approach to any activity which may seriously affect common environmental concerns.

24. Along with new set of legal rights and obligations the concept of "common concern of mankind" triggers further institutional developments. The first step would be an enhanced use of the existing international institutions. This trend is easily detectable in recent international law developments. Both the 1986 Convention on Early Notification of a Nuclear Accident and the 1986 Convention on Assistance in the Case of a Nuclear Accident or Radiological Emergency upgrade the participation of

the IAEA in submitting notifications and other relevant information and in rendering assistance. The principles of atmosphere protection, adopted by the 1988 Toronto Conference "The Changing Atmosphere: Implications for Global Security", stress the importance of the competent international organizations involvement into the process of notification on serious anthropogenic interference in the atmosphere. The Statement issued by the 1989 Ottawa Meeting of Legal and Policy Experts refers to a similar participation of competent international organizations.

25. Another step could be the assignment of new functions to the existing bodies. An assumed superiority of the "common concern of mankind" over other concerns and interests conditions strict observance of the international legal rules which would protect and vindicate such superiority. The existing UNEP monitoring and information systems (GEMS, GRID, INFOTERRA) could be adopted to monitor compliance with international obligations. The existing systems could also be utilized for an even more ambitious task: evaluation of the environmental legal regulation efficiency in the state of the environment indices.

26. Joint efforts of governments, scientific community, scholars and public opinion are of crucial importance for the concept of "common concern of mankind" does not rest as just a vague political formula, which could be used to legitimize lack of concrete actions by simply declaring an environmental concern. Only based on such efforts the concept may acquire necessary legal validity, thus transforming in a source of wide range of action-oriented binding obligations. The development of the concept of "common concern of mankind" would be not only of theoretical significance, but in the first place of practical viability for international law making processes currently on the agenda. The nearest opportunity to test legal validity of the emerging theoretical hypotheses are the forth-coming negotiations on global climate and biological diversity conventions. The preparation of these conventions, if successfully accomplished, would create a unique input into the substantial content of the 1992 UN Conference on Environment and Development.

I MEETING OF THE UNEP GROUP OF LEGAL EXPERTS TO EXAMINE THE IMPLICATIONS OF THE "COMMON CONCERN OF MANKIND" CONCEPT ON GLOBAL ENVIRONMENTAL ISSUES

Malta, December 13 - 15, 1990

REPORT

1. The UNEP Group of Legal Experts to Examine the Implications of the "Common Concern of Mankind" Concept on Global Environmental Issues held its first meeting in Malta, on 13-15 December 1990. The meeting was organized jointly by the United Nations Environment Programme (UNEP), the Ministry of Foreign Affairs and Justice of Malta and the University of Malta. The Group of Experts was integrated by the following participants: Dr. Mostafa K. Tolba UNEP Executive Director and Chairman of the Group), Judge Manfred Lachs (International Court of Justice), Ambassador Julio Barboza (Argentina), Professor Antonio A. Cancado Trindade (Brazil), Mr. Tang Cheng Yun (China), Mr. Franck X. Njenga (Kenya), Mr. Patrick Szell (United Kingdom), Mr. Ajai Malhotra (India), Professor David Attard (Malta), Dr. N. Hassan Wirajuda (Indonesia), Dr. Iwona Rummel-Bulska (UNEP), Dr. Alexandre Timoshenko (USSR) and Mr. Lal Kurukulasuriya (Sri Lanka). Professor A.A. Cancado Trindade and Professor David Attard were designated co-rapporteurs of the Group. The following is a report of the four rounds of discussions held at the first meeting of the UNEP Group of Legal Experts on the "Common Concern of Mankind" Concept.

2. In the first round of discussions attention was centered on the origin, contents, rationale and implications of the concept of common concern of mankind. It was initially recalled that in the past the notion of international

concern had been resorted to in the practice of U.N. organs in dealing with cases pertaining to the protection of human rights and self-determination of peoples, thus operating a reduction of the domain of domestic jurisdiction of states. This evolution was pushed forward by the judicial recognition that certain issues were the concern of all States creating *erga omnes* obligations (the 1970 ICJ judgment (page 32) in the Barcelona Traction Case (2nd Phase)). The present concept of common concern of mankind, which found expression in U.N. General Assembly Resolution 43/53 of December 1988, wherein climate change was so characterized, went much further, disclosing a pronounced temporal and social dimension and focusing on issues which were truly fundamental to all mankind. The concept was also being considered in other contexts of international environmental law (such as biological diversity).

3. Still with regard to the origins of this new concept, there was general agreement that the distinct notion of common heritage of mankind had been marked by controversies around the element of exploitability of resources (e.g., of the sea bed and ocean floors beyond national jurisdictions). The more recent concept of common concern of mankind, in its turn, did not have such proprietary connotations and thus proved more suitable to address global environmental issues (e.g., depletion of ozone layer and global climate change); hence its apparent growing acceptance, in the context of such global issues (e.g., the 1989 Hague Declaration, the 1990 Langawi Declaration) in the last three years, with the emphasis on the element of protection. It was pointed out that regimes of protection have a specificity of their own, based upon considerations of *ordre public*, transcending reciprocity.

4. The UNEP Note on the Common Concern of Mankind Concept, circulated to participants, proved to be a thoughtful and useful basis for discussion of the contents and rationale of the concept. The starting-point of the debates which followed was the general recognition of the legitimate interest of mankind to concern itself with issues pertaining to global climate change (even when activities took place within a country's territory). Hence the notion of commonness (affecting all humankind): a global threat to the environment could become a common concern of mankind, bringing to the fore the notion of obligations *erga omnes*. It was recalled that pertinent elements could be detected in explanatory theories, such as: the idea of freedom of access and equitable sharing by all (doctrine of *res communis*), the idea of non-appropriation and gestion under public law (doctrine of international public domain), the idea of protection of a common good, extending the beneficiaries to future generations (doctrine of [public] trust).

Hence the constitutive elements of common concern, namely: involvement of all countries, all societies, and all classes of people within countries and societies; long-term temporal dimension, encompassing present as well as future generations; and some sort of sharing of burdens of environmental protection (*infra*).

5. It was suggested that the concept of common concern of mankind ought to be approached from a novel juridical perspective. The term mankind from the start disclosed the link with the human rights framework (*infra*) and the long-term temporal dimension (encompassing also future generations). The term concern suggested a primary focus on the causes of the problem (e.g., emissions of certain gases to the atmosphere causing severe environmental degradation to the detriment of the humankind), thus stressing the preventive character of environmental protection (the general obligation of due diligence); but it also focused on consequential effects or responses to be taken (e.g., application of pollution control standards, recognition of rights of action at national and international levels, and establishment of institutional framework for protection). The term common (as in "common concern") was employed in a same and parallel way as "public" (as in "public order") in domestic law, given the decentralization of the international legal order, the notion of "common concern" appeared thus closely related to such concepts as "obligations *erga omnes*", "*jus cogens*", "common heritage" and "global commons". Attention was drawn to the distinct connotations -if not ambiguities- in the common law system of the term interest, which, however, were not present in the civil law system, thus allowing in the light of this latter to speak of a "common interest of mankind".

6. As to the implications of the concept of common concern of mankind, it was first pointed out that the present discussions of the UNEP Group of Legal Experts meant to lay down the normative basis for the ongoing negotiating process preparatory to the 1992 U.N. Conference on Environment and Development (working out of normative principles); hence the need to clarify the concept at issue, from which -once definitively accepted by the international community- rights and obligations were to flow in the near future in dealing with global environmental issues. The need of relating preventive with corrective measures was also stressed: it was commented that the current corrective measures are here being approached from an intra-generational perspective, while preventive measures seem to lend themselves more easily to an inter-generational perspective.

7. Another implication was identified in the need to conciliate the global treatment that issues, such as climate change, require with the differential treatment that many countries (e.g., developing countries) require. The 1987 Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer was recalled in that connection. There was special emphasis on the need to balance sovereign rights of States with the interests of the international community in respect of environmental protection (Principle 21 of the 1972 Stockholm Declaration on the Human Environment having been referred to in that respect); this question brought to the fore the central issue of the sharing of burdens in environmental protection.

8. In fact, the whole second round of discussions centered on this last point. The majority of participants supported the notion of equitable sharing of burdens, whereas some preferred the expression fair sharing of burdens. The former recalled the application of equitable considerations in the law of the sea (maritime delimitations); the latter referred to the distinct connotations of the equitable principle. There was general agreement, however, that some sort of sharing of burdens there must certainly be. Some experts regarded sharing of burdens as an important subsidiary principle instrumental in the application of the common concern of mankind concept itself (collective or concerted actions); other experts went further, in expressing the view that the success or failure of the very concept of common concern of mankind would ultimately depend on the recognition or acceptance of the principle of equitable sharing of burdens.

9. It became clear that the present debates related essentially to the sharing of costs and benefits of environmental protection. All countries shared a common concern for the protection of the global environment and all countries had to contribute to the achievement of that protection: equitable sharing of burdens meant however that often some countries were to give greater contributions to that effect than others (the example of the 1987 Montreal Protocol having again been invoked in that connection). The experts developed two sets of considerations, in the form of guiding principles in that regard. First, in the present context equitable or fair sharing of burdens meant much heavier burdens on developed countries, proportional to their historical and present responsibility for atmospheric pollution, and for the excessive levels of per capita emissions of gases deteriorating the atmosphere (application of the "main responsibility" principle). Secondly, in the present context equitable or fair sharing of burdens also meant, rather than imputation of liability and responsibility on States, the account to be taken of the distinct economic, financial and technological capabilities of States to contribute to the resolution of the problem

(preventive and corrective action). Both guiding principles were to be taken into consideration.

10. It was exemplified that conversion of means of production so as not to emit harmful substances into the environment required technology transfer (to developing countries) at affordable cost and technical and financial assistance (to developing countries) at much higher levels, which could only be achieved if developed countries came to regard them as duties emanating from the common concern of mankind concept in respect of adverse climate change. The opinion was voiced that it was impossible to detach "common concern" (linked to common responsibilities) from issues such as poverty and underdevelopment, and that environmental considerations should thus not be advanced to introduce conditionalities in development financing. It was agreed that obligations should here be met in accordance with the capacities of the countries (equitable or fair sharing of burdens in response to a common concern of mankind).

11. The third round of discussions centered on the relationships between environmental protection and human rights protection. It was initially pointed out that resort to the concept of common concern of mankind, besides disclosing the link with the human rights framework, warned that one was here before a crucial question of survival, which brought to the fore the fundamental right of all to live in a clean, safe and healthy environment. Hence the fundamental importance of the human rights framework also for environmental protection, some participants recommended that the theory of "generations of human rights", in particular, was preferably to be avoided in view of its inadequacies. There was on the main issue general agreement that environmental protection and human rights protection were in fact linked and could not be divorced from each other, and that emphasis should here be laid on fundamental rights.

12. The framework of human rights, with emphasis on social dimension and participation, was regarded as more appropriate than the framework of international ecological security, with emphasis on the State system, for approaching global environmental issues. It was pointed out that the preventive dimension was present in both environmental protection and human rights protection (in the instruments of protection themselves, in their evolutionary interpretation, in the evolving notion of potential victims). It was considered important to bring together the evolutions of environmental protection and human rights protection: they disclosed many affinities and both underwent a process of globalization. It was argued that a bridge between the two lay in the fundamental rights to life and to health in their

wide dimension, comprising negative as well as positive measures, resting at the basis of the *ratio legis* of the two regimes of protection and paving the way for the recognition and crystallization of the right to a healthy environment. It was further argued that the protection of vulnerable groups (e.g., indigenous populations) lay at the confluence of environmental protection and human rights protection, thus disclosing the need to bring together human and environmental considerations. The need was pointed out to develop further attention and research on the question of the implementation of the right to a healthy environment, in its individual and collective dimensions.

13. The fourth and last round of discussions concentrated on the alternatives to Convention -either on Climate or on Biological Diversity- to be adopted at the forthcoming 1992 U.N. Conference on Environment and Development. It was stressed that such [future] Convention should attract support from as many countries as possible. In case it were not adopted at the 1992 Conference, the possibility of a Code of Conduct was raised; other alternatives mentioned were a Declaration of Principles (by the U.N. General Assembly) or else a Framework of Principles and Guidelines. It was suggested that, should a Convention not be reached by 1992, the negotiating process should continue even after that date, as one should not sacrifice content for expediency.

14. At the end of the debates, it became clear that a couple of points remained to be considered in due course, e.g., issues pertaining to the implementation of the "common concern" concept, to the ways and means whereby the concept could develop into an institution of public international law, to the methods to be devised for implementation, and to the corresponding organizational framework. It was at last decided that the UNEP Group of Legal Experts on the "Common Concern of Mankind" Concept was to hold its second Meeting in the last week of March 1991, at a place still to be determined.

Professor A.A. Cançado Trindade

Professor D.J. Attard

Co-Rapporteurs of the UNEP Group of Experts.

II MEETING OF THE GROUP OF LEGAL EXPERTS TO EXAMINE THE CONCEPT OF THE "COMMON CONCERN OF MANKIND" IN RELATION TO GLOBAL ENVIRONMENTAL ISSUES.

Geneva, March 20 - 22, 1991

REPORT

1. The first meeting of UNEP Group of Legal Experts to examine the concept of the common concern of mankind in relation to global environmental issues was held in Malta on 13-15 December 1990. The meeting was organized jointly by the United Nations Environment Programme (UNEP), the Ministry of Foreign Affairs and Justice of Malta and the University of Malta.
2. The second meeting took place in Geneva on 20-22 March 1991 and was attended by Dr. Mostafa K. Tolba (UNEP Executive Director), Prof. Antonio A. Cançado Trindade (Brazil), Prof. Sun Lin (China), Mr. Frank X. Njenga (Kenya), Mr. Ajai Malhotra (India), Prof. David Attard (Malta), Ambassador Juan Antonio Mateos Cicero (Mexico), Mr. Alexandre Timoshenko (USSR), Mr. Amdan Mat Din (Malaysia), Mrs. Iwona Rummel-Bulska (UNEP). The Session had five rounds of discussions.

3. In his introductory statement the Executive Director of UNEP Dr. Mostafa K. Tolba drew the attention of the participants to the growing interest of States in the concept of common concern of mankind particularly within the context of negotiations on legal instruments on climate change and conservation and sustainable use of biological diversity. He identified the following aspects of the concept of common concern of mankind which require further consideration and elaboration by legal experts:

- possible implications of the concept for specific obligations in the relevant international treaties;
 - implication for the human right to healthy environment;
 - implications with respect to the issues of equitable burden sharing and fair compensation.
- Several other issues were identified as requiring consideration by the legal experts:

- elaboration of an Earth Charter as a possible outcome of the United Nations Conference on Environment and Development;
 - environmental implications of the Gulf War.
4. During the general discussion on the concept of common concern of mankind, the experts reiterated that the concept still has no legal consequences in terms of rights and duties. It was stressed that the concept should not infringe the sovereign right of States and, in this context, a point was raised whether it is desirable to narrow down the scope of the concept and its application and to confine it to global environmental issues which may cause significant adverse effects upon the environment. It was re-emphasized that the common concern concept was not meant to substitute the concept of common heritage. There was a general understanding that at the current stage the common concern of mankind may serve as a guiding principle rather than as a legal rule. The responsibility and cooperation aspects of the concept were further emphasized.
 5. While discussing the practical application of the common concern concept, it was stressed that the current global environmental agenda has been tailored mainly according to the interests of the developed countries. The world community needs an improved and comprehensive international environmental agenda which should also incorporate the issues of particular concern to developing countries, e.g. eradication of poverty, desertification, soil erosion, health, education, nutrition, urbanisation and housing. It was agreed that more attention by the international community would be required with respect to environmental protection of global commons. The provision of a life of dignity to all in a clean, safe and healthy environment should be a matter of common concern of mankind.
 6. The subject of equitable and fair burden sharing was discussed in detail at the first meeting of the Group. It was re-emphasized by the experts as an important implication of the common concern concept.

It was agreed that the use of the term "equitable" would be preferable because of its acceptance by general international law and in particular, in relevant decisions of the International Court of Justice. At the same time it was pointed out that the principle of fair burden sharing and compensation could be applicable in some specific cases (e.g. access to biological diversity resources).

7. The experts considered the principles relating to common concern of mankind which could be to be reflected in a possible Convention on Biological Diversity. It was acknowledged that each State had the full sovereign right to exploit its natural resources. It was also felt that the informal innovation by local peoples -the concept of farmer's rights- would also need to be recognized and duly rewarded. The experts stressed that the additional burden on developing countries, due to the protection of their biological diversity, must be recognized in any protection of their biological diversity, and met by new and additional funding to be provided by the developed countries. It was stressed that the benefits of research in biotechnology should be equitably shared and made available to the developing countries which, in most cases, were the original source of the gene pools on which the research was based. The experts further emphasized the importance of recognition of the direct linkage between the conservation of biological diversity in developing countries and access to their bio-materials, with: (a) the access of developing countries to end products made by using their bio-material and to the relevant technologies, and (b) the equitable sharing of the benefits and profits from such use of bio-material with the country of origin of such bio-material. In interpreting equitable considerations one has to be innovative. It should be a legal reflection of a full scale global partnership, which simultaneously seeks to protect the environment while looking to the upliftment of the developing countries.
8. Against the background of the consideration of the issue at their first meeting, the experts further examined of the human right to a safe and favourable environment given the growing attention of the world community to the subject. It was acknowledged that this issue had important implications for developing countries' problems with direct bearing of living conditions such as eradication of poverty, demographic pressures, health and sanitation, education, nutrition, housing and urbanization, and for translating the internationally accepted right to development into reality.
9. A discussion was held on a possible new code of international environmental principles (e.g. in the form of an Earth Charter) to be elaborated by the 1992 United Nations Conference on Environment and Development.

It was felt that the principles and recommendations emanating from the 1972 Stockholm Conference on Human Environment needed to be reassessed. The experts pointed out that the possible new code should place further emphasis on addressing the issues of environment and development in an inter-related manner. While not incorporating legal obligations such a code could be an authoritative statement of world community on the issues of environment and development.

10. The matter of institutional authority in respect of issues characterized as common concern of mankind was raised. Suggestions as to which institutional authority this may be were considered, such as the UN General Assembly, the Security Council, the International Court of Justice (chambers), and strengthening the role of the UNEP Governing Council.

11. In the deliberations on the issue of the ecological warfare its relevance to the environmental consequences of the Gulf War was examined. It was acknowledged that war produces environmental harm even when the specific objective was not to inflict environmental damage. The following means and methods of the hostile activities harmful to the environment were identified: a) warfare of any kind with environmental implications; b) ecological warfare where the environment its components or ecological processes are used as a weapon. The magnitude of potential environmental damage has expanded considerably as a result of development and availability of more powerful and sophisticated weaponry.

Acknowledging the complexity of defining "ecological warfare" the experts put forward certain preliminary considerations:

- deliberate use of the environment: as a means of destruction, damage, or injury; and
- the extent of environmental damage incurred in relation to the wide-spread, long-lasting or severe effects.

In this respect the term "ecological aggression" as an alternative to the term "ecological warfare" was suggested. It was recognized that the difficulties to define "ecological warfare" went along with the difficulties to apply existing law. In particular, a possible applicability of the 1977 First Additional Protocol to the 1949 Geneva Conventions on Humanitarian Law and of the 1977 Convention on the Prohibition of Military or any other Hostile Use of Environmental Modification Techniques was considered.

12. It was emphasized that ecological warfare could cause injury, not only to the hostile States themselves, but also to third States, and the environment including areas beyond national jurisdiction, to the international

community as a whole, thus making it a common concern of mankind. Within the context of ecological warfare, the problem of ecological refugees was raised: it was suggested that this issue should also be considered in broader terms covering ecologically displaced persons.

13. The experts discussed various options for legal remedies against ecological warfare. There was a proposal to qualify ecological warfare as an international crime. A need was emphasized for a wider involvement of the UN General Assembly with respect to ecological warfare/ecological aggression.

14. It was strongly felt that the UNEP Governing Council should play a prominent role in the study and consideration of the environmental ramifications of ecological warfare/ecological aggression. The appropriateness for the UNEP Governing Council's preventive and remedial actions with respect to ecological warfare/ecological aggression was emphasized.

15. The experts identified the following aspects which would require further consideration, inter alia:

- ecological harm caused by warfare of any kind;
- the use of the environment as an instrument of war;
- protection of sites having specific ecological value and vulnerability and of sites with destructive potential to the environment;
- prohibition of certain categories of weapons of mass destruction;
- ecological refugees/ecologically displaced persons;
- damage beyond the territories of the hostile parties;
- implications for common concern of mankind;
- legal remedies and institutional mechanism.

16. In view of the complexity and variety of implications of ecological warfare/ecological aggression, the legal experts felt that a thorough and detailed study of the subject was required. For this purpose the Group could hold two or more meetings in 1991 after the 16th session of the UNEP Governing Council. Such a study would cover a substantive report on ecological warfare/ecological aggression containing not only a detailed investigation of the issue, but also recommendations on possible global responses and the relevant role of the UN system.

17. Upon being requested, the legal experts considered a number of issues concerning the Antarctica which had been raised at the 45th session of

the UN General Assembly. Given the timing of the current negotiations on Antarctica issues and the sensitivity involved the experts felt that certain constraints existed. The experts further felt that these issues should be re-assessed at a later stage, when the results of the forthcoming negotiations become available. However, in the experts' view any serious deterioration of the environment in the Antarctica would be unwise and should be avoided. If appropriate, this issue could also be further examined when this Group of legal experts next meet.

UNEP Secretariat

UNITED NATIONS DECADE OF INTERNATIONAL LAW SYMPOSIUM ON DEVELOPING COUNTRIES AND INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Beijing, China, August 12-14, 1991

FINAL REPORT

Introduction

A Symposium on Developing Countries and International Environmental Law was sponsored by the Chinese Government in Beijing China, on August 12-14, 1991, which was organized by the Chinese Ministry of Foreign Affairs with the cooperation of the United Nations, the United Nations Environment Programme, the Ford Foundation, China's National Environmental Protection Administration, the Chinese Society of International Law and the Environmental Law Institute of Wuhan University.

The Symposium was attended by experts from both developing countries and developed countries and from relevant international organizations. H.E. Dr. Mostafa Tolba, Executive Director of the United Nations Environment Programme (UNEP), the Honorable Mr. Ni Zhengyu, Judge of the International Court of Justice (ICJ), Dr. F. Njenga, Secretary General of the Asia-African Legal Consultative Committee (AALCC) and Mr. Wang Teyu, Vice-Chairman of the Chinese Society of International Law (CSIL) also participated in the Symposium as special invitees.

Opening Addresses

In his opening address, Mr. Qian Qichen, State Councillor and Minister of Foreign Affairs, stressed the importance of international Environmental Law. He said that international environmental law is growing into

an important field of progressive development and codification of international law. During its development process, many new concepts and new ideas have emerged which call for in-depth study and discussions by jurists of various countries. He also said that the key issue here is whether or not the developed countries will truly understand the special conditions and needs of the developing countries, and give their sincere accommodation to such conditions and needs, and will translate such understanding and accommodation into the international instruments in the form of corresponding obligations (see Appendix 2).

In his statement entitled "Our Boundless Creativity", Dr. M. Tolba, Executive Director of UNEP, elaborated profoundly on the various important aspects of the development of international environmental law. He said that writing laws to save our planet constitutes an entirely new challenge in the long tradition of law. An international treaty to deal with global environmental problems without clear provisions for technology transfer, and for assistance in the development or revival of indigenous techniques and technologies, is not worth its weight in paper. International environmental laws need to build regimes which ensure additional financial resources, are available to enable developing countries to acquire cleaner technologies. The only guarantee that international environmental law will continue to develop into a comprehensive body of working legal instruments so badly needed is to ensure that we anticipate new environmental problems and prevent them and correct the existing damage (see Appendix 3).

Mr. Qu Geping, Director of China's National Environmental Protection Administration, said in his speech that China has attached great importance to the environmental protection and that China has always held a positive and prudent attitude towards the law-making activities of international environmental law.

On behalf of Mr. K. Fletschauer, Under-Secretary-General, the legal counsel of the United Nations, Mr. Andronico Adele congratulated the convocation of this symposium and conveyed his conviction that the Symposium will indeed make a tangible contribution to the implementation of the programmes of the United Nations Decade of International Law.

In the afternoon, H.E. Mr. Li Peng, Premier of the State Council of the People's Republic of China, received all the participants in Zhongnanhai.

Summary of Proceedings

In the first session of the symposium, the participants elected Professor Sun Lin, Director of the Treaty and Law Department of China's Foreign Ministry, Chairman of the symposium, Professor Antonio Cancado Trindade from Brazil and Mr. Ajai Malhotra from India were elected Rapporteurs. Mr. Liu Daqun from the Treaty and Law Department of the Chinese Foreign Ministry was appointed as the Secretary.

In his introductory remarks, Professor Sun Lin, Chairman of the Symposium, said that the purpose of the Symposium is to strengthen the common understanding of international community, in particular the developed and developing countries to enhance the development of international environmental law and to narrow down their differences, he also said that he has been in the hope that this Symposium could serve as a starting point of a long process with a view to having some preliminary results.

A summary report, following a wide-ranging exchange of views in which on some aspects differing perceptions were put forward in a constructive spirit, follows:

Common Concern of Mankind

It was felt that the recently emerged concept of common concern of mankind was sufficiently flexible to warrant its general acceptance as providing a broad basis for the consideration of global environmental issues. It was this flexibility which made the concept readily acceptable, and to attempt to provide it with specific attributes or legal connotations at this stage would perhaps not serve the interests of its further development. Acknowledging that protection of the environment and development were indivisible and could not be considered in isolation from each other, it was felt that the concept of common concern of mankind should relate both to environment and to development.

Sharing of Burdens

It was emphasized that underlying the concept of "common concern" was the requirement to forge a global partnership on the international plane which would simultaneously seek to protect the environment while addressing the developmental needs of the developing countries. Accordingly, the developed countries, being primarily responsible for the historic and current emission of pollutants into the envi-

ronment, bore the main responsibility for cleaning up the environment. This widely accepted "main responsibility" principle must provide the basis for action in the environmental field. Moreover, if one were to consider the financial, economic, scientific and technological capabilities for undertaking such corrective action relating to the environment, it becomes quite clear that it is the developed countries which must shoulder most of the burden. Equally, the developing countries must participate in efforts to clean up the environment, taking into account their own specific capabilities and their national plans, programmes and priorities relating to development and the environment.

Sovereign Rights

International cooperation in the field of the environment and development must fully respect the sovereign rights of states. Its role should be to support and supplement, not to supplant, national efforts.

Funding and Technology Transfer

It was agreed that adequate, new and additional funding would be required by developing countries to enable them to join in international cooperative efforts to protect the environment. It was stressed that transfer of environmentally sound technologies to the developing countries should be made available on a preferential and noncommercial basis. Such technologies should not become simply another source of excessive commercial profit for the developed world. It was stressed that the multilateral rang set up under the Montreal Protocol and the system of its management and control provided an excellent example to be emulated as and when other funding mechanisms were established under international legal instruments presently being negotiated. While reference was made to the global environmental facility, it was, however, felt that in its present form the GEF was quite inadequate in addressing the pressing environmental concerns of the developing countries. There was also a consensus that the incorporation of environmental concerns and considerations in development planning and policies should not be used to introduce new forms of conditionality in aid or in development financing.

Special Needs of Developing Countries

It was felt that unless widespread and abject poverty in the developing countries was tackled head on, the international community would be avoiding, at its own peril, facing up to a major contributor to environmental degradation in the developing world. The environ-

mental problems of developing countries were often a reflection of the inadequacy of development. Addressing these environmental problems in their totality and in a balanced manner would require that full cooperation be extended to the developing countries in their efforts to break the vicious circle linking poverty, underdevelopment and environmental degradation. Special attention would have to be given to the particular needs and concerns of the least developed countries. Solution of global environmental problems would have to be accompanied by solution of the problem of global poverty.

The concept of "sustainable development" included the fostering of economic growth, the meeting of basic domestic needs (including in areas such as health, nutrition, education and housing) and the eradication of poverty so as to provide to all a life of dignity in a clean, safe and healthy environment. While considering the concept of "sustainable development", it was important to remember that its major focus had to be on the "development" aspect of the concept.

Environmental Protection and Human Rights

There was general consensus that there were linkages between the domains of environmental protection and of human rights, provided mainly by the focus on certain fundamental rights (inter alia, the right to life and the right to health). It was further indicated that the emergence of the right to a healthy environment and the right to development was meant to enhance rather than to restrict, other rights, given their indivisibility and interrelatedness, it was generally felt that environmental protection also amounted ultimately to a quest for survival and the protection of human health.

Settlement of Disputes

Several mechanisms of dispute-settlement appropriate for environmental protection were surveyed: particular emphasis was laid on dispute-avoidance by means, e.g., of information or consultation. It was felt that any new legal instruments which may be negotiated should contain in-built mechanisms for settlement of dispute; reference was, in this context, made to the mechanism for dispute settlement contained in the 1985 Vienna Convention on the Protection of the Ozone Layer as a good model to be followed.

Recommendations

During the discussions, the following areas were identified as requiring further consideration for the progressive development of international

environmental law in the context of the UN Decade of International Law, 1990-1999.

- (a) Study the need for possible instruments to address the environmental issues such as desertification, floods and droughts, worsening quality and supply of fresh water resources, soil loss, and vegetation degradation;
- (b) Progressive refinement of the concept of the right to development;
- (c) Development of the evolving concept of the right of all to a life of dignity and adequate standard of living in a clean, safe and healthy environment, life of quality, dignity and wellbeing;
- (d) Equitable sharing of burdens as a legal basis for transfer of adequate, new and additional financial resources to developing countries;
- (e) A legal basis for transfer of environmentally sound technologies to developing countries of preferential and non-commercial terms.
- (f) Progressive and timely refinement of the "common concern of mankind" concept with reference to its implications for both environment and development.
- (g) Elaboration of measures directed to ensuring that the transnational corporations operating in developing countries carry out their special responsibility for environmental protection and sustainable development in those countries.
- (h) The sovereign rights of states over their natural resources.

UNITED NATIONS DECADE OF
INTERNATIONAL LAW DEVELOPING COUNTRIES
AND INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW
SYMPOSIUM, BEIJING

AUGUST 12th - 14th

Participants from the developing countries:

Bangladesh	Mr. Toufiq Ali
Brazil	Prof. Antonio A. Cangado Trindade
China	Mr. Sun Lin
	Prof. Han Deyei
	Ms. Song Li
Chile	H.E. Mr. Oscar Pinochet de la Barra
Egypt	Dr. Aballah Hassam Al Ashtal
Ghana	Mr. Larsey Mensah
India	Mr. Ajai Malhotra
Indonesia	Mr. Moestadjir
Malaysia	Mr. Aridan Bin Mat Din
Mexico	Ms. Diana L. Ponce-Naza
Senegal	Mr. Bakary Kanté
Yugoslavia	Dr. Butislav Vukas

Participants from the developed countries and organizations

Australia	Mr. Michael Smith
Germany	Mr. Arsgar O. Vogel
U.K.	Dr. Glen Plant
U.S.A.	Prof. Stephen McCaffrey
UN	Mr. Adronico Adade
	Mr. Roy S. Lee
UNEP	Dr. Iuovna Rummel-Bulska

Special Invitees

UNEP	H.E. Dr. Mostafa K. Tolba
The Ford Foundation	Mr. Peter Harris

International Court of Justice	Mr. Johnathan Hecht
Iran US Claims Tribunal	Judge Ni Zhengyu

Consultative Committee (AAIACC)	Mr. C. W. Pinto
	Mr. Frank X. Njenga

International Council of Environmental Law (ICEEL)	Mr. Erkki Hollo
Chinese Society of International Law	Prof. Wang Tingya

NUESTRA PROPIA AGENDA

Por considerarlos de especial interés, presentamos a continuación el Prólogo y la Introducción del Informe de la Comisión de América Latina y El Caribe para el Desarrollo y el Medio Ambiente; 27 de agosto de 1990

Sumario

Prólogo. Condición de un pequeño planeta: la tierra no debe albergar un "tercer mundo". Solidaridad y complementariedad. El camino hacia la paz. Las deudas financieras y ecológicas del pasado: Un laberinto que debe resolverse. Visión retrospectiva: una historia de antaño brinda lecciones para el futuro. El reto de construir ciudades sanas. El dilema de la energía. Nuestro patrimonio natural: un frágil potencial. El Amazonas: una riqueza para defender y desarrollar. Naturaleza sin fronteras: pensar como un río. Un sólo cielo: todos respiramos el mismo aire. Cien años de no sustentabilidad: corrigiendo una historia de desarrollo frustrado. Solidaridad frente al futuro de la civilización.

Introducción. 1.1. Consideraciones generales. 1.2. Necesidad de una agenda propia. 1.3. Necesidad de una estrategia propia. 1.4. El entorno internacional y nuestro desarrollo sustentable. 1.5. Necesidad de fortalecer nuestra capacidad de negociación.

PROLOGO

*"El Universo requiere la eternidad...
Por eso afirman que la conservación de este mundo
es una perpetua creación, y que los verbos 'conservar'
y 'crear', tan enemistados aquí, son sinónimos en el Cielo".*

Historia de la Eternidad

Jorge Luis Borges

*Condición de un pequeño planeta:
la tierra no debe albergar un "tercer mundo"*

La problemática del medio ambiente nos afecta a todos. Ninguna nación es periférica. La búsqueda de soluciones ambientales debe involucrar al Norte y al Sur; al Este y al Oeste. En la tierra no debe haber un "tercer mundo".

Los desafíos interrelacionados del desarrollo y el medio ambiente requieren colaboración con el Norte. Solamente unidos podremos solucionar los problemas del desarrollo internacional (deuda externa, relación de los términos de intercambio y proteccionismo); las amenazas al medio ambiente (deterioro del suelo, problemas ambientales relativos a la urbanización, contaminación del aire y del agua, pérdida de la biodiversidad, cambios climáticos, destrucción de la capa de ozono, y manejo de los desechos tóxicos); el problema de las drogas (producción, consumo y tráfico) y el abuso de los recursos comunes del planeta (espacio exterior y Antártida). Solamente unidos podemos prevenir costos humanos de aún mayor magnitud.

Solidaridad y complementariedad

La necesidad de una colaboración entre el Norte y el Sur se requiere en parte porque existe una complementariedad entre los países industrializados y los en desarrollo. Los primeros están ubicados principalmente en las regiones templadas del mundo, en tanto que prácticamente todos los países en desarrollo están ubicados en el cinturón tropical. La mayor parte de los territorios de los países desarrollados ofrecen mejores condiciones para la agricultura que los de los países en desarrollo, muchos de los cuales están cubiertos por desiertos, montañas o bosques tropicales, que imponen límites al desarrollo del agro. Los países desarrollados producen excedentes agrícolas, en tanto que los países en desarrollo deben importar alimentos. Los países en desarrollo son socios esenciales para la seguridad ambiental global, especialmente en cuanto a la restricción de los gases del "efecto invernadero" y a la preservación de la biodiversidad. Los países en desarrollo no podrán producir en el futuro todos los alimentos que necesitan a menos de verse forzados a reducir los servicios de seguridad ambiental globales que están prestando. Esta complementariedad existirá solidaridad entre el Norte y el Sur. Requerirá la movilización de recursos financieros y tecnológicos para alcanzar metas comunes, y la capacidad de renunciar a la confrontación, dejar de lado la dicotomía mental de ganadores y perdedores, y olvidar las viejas nociones de mundos separados en este planeta único.

El camino hacia la paz

La humanidad desea consolidar la paz. Nos complace la reducción de las tensiones entre las superpotencias y el tono favorable que ello aporta a la cooperación internacional. No obstante, las armas convencionales, químicas y nucleares, siguen siendo amenazas directas a la humanidad. Creemos que el riesgo de guerra nuclear sigue siendo la amenaza más importante a la supervivencia del género humano. Si bien se han tomado medidas encaminadas al desarme nuclear, la capacidad de destrucción masiva de las grandes potencias sigue intacta. Los conflictos que prevalecen en algunos países o regiones no sólo crean sufrimiento humano, sino que tienen grandes repercusiones ambientales sobre los recursos naturales renovables y causan degradación de la tierra. La reducción de los gastos militares es una meta común.

*Las deudas financieras y ecológicas del pasado:
Un laberinto que debe resolverse*

Las amenazas de la actual crisis económica y ambiental están arraigadas en modalidades de desarrollo imperfectas: la economía de la opulencia y el despilfarro en el Norte y la economía de la pobreza, la desigualdad y necesidades apremiantes de supervivencia a corto plazo en el Sur. El reto es diseñar una estrategia de desarrollo en armonía con la Naturaleza y con las necesidades de las futuras generaciones. Debe prestarse especial atención al nexo entre pobreza, población y tensión ambiental en los países en desarrollo. En nuestra región se advierte cada vez más claramente que la pobreza es causa y efecto del deterioro ambiental local. Este vínculo entre pobreza y explotación de los recursos naturales ayuda a poner de relieve otra conexión: la relación entre la deuda externa y los problemas ambientales de la región. Los altos pagos de intereses de la deuda externa realizados entre 1982 y 1989 determinaron una transferencia neta de capital de la región a los países acreedores de 200.000 millones de dólares. Ello ha obligado a la sobreexplotación de los recursos naturales, como medio de atender necesidades de corto plazo apremiantes y promover un acelerado aumento de la exportación. La década de los años 80 representó para la región una "década perdida" ya que en un número considerable de países regionales los ingresos se redujeron a los niveles de una, dos y hasta tres décadas atrás. El PNB de 1988 fue más bajo que el de 1978, la disminución de los años 80 está además en marcado contraste con el constante crecimiento del decenio anterior. En ese contexto, la recuperación del crecimiento y el desarrollo son una condición necesaria que debe cumplirse para hacer frente a problemas sociales y ambientales apremiantes. Se estima que la región tie-

ne un déficit de inversión anual de 80.000 millones de dólares. Ello hace que la inversión financiera en infraestructura social sea enormemente baja y aleje la atención de preocupaciones ambientales urgentes. Es esencial mirar en gran medida esta situación para poder hacer frente a los problemas ambientales. La transferencia de capital hacia afuera de la región no comenzó, por supuesto, en la década pasada. La revolución industrial se basó en gran medida en la explotación de los recursos no renovables de los propios países desarrollados, así como los de los países en desarrollo, de un modo que no reflejó costo real en cuanto a las necesidades de conservación y sus consecuencias ambientales. El progreso de los países industrializados se basó, pues, en la deforestación y, en algunos casos, en la explotación depredadora de los recursos naturales. Al obrar así, esos países contrajeron una deuda ecológica con el mundo, que entraña ahora la obligación de apoyar el desarrollo, a fin de no deteriorar más el delicado equilibrio de la conservación y el medio ambiente atribuible a pasadas negligencias.

En una agenda común Norte-Sur debe figurar, en primer término, la movilización, en condiciones concesionales, de los recursos financieros necesarios para respaldar los programas ambientales y de desarrollo regionales y, segundo, la determinación de los países industrializados de crear y transferir tecnologías -satisfactorias desde el punto de vista ambiental- con carácter preferencial. América Latina y el Caribe están identificadas con el objetivo de efectuar una gestión sostenible de su activo ecológico a fin de aportar todo lo posible a los planes encaminados a dar marcha atrás al proceso de degradación ambiental global y preservar la bio-diversidad. Sin embargo, los países industriales deben poner de manifiesto una igual identificación con el objetivo de compartir la carga de ese costo en forma mensurable con su aporte a la degradación ambiental y su considerable capacidad de pagarlo. El reparto de la carga debe reflejar la deuda ambiental acumulada de la que los países industriales son básicamente responsables, así como el respaldo financiero externo necesario para complementar los esfuerzos internos de los países de la región, orientados hacia la erradicación de la pobreza más aguda. Los países desarrollados deben también facilitar el acceso de los países de la región a tecnologías ambientalmente benignas, a un costo tolerable, y colaborar en actividades de investigación y desarrollo conjuntas encaminadas a acelerar la producción de tecnologías nuevas y existentes en nuestros países. Ello generará el beneficio adicional de contribuir a la transformación y modernización de los sectores económicos productivos.

Visión retrospectiva: una historia de antaño brinda lecciones para el futuro

Históricamente, la población de América Latina y el Caribe ha estado animada por una relación profunda, casi religiosa, entre el hombre y su medio ambiente. A lo largo del tiempo han existido hiatos, pero esos principios deben servir de fundamento de la determinación regional de lograr un desarrollo sostenible. Los derechos de la población indígena deben ser plenamente reconocidos. La preservación de su identidad cultural es importante para la preservación del medio ambiente y para hacer posible el desarrollo de la región. La población indígena del Amazonas reclama con todo derecho, participar en las estrategias programadas para el desarrollo de bosques que ha venido usando, manejando y preservando durante siglos.

Nuestro mensaje va dirigido a la sociedad civil y a sus autoridades. Consideramos que se requieren una vigorosa voluntad política y firmes dotes de liderazgo para acabar con la creencia popular, profundamente arraigada, de que el uso de la tierra no reconoce límites sociales ni ecológicos; que el agua es de propiedad individual y no debe estar disponible para beneficiar a toda la sociedad así como puede agotarse o contaminarse impunemente, y que la industria no es responsable por los desechos y emisiones que genera. La educación y participación públicas son esenciales para la protección ambiental. Nuestra región ha experimentado un proceso de democratización que no debe interrumpirse. Para alcanzar el desarrollo con equidad es necesaria una amplia participación de la sociedad civil en ese proceso. Existe actualmente un amplio movimiento para mejorar la calidad de nuestra democracia, de forma de lograr un desarrollo centrado en el pueblo, al tiempo que se reconoce el legítimo papel del Estado, particularmente en lo que hace a su función regulatoria. Esos procesos de modernización y reforma del gobierno deben ser alentados por sus propios canales y por la contribución que representarían al logro de un desarrollo sostenido.

Consideramos que es esencial elaborar normas legales e instituciones para hacer frente a los incipientes problemas y peligros ambientales. Hay que modificar las viejas estructuras y deben conferirse a las comunidades y autoridades locales nuevas potestades y acceso a tecnologías aceptables desde el punto de vista ambiental, pues esas comunidades y autoridades son las que conocen más de cerca las necesidades y exigencias de sus habitantes. Deben reforzarse las organizaciones no gubernamentales -especialmente de base— que se ocupan de armonizar las necesidades ambientales y el desarrollo. Debe alentarse al sector privado a que ejecute programas

para detener la degradación ambiental antes de que se haga irreversible. La participación de la mujer en la labor de protección ambiental, en las zonas urbanas y rurales, es esencial para promover un comportamiento positivo en los jóvenes y en la población en general. Para llegar a esa meta deben realizarse en la región grandes esfuerzos.

Creemos esencial elaborar nuevos criterios e indicadores económicos que tomen en cuenta los recursos naturales como acervo de "capital". Debemos abandonar las políticas que promuevan la sobreexplotación de recursos naturales renovables, el uso incontrolado de plaguicidas y herbicidas, y un uso ineficiente de la energía. Debemos también aplicar esos principios en la industria, creando un sistema de precios y tributos que proporcione incentivos a la preservación del medio ambiente.

El reto de construir ciudades sanas

Tres de cada cuatro latinoamericanos viven en zonas urbanas. Un creciente número de habitantes de esas áreas se ven confrontados con servicios básicos y de vivienda insuficientes y condiciones sanitarias insatisfactorias en el hogar y en el trabajo. Las ciudades padecen graves problemas: expansión desorganizada, eliminación de desechos sólidos y líquidos y contaminación aérea, lo que las hace vulnerables a los desastres naturales.

Este proceso de urbanización con insuficiente capital enfrenta a las autoridades a una tarea imposible. Así, "ciudades informales" siguen apareciendo y creciendo a ritmo acelerado alrededor de la mayoría de las ciudades latinoamericanas. Por ejemplo: una ciudad de 700.000 personas se agrega cada año a la periferia de la Ciudad de México, y una de 500.000 a la de San Pablo. Esas ciudades carecen de la infraestructura o de los recursos financieros necesarios para hacer frente a los problemas de la población actual o para absorber nuevos contingentes. Debe procurarse dispersar la población hacia ciudades de mediana escala, pero ello a su vez depende de que se disperse la actividad económica en un contexto gubernamental moderno, descentralizado. La capacidad y creatividad de los pobres urbanos puede canalizarse hacia proyectos pequeños de base comunitaria, para brindar alojamiento y servicios básicos.

Las ciudades en que las industrias están concentradas suelen estar muy contaminadas y carecen de infraestructura social y sanitaria y de normas adecuadas para hacer frente al problema de los desperdicios industriales peligrosos. La lluvia ácida, que comúnmente afecta a los países industrializados, va en aumento en las zonas industriales en América Lat-

na y el Caribe. Los desechos tóxicos están siendo exportados por los países industrializados y están causando graves problemas ambientales. En varios casos, las industrias que no pueden observar las leyes y reglamentos ambientales de los países industrializados, están siendo transferidas a países en desarrollo en los que no se aplican reglamentos de ese tipo.

Los desafíos ambientales que enfrentan América Latina y el Caribe se vinculan a la vida humana y al bienestar. La exposición a los desechos peligrosos crea riesgos sanitarios indudables. Siete de los diez productos químicos que suelen hallarse en los vertederos de desechos pueden causar cáncer, siete causan defectos en los recién nacidos y cinco provocan daños genéticos. La combinación de residuos químicos, desechos tóxicos, emanaciones gaseosas de automóviles y otras secuelas de una contaminación urbana incontrolada, constituye una grave amenaza a la salud general, pero especialmente a la de los niños y los ancianos.

La contaminación del aire es un hecho constante en la vida cotidiana de 81 millones de residentes de zonas urbanas de América latina. El resultado es un número de casos de enfermedades respiratorias infantiles crónicas estimado en 2,3 millones; 105.000 casos de bronquitis crónicas entre los ancianos, y casi 65 millones de días de trabajo perdidos como consecuencia de las secuelas sanitarias de la contaminación del aire. El costo adicional que recae sobre los ya sobrecargados sistemas de cuidado de la salud puede medirse, el dolor y la miseria humana, no. La contaminación ambiental requiere una reacción nacional e internacional concertada.

El dilema de la energía

La región enfrenta los problemas de un consumo insuficiente de energía por parte de grandes sectores de la población, la emisión de contaminantes aéreos, la destrucción del potencial hidroeléctrico, la deforestación debida a una sobreutilización de la madera combustible, la sobreexplotación de combustibles fósiles y la transformación y uso ineficientes de la energía.

La producción, transformación, transporte y utilización de diversas formas de energía genera consecuencias positivas y negativas. Debe realizarse una evaluación adecuada de sus repercusiones ambientales y sociales, particularmente sus posibles consecuencias adversas para la salud humana. No obstante, la región cuenta con vastas reservas energéticas no utilizadas. El potencial de fuentes de energía hidroeléctricas y renovables es grande, al igual que el de conservación de la energía. La región dispone del 20 por ciento del potencial hidroeléctrico del mundo; no obstante, sólo

un quinto de la energía consumida en la misma proviene de esa fuente. Si bien el desarrollo de la energía nuclear en la región es muy reducido, en algunos países puede ser necesario apelar esas fuentes a corto o mediano plazo. En esos casos deben utilizarse tecnologías bien concebidas y seguras desde el punto de vista ambiental. Para ello es decisivo el respaldo de los países desarrollados.

Nuestro patrimonio natural: un frágil potencial

La capacidad de satisfacer las necesidades alimentarias de nuestro continente se verá comprometida debido a la creciente degradación de la tierra y a la consiguiente disminución de la productividad del agro. La población rural sigue a merced de las frágiles características de la base de recursos naturales. Depende, para subsistir, de los ciclos climáticos que afectan a la producción de cultivos agrícolas. También la perjudicará a largo plazo la pérdida de recursos genéticos.

El modesto incremento de la producción agraria de los últimos años se debió en gran medida a un excesivo uso de fertilizantes y plaguicidas derivados de combustibles fósiles. Esa tendencia crea el temor de que un gradual agotamiento de las fuentes de petróleo, en los próximos años, provoque una merma de la producción de alimentos, especialmente en los países pobres. Esos países serán severamente afectados porque dependen en gran medida de los productos basados en el petróleo, y además en ellos se experimentará una mayor demanda de alimentos por ser mayor allí la expansión demográfica. Por consiguiente, será vital para la región realizar un esfuerzo consistente para mejorar la productividad, al mismo tiempo de conservar el suelo y el agua. La región se ve confrontada con diversos problemas de manejo del agua. En las vastas regiones áridas y semiáridas ésta ya escasea. Aunque estamos dotados de un potencial no realizado, la distribución internacional y local varía considerablemente de un lugar a otro. En algunos países y zonas se experimenta el problema del agotamiento de las fuentes de agua pura. Importantes cuencas hidrográficas muestran claros síntomas de degradación, generándose grandes cantidades de sedimentos y produciéndose frecuentes inundaciones con múltiples repercusiones en cuanto a pérdida de riqueza y vidas. La construcción de plantas hidroeléctricas y sistemas de riego debe ir acompañada de estudios de evaluación ambiental adecuados. El uso del agua debe ser mucho más eficiente. Cinco de los doce países más ricos del mundo en cuanto a especies vegetales y animales —los llamados países “de megadiversidad ecológica”— están en América Latina: Brasil, Colombia, México, Perú y Ecuador. Esa reserva biológica vital, que reviste suma importancia para la región y para el mundo,

está siendo agotada rápidamente. Impedir que sigan perdiéndose cientos de especies tropicales —muchas de ellas sin siquiera ser clasificadas científicamente— es de decisiva importancia para la región. Esta debe asegurarse de que ese acervo, que tiene un enorme potencial medicinal, industrial y alimenticio, genere beneficios considerables para la población local. La reforestación y la rehabilitación y recuperación de los ecosistemas degradados constituyen objetivos urgentes. Mediante una gestión sostenible de los bosques, que incluya a los productos no madereros, se avanzará del mejor modo posible hacia los objetivos sociales y económicos y hacia la preservación de la biodiversidad.

El Amazonas: una riqueza para defender y desarrollar

El Amazonas no sólo puede concebirse como un tesoro ecológico y un importante regulador del clima mundial, sino también como un reservorio para el desarrollo. La preservación de los bosques tropicales húmedos y especialmente de la selva del Amazonas, dependerá de que se movilicen recursos de investigación y desarrollo, tecnológicos y financieros, a los efectos de una gestión sostenible de esta área. Para preservar el Amazonas como un activo regional y de la comunidad mundial será esencial la colaboración de la comunidad internacional y la cooperación voluntaria de los ocho estados amazónicos soberanos.

Para alcanzar nuestras metas es necesario elaborar una tecnología alternativa adecuada para mantener los frágiles equilibrios ecológicos de la región y simultáneamente contribuir al desarrollo económico de los países. La zonificación ecológica y económica es un instrumento útil, que debería ampliarse y promoverse. El reconocimiento jurídico de la zonificación y su estrecha correlación con los programas económicos adecuados a la realidad ecológica de cada zona, son factores importantes para que tenga éxito.

La preservación del Amazonas es prioritaria para la comunidad internacional, pero reviste el máximo interés para los países amazónicos, por lo cual la cuestión debe ser debatida por ellos en sus propios términos con el apoyo de científicos de todo el mundo y una opinión pública internacional esclarecida. La cuestión que está en juego es la preservación de la selva y su biodiversidad, el control de la contaminación atmosférica y el desarrollo de la región. Ya se han celebrado acuerdos entre los países de la cuenca del Amazonas. Ellos constituyen un punto de arranque para adoptar medidas más amplias.

Naturaleza sin fronteras: pensar como un río

Entre las cuencas fluviales grandes y pequeñas que pertenecen a varios países se cuentan las del Amazonas, el Orinoco y el Río de la Plata. Otros ecosistemas compartidos con el sistema montañoso Andino, la floresta amazónica, la Cuenca del Caribe y las regiones áridas y semiáridas pertenecientes a México y Estados Unidos. La gestión de esos ecosistemas requiere medidas comunes y conjuntas.

Al igual que los ríos, los mares y océanos no reconocen fronteras. Los principales problemas que afectan a los recursos marinos son la sobreexplotación de algunas especies icícolas, la contaminación petrolera, la degradación de los recursos costeros y los ecosistemas litorales, y los desechos y contaminantes provenientes de zonas urbanas e industriales. Un uso eficiente y sostenible de esos recursos entraña considerables posibilidades para América Latina y el Caribe. Todos los países costeros de la región deben elaborar estrategias adecuadas de gestión de zonas costeras. Ello es especialmente importante para los países de la Cuenca del Caribe, y para todos los amenazados por el aumento de la contaminación de los mares y la contaminación petrolera.

Un sólo cielo: todos respiramos el mismo aire

Con la finalización de la guerra fría, la humanidad debe hacer frente a otras cuestiones apremiantes tales como el alivio de la pobreza, el desarrollo, el establecimiento de relaciones más justas entre las naciones, y los problemas de un migración en gran escala en relación con la pobreza y la crisis del medio ambiente. El recalentamiento global influirá en gran medida sobre la elevación del nivel de los océanos y es probable que cause otros desastres relacionados con el clima que afectarán también a América Latina y el Caribe. Si la aplicación de políticas de energía mal orientadas es la principal causa del recalentamiento de la Tierra y el cambio del clima, es necesario hacer incapié en los desequilibrios del consumo de la energía en virtud de los cuales algunas regiones del mundo —especialmente los países industrializados— causan mayor daño al equilibrio del sistema planetario. El nivel de distribución de responsabilidades debe reflejar esa realidad. En cuanto a los países en desarrollo, deben participar en forma efectiva en negociaciones internacionales encaminadas a proteger el clima mundial.

La destrucción de la capa de ozono tendrá graves consecuencias: aumento del cáncer de la piel, problemas oculares, y otros efectos sobre los organismos marinos y terrestres. El aporte de América Latina y el Caribe a la producción de clorofluorocarbonos y halones es muy reducido. El 95 por

ciento de esos gases provienen del mundo desarrollado. No obstante, las consecuencias se harán sentir ampliamente en todo el mundo. Los países industrializados deben adoptar medidas para invertir esta situación.

La producción, demanda, tráfico y consumo de drogas, guarda relación con la salud y el deterioro ambiental. Algunas de las tierras más productivas de América Latina han sido convertidas en plantaciones de coca. Los productos y contaminantes químicos usados en el cultivo y procesamiento de la coca se arrojan a los ríos, propagando la contaminación. Es esencial la corresponsabilidad de los países consumidores y productores acerca de este problema.

La Antártida alberga un singular ecosistema. El acuerdo de explotación de sus ricos recursos es polémico. Muchas naciones ambicionan las riquezas minerales y biológicas antárticas. Como patrimonio común del mundo, la Antártida podría brindar conocimientos científicos a muchas naciones, especialmente en relación con los cambios climáticos. El Tratado Antártico debe ser renegociado en 1991. Creemos esencial la preservación de esta región y su uso con fines de investigación científica.

El uso del espacio exterior para las comunicaciones y la instalación de sensores remotos posee valor económico. La órbita geosincrónica puede ser considerada como un recurso global finito lo que ya está creando conflictos, dado el gran número de satélites en uso. El papel futuro de ese recurso hará necesario un reglamento mundial que asegure que sus beneficios se distribuyan equitativamente con los países en desarrollo.

Varios países de la región son víctimas, con creciente frecuencia, de desastres naturales, especialmente tormentas tropicales (principalmente en el Caribe) y terremotos (mayormente en América Central).

La prevención y eliminación de calamidades debe convertirse en parte del planeamiento del desarrollo y el medio ambiente a nivel local, nacional, regional y global. A medida que aumentan las pruebas de la responsabilidad humana por la intensificación de esos desastres naturales, se incrementa también la responsabilidad de mitigar sus consecuencias. Es necesario oficializar la distribución de la carga de los desastres naturales, especialmente cuando la mayoría de las víctimas se cuentan entre los pobres del mundo. Creemos que estos empeños comunes requirieren un marco institucional que deberá ser establecido a nivel de las Naciones Unidas y a niveles regionales tales como el sistema de instituciones interamericanas. Debemos afanarnos por alcanzar un acuerdo global de toda la humanidad para salvar nuestro amenazado hábitat.

*Cien años de no sustentabilidad:
corrigiendo una historia de desarrollo frustrado*

El llamamiento en pos de un desarrollo sostenible ha sido enunciado por la Comisión Mundial del Medio Ambiente y el Desarrollo. En su informe, Nuestro Futuro Común, se afirma que la humanidad está en condiciones de realizar un desarrollo sostenible, que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de atender sus propias necesidades. Esa concepción, noble y acertada, debe de transformarse en una realidad en términos económicos y sociales. Para ello debemos advertir, primero, que algunos de nuestros recursos han sido agotados por otros, y, segundo, que nosotros mismos estamos usando esos recursos con demasiada prisa como para servir nuestros intereses a largo plazo y el bienestar de las futuras generaciones.

Aunque en nuestra región —en comparación con otras regiones del mundo— la relación entre los recursos y la población sigue siendo favorable, reconocemos la inmensa presión que la tasa de crecimiento de la población ejerce sobre la capacidad de los ecosistemas.

Dado que nuestra región asigna mucha importancia al objetivo de satisfacer las necesidades de los casi 200 millones de personas que viven en condiciones de pobreza, debemos generar progreso y desarrollo. Ese desarrollo debe, empero, reorientarse, de modo que el crecimiento no agrave la contaminación y los problemas ambientales. El crecimiento económico no debe volverse autodestructivo.

Las recientes medidas de los países industriales, de establecer un modesto fondo para financiar la ejecución, en los países en desarrollo, de las disposiciones del Protocolo de Montreal sobre la Protección de la Capa de Ozono, son un paso en la dirección correcta. No obstante, la aplicación de medidas generales en gran escala para corregir la situación imperante requiere la canalización de financiamiento adicional, en proporción considerable y en condiciones concesionales, hacia los países de la región, conforme al orden de prelación específico de los objetivos de cada país. De hecho, es de rigor que los países de la región y los del mundo industrializado lleguen a un consenso que refleje obligaciones mutuamente acordadas y beneficiosas, a fin de dar marcha atrás aceleradamente al proceso de degradación ambiental y hacer posible un desarrollo sostenible. Diversos mecanismos se han identificado para movilizar los recursos financieros que se requieren para un Servicio Financiero Ambiental Mundial; entre ellos un gravamen a los vertederos de carbono, un cargo por emisión de CO₂, un impuesto sobre el petróleo que recaiga sobre los usua-

rios, y aportes voluntarios de los países industriales. Como resultado de la creciente interdependencia global, la búsqueda de la integración regional es ahora más imperativa que nunca. Las cambiantes realidades políticas y económicas reflejan la idea de que el aislamiento representa una amenaza no sólo para la estabilidad global sino también para el progreso tecnológico que ha unido al mundo a través de la velocidad del transporte y las comunicaciones modernas.

Solidaridad frente al futuro de la civilización

Estamos en los umbrales de otra gran revolución tecnológica. Sus efectos rebasan las fronteras nacionales. El mundo está en condiciones de crear tecnologías que hagan controlable la degradación ambiental. Los países industrializados deben proporcionar incentivos para la elaboración de tecnologías ambientales bien concebidas que impidan la producción de materiales nocivos y promuevan un uso eficiente de la energía. Para avanzar hacia un mundo más consciente de los problemas ambientales se requiere que los países en desarrollo tengan acceso expedito y económicamente viable a esas tecnologías.

Nuestro continente tiene que tener una voz clara y contar con una estrategia en cuestiones ambientales y de desarrollo. Para colaborar a esos efectos, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Banco Interamericano de Desarrollo patrocinaron la preparación de este informe, en colaboración con la CEPAL y el PNUMA. Se basa en el pensamiento, el análisis y los debates que se han desarrollado en la última década en la región. Numerosos expertos y científicos de nota han hecho aportes directos a su preparación, y se han realizado consultas con diversas entidades públicas y privadas. Este informe representa un esfuerzo encaminado a aprovechar esas reflexiones, una perspectiva latinoamericana de los problemas, la exploración de nuevos rumbos, la promoción de una reorientación con respecto a modalidades de crecimiento defectuoso vigentes en un pasado reciente, y la canalización de la iniciativa política y la participación pública encaminadas a establecer una estrategia de desarrollo que no sea autodestructiva.

"Nuestra Propia Agenda" busca contribuir al desarrollo de una visión regional con miras a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Brasil 1992 debe servir como foro para adelantar esfuerzos globales en la búsqueda de un balance entre atender las necesidades de hoy y proveer las de las futuras generaciones. Nuestra región asigna alta prioridad en esa agenda a los problemas del medio am-

biente relacionados con el desarrollo. En el centro de esas preocupaciones está la necesidad de erradicar la pobreza y mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos. Es de esta manera que América Latina y el Caribe pueden construir un futuro común para la región con el resto del mundo.

Mahatma Gandhi escribió sabiamente: "¿Cómo no seremos violentos con la Naturaleza cuando lo somos los unos con los otros?". La paz entre nuestros países, la paz interior de nuestras naciones en el marco de sociedades civiles y pluralistas, la paz con la Naturaleza, la armonización de la satisfacción de las necesidades básicas de hoy con las del mañana: tales son los pilares de un nuevo tipo de desarrollo, un desarrollo sostenible desde el punto de vista político, económico, filosófico y ético. Marchemos juntos, y convoquemos a todos los que están dispuestos a obrar generosamente y están dotados de visión y de un espíritu de solidaridad frente al futuro de la civilización.

INTRODUCCIÓN

1.1. Consideraciones generales

Al término de la década de los años ochenta resulta evidente que aunque ha habido un prolongado período de crecimiento de la economía mundial, la pobreza y la falta de equidad ha aumentado en todo el mundo.

Para el Tercer Mundo y particularmente para América Latina, la situación en la última década ha sido desastrosa. Esto ha ocurrido por el efecto combinado de la deuda externa, el deterioro ambiental acumulado a través del tiempo, la caída de muchos de los precios de los productos básicos de exportación, las desventajosas tendencias del comercio internacional y las políticas económicas poco exitosas aplicadas en varios países.

¿Qué significación tiene en la historia de un pueblo, una década desaprovechada? ¿Se trata simplemente de un ciclo recurrente? ¿Estamos frente a un punto de inflexión que marca el inicio de una tendencia declinante, o se trata de un período de transición, una oportunidad para reorientarnos y tomar nuevos alicientos? El curso de los pueblos no parece estar predeterminado. Más bien se hace y se rehace a medida que surgen directivas visio-narias, capaces de proponer soluciones acertadas ante los retos que se presentan y se moviliza a la población teniendo en cuenta las restricciones y/o las oportunidades del contexto internacional.

En las situaciones de gran incertidumbre que actualmente viven América Latina y el Caribe, no parece haberse tomado conciencia, todavía, de los factores que están en juego. Por eso, debemos comenzar por interpretar la verdadera naturaleza y magnitud de los problemas que nos afectan y las poderosas fuerzas que condicionan el acontecer mundial. Ello requiere ubicarnos dentro de una perspectiva suficientemente amplia para examinar con objetividad los padecimientos propios de la Región.

El modelo de civilización que prevalece en el mundo y que ha permitido avances importantes al ser humano está mostrando, desde hace algunas décadas, manifestaciones inequívocas de crisis. Mientras se producen signos de progreso en algunas áreas, aparecen claras muestras de deterioro económico y social en otras y surgen indicios preocupantes de degradación ambiental y situaciones que desmejoran la calidad de vida de la población. De hecho, los problemas socioeconómicos y ambientales amenazan la sustentabilidad del propio proceso de desarrollo de la humanidad, en el mediano y largo plazo.

A pesar del enorme progreso tecnológico, grandes masas de población siguen marginadas de los beneficios del crecimiento económico: la pobreza es más crítica y se ha extendido por el mundo. Los países más avanzados incrementan su riqueza y se distancian de los en vías de desarrollo. En este último grupo de países, junto con la pobreza crítica se produce un rápido deterioro de las clases medias y afloran grupos sociales que por su elevado nivel económico, han alcanzado índices de consumo que tampoco resultan sustentables.

Nos encontramos, entonces, ante una situación de crisis del modelo básico de civilización que vivimos: la modalidad de desarrollo actual parece cada día menos viable. Si cambiar de modalidad de desarrollo augura problemas potenciales, proseguir sin modificaciones el rumbo actual se presenta como aun más conflictivo. De allí que no parece una solución para la los países de América Latina y el Caribe intentar su incorporación plena a un esquema de funcionamiento que se muestra objetivamente desajustado en los propios países donde fue exitoso en el pasado. Se hace imprescindible ir hacia modalidades de desarrollo diferentes, que distribuyan los beneficios en forma más equitativa, eviten el altísimo deterioro ambiental y mejoren positivamente la calidad de vida —no tan sólo el ingreso per cápita— de las actuales y futuras generaciones.

Como toda situación de crisis, la nuestra presenta problemas pero también oportunidades para mejorar. En cierta forma la crisis constituye una desautorización de lo que se ha estado haciendo en los últimos tiempos

y la forma cómo se lo ha hecho. Ello nos impele a ser menos dependientes del pasado y más osados y creativos para hacer las cosas de manera diferente en el futuro y así prevenir los problemas que nos acosan u otros nuevos. Todo esto será posible si realizamos una evaluación objetiva de cuáles son los grandes problemas del desarrollo que afectan a la Región, cuáles las prioridades para abordarlos y cómo se puede hacer esto con éxito. Se impone diseñar estrategias que hagan factible aplicar, en América Latina, enfoques y directrices para alcanzar un desarrollo ambiental sustentable.

Para América Latina y el Caribe, se ha hecho crucial iniciar una indagatoria conducente a explorar nuevos cursos de acción que permitan elevar realmente la calidad de vida de toda la población. Estas estrategias deberán señalar caminos y procedimientos que nos eviten transitar por las etapas y problemas por los que han atravesado los países que actualmente gozan de niveles más altos de desarrollo.

Reorientar nuestro defectuoso crecimiento exigirá también un cambio dramático en el comportamiento de los países industrializados y en la actitud y naturaleza de las relaciones que ellos han establecido con nosotros. Son de tal alcance las consecuencias económicas y ecológicas que generan esas conductas y son tan fuertes los vínculos de la interdependencia, que sólo una modificación radical puede hacer viable nuestro empeño de corregir la modalidad de crecimiento que adoptamos en el pasado.

Para ello se hace indispensable la fijación de ciertas posiciones que sirvan de base sólida a esta empresa. Ellas tienen que ver con la visión que adoptemos en la Región sobre lo que debe ser el desarrollo sustentable; las causas del crecimiento defectuoso que nos condujo a la crisis actual; la determinación de nuestra agenda ambiental; la concepción de las estrategias que pueden hacer viable el desarrollo que deseamos y sus condicionamientos globales; nuestra tardía inserción en la revolución científico-tecnológica en marcha, y con la necesidad de fortalecer la capacidad para poder negociar con el Norte unas condiciones más favorables para nuestro desarrollo sustentable.

Si convenimos en una posición regional común alrededor de puntos como los mencionados, será más fácil fijar los objetivos que debemos perseguir. De la discusión que propiciamos, han de surgir coincidencias y disparidades que tendrán que ser allanadas con anticipación. Un diálogo fructífero sobre el tema resulta imprescindible para crear acuerdos que consoliden posiciones y divulguen enfoques y conceptos. Estos, por novedosos, requieran ser expuestos a la dirigencia y a los pueblos de la Región, para formar conciencia y actuar solidariamente.

Una estrategia común en preparación de la Conferencia Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, a celebrarse en 1992, permitiría un diálogo con otras regiones del Tercer Mundo y con el Norte, dentro del marco de este escenario.

Si logramos clarificar el camino y aunar voluntades para adelantar un verdadero desarrollo, el pasado no será más que una experiencia de duro aprendizaje en la historia de nuestros pueblos. A nosotros nos corresponde hacer realidad este propósito.

1.2. Necesidad de una agenda propia

Tenemos que definir nuestra propia Agenda de desarrollo ambiental. Si no somos objetivos al apreciar los problemas y las potencialidades que nos ofrece el patrimonio natural de la región, no podremos establecer prioridades para actuar y seguramente nos equivocaremos también al diseñar las estrategias que creamos puedan hacer viable el desarrollo sustentable. Los problemas ambientales son siempre determinados por las realidades económicas y sociales presentes en cada fase de desarrollo y por las características del entorno natural y social. A nosotros nos corresponde señalar aquellos aspectos que por su grave incidencia requieren de más urgente atención.

Los países industrializados dudan en vincular la temática ambiental con el subdesarrollo. Es lógico que así sea. Graves impactos ambientales se originan en los patrones insostenibles de consumo y desperdicio de recursos naturales que esos países han establecido. En la década de 1970 se dijo que el desarrollo constituía la causa de los mayores problemas de degradación ambiental. Pero durante los años 80, nos percatamos que el estancamiento tiene aún peores efectos. La crisis económica ha producido en la mayor parte de nuestros países una caída real en el ingreso per cápita; se ha incrementado el desempleo y se han reducido los gastos dedicados a programas de salud, educación y vivienda, y servicios urbanos.

Al término de esta década, 200 millones de nuestros pobladores vivían en condiciones de pobreza crítica y, si bien es inadmisiblemente atribuir a los desvalidos la responsabilidad exclusiva por la degradación del entorno en que subsisten, tenemos que aceptar que pobreza y deterioro ambiental son efectos paralelos e interactuantes de un mismo proceso global de crecimiento desequilibrado. (1) Mientras persista esa modalidad de crecimiento, estaremos aumentando la pobreza y con ello contribuyendo aún más a marginar las oportunidades que nos puede deparar el futuro. En el otro extremo, un sector muy reducido de la población reproduce las pautas de

consumo de los países desarrollados y genera por ende problemas ambientales similares a los que tanto preocupan a los países del Norte.

Existen muchas otras situaciones que es urgente remediar. Nos referimos a problemas tales como los que se derivan de prácticas inconvenientes en el uso del suelo; el deterioro del medio urbano donde habita la mayoría de la población; el aprovechamiento irracional que hacemos de los grandes ecosistemas, base de nuestro patrimonio natural; y la agresión permanente a nuestras fuentes de agua, entre otras manifestaciones ostensibles de degradación ambiental.

Pero estos problemas no pueden ser abordados aisladamente de factores económicos nacionales e internacionales como el pago de un servicio abusivo por la deuda externa y la caída de los precios de las materias primas en el mercado internacional, que inducen a la Región a abusar de sus recursos naturales, en particular a consecuencia del desempleo y la miseria.

1.3 Necesidad de una estrategia propia

No existe una estrategia universal para alcanzar el desarrollo sustentable. Las estrategias más acertadas están condicionadas por el análisis que hagamos de las peculiaridades institucionales, económicas y sociales de la Región y por la consideración de nuestros problemas ambientales.

Como hemos señalado, la pobreza constituye, a la vez, causa y secuela del deterioro ambiental. Por ser además el principal problema social de la Región que debemos resolver, una de las estrategias básicas para lograr el desarrollo sustentable es el enfrentamiento de la pobreza crítica. Al corregir esta situación estaremos actuando tanto sobre la propia raíz de los problemas que desamos solucionar, como sobre sus consecuencias. Más este objetivo tendrá que ser abordado no con la visión asistencialista que ya se ha hecho tradicional, sino atacando los diferentes factores estructurales que determinan la existencia del fenómeno, como son las políticas económicas que contribuyen al empobrecimiento de la población y originan también gran parte de la depredación ambiental.

Dentro de esa madeja de problemas que afectan la suerte de los latinoamericanos y caribeños, no hemos tenido la suficiente perspicacia para vislumbrar que bajo los mismos subyacen factores inseparablemente ligados a la concepción que tenemos de la articulación sociedad/naturaleza. Cambiar esas actitudes es prerequisite para poder avocarnos a una estrategia de desarrollo en armonía con el ambiente. Y si ésto viene acompañado de profundas reformas para fortalecer la sociedad civil y hacerla más

participativa, estaremos activando uno de los mecanismos más eficaces para abogar por un desarrollo sustentable. Hombres movlizados socialmente, para quienes la solución de sus problemas ambientales constituyen necesidades sentidas, serán capaces de liderar iniciativas audaces y creativas en defensa de su medio ambiente y, por ende, de un desarrollo sustentable.

Alcanzar el desarrollo sustentable requiere además, establecer algún mecanismo de planificación para el mediano y largo plazo. Mucho hemos oído hablar, como si fuera un asunto puramente teórico, acerca de la necesidad de incorporar la dimensión ambiental en dicha planificación. Empezamos a vislumbrar que esto último será posible a través del ordenamiento territorial. Si somos capaces de hacer un esfuerzo para ordenar las actividades económicas y sociales en armonía con los valores del ambiente, habremos dado pasos definitivos en dirección a un aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y de la lucha contra la contaminación.

Se crearán así las condiciones para poder actuar preventivamente ante las manifestaciones de la degradación y no solo para remediar los daños, a veces irreversibles, cuando ya están hechos. Nos anticiparemos actuando sobre las verdaderas causas, que dependen mayormente de las formas como se ejecutan las actividades productivas y de población.

Entre otros aspectos centrales de las estrategias para alcanzar el desarrollo sustentable, están las profundas reformas que se requieren para modernizar y fortalecer tanto la actividad privada como la estructura del Estado. Con estructuras blandas en donde prevalezca la ineficiencia y la corrupción, no será posible llenar las lagunas legales existentes, ni mucho menos garantizar la aplicación de la justicia para castigar a los culpables de los delitos ambientales. Tampoco podremos contar con las instituciones idóneas para formular e instrumentar las políticas de mediano y largo plazo que se requirieren dentro de una estrategia de desarrollo sustentable.

1.4. El entorno internacional y nuestro desarrollo sustentable

El desarrollo sustentable de América Latina y el Caribe encontrará a su paso escollos cuyo origen está fuera del alcance de la Región. La creciente interdependencia internacional, no siempre enmarcada dentro de los conceptos de justicia social, ha producido asimetrías que se interponen en su curso. Es larga la lista de aspectos que tendrán que ser discutidos y resueltos si desamos abordar esta cuestión dentro de un contexto verdaderamente adecuado. No hacerlo así equivaldrá a sentenciar anticipadamente

a la inoperancia de todas las otras estrategias que podamos formular en tal sentido.

Debemos mirar con objetiva preocupación el problema del redespigue industrial que se adelanta en los países más avanzados, como resultado de la nueva revolución científico-tecnológica y de las más estrictas reglamentaciones ambientales que se han establecido. Se está induciendo así un proceso de relocalización industrial hacia el Sur, con el riesgo de reproducir impactos ambientales que son actualmente inaceptables para el mundo industrializado.

Otro problema que está adquiriendo gran importancia para los países en desarrollo por las consecuencias graves e inmediatas que reviste, es la creciente amenaza de convertimos progresivamente en una suerte de basural de los países industrializados. El potencial delictual que encierra esta situación que se está gestando, puede llegar a adquirir dimensiones semejantes a las del narcotráfico, con toda su rémora de corrupción y destrucción ambiental.

A los numerosos problemas de connotaciones directamente ambientales a los cuales en parte nos hemos referido, se agregan otros de naturaleza económica entre los que cabe mencionar:

- El flujo de capitales desde América Latina y el Caribe hacia los países desatrollados;
- el constante deterioro de los precios de las materias primas producidas por los países de la Región;
- la manipulación de las tasas de interés, factor que ha jugado un papel fundamental en el agravamiento del problema de la deuda externa;
- la inducción de patrones tecnológicos inapropiados; y
- el proteccionismo comercial.

Es preciso que todos estos problemas sean tratados cuando se abra el diálogo internacional para la búsqueda de un desarrollo sustentable a nivel global. Resulta claro que este concepto no sería viable si se pretendiera aplicar restringido al marco exclusivo de los territorios nacionales.

1.5. Necesidad de fortalecer nuestra capacidad de negociación

Los puntos de la Agenda que proponemos para la discusión forman parte de las preocupaciones que compartimos con el resto de los países en

desarrollo, junto con los cuales conformamos las tres cuartas partes de la población del mundo.

Hay que tomar en cuenta que cualquier esfuerzo que se haga por vincular desarrollo y medio ambiente, implicará costos económicos importantes que principalmente las naciones desarrolladas están en capacidad de afrontar. El cumplimiento de la Agenda habrá de convenirse entonces estableciéndose responsabilidades acordadas con la capacidad de cada parte. A la par de las acciones que haya que emprender para modificar las tendencias que amenazan los grandes ecosistemas mundiales, para América Latina y el Caribe adquiere una importancia central la conservación de la potencialidad de sus propios ecosistemas.

Asimismo, no podrán desvincularse de esas negociaciones el tratamiento de asuntos que son absolutamente prioritarios para poder controlar un contexto favorable al desarrollo sustentable. Sin una perspectiva de paz duradera que permita la posibilidad de desmontar el arsenal de armamentos convencionales, nucleares y químicos, continuaremos bajo la amenaza de un cataclismo ambiental irreversible. Pero es más: un alfojamiento de las tensiones entre las grandes potencias, como el que actualmente presentamos, permitirá canalizar al logro de un desarrollo sustentable en escala planetaria, excedentes importantes que en la actualidad se destinan a gastos militares.

Por su parte, el tratamiento del tema del narcotráfico es absolutamente relevante, dentro de la citada Agenda. No hay factor contaminante con mayor potencial destructivo para una sociedad que la drogadicción, especialmente cuando esta lacra ateca a la juventud y a los sectores intelectuales dirigentes.

A la hora de sentarnos a discutir con el Norte una Agenda común sobre desarrollo y medio ambiente, habrá que tomar en cuenta aquellos factores que nos hacen débiles y aquellos que contribuyen a darle solidez a nuestras posiciones. Sabemos que constituimos actualmente una región empobrecida y endeudada, susceptible de ser presionada por los países del Norte que en virtud de la crisis han visto consolidadas sus ventajas. Por eso deberá considerarse el hecho de que junto al pasivo acumulado por la región, tenemos también un activo invaluable constituido por el cúmulo de recursos naturales que pueden conformar la base para un desarrollo sustentable de toda la humanidad: el potencial de nuestra rica biodiversidad y patrimonio cultural, valiosos recursos que van inseparablemente unidos a los anteriores. Ese activo se ve, además, engrandado por la cuantiosa deuda ambiental que los países industrializados han

ido adquiriendo con al Región a través del tiempo y que todavía no ha sido saldada.

He aquí, las ideas fundamentales que han guiado el análisis y evaluación de la situación y la formulación y selección de estrategias y acciones que se proponen en las secciones siguientes de este documento. Son los puntos sobre los cuales ha habido mayor consenso y el convencimiento de que era necesario desmontar mitos y plantearse, con alguna audacia, las soluciones viables para nuestra sociedad.

OUR OWN AGENDA

Because of its special relevance, we are presenting the Prologue and Introduction of the Report of the Latin-American and Caribbean Commission on Development and Environment, August 27, 1990

Summary

PROLOGUE. Plight of a Small Planet: "Earth" Must Have No "Third World". Solidarity and Complementarity. Finding Peace. Past Financial and Ecological Debts: A Maze that Must Be Straightened Out. Back in History: Lessons for the Future. The Challenge for Building Same Cities. The Energy Dilemma. Our Natural Heritage: A Fragile Potential. The Amazon: A Wealth to Sustain and Develop. Nature Unbounded: Thinking Like a River. Only One Sky: We All Breathe the Same Air. A Hundred Years of Non Sustainability: Reversing a History of Flawed Development'. A Sense of Solidarity: A Future for Civilization.

INTRODUCTION. 1.1. General Considerations. 1.2. The need for our own agenda. 1.3. The need for a special strategy. 1.4. The international climate and our sustainable development.

PROLOGUE

"The Universe requires an eternity... Thus they say that the conservation of this world is a perpetual creation and that the verbs, 'conserve' and 'create', so much at odds here, are synonymous in heaven".

Historia de la Eternidad

Jorge Luis Borges

*Plight of a Small Planet:
"Earth" Must Have No "Third World"*

Environmental problems concern us all. No nations are peripheral. The search for environmental solutions must involve the North and the South and the East and the West. On "earth" there can be no "Third World".

The interrelated challenges of development and the environment require cooperation with the North. Only together can we find solutions to problems of international development (external debt, terms of trade and protectionism), threats to the environment (soil degradation, urban environmental problems, air and water pollution, loss of bio-diversity, climatic change, destruction of the ozone layer, and management of toxic wastes), the drug problem (production, consumption and trafficking), and the potential abuse of resources of the global common (outer space and the Antarctic). Only together, can we prevent human costs of even greater magnitude.

Solidarity and Complementarity

Cooperation between North and South is demanded partly because there exists an ecological complementarity between developed and developing countries. Developed countries are primarily located in the temperate regions of the world while practically all developing countries are located in the tropical ring. For the greater part the territories of developed countries offer better conditions for agriculture than those of the developing countries, many of which are covered by deserts, mountains, and tropical forests that limit agriculture.

Developed countries produce a food surplus while developing countries must import food. Developing countries are essential partners for global environmental security, especially for the restraint of greenhouse gases and the preservation of bio-diversity. Major technological progress in developing countries would enable them to produce all the food they will require in the future without being forced to reduce the global environmental security services that they are providing. This complementarity will require solidarity between North and South. It will entail the mobilization of financial and technological resources to reach common goals. It will demand the ability to renounce a confrontational style, to forsake a mindset of winners and losers, to forget old notions of separate worlds within this single planet.

Finding Peace

Humanity desires to consolidate peace. We are pleased with the relaxation of tensions between the superpowers and with the favorable environment that this brings to international co-operation. However, conventional, chemical and nuclear arms continue to be dire threats to humanity. We consider that the risk of nuclear war is still the single most important threat to the survival of humankind. While steps have been taken towards nuclear disarmament, the massive destructive capacity of the major powers remains intact. In addition to human suffering, armed conflicts still prevailing in some countries or regions cause major environmental impact on renewable natural resources and land degradation. The reduction of military expenditures is a common goal.

*Past Financial and Ecological Debts:
A Maze that Must Be Straightened Out*

The present economic crisis and environmental threats are rooted in defective patterns of development -the economy of opulence and waste in the North and the economy of poverty, inequity and pressing needs for short-term survival in the South. The challenge is to design a strategy of development in harmony with nature and with the needs of future generations. In developing countries, the link between poverty, population and environmental stress must be given increased attention.

In our region, increasingly, we see that poverty is both cause and effect of local environmental deterioration. This link between poverty and exploitation of natural resources helps, reveal another linkage: the relationship between foreign debt and the region's environmental problems. The high interest payments on foreign debt between 1982 and 1989 led to a net transfer of capital from the region to the creditor countries of \$200 billion. This has encouraged over exploitation of natural resources to meet pressing short-term needs and speedily increase exports. The 1980s have represented for the region a "lost decade". A substantial number of countries of the region have seen incomes reduced to levels reached one, two and even three decades ago. The regional GNP in 1988 was lower than that for 1978, the decline in the 1980s is also in sharp contrast with the previous decade's constant growth. In this context, recuperation of growth and development are a necessary condition to address pressing social and environmental issues. It is estimated that the region has an investment gap of \$80 billion annually. This situation results in grossly inadequate financial investment in social infrastructure and detracts attention from urgent environmental

concerns. Debt alleviation is essential for dealing with environmental problems.

The transfer of capital away from the region did not begin, of course, in the past decade. The industrial revolution was based in large part on the exploitation of non-renewable resources in the industrialized countries themselves, as well as in the developing countries, in a way which did not reflect their true cost in terms of conservation needs and environmental consequences. The progress of industrialized countries was thus based on deforestation and, in some cases, the predatory exploitation of natural resources. By thus exploiting nature, the industrialized countries have incurred an ecological debt with the world. This carries an obligation now to support development in order that it may not aggravate delicate conservation and environmental balances resulting from past neglect.

A common North-South agenda must include first, the mobilization of financial resources on concessional terms to support environment and development action in the region and, second, a determination by the industrialized countries to develop and transfer environmentally sound technologies on a concessional basis. Latin America and the Caribbean are committed to the sustainable management of their ecological assets to help reverse the process of global environmental degradation and to preserve bio-diversity. However, the industrial countries must demonstrate an equal commitment to sharing the burden of the cost in a manner commensurate with their contribution to environmental degradation and their substantial ability to support and implement new environmental and development policies. The level of burden-sharing should reflect the accumulated environmental debt for which the industrial countries are primarily responsible, as well as the significant external financial support required to complement the internal efforts of countries in the region to eradicate critical poverty.

Developed countries should also facilitate access by the countries of the region to environmentally benign technologies on an affordable basis and to collaborate in joint research and development ventures aimed at accelerating production of new and existing technologies in our countries. This will have the added benefit of helping to transform and modernize the productive sectors of the economy.

Back in History: Lessons for the Future

Back in history, the people of Latin America and the Caribbean were motivated by a deep, almost religious relationship between man and his

environment. There have been lapses over time; but these beginnings must serve as the foundation for the region's commitment to sustainable development. Preservation of indigenous cultural identity is important of the region's environmental and development perspectives. The Indian population of the region rightly demands to participate in the strategies planned for the development of the forest which it has been using, managing and preserving for centuries.

Our message is intended for our civilian society and for its leadership. We consider that strong political will and leadership are required to break the deeply rooted popular belief that land use has no social or ecological limits; that bodies of waters are owned by individuals and are not available to benefit all society; that these resources can be exhausted or polluted with impunity; and that industry is not responsible for its wastes and emissions. Public education and participation are essential for environmental protection.

Our region has experienced a democratization process that should be sustained. The broad participation of civilian society is essential if we are to achieve development with equity. There currently exists a great movement for improving the quality of our democracy in ways that facilitate people-centered development while recognizing the legitimate role of the state, particularly in its enabling and regulatory function. These processes of governmental modernization and reform should be encouraged both for their wider purposes and the contribution they can make to achieving the goals of sustainable development.

We must develop legislation and institutions to address new emerging environmental problems and threats. Old structures must be modernized and local communities and authorities empowered and granted access to environmentally sound technologies, for they are closest to the needs and demands of their inhabitants. Non-governmental organizations, especially grassroots organizations engaged in harmonizing environmental needs and development, should be strengthened. The private sector must be encouraged to implement programs to arrest environmental degradation before it becomes irreversible. Participation of women in environmental protection, both in urban and rural areas, is essential to promote a positive behavior in youth and in the population in general. Major efforts shall be developed in the region to achieve these goals.

We consider it essential that new economic criteria and indicators be developed that take into account natural resources as stock of "capital". We must abandon policies which encourage over-exploitation of natural

renewable resources, which promote the uncontrolled use of pesticides and herbicides; and which promote the inefficient use of energy. We must develop pricing and tax systems that provide incentives for environmental protection in industrial and other productive activities.

The Challenge for Building Some Cities

Three out of four Latin Americans inhabit urban areas. An increasing number of urban inhabitants face inadequate basic services and housing and unsanitary conditions both at home and at work. The cities are plagued by severe problems of disorganized expansion, solid and liquid waste disposal and air pollution that make them vulnerable to natural disasters.

This process of urbanization with insufficient capital poses an impossible task for local authorities. Thus "informal cities" continue to grow at an accelerating rate around most Latin American metropolitan centers. For example, a city of 700,000 people is added each year to the periphery of Mexico City and one of 500,000 to the periphery of Sao Paulo. These cities lack the infrastructure of financial resources needed to cope with the current population or to absorb newcomers. Efforts must be made to disperse the population to medium sized cities, but this in turn will depend on a dispersal of economic activity within a context of modern decentralized government. The talent and creativity of the urban poor must be channeled into small community based projects to provide housing and basic services.

Cities where industries are concentrated are often highly polluted and lack adequate social and sanitation infrastructure and proper policies for the treatment of hazardous industrial waste. Acid rain, commonly affecting industrialized countries, is increasing in industrial areas of Latin America and the Caribbean. Toxic wastes are being exported from industrialized countries and are causing major environmental problems. In several cases, industries not complying with environmental laws and regulations in the industrialized countries are being transferred to developing countries where these regulations are ignored.

The environmental challenges facing Latin America and the Caribbean concern human life and well being. Exposure to hazardous waste presents unquestioned health risks. Seven of the 10 commonly found chemicals at waste disposal sites can cause cancer, seven can cause birth defects and five produce genetic damage. The combination of chemical residues, toxic wastes, car exhaust fumes and other consequences of uncon-

trolled urban pollution constitute major health threats to all, but particularly to children and the elderly.

Air pollution alone is a constant fact of life for 81 million urban residents of Latin America. The result is an estimated 2.3 million cases of chronic respiratory illness among children, 105,000 cases of chronic bronchitis among the elderly, and nearly 65 million days of work lost. The additional costs to already overburdened health care systems ultimately can be measured; pain and human misery cannot. Environmental pollution demands a concerted national and international response.

The Energy Dilemma

The region faces problems of insufficient energy use by large sectors of the population, emission of air pollutants, destruction of hydroelectric potential, deforestation due to over-utilization of fuel wood, over-exploitation of fossil fuels and inefficient transformation and use of energy.

The production, transformation, transport and utilization of various forms of energy generate positive and negative impacts. Adequate assessment of their environmental and social impacts, and particularly the potentially adverse consequences they entail for human health, should be undertaken. The region has vast hydropower reserves and renewable energy sources. Also, the potential for energy conservation is large. The region accounts for 20 per cent of the world's hydroelectric potential; however, within the region, only one fifth of the consumed energy is produced by hydropower. While nuclear energy development in the region is limited, in some countries it may be necessary to utilize these sources in the short or medium term. In these cases available environmentally sound and secure technologies should be mobilized. For this, the support of developed countries is crucial.

Our Natural Heritage: A Fragile Potential

The ability to meet our continent's food requirements will suffer because of increasing land degradation and the resulting decline in agricultural productivity. The rural population remains at the mercy of the fragile characteristics of the natural resource base. Rural livelihood depends on climatic cycles which affect agricultural crop production. Farm output will also be harmed in the long-term by the loss of genetic resources.

Modest increases in agricultural production in recent years were due largely to the excessive use of fertilizers and pesticides derived from fossil

fuels. This trend creates the fear that the gradual exhaustion of petroleum sources will in coming years cause a decline in food production, especially in the poorer countries. These countries will be greatly affected since they are highly dependent on petroleum-based products and will also face greater demands for food as their population growth rates are high. Therefore, a consistent effort to improve productivity while conserving soil and water resources is vital for the region.

The region faces water management problems. Vast arid and semi-arid areas have limited water resources. Even in areas with abundant water resources, the distribution of these resources among countries and within countries varies widely. Clean water sources in some countries have been exhausted. Major hydrographic basins exhibit symptoms of degradation. The accumulation of large quantities of sediment in these basins causes frequent flooding, resulting in serious loss of life and property. Hydroelectric plants or irrigation systems should be constructed with adequate environmental safeguards. The situation in general calls for rational and efficient water management and use.

The region is endowed with vast biodiversity. Five out of the twelve richest countries in the world in terms of plant and animal species, the so-called "ecologically mega-diverse" countries, are in Latin America: Brazil, Colombia, Mexico, Peru and Ecuador. This vital biological reserve, which is of major importance both to the region and to the world, is being rapidly depleted. The continued loss of hundreds of tropical species, many without even being classified by science, is an issue of great concern for the region. The region should ensure that this heritage, which has medicinal, industrial and food potential, generate sustainable benefits for the local population. Reforestation, rehabilitation and recovery of degraded ecosystems should enjoy top priorities. Sustainable management of forests, involving other non-timber products⁹ will promote social and economic objectives and the preservation of bio-diversity.

The Amazon: A Wealth to Sustain and Develop

The Amazon cannot be considered simply an ecological treasure and an important regulator of global climate; it is also a major development resource. The preservation of the tropical rain forests, and especially the Amazon forest, will depend on the mobilization of research and development, technology, and financial resources for sustainable management of this area. A commitment of support from the international community and voluntary co-operation of the eight sovereign Amazonian states is needed

to preserve the Amazon as an asset for the region and for the world community.

To reach our goals, it is necessary to develop alternative technology adequate to maintain the fragile ecological equilibria of the region and simultaneously contribute to the countries' economic development. Ecological and economic zoning is a useful tool which should be expanded and promoted. The legal recognition of zoning and its close correlation with economic policies suited to the ecological reality of each zone are important elements for its success.

Preservation of the Amazon is of interest to the world community. However, it is of greatest interest to the Amazonian countries. The issue must therefore be debated by them on their own terms with the support of foreign scientists and an enlightened international public opinion. The issue at stake is the preservation of the forest and its bio-diversity, the control of atmospheric pollution and the development of the region. Agreements have already been formalized among sovereign countries of the Amazon basin. These constitute a starting point for more extensive actions.

Nature Unbounded: Thinking Like a River

Large and small river basins including the Amazon, the Orinoco and the La Plata River belong to several countries. Other shared ecosystems include the Andean Mountain System, the Amazon forest, the Caribbean Basin and the arid and semi-arid region shared jointly by Mexico and the USA. Management of these ecosystems requires common and joint action.

Rivers, seas and oceans know no boundaries. The main problems involving the use of marine resources are over-exploitation of some fish species, oil pollution and degradation of coastal resources and waterfront ecosystems, and the dumping of urban and industrial wastes and pollutants. The efficient and sustainable use of these resources would represent a major gain for the region. All coastal countries should develop coastal zone management strategies. This is especially important for countries in the Caribbean Basin and those threatened by rising seas and oil pollution, among others.

Only One Sky: We All Breathe the Same Air

With the end of the cold war, humanity must address other pressing issues such as the alleviation of poverty, development, equitable relations among nations and large-scale migrations caused by poverty and the envi-

ronmental crisis. Global warming will have a major effect on the rise of ocean levels and is likely to cause other climate-related disasters which will also affect Latin America and the Caribbean.

If misguided energy policies are the principal causes of global warming and climate change, we must also point out the manner in which a disproportionate use of energy by some countries, particularly the industrialized nations, causes great harm to other countries and to the balance of the planetary system. Developing countries must participate effectively in international negotiations to protect the world's climate.

Depletion of the ozone layer will increase skin cancer and eye defects and will effect marine and terrestrial organisms. The contribution of Latin America and the Caribbean to the production of chlorofluorocarbons and halons is extremely small; 95 per cent of these gases are produced by the developed world. Nevertheless, the consequences of the depletion of the ozone layer would be widely felt in the world. Industrialized countries must take measures to reverse this situation.

The production demand, traffic and consumption of drugs is associated with health and environmental deterioration. Extensive productive lands in Latin America have been converted into cocaine plantations. Chemicals and pollutants used in cocaine cultivation and processing are dumped in rivers spreading pollution. Co-responsibility of consumer and producer countries in this issue is essential.

The Antarctic possesses a unique ecosystem. The manner in which its rich resources should be exploited is extremely controversial. Its mineral and biological resources are desired by many nations. As a global commons, the Antarctic could provide scientific knowledge to many nations, especially in relation to climatic changes. The Antarctic Treaty is to be renegotiated in 1991. We consider it essential that the Antarctic be preserved for use in scientific research.

The use of outer space for communications and remote sensors possesses an economic value. The geo-synchronous orbit may be considered a finite global resource which is already creating conflict because of the large number of satellites in use. The future role of this resource must be defined to ensure that its benefits be equitably shared with developing countries.

Several countries in the region have suffered increasingly from natural disasters, particularly tropical storms (notably, in the Caribbean) and earthquakes (notably, in Central America). Disaster prevention and mitigation should become an integral part of development and environmental

planning at local, national, regional and global levels. As evidence mounts of human responsibilities for the intensification of such natural disasters, so does the responsibility for mitigating their consequences. There is need for such formalized sharing of the burden of natural disasters, particularly when the majority of the victims are among the world's poor.

We believe that these common endeavors must be carried out within an international and institutional framework - established at both the United Nations level and at the level of inter-American institutions. We should strive for global agreement on human actions to save our endangered habitat.

*A Hundred Years of Non Sustainability:
Reversing a History of Flawed Development*

The call for sustainable development has been articulated by the World Commissions on Environment and Development. Its report, *Our Common Future*, asserts that humanity has the capacity to make development sustainable - to ensure that it meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. This concept, noble and sound as it may be, must be made to work in economic and social terms. To do so, we must realize, first, that some of our resources have been substituted by others and, second, that we ourselves are using some resources too fast to serve either our long-term interests or the welfare of future generations.

Although our region retains a favorable ratio between resources and population compared with other regions of the world, we recognize the immense pressure on the capacity of the ecosystems to sustain the present population growth rate.

Because our region attaches high priority to meeting the needs of the almost 200 million people living in poverty, we must regain progress and development. Development should, however, be reoriented so that growth does not aggravate pollution and environmental problems. Economic growth must not become self-destructive.

Recent action by industrial countries to establish a modest fund to finance implementation in developing countries of the provisions of the Montreal Protocol on the Protection of the Ozone Layer is a step in the right direction. However, the implementation of large-scale and pervasive measures to redress current conditions requires that substantial additional concessional financing be channeled to the countries of the region in accor-

dance with the specific priorities of those countries. In fact, a consensus among the countries of the region and of the industrial world that reflects mutually agreed and beneficial obligations is essential if we are to reverse global environmental degradation and ensure sustainable development in the near future. Various mechanisms have been identified for mobilizing the required financial resources for a Global Environmental Facility. These include among others: a "carbonsink" levy, a CO₂ emission levy, a tax on oil levied on the users, and voluntary contributions by the industrial countries.

The quest for regional integration has been strengthened by growing global interdependency. Changing economic and political realities underscore the belief that strong nationalism represents a threat not only to global stability but also to the technological advances that have created a largely interdependent world, due in large measure to the speed of modern transportation and communications.

A Sense of Solidarity: A Future for Civilization

We are in the era of another major technological revolution. Its effects transcend national borders. The world is in a position to develop technologized nations must provide incentives for the development of environmentally sound technologies which prevent the production of harmful products and promote the efficient use of energy. A change towards a more environmentally conscious world requires that developing countries have easy and affordable access to such technologies.

Our continent must have a clear voice and strategy on environment and development issues. It is to help formulate this strategy that the United Nations Development Programme and the Inter-American Development Bank have sponsored the preparation of this report, in collaboration with ECLAC and UNEP. It draws on the thinking, analysis and debate that have taken place over the past decade in the region. A number of distinguished experts and scientists have directly contributed to the preparation of the report, and consultations have been carried out with diverse public and private sector groups. The report represents an attempt to draw upon these reflections, to provide a Latin American perspective on these issues -exploring new courses of action, rethinking the practices of flawed development that were followed in the recent past, and channeling political initiative and public participation into a development strategy which is not self-destructive.

"Our Own Agenda" seeks to contribute to development of a regional vision for the United Nations Conference on Development and Environment. Brazil 1992 must serve as a global forum in which efforts must be made to seek a balance between meeting the needs of today and providing for those of future generations. Our region places high priority on the discussion of those environmental issues clearly linked with development. At the heart of those issues is the urgent need to alleviate poverty and improve the quality of life of our people. It is in this way that Latin America and the Caribbean can construct a common future for the region and the rest of the world.

Mahatma Gandhi in his wisdom wrote, "How can we not be violent with nature when we are violent among ourselves?" Peace between our countries, peace within our countries in the framework of civil and pluralistic societies, peace with nature, harmonizing satisfaction of the basic necessities of today with those of tomorrow -these are the pillars of a new kind of development, a sustainable development in terms of politics, economics, philosophy, and ethics. Our Own Agenda must be one that acknowledges the eternity of the universe. Let us move forward together and call on all those who have the willingness to act generously and who are endowed with vision and a sense of solidarity for the present and future of human civilization.

INTRODUCTION

1.1 *General Considerations*

At the end of the decade of the 1980s it was evident that the world economy had undergone a prolonged period of sustained growth. At the same time, it was also evident that this growth was inequitable and was characterized by greatly increased poverty world wide.

For the Third World, and particularly for Latin America, economic conditions have deteriorated seriously over the last 10 years. This is the combined result of growing external indebtedness, environmental deterioration over a number of years, the decline in the price of many basic export commodities, unfavorable trends in international commerce and the failure of the economic policies adopted by several countries to produce the desired results.

What impact does a "lost decade" have on a country's history? Is this simply a recurring cycle? Are we marking the start of a downturn, or is this a period of transition, an opportunity to change directions and take stock of ourselves? A country's development does not appear predetermined. Rather, it ebbs and flows in response to visionary mandates which are capable of projecting solutions and mobilizing the population in the face of challenges and the restrictions and opportunities presented by international conditions.

In the great uncertainty which presently faces Latin America and the Caribbean, there does not appear to have developed an awareness of the factors involved. As we approach the end of a millennium it is still not clear what the future holds for us. We should, therefore, begin to analyze the true nature and magnitude of the problems that affect us and the powerful forces that move in today's world. This obliges us to look at the large picture and examine the region's ills in an objective fashion.

The models of civilization that prevail in the world and that have produced important gains in human development for several decades have shown unmistakable signs of crisis. Signs of progress have been accompanied by worrisome evidence of environmental degradation and situations which lower the quality of daily life. In fact, the appearance of environmental problems threatens the ability to sustain this process of human development in the medium and long-term.

Despite the achievement of enormous technological progress, large segments of the population still do not enjoy the benefits of economic growth; poverty is more intense and more widespread throughout the world. The more advanced countries increase their wealth exponentially and outpace the developing nations. In addition to the presence of grinding poverty, the latter are characterized by the emergence of social groups which have achieved high levels of income and consumption which are also proving to be unsustainable.

We are confronted, therefore, with a crisis situation basic to the civilization in which we live: the development model that we have adopted appears less viable with each passing day. Although changing this model might appear to present problems, continuation of the present model without modification is certain to prove even riskier. It does not appear feasible, therefore, for the Latin America and the Caribbean region to attempt to associate itself with a system which is viewed objectively as out-of-phase in the very countries in which it was judged a success in the past. It is essential, therefore, that these regional countries adopt different models of

development which distribute the benefits of economic growth in a more equitable manner, which avoid a high level of environmental deterioration and which truly improve the quality of life -not only the per-capita income level- of present and future generations.

As in all crisis situations, ours presents opportunities for improvement as well as problems. To a degree, the crisis constitutes a denial of the validity of what has been done in recent years and the manner in which it has been done. For this reason, we may be less dependent on the past and more daring and creative in our future endeavors, thus preventing present and future problems. All of this is feasible if it is based on an objective evaluation of what constitute the great development problems of the region, the priorities that must be set for addressing them, and the manner in which they may be carried out successfully. Essential to this task is the development of strategies which contain methods and procedures by which we can achieve environmentally sustainable development

It is crucial for Latin America and the Caribbean to begin to devise new action programs which will produce a genuine improvement in the quality of life of their populations. The strategies should signal ways and procedures which will enable us to avoid the stages and problems which those countries have had to follow which today enjoy the world's highest living standards.

The reordering of our flawed growth patterns will also require a dramatic change in the behavior of the industrialized countries and in the attitude and nature of their relations with us. Such are the economic and ecological consequences engendered by this behavior and so strong are the links of interdependence between those countries and our region that a radical modification of this relationship will be required if our efforts to correct the developmental methodology that we adopted in the past are to be successful.

To achieve these goals we must establish certain positions which will provide a solid basis for our undertaking. These must include agreement within the region as to what constitutes sustainable development; the causes of flawed development that led us to the current impasse; agreement on our environmental agenda; the strategic concepts underlying the type of development which we wish to achieve, and their global testing; our delayed involvement in the scientific-technological revolution now in progress, and the need to strengthen our capacity to negotiate with the North more favorable conditions for our sustainable development.

If we agree to a common regional position based on points such as those mentioned, it will be easier to set the goals which we ought to pursue. From the conversation which we are proposing there will develop points of agreement as well as disparities which must be settled in good time. A fruitful dialogue is essential if we are to reach agreements which will enable us to consolidate our positions and articulate methods and concepts. Because these concepts will be new, they must be explained to the national leadership and to the people of the region in order to develop awareness and to gain support.

The preparation of a common strategy will enable us to enter into an effective dialogue with other Third World nations and with the North at the World Environment and Development Conference, to be held in 1992.

If we manage to chart our course and develop the collective will to achieve true development, the past will be little more than a unpleasant memory in the history of our peoples. To us falls the task of carrying out this plan.

1.2 *The need for our own agenda*

We must define our own environmental agenda. If we fail to evaluate objectively the problems and opportunities presented by the region's natural heritage, we cannot establish priorities for action and we will assuredly err in designing the strategies that we believe can provide us sustainable development. Environmental problems are always determined by the economic and social realities present in each development phase and by characteristics of the natural and social environment. It is up to us to point out those aspects which, because of their serious nature, require the most urgent attention.

The industrialized countries hesitate to link the environmental issue with underdevelopment. This is natural. The unsustainable patterns of consumption and dissipation of natural resources adopted by these countries have exerted an alarming impact on the environment. Throughout the decade of the 1970s development was considered the greatest cause of environmental degradation. But now in the 1980s we perceive that stagnation produces even worse effects. Economic crisis has produced a significant decline in per capita income in most of our countries; unemployment has increased while investments in health, education, housing and urban services have been reduced.

At the end of this decade, 200 million of our inhabitants lived in conditions of extreme poverty, and although it is inadmissible to attribute to the destitute the exclusive responsibility for contamination of their environment we must accept the fact that poverty and environmental deterioration are parallel and interrelated effects of the same global process of flawed development. As long as this mode of development persists, poverty will merely increase, further jeopardizing our future.

We must remedy many other situations as well. We refer to problems such as those derived from inadequate soil use and exploitation, deterioration of the environment in urban centers, which contain the bulk of our population; irrational exploitation of our most important ecosystems, the basis of our natural heritage; and permanent abuse of our water sources, to mention but a few.

These problems cannot be addressed, however, without taking into account such national and international economic factors as payment of an onerous service on the external debt and the decline in international commodity prices which, largely as a result of unemployment and poverty, force the region to abuse its natural resources.

1.3 *The need for a special strategy*

There is no universal strategy for sustainable development. The most successful strategies are based on an analysis of our own regional institutional, economic and social peculiarities and of our environmental problems.

As we have pointed out, poverty is both the cause and the result of environmental degradation. Because it is in the principal social problem which the region is called upon to solve, a basic strategy for achieving sustainable development must face up squarely to the problem of abject poverty. To correct this situation we must attack the very root of the problems which we wish to resolve as well as their consequences. In addition, we cannot treat the problems in a social-welfare manner, as we have in the past, but must attack the structural factors that underlie the phenomenon, among them the economic policies which contribute to impoverishment of the population and in large measure cause environmental degradation.

Amidst all of the problems effecting the fortunes of Latin America and the Caribbean, we have not been sufficiently discerning to note that these problems are closely linked with our concept of society and nature. We must change these attitudes if we are to devise a development strategy

in harmony with nature. And, if this reforms and strengthens civil society and makes it more participatory, we will be establishing a mechanism for the creation of sustainable development. Men who are socially mobilized and have a deeply-felt need to solve their environmental problems will provide daring and creative corporate leadership in defense of their companies' environment and, simultaneously, of sustainable development.

The achievement of sustainable development also requires the establishment of a medium and long-term planning mechanism. We have heard much talk, as though it were a purely theoretical matter, of the need to incorporate the environmental dimension into this planning. We begin to foresee that this will be possible on some type of territorial basis. If we are capable of exerting a deliberate effort to bring order to economic and social activities throughout the region, in harmony with environmental values, we will have taken two strong steps toward sustainable use of natural resources and control of contamination.

We would thus create conditions which would enable us to act preventively to control environmental degradation rather than simply to repair the damage, which is often irreversible, once it has been done. We will prepare to act upon the fundamental causes, which depend for the most part on the manner in which productive activities are carried out and on the population.

The achievement of sustainable development will require, among other things, the enactment of far-reaching reforms in order to modernize our governments. Weak structure characterized by inefficiency and corruption will not enable us to fill existing legal loopholes and even less guarantee the trial and punishment of those guilty of environmental crimes. Nor will we be able to rely on institutions capable of formulating and carrying out the medium and long-term policies required by a sustainable development strategy.

1.4 *The international climate and our sustainable development*

The implementation of sustainable development in Latin America and the Caribbean will encounter obstacles whose origins are beyond its scope. Growing international interdependence, not always subject to the concepts of social justice, has produced asymmetries which obstruct its development. Many aspects of the matter must be discussed and resolved if we are to address this question in a truly adequate context. If not, we would invalidate all other strategies which we might formulate in this regard.

We must look with objective concern at the problem of industrial dispersal which is taking place in the more advanced countries as a consequence of the new technico-scientific revolution and stricter environmental safeguards which have gone into effect. This is giving rise to a process of relocation of industry to the south at the risk of reproducing environmental impacts which are now unacceptable to the industrialized world.

Another problem which is gaining in importance in the developing countries because of its grave and immediate consequences is the growing threat of becoming a kind of dumping ground for the industrialized countries. The danger implicit in this situation may reach a dimension similar to that of the drug traffic, with all the corruption and environmental destruction that such entails.

Beside problems with direct environmental connotations, to which we have referred in part, other problems of an economic nature include:

- The outflow of capital from Latin America and the Caribbean to the developed countries;
- The constant deterioration of the prices of the raw materials produced by countries of the region;
- The fluctuation of interest rates, fundamental in the worsening external debt problem;
- The introduction of inappropriate technological patterns;
- and
- Commercial protectionism, among others.

It is imperative that all these problems be discussed at the start of the international dialogue on ways to achieve worldwide sustainable development. Clearly this concept would not be feasible if it were presented on the understanding that it would be applicable only within national bounds.

1.5 *The need to strengthen our negotiating capacity*

The agenda items that we propose for discussion form part of the concerns that we share with the rest of the developing countries, and with whom we make up three quarters of the world population.

One must understand that, whatever effort is made to link development and the environment, important economic costs are involved which the developed nations are in a relatively better position to pay. The

agenda can be implemented, therefore, only if agreement is reached to designate responsibilities in accordance with the financial capacity of each country. Together with the need to institute programs to conserve the world's great ecosystems, Latin America and the Caribbean face an important challenge in preserving the productivity of their own ecosystems.

The negotiations must also discuss priority items in order to provide a context favorable to sustainable development. Without the prospect of an enduring peace which will enable countries to dismantle their conventional, nuclear and chemical weapons, we will continue to live under the threat of an irreversible environmental cataclysm. However, the relaxation of tensions among the great powers, evidence of which we are now witnessing, will permit the channeling of important resources now being spent on armaments into the implementation of sustained development on a worldwide basis.

For its part, discussion of the drug problem as an agenda item is of great relevance. There is no contaminant with such destructive potential for society as drug addiction, especially when it is centered in the youth and in the intellectual and management sectors.

When we sit down with the North to discuss a common development and environment agenda, we must be aware of those factors that make us weak and those that contribute to the strength of our positions. We know that at the present time we constitute an impoverished and indebted region, susceptible of being pressured by the countries of the North which because of the crisis have strengthened their positions. For that reason, we must remember that as well as accumulated liabilities the region possesses invaluable assets, including an abundance of natural resources which may form the basis of a sustainable development for all mankind, as well as the potential of its rich biodiversity and cultural heritage, valuable resources in their own right. Those assets, furthermore, are enlarged by the substantial environmental debt that the industrialized countries have run up with the region over time and which has not yet been paid.

Here we have the fundamental ideas which have guided the analysis and evaluation of the situation and the formulation and selection of strategies an action plans outlined in the following section of this document. They are the points on which there has been considerable consensus and conviction that it is necessary to destroy myths and to establish, with an element of modesty, viable solutions for our society.

EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS PUESTO A PRUEBA: LAS SENTENCIAS DE INTERPRETACIÓN EN LOS CASOS DE DESAPARECIDOS HONDUREÑOS

*Dr. Douglas W. Cassel, Jr., Director Ejecutivo, Instituto de Derechos Humanos Internacionales,
Universidad DePaul; Dr. Paul M. Liebenson; Dra. Anita M. Sarraf, Investigadora; Carrie J. Davis*

INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS INTERNACIONALES: Informe 91-1

Chicago, Illinois, Mayo de 1991

SUMARIO:

En los dos primeros casos fallados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte condenó al Gobierno de Honduras a pagar indemnización compensatoria a las familias de dos "desaparecidos". El Estado de Honduras hasta el momento ha cumplido solamente con una parte de las sentencias de la Corte. De acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Corte le notificó a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, la cual es responsable bajo la Convención y la Carta de la OEA, la falta de cumplimiento del Estado de Honduras.

El análisis concluye lo siguiente:

- las sentencias de la Corte contra Honduras son definitivas e inapelables;
- la Corte tiene el poder jurídico de dictar estas sentencias;
- Honduras está obligado legalmente por la Convención, por *el pacto surt serwandá* y por los principios de la Carta de la OEA, a cumplir con las sentencias de la Corte; y
- la disposición de este asunto por la Asamblea General podrá tener un gran impacto en la protección futura de los derechos humanos en las Américas.

HISTORIAL

Ejerciendo la jurisdicción establecida por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1988 determinó que el Estado de Honduras era responsable por la desaparición forzada y la violación de los derechos humanos de dos de sus ciudadanos. Pero en julio de 1989, la Corte falló una indemnización compensatoria, a pagarse en noventa días, por el monto de 750,000 lempiras a la viuda e hijos de uno de los desaparecidos y 650,000 lempiras a los familiares del otro de los desaparecidos. En agosto de 1990, debido a la devaluación de la moneda hondureña, motivada por el hecho de que Honduras todavía no había hecho ningún pago sobre la indemnización requerida, y por petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte expidió una sentencia en la cual interpretó y dio efecto a la indemnización compensatoria. La Corte, en la Sentencia de Interpretación exigió a Honduras una indemnización que protegía el poder adquisitivo y el pago de intereses basado en el valor económico de la indemnización inicial.

En 1977 el Estado de Honduras ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos sin reserva alguna. En 1981 el Estado aceptó así mismo la jurisdicción de la Corte. El Estado comparció durante todas las fases del procedimiento legal en la Corte y a finales de 1990 le pagó a las familias de los desaparecidos las cantidades de lempiras requeridas por la sentencia de la indemnización compensatoria original.

No obstante, en octubre de 1990 Honduras notificó formalmente a la Corte que no cumpliría con el fallo basado en la Sentencia de Interpretación y hasta el día de hoy no ha cumplido con esta última sentencia. Por lo tanto, en abril de 1991, la Corte basándose en la Convención, le notificó a la Asamblea General de la OEA que Honduras no había cumplido con la Sentencia de Interpretación. La próxima reunión de la Asamblea General se llevará a cabo en Santiago de Chile la primera semana de junio de 1991.

Al momento del pago a finales de 1990, la indemnización compensatoria valía mucho menos que el valor adquisitivo de la cantidad inicial. Según uno de los estimados, la indemnización fue disminuida a un tercio del valor inicial. Existe la posibilidad de que la moneda hondureña sea devaluada antes de que los hijos de los desaparecidos alcancen los veinticinco años de edad y las corresponda cobrar los fideicomisos establecidos.

ANÁLISIS

1. Jurisdicción. Bajo la Convención, la Corte tiene jurisdicción sobre estos casos y tiene el poder de otorgar "indemnización justa" por la violación de los derechos humanos.
2. *La Indemnización Compensatoria.* Ejercido su poder en julio de 1989, la Corte ordenó una indemnización compensatoria, el pago de ésta en noventa días y retuvo jurisdicción del caso con el fin de supervisar el cumplimiento del pago por parte del Estado de Honduras.
3. *Demora en el Pago.* Honduras no pagó los daños dentro del tiempo establecido por la Corte. Aproximadamente un año después del fallo de la Corte, en octubre de 1990, Honduras pagó en lempiras la cantidad inicialmente otorgada a las viudas de los desaparecidos y, en diciembre de 1990, pagó en lempiras la cantidad inicialmente otorgada, mediante fideicomisos, a los hijos de los desaparecidos. Honduras dio como razón por la demora la necesidad de pasar una enmienda presupuestaria a nivel legislativo durante un período de crisis fiscal.
4. *Sentencia de Interpretación.* En agosto de 1990, la Corte publicó una Sentencia, interpretando y dando fuerza a la indemnización compensatoria de tal forma que la Corte exigió la protección del valor adquisitivo de la indemnización inicial y el pago de intereses basado en la suma total de la indemnización inicial. Invocando el artículo 67 de la Convención, la Corte interpretó la Sentencia de Interpretación y, además, ejerció la jurisdicción, expresamente retenida en la sentencia inicial, del caso, hasta tanto Honduras cumpliera con el pago de indemnización. En una opinión separada, pero de acuerdo con el dictamen de la mayoría de los jueces, uno de los jueces opinó que aunque el artículo 67 no se podía aplicar a estos dos casos, la Corte, al reservar inicialmente la supervisión del pago, tenía todo el poder necesario para dar efecto a la Sentencia inicial. No hubo opiniones disidentes.
5. *Protestas del Estado de Honduras.* Honduras se opuso a la Sentencia de Interpretación, porque, según el Estado, la indemnización compensatoria inicial había sido clara y precisa, y por lo tanto no requería ni aclaración ni interpretación alguna. Honduras no respondió directamente al hecho de que la Corte había retenido jurisdicción sobre el caso hasta tanto el pago fuera hecho.
6. *Cuestión Presente.* En estos momentos, la cuestión bajo el derecho internacional no se trata de si la determinación de la Corte según la Sentencia de Interpretación estuvo correcta; ya que según el artículo 67 de la Convención, los fallos de la Corte son definitivos e inapelables. La cuestión ahora es: (1) ¿Posee la Corte el poder para dictar la Sentencia de Interpretación? (2) Y si la Corte posee tal poder, ¿está entonces Honduras en la obligación legal de cumplir con la Sentencia de Interpretación?

7. *Los Poderes de la Corte Según la Convención.* La Corte posee el poder de dictar la Sentencia de Interpretación. El artículo 63.1 de la Convención autoriza a la Corte a otorgar "indemnización justa" por la violación de los derechos humanos; a retener jurisdicción sobre los casos con el propósito de dar fuerza a los fallos; y luego a dar efecto a los fallos. Además, la Corte deriva del artículo 67 de la Convención la facultad de interpretar sus previos dictámenes.
8. *Competence de la Competence.* La Corte deriva sus poderes de los principios antiguos y fundamentales de la jurisprudencia internacional, los cuales han establecido que las cortes internacionales poseen el poder de adjudicar los límites de sus propios poderes y por esto pueden interpretar sus propias medidas de régimen, en este caso la Convención, a menos que exista un acuerdo en contrario. Este poder inherente se conoce en la jurisprudencia internacional como la competence de la competence. Aunque existen excepciones al concepto, ninguna se puede ni remotamente aplicar a estos dos casos.
9. *Las obligaciones de Honduras Bajo la Convención.* Honduras está obligado a cumplir el dictamen de la Corte. Honduras ratificó la Convención y aceptó la jurisdicción de la Corte sin reserva. El artículo 68.1 de la Convención prevé lo siguiente: "Los Estados partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes".
10. *Pacta Sunt Servanda.* Si se rehusa a cumplir con la Sentencia de Interpretación, Honduras estaría violando uno de los principios más fundamentales de la jurisprudencia internacional, el *pacta sunt servanda*, que exige a los estados cumplir de buena fe con las obligaciones de sus convenios.
11. *Violación de los Principios de la OEA.* Honduras estaría además violando los principios de la Carta de la OEA, específicamente el artículo 3. El artículo 3(a) prevé que "El derecho internacional determina el criterio de conducta que los estados deben mantener en sus relaciones recíprocas" y el artículo 3(b) exige que los estados "cumplan de buena fe con las obligaciones de sus convenios y otras fuentes de derecho internacional".
12. *Posible Impacto de los Casos.* Los casos hondureños de las dos víctimas desaparecidas constituyen los dos primeros casos litigados y fallados por la Corte. La decisión final de Honduras de cumplir o no con el fallo de la Corte puede tener un impacto significativo en el futuro de la eficacia, o falta de ésta en el sistema interamericano de derechos humanos, al igual que del principio de pacta sunt servanda en este hemisferio.
13. *El Papel de la Asamblea General.* Bajo la Convención y la Carta de la OEA, la Asamblea General es responsable por este tipo de casos. La decisión de la Asamblea en cuanto a reforzar y de qué manera, la Sentencia de Interpretación de la Corte, puede tener un gran impacto en el sistema

interamericano de derechos humanos al igual que en el principio del *pacta sunt servanda*. El sistema interamericano está basado en el sistema europeo de derechos humanos. El Comité de Ministros Europeos ha apoyado firmemente al sistema europeo. De hecho, los gobiernos europeos cumplen rutinariamente con las indemnizaciones compensatorias expedidas por la Corte Europea de Derechos Humanos.

THE INTER-AMERICAN HUMAN RIGHTS
SYSTEM PUT TO THE TEST:
THE INTERPRETATION JUDGMENTS
IN THE HONDURAN DISAPPEARANCE CASES

Douglas W. Cassel, Jr., Executive Director, International Human Rights Law Institute, DePaul University; Paul M. Liebenson, Esq.; Anita M. Saraga, Esq.; Research Assistant: Carrie J. Davis

INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW INSTITUTE: Occasional Paper 91-1

Chicago, Illinois, May 1991

ABSTRACT

In the first contested cases decided by the Inter-American Court of Human Rights, the Court awarded damages to the families of two victims of involuntary disappearances. The Government of Honduras has complied with part but not all of the Court's judgments. Pursuant to the American Convention on Human Rights, the Court has reported the non-compliance to the General Assembly of the Organization of American States, which has relevant responsibilities under both the Convention and the OAS Charter.

The following analysis principally concludes:

- The Court's judgments against Honduras are now final and non-appealable;
- The Court had power to issue the judgments;
- Honduras is legally obliged by the Convention, by *pacta sunt servanda*, and by the principles of the OAS Charter to comply with the Court's judgments; and
- The disposition of this matter by the General Assembly could have an important impact on the future protection of human rights in the Americas.

EXECUTIVE SUMMARY

Background:

Exercising its jurisdiction under the American Convention on Human Rights, the Inter-American Court of Human Rights in 1988 found the Government of Honduras responsible for the involuntary disappearances, and consequent deprivations of rights, of two of its citizens. In July 1989 the Court issued Damages Judgments, awarding 750,000 lempiras to the widows and children of the victim in one case, and 650,000 lempiras in the other, to be paid within ninety days. In August 1990, faced with the subsequent devaluation of the Honduran currency and the fact that Honduras had not yet paid any compensation, at the request of the Inter-American Commission on Human Rights, the Court issued Interpretation Judgments, interpreting and enforcing its Damages Judgments to require preservation of the original purchasing power, and payment of post-judgment interest.

The Government of Honduras ratified the American Convention on Human Rights without reservation in 1977. It accepted the jurisdiction of the Court, also without reservation, in 1981. It participated in all phases of the proceedings before the Court and, in late 1990, paid to the victims' families the sums of lempiras specified by the Court's Damages Judgments.

However, in October 1990 Honduras formally advised the Court that it would not comply with the Interpretation Judgments and it has to date failed to do so. Accordingly, pursuant to the Convention, the Court in April 1991 advised the General Assembly of the Organization of American States that Honduras has not complied with its Interpretation Judgments. The General Assembly next meets in Santiago, Chile, during the first week of June, 1991.

When actually paid in late 1990, the damages were worth substantially less than their original purchasing power. According to one estimate, they represented less than one third of their original value. Further significant devaluation is possible before the trust funds set up for the children are fully paid out when they reach age 25.

Analysis:

1. *Jurisdiction.* Under the Convention the Court has jurisdiction over these cases and power to award "fair compensation" for violations.
2. *The Damages Judgments.* Exercising this power, the Court in July 1989 issued its Damages Judgments, awarding damages, ordering payment within 90 days, and retaining jurisdiction to supervise compliance.

3. *Delay in Payment.* Honduras did not pay the damages within the time set by the Court. Approximately one year later in October 1990, it paid the sums in lempiras originally awarded to the widows, and, apparently in December 1990, it paid the sums in lempiras originally awarded into a trust fund for the children. Honduras cited the need for a legislative budget amendment at a time of fiscal crisis as the reason for the delay.

4. *Interpretation Judgments.* In August 1990 the Court issued its Interpretation Judgments, interpreting and enforcing its Damages Judgments to require preservation of the original purchasing power and payment of post-judgment interest. The Court relied both on its authority under Article 67 of the Convention to interpret its own judgments, and on its expressly retained jurisdiction to supervise compliance with the Damages Judgments. Concurring in the result, one judge opined that Article 67 did not apply, but that the Court's retention of enforcement jurisdiction amply supported its ruling. There were no dissents.

5. *Honduras' Objections.* Honduras objected to the Interpretation Judgments on the ground that the Damages Judgments were clear, allowing no room for the Court to exercise its power of interpretation. Honduras did not directly address the Court's retention of enforcement jurisdiction.

6. *The Issues Now.* At the present, post-judgment stage of the proceedings, the issues under international law are not whether the Interpretation Judgments were "rightly" decided. Under Article 67 of the Convention, the Court's judgments are final and not subject to appeal. Instead the issues now are: (1) Did the Court have power to issue its Interpretation Judgments, and (2) If so, is Honduras legally obliged to comply with the Interpretation Judgments?

7. *The Court's Powers Under the Convention.* The Court had power to issue its Interpretation Judgments. Article 63.1 of the Convention, authorizing the Court to award "fair compensation" for violations, empowered the Court to issue the Damages Judgments, to retain jurisdiction to enforce the Judgments, and then to enforce them. The Court's power also derived in part from Article 67 of the Convention, authorizing the Court to interpret its prior judgments.

8. *Competence de la Competence.* The Court's power also derived from the longstanding, fundamental principle of international law that international courts have power, absent some agreement to the contrary, to decide on the limits of their own powers, and for that purpose to construe their governing instruments (here the Convention). This inherent power is known in international law as the competence de la competence. While there are exceptions, none is remotely applicable here.

9. *Honduras' Obligation Under the Convention.* Honduras was obligated to comply with the Court's judgments. Honduras ratified the Convention and accepted the Court's jurisdiction without reservation. Article 68.1 of the Convention provides, "The States Parties undertake to comply with the judgment of the Court in any case to which they are parties".
10. *Pacta Sunt Servanda.* Honduras' refusal to comply with the Court's Interpretation Judgments would violate one of the most fundamental principles of international law, *pacta sunt servanda*, which requires states to comply in good faith with their treaty obligations.
11. *Violations of OAS Charter Principles.* To the extent Honduras' refusal to comply with the Interpretation Judgments would violate principles of international law, it would also violate the principles of the OAS Charter, namely Article 3(a) which recognizes, "International law is the standard of conduct of States in their reciprocal relations", and Article 3(b) which demands of States "the faithful fulfillment of obligations derived from treaties and other sources of international law".
12. *Potential Impact of These Cases.* The Honduran disappearance cases are the first contested cases to be decided by the Court. Honduras' ultimate decision on whether to comply may significantly enhance or detract from the future effectiveness of the Inter-American Human Rights system, as well as respect for the principle of *pacta sunt servanda* in this hemisphere.
13. *The Role of the General Assembly.* The General Assembly has relevant responsibilities under both the Convention and the OAS Charter. Its decision on whether and how to enforce the Court's Interpretation Judgments may have an important impact on both the Inter-American Human Rights system and the principle of *pacta sunt servanda*. The Inter-American system is modeled on the European Human Rights system. The European Committee of Ministers has taken firm action in support of the European system. Damages judgments issued by the European Court of Human Rights are routinely complied with by governments.

II. THE VELASQUEZ RODRIGUEZ AND GODINEZ CRUZ CASES

A. History

From 1981 to 1984, between 100 and 150 people involuntarily "disappeared" in Honduras with at least the acquiescence of the Government.¹ The Inter-American Commission on Human Rights ("Commission"), concerned about the proliferation of desaparecidos, or involuntarily disappeared persons, in the Inter-American community of nations, submitted

1991]

Documentos

319

three cases involving the Government of Honduras to the Inter-American Court of Human Rights ("Court") under the Court's contentious jurisdiction. Two of these three cases are now the subject of this paper.²

In the first case to reach the Court, the *Velasquez Rodriguez* case,³ Angel Manfredo *Velasquez Rodriguez*, a married Honduran student and labor activist with three children, disappeared after being abducted from his car by security force undercover agents in Tegucigalpa in September, 1981.⁴ In the second litigation, the *Godínez Cruz* case,⁵ Saul *Godínez Cruz*, a high school teacher and activist in the teachers' union, married with one daughter, was abducted in his home town of Choluteca, in July, 1982 when he reportedly was intercepted on his motorcycle by a soldier and two men in plain clothes as he left town for classes in a neighboring city.⁶

In its judgments on the merits in *Velasquez* in 1988 and *Godínez* in 1989, the Court sustained the Commission's petition and held the Honduran Government responsible for violating, through at least acquiescence in the practice of involuntary disappearance, the victims' right to life, right to humane treatment and right to personal liberty guaranteed by Articles 4, 5 and 7, respectively, of the American Convention on Human Rights ("Convention").⁷ The Court found that the disappearances were part of a systematic and selective practice of kidnappings and disappearances in Honduras from 1981 to 1984.⁸ The Court also found the Honduran Government in violation of Article 1.1 of the Convention which establishes generally the duty of governments to respect the human rights of individuals and to guarantee the enjoyment of those rights recognized in the Convention.⁹ As a consequence of this affirmative obligation, each Government has the concrete duty to prevent, investigate, punish, disclose and compensate (when restoration is impossible) victims or their relatives for human rights violations.¹⁰

The Court ordered the Honduran Government to compensate the widows and children of *Velasquez* and *Godínez* for the harm caused them as the result of the involuntary disappearances.¹¹ In both cases the Court retained jurisdiction to fix damages or approve a damages agreement.¹² In a subsequent Damages Judgment, issued in July 1989, the Court in *Velasquez* awarded compensatory damages of 750,000 lempiras¹³ (then worth over \$300,000) to be paid one-fourth to *Velasquez's* widow and three-fourths into a trust for his children "under the most favorable conditions permitted by Honduran banking practice."¹⁴ In addition the judgment provided that "the Court shall supervise the implementation of the compensatory damages at all of its stages. The case shall be closed when the Government has

fully complied with the instant judgment."¹⁵ The Court also stated that payment "must" be made within 90 days, unless the Honduran Government opts to pay in six monthly installments, with the first during the 90 day period.¹⁶ Similarly, in the Damages Judgment in the *Godínez* case, the Court awarded compensatory damages of 650,000 lempiras¹⁷ (then worth over \$300,000). The Court again ordered the best banking practice for the trust,¹⁸ Court supervision until the damages are paid¹⁹, and payment within 90 days.²⁰

Before the 90 days expired, the Commission requested clarification of the Damages Judgments in both cases, under Article 67 of the Convention and Article 48 of the Rules of the Court. The Commission asked the Court to provide some mechanism to protect the purchasing power of the trust fund to be set up for the children against the potential inflation of the Honduran currency.²¹ The Government of Honduras, in the meantime, had paid nothing by the expiration of the 90 day period. The Court, in August of 1990, issued Interpretation Judgments stating in both that the Commission's request was admissible.²² The Court interpreted the phrase "under the most favorable conditions permitted by Honduran banking practice" to require the trustee to take steps to protect the purchasing power of the trust funds, by selecting diverse types of investment, such as hard currency, real estate or other means.²³ The Court also ruled that Honduras should compensate for the losses, caused by its delay in payment, through payment in hard currency,²⁴ with interest,²⁵ and that it should pay immediately.²⁶

In a concurring opinion, Judge Piza Escalante disagreed with the Court's position that Article 67 applied. In Judge Piza's opinion, Article 67 would apply only to the judgments on the merits but not to the 1989 Damages Judgments. Nevertheless, Judge Piza agreed that the Court had power to grant the relief because it had expressly retained power to supervise compliance with the Damages Judgments.²⁷

Despite the Court's Interpretation Judgments, in October, 1990 the Government of Honduras paid the one fourth share of the Damages Judgments in the originally specified sums of Honduran currency to the widows of *Velásquez* and *Godínez*.²⁸ Similarly, apparently in December, 1990, the Government of Honduras paid the remaining three-fourths of the originally specified sums of Honduran currency to the children's trusts.²⁹

B. *The Objections of the Government of Honduras*

In a "Statement of the Government of the Republic of Honduras to the Inter-American Court of Human Rights regarding the Judgments of the Court of August 17, 1990",³⁰ delivered to the Court in October 17, 1990, the Government of Honduras expressed its surprise at the Court's Interpretation Judgments and deemed the Court's resolution "unacceptable". The Government's objections are summarized below.³¹

1. The Interpretation Judgments constitute a modification, not an interpretation, of the Damages Judgments.

By requiring the Government of Honduras to compensate the beneficiaries for the loss in real economic value suffered by the lempira, as well as for ordinary banking interest, the Court increased the nominal value of the original damages awards by over one hundred percent. The Damages Judgments fixed the amount of compensation in the official currency of Honduras without referring either to its value with respect to the dollar or any other foreign currency in the event of devaluation or to a loss of purchasing power.³²

2. The request of the Inter-American Commission on Human Rights for an interpretation of the Damages Judgments did not comply in form or substance with the requirements of Article 48(1) of the Rules of Procedure of the Court.

The Court's Interpretation Judgments did not arise out of any dispute between the parties regarding the scope or meaning of the Damages Judgments. Rather, they were delivered in response to concerns expressed by the Commission in its notes dated September 29, 1989 "requesting clarification of the compensatory damages judgments, despite the fact that the operative parts are sufficiently clear and precise."³³ While the Court declared that it shared the concern expressed by the Commission, apparently before delivering its Damages Judgments, such judgments did not address the concern. Even the Commission, in its notes, stated that the Damages Judgments did not contemplate any protective mechanism "to preserve the current purchasing power of the award(s) in the face of inflation or possible devaluation of the lempira..."³⁴

3. The Court's interpretation of the fiduciary role of the trust fund is an exaggeration.

In relying on the phrase "under the most favorable conditions permitted by Honduran banking practice", the Court "equates a trust with a secure business for the preservation of the real value of the compensations against a possible loss of purchasing power by the lempira in relation to the dollar brought about by inflation or devaluation". The Court's Interpretation

Judgments incorrectly attribute management of the trust to the trustee, who in no way is involved in the administration of the trust. Under Honduran legislation, that function belongs to the fiduciary agent; that is, the banking institution where the trust has been created.³⁵

4. The 90 days term was insufficient in light of Honduran domestic law and economic conditions.

The term set by the Court for complying with its Damages Judgments did not allow for all the legal actions and decisions required under Honduran domestic law for the Government of Honduras to comply; most importantly, the allocation and approval of the appropriations required for the payment of the awards, which normally must be included in the country's annual budget. Nor was it possible within the 90 day time frame to obtain the approval of a special allocation outside the budget process due to declining revenues resulting from the economic crisis faced by Honduras.³⁶

5. The Damages and Interpretation Judgments are without precedent among similar judgments delivered by the European Court of Human Rights insofar as the amount of the awards, the terms of execution and the interpretation thereof are concerned.

In the compensatory damages and interpretative judgments rendered by the European Court of Human Rights in the Ringelsen Case on June 22, 1972 and June 23, 1973, respectively, the amount of the damages assessed against the Austrian Government was not significant, nor was a term specified for such payment.³⁷

C. *The Court's Response*

In a letter dated November 12, 1990³⁸ the President of the Court, after conferring with the other judges, issued a reply to the Government of Honduras' October 17 letter. The points in the reply are summarized below:

1. The Court's interpretation is not "an exaggeration". In the Interpretation Judgments, the Court was of the opinion that the expression "under the most favorable conditions permitted by Honduran banking practices" means that the trustee must "faithfully" perform his task as would a good head of family, so as to ensure that the amount assigned maintains its purchasing power and generates sufficient earnings or dividends to increase it.³⁹ This provision cannot be deemed to be an "exaggeration" unless it is believed that the fiduciary agent, the Central Bank of Honduras, is not qualified to carry out its functions "under the most favorable conditions permitted by Honduran banking practices". If such were the case, in the exercise of the power to "supervise" compliance with its judgments which the Court

assumed and continues to enjoy, the Court would have to look into the matter.⁴⁰

2. The Government of Honduras, not the beneficiaries, bears the responsibility for damages caused by delays in payments. The Government's argument that the Court's Interpretation Judgments result in an increase in the nominal value of the original award by over one hundred percent only serves to confirm the Court's reasons for reaching the decision it did. Given the loss in nominal value that occurred in just one year, by the time payment is eventually made, the amount could be merely symbolic, and the effect sought by the judgment would be lost.⁴¹

3. The Government of Honduras still had not paid despite completing its internal procedures. As of November 12, 1990, the Court had not received confirmation that the Government of Honduras had paid the original damages award. Given that the Government of Honduras approved such damages by its Decree No. 55-90, thereby completing its internal procedures, that explanation given for the original delay cannot explain the further delay.⁴²

4. States must comply in good faith with treaties in effect. Under the terms of Article 26 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, States must comply "in good faith" with treaties in effect. Under the terms of Article 68.1 of the American Convention on Human Rights, "(t)he States Parties to the Convention undertake to comply with the judgment of the Court in any case to which they are parties." The failure of Honduras to respect the decisions of the Court in good faith would violate "the rule of *pacta sunt servanda*" a norm essential to the survival of the international community.⁴³

III. COMMENT AND ANALYSIS

Under international law, the objections raised by Honduras in its October 1990 letter to the Court must be considered in view of the present, post-judgment stage of the proceedings. The Court has issued not only its judgment on the merits, but also its Damages Judgments and its Interpretation Judgments. Honduras has formally communicated to the Court its intention to comply with the Damages Judgments (as construed by Honduras), but states that it will not comply with the Interpretation Judgments. Despite a formal reply from the President of the Court urging it to comply fully, Honduras has neither done so nor indicated any intention to do so. On the contrary, its most recent formal position (October 1990) states that it will not comply fully.

Accordingly, pursuant to Article 65.1 of the Convention, the Court has specified these cases in its 1990 Annual Report to the General Assembly

of the Organization of American States as cases "in which a state has not complied with its judgment." Moreover, the Court has submitted to the General Assembly a draft resolution on its Annual Report, proposing that the Assembly resolve "[t]o call upon the Government of the Republic of Honduras to comply with the judgments of August 17, 1990 in the 'Velásquez Rodríguez and 'González Cruz' cases." (See discussion in Part IV below.)

Given the post-judgment stage of the case, the present questions under international law are not whether the Interpretation Judgments were correctly decided, i.e., whether they "correctly" interpreted and enforced the Damages Judgments. Under Article 67 of the Convention, the Court's Judgments are final and not appealable. Rather, the two central questions of international law are as follows:

(1) Did the Court have the power to render its Interpretation Judgments, regardless of whether they were "rightly" or "wrongly" decided?

(2) If the Court did have the power to render the Interpretation Judgments, is Honduras legally obligated to comply with them?

As will presently be shown, the answer to both questions is in the affirmative: The Court was empowered to render its Interpretation Judgments, and Honduras is obliged to comply with them.

A. *Did The Court Have The Power To Render Its Interpretation Judgments?*

The Court's jurisdiction and powers in these cases are governed by the Convention, the instrument creating the Court. Article 62.1 of the Convention grants the Court jurisdiction over "all matters relating to the interpretation and application of this Convention." Article 62.3 specifically grants the Court jurisdiction over all cases concerning the "interpretation and application" of the Convention that are submitted to it, provided the States Parties have recognized the Court's jurisdiction (as Honduras has; see question (2) below).

These cases, involving the involuntary disappearances of persons in Honduras, concern the interpretation and application of provisions of the Convention, namely Articles 1.1, 4, 5 and 7, which respectively require States Parties to ensure free exercise of rights under the Convention, and which protect the rights to life, humane treatment and personal liberty. As the Court has repeatedly found, these cases thus fall plainly within its jurisdiction.⁴⁴

When, as here, violations are found in such cases, Article 63.1 of the Convention empowers the Court to rule that "fair compensation" be paid to the injured parties.

Once the Court reaches a judgment, Article 67 provides that its judgment "shall be final and not subject to appeal." Article 67 also grants the Court the right to interpret its judgments in cases of disagreement.⁴⁵

Perhaps because these provisions are so clear, Honduras has not expressly contested either the Court's jurisdiction or its power to include post-judgment interest and protection of purchasing power in awards of "fair compensation."

Honduras' arguments instead appear narrower. In essence Honduras argues that the Court, having once issued its Damages Judgments in terms of Honduran currency and without express provision for post-judgment interest, "boxed itself in." Thereafter the Court was no longer free, argues Honduras, to invoke its power of interpretation under Article 67 of the Convention to interpret its Damages Judgments to provide for interest and preservation of purchasing power.

The arguments of Honduras prior to the Court's issuance of its Interpretation Judgments, although hardly compelling, were not frivolous at the time. However, while Honduras' objections, viewed from a pre-judgment perspective, were not entirely without support in international law, the Court's Interpretation Judgments are amply and persuasively supported.⁴⁶

In any event, at the post-judgment stage, the nature of Honduras' arguments is critical. Honduras essentially disputes the correctness of the Court's interpretations and enforcement, of its own prior Damages Judgments, as well as of Articles 63.1 and 67 of the Convention (authorizing the Court to award fair compensation and to interpret its judgments). But under Article 67 the Court's Interpretation Judgments on these points are final and not appealable.

Moreover, under a long-established principle of international law the correctness of such interpretations and application is a matter to be decided by the Court, not by one of the parties before it.

The principle is referred to by the French phrase as the competence de la compétence -the power of an international tribunal to determine the limits of its own jurisdictional and other powers, and for that purpose to interpret its governing instruments.⁴⁷ The principle has been described by the respected international jurist, Sir Hersch Lauterpacht of Great Britain, as

"one of the most firmly established principles of international arbitral and judicial practice"⁴⁸ and "one of the most fundamental principles of international, and national jurisprudence...."⁴⁹

The competence de la competence has been recognized in bilateral arbitrations by eminent United States arbitrators since at least 1797,⁵⁰ by United States Secretary of State Daniel Webster as early as 1839,⁵¹ in bilateral arbitrations involving Paraguay in 1860, Costa Rica in 1862, and Chile in 1892⁵² and by multinational conventions since the Hague Conference of 1899⁵³. By 1911 it was described in the *Walfish Bay Boundary* case as a "constant doctrine of public international law."⁵⁴

The World Court has continuously found the doctrine applicable to international courts as well. In a 1928 Advisory Opinion, the Permanent Court of International Justice declared, "As a general rule, any body possessing jurisdictional powers has the right in the first place itself to determine the extent of its jurisdiction."⁵⁵

In construing its own competence de la competence in the 1953 *Nottebohm Case* (Preliminary objection), the International Court of Justice ("ICJ") made clear that international courts inherently possess this power, absent any agreement to the contrary by the parties to the treaties governing them, even without any provision expressly conferring the power. Referring to the express provision in the ICJ's statute (Article 36.6), the ICJ pointed out that it:

merely adopted, in respect of the Court, a rule consistently accepted by international law in the matter of international arbitration. Since the Alabama case [in 1872], it has been generally recognized following the earlier precedents, that, in the absence of any agreement to the contrary, an international tribunal has the right to decide its own jurisdiction and has the power to interpret for this purpose the instruments which govern that jurisdiction.

This principle (...) assumes particular force when the international tribunal is no longer an arbitral tribunal constituted by virtue of a special agreement..., but is an institution which has been pre-established by an international instrument defining its jurisdiction and regulating its operation....

... The judicial character of the Court and the rule of international law referred to above are sufficient to establish that the Court is competent to adjudicate on its own jurisdiction in the present case.

I.C.J. Rep. (1953), 111, 119, 120.]

The ICJ thus found the power inherent in an international court created by an international instrument defining its jurisdiction and regulating

its operation, absent some agreement to the contrary. This description fits the Inter-American Court of Human Rights, created by the American Convention on Human Rights. Thus, the Inter-American Court inherently possesses the competence de la competence.⁵⁶

The competence de la competence empowers a court to construe its governing instrument not only as to its jurisdiction, but also as to all issues incident to that jurisdiction.⁵⁷ It authorizes an international court to adjudicate the limits of interpretation of its own judgments under treaty provisions authorizing such interpretation -the very power exercised by the Inter-American Court in the *Honduras* cases.⁵⁸ And the World Court has exercised its competence de la competence to imply powers to award reparations even where none were expressly authorized⁵⁹ and to assess the amount of damages even when a special agreement conferring jurisdiction referred only to whether damages ought to be paid.⁶⁰ Both interpretations arguably go well beyond the Inter-American Court's decision to allow post-judgment interest and to require protection of purchasing power as part of "fair compensation".

The competence de la competence is not absolute.⁶¹ Where states reserve controversies of a certain nature from those they agree to submit to the tribunal's jurisdiction, international tribunals do not have undisputed power to rule with finality on the nature of the controversy -e.g., whether it is justiciable or political, international or domestic.⁶² However, this limitation "only occurs when the parties reserve certain areas of disputes to be decided by themselves, and it does not, ... , preclude the tribunal's exercise of its competence de la competence beyond this primary question".⁶³ It thus has no application here.

The power also may not be exercised in an arbitrary manner.⁶⁴ This exception, however, is not remotely applicable here. (See note 46 above.)

In short, both the Convention and the fundamental international law principle of the competence de la competence make clear that the Court, and not one of the parties before it, has the power to decide on the correct interpretation of the Convention and of its own prior judgments. Accordingly the Court had the power to issue its Interpretation Judgments.

B. *Is Honduras obliged to comply with the Court's Interpretation Judgments?*

Honduras' obligation to comply with the Court's Interpretation Judgments derives from the Convention, from Honduras' acceptance of the

Court's jurisdiction, from the fundamental international law principle of *pacta sunt servanda*, and from the principles of the Charter of the Organization of American States.

Article 68.1 of the Convention provides: "1. The States Parties to the Convention undertake to comply with the judgment of the Court in any case to which they are parties."

By ratifying the Convention and accepting the Court's jurisdiction without reservation,⁶⁵ Honduras committed itself to comply with Article 68.1. As a party to the *Velásquez* and *Godínez* cases, Honduras is bound "to comply with the judgment of the Court".

Honduras' failure to comply with these treaty commitments would violate *pacta sunt servanda*. This general principle of international law provides that a treaty in force "is binding upon the parties and must be performed by them in good faith."⁶⁶ *Pacta sunt servanda* "lies at the core of the law of international agreements and is perhaps the most important principle of international law."⁶⁷

Because Honduras' noncompliance with the Court's Interpretation Judgments would violate its treaty commitment under Article 68.1 of the Convention, as well as the general principle, of international law of *pacta sunt servanda*, Honduras' noncompliance would also violate the principles of the OAS Charter. In Article 3 of the Charter the member States reaffirm the following principles:

"(a) International law is the standard of conduct of States in their reciprocal relations;"

and

"(b) International order consists essentially of respect for the personality, sovereignty, and independence of States, and the faithful fulfillment of obligations derived from treaties and other sources of international law. (Emphasis added.)"

Honduras' noncompliance with the Interpretation Judgments would neither comply with international law as a standard of conduct, nor faithfully fulfill its treaty obligations; accordingly, it would violate these Charter principles.

In short, Honduras is bound not only by the Convention, but also by one of the most fundamental principles of international law, and thus by the principles of the OAS Charter as well, to undertake to comply in good faith with the Interpretation Judgments.

IV. The Role of the General Assembly

The Honduran disappearance cases are not only the first contested cases decided by the Court, they also present the first occasion on which the General Assembly of the OAS has been requested to exercise its responsibilities under the Convention and the OAS Charter in a case of noncompliance. Following an unsuccessful effort to persuade Honduras to comply with its Interpretation Judgments,⁶⁸ the Court in April, 1991, reported Honduras' noncompliance to the General Assembly pursuant to Article 65 of the Convention. The draft resolution submitted by the Court (para. 7) asks the General Assembly to "call upon the Government of the Republic of Honduras to comply with the judgments of August 17, 1990 in the '*Velásquez Rodríguez*' and '*Godínez Cruz*' cases."

A. Legal Basis for Action

Article 65 requires the Court to submit an annual report on its work to the General Assembly and, in addition, directs: "It shall specify, in particular, the cases in which a state has not complied with its judgments, making any pertinent recommendations."

This provision of Article 65 resulted from a proposal by Guatemala at the 1969 San Jose Conference, at which the drafting of the Convention was completed and the Convention was signed. Guatemala proposed that the Court report cases of noncompliance to the Permanent Council of the OAS. However, the drafters believed that this would seem to involve powers beyond those of the Permanent Council. Consequently "the formula for reporting and making recommendations to the General Assembly was agreed upon as a means of applying pressure upon a delinquent state to comply with a judgment of the Court."⁶⁹

The General Assembly's responsibilities flow not only from Article 65 of the Convention, but also from the Charter of the OAS. Article 52 of the Charter makes the General Assembly the "supreme organ" of the OAS. Under Article 52(a), the General Assembly is empowered to "decide the general action and policy" of the OAS. And under Article 2(d) of the Charter, one of the "essential purposes" of the OAS is to "seek the solution of... juridical... problems that may arise" among its members.

Under the Charter, then, the General Assembly is charged with seeking a solution to the juridical problem of Honduras' noncompliance with the Interpretation Judgments of the Court. The Charter would impose this

responsibility on the General Assembly even if the Convention did not because the matter is plainly a "juridical" problem.

Moreover, as noted in the preceding section, Honduras' noncompliance would also violate the OAS Charter principles of compliance with international law and with treaty commitments, stated in Article 3(a) and (b). This additional juridical problem further brings the matter within the cognizance of the General Assembly.

B. *The European Experience*

In evaluating what action the General Assembly might take, it may be useful to consider the experience of the European Human Rights system, upon which the Inter-American system was modeled. The Council of Europe, like the OAS, faced the problem of non compliance by a member state during a formative period in the development of the European system. In a case involving noncompliance by the military government of Greece, the Committee of Ministers of the Council of Europe made clear that it was prepared if necessary, to use sanctions to enforce compliance with human rights.⁷⁰

Since then, the European Human Rights System has functioned effectively, especially in damages cases. Through 1987, the European Court of Human Rights handed down approximately thirty cases awarding some form of compensatory damages. Damages judgments issued by the Court are routinely complied with by governments. Moreover, according to the Senior Legal Officer at the Registry of the European Court of Human Rights, "if a [state] were to refuse to apply a judgment given against it... the Committee of Ministers would doubtless adopt a recommendation" even though the conflict might "result in the withdrawal or exclusion of the offending state from the Council of Europe."⁷¹

V. *Conclusion*

The *Velásquez* and *Godínez* cases are the first contested cases to be heard and decided by the Court. A refusal by the Government of Honduras to comply fully with the Court's Interpretation Judgments would pose a fundamental challenge to the future vitality of the system of protection of international human rights in the Americas.

Within that system, the Court stands as the judicial organ of last resort with respect to human rights questions that are subject to its jurisdic-

tion. If a state does not comply fully with a judgment of the Court, the Court must inform and make recommendations to the OAS General Assembly. Under both the OAS Charter and the Convention, the General Assembly then has the responsibility to determine appropriate action. Regardless of the Government of Honduras' disagreement with the Court's Interpretation Judgments in the *Velásquez* and *Godínez* cases, and notwithstanding its partial compliance with the Damages Judgments to date, Honduras' compliance with the Court's Interpretation Judgments is the critical issue now facing the General Assembly. The response of the General Assembly may determine the effectiveness of the Court—and the system of human rights protection it is designed to enforce—for years or decades to come.

Endnotes

- 1 *Velásquez*, Judgment on the Merits, Case N° 7920, Inter-Am Ct. H.R., (Ser. C), N°4 (June 29, 1988) at para 147a-d, 148, 178-82, and 185; Observations of the Inter-Am. Comm'n H.R. on Preliminary Objections of the Government of Honduras, March 20, 1987.
- 2 The third disappearance case, *Fairén Garhi and Solís Corrales* Judgment, Case 7951, Inter-Am. Ct. H.R. (Series C) N°6 (1989), is not at issue since the Court found that Honduras had not been proved responsible for the disappearances.
- 3 *Velásquez*, Judgment on the Merits, Case N°7920, Inter-Am. Ct. H.R., (Ser. C), N°4 (June 29, 1988).
- 4 *Id.* at para. 147e-h.
- 5 *Godínez*, Judgment on the Merits, Case N°8097, Inter-Am Ct. H.R. (Ser. C), N°5 (January 20, 1989).
- 6 *Id.* at para. 154.
- 7 The American Convention on Human Rights, Nov. 22, 1969, arts. 4, 5 and 7, O.A.S.T.S. N°36, OAS/ser. L./v/II.23, doc. 2, rev. 6 reprinted in 9 I.L.M. 673 (1970). See also N. Deodhar, *First Contentious Case Before the Inter-American Court of Human Rights*, 3 Am. U.L. & Pol'y 283-297 (1988).
- 8 *Velásquez* Judgment on the Merits, at para. 147(a)-(d).
- 9 *Velásquez* Judgment on the Merits, at para. 162.
- 10 *Id.* at para 166.
- 11 *Velásquez*, Judgment on the Merits, at para. 194.5; *Godínez*, Judgment on the Merits, at para. 203.5.

- 12 *Velasquez*, Judgment on the Merits, at para. 191; *Godínez* Judgment on the Merits, at para. 201.
- 13 *Velasquez*, Compensatory Damages Judgment, Case N°7920 (July 21, 1989), at para. 60-1.
- 14 *Id.*, at para. 58.
- 15 *Id.*, at para. 59. Paragraph 60-5 reiterated that the Court "shall supervise the indemnification ordered and shall close the file only when the compensation has been paid." *Id.* at para. 60-5.
- 16 *Id.*, at para. 57.
- 17 *Godínez*, Compensatory Damages Judgment, Case N°8097 (July 21, 1989), at para. 55-1.
- 18 *Id.*, at para. 53.
- 19 *Id.*, at paras. 54 and 55-5.
- 20 *Id.*, at para. 52.
- 21 Request for interpretation, filed by the Inter-American Commission, dated Sept. 29, 1990, Appendix V to the Court's 1990 Annual Report. Except for requiring payment within 90 days (or in six monthly installments to begin within 90 days), the Damages Judgments contained no protection with respect to the effect of devaluation of the local currency which is especially relevant in a continent plagued by inflation and loss of buying power. Between 1983 and 1988, Latin America suffered an average inflation of 721 percent, an annual average of 144 percent. *Id.* at 48, citing Report of the Inter-American Economic and Social Council, OEA/ser. H-X/47/CIES-4455 (1989). This issue is of particular importance in the case of the victims' children whose damage awards are to be administered through a trust until they reach the age of twenty-five. Without some preventive measures against devaluation, not only is the children's right to fair compensation subject to sudden peril, but the reparatory value of the Court's judgment is weakened. *See id.*
- 22 However, the Commission's request of July 6, 1990 to broaden its original request to take into account that Honduras still had not paid anything, was considered by the Court to be inadmissible. *Velasquez*, Interpretation of Compensatory Damages Judgment, Case N°7920 (August 17, 1990) at para. 15 and ordering para. 2 (hereafter, "Interpretation Judgment") (Appendix VIII to the Court's 1990 Annual Report); *Godínez*, Interpretation of Compensatory Damages Judgment Case N°8097 (August 17, 1990) at para. 15 and ordering para. 2 (hereafter "Interpretation Judgment") (Appendix IX to the Court's 1990 Annual Report).
- 23 *Velasquez*, Interpretation Judgment, at para. 31; *Godínez*, Interpretation Judgment, at para. 31.
- 24 *Velasquez*, Interpretation Judgment, at para 43; *Godínez*, Interpretation Judgment, at para. 43.

- 25 *Velasquez*, Interpretation Judgment, at para. 40; *Godínez*, Interpretation Judgment, at para. 40.
- 26 *Velasquez*, Interpretation Judgment, at para. 43; *Godínez*, Interpretation Judgment, at para. 43.
- 27 *Velasquez*, Interpretation Judgment, Concurring Opinion of Judge Piza Escalante; *Godínez*, Interpretation Judgment, Concurring Opinion of Judge Piza Escalante.
- 28 *See* Letter from widows of *Velasquez* and *Godínez* to President of Honduras, dated December 21, 1990.
- 29 *See* Letter from Attorney General of Honduras to the President of Honduras, dated December 26, 1990; Letter from Ambassador of Honduras to Secretary of Court, dated January 17, 1991.
- 30 Letter from the Government of the Republic of Honduras to the Secretary of the Inter-American Court (October 17, 1990) (Appendix X to the Court's 1990 Annual Report).
- 31 *Id.*
- 32 *Id.*
- 33 *Id.*
- 34 *Id.*
- 35 *Id.*
- 36 *Id.*
- 37 *Id.*
- 38 Letter from the President of the Inter-American Court to the Government of the Republic of Honduras (November 12, 1990) (Appendix XI to the Court's 1990 Annual Report).
- 39 *Id.*
- 40 *Id.*
- 41 *Id.*
- 42 *Id.*
- 43 *Id.*
- 44 In *Velasquez Rodríguez*, the Court affirmed its jurisdiction in the Judgment of June 26, 1987 on Preliminary Objections at para. 27; in the Judgment of July 29, 1988 on the merits at para. 11; and in the Damages Judgment of July 21, 1989 at para. 3 (where it specifically found jurisdiction "to order the payment of fair compensation to the injured party in the instant case"). The same findings appear in the corresponding opinions in the *Godínez Cruz* case. None of these findings was disputed by Honduras.
- 45 Article 67 provides: "In case of disagreement as to the meaning or scope of the judgment, the Court shall interpret it at the request of any of the parties, provided that the

request is made within ninety days from the date of notification of the judgment." In the Honduran cases, the Commission's request for interpretation was filed with the Court well within the requisite 90 days.

Perhaps the most significant weakness in Honduras' argument is that it ignores the Court's expressly retained jurisdiction to enforce its Damages Judgments. Paragraph 37 and ordering paragraph 4, in both Interpretation Judgments, as well as the concurring opinion of Judge Piza-Escalante, rely on the Court's expressly retained powers to supervise compliance. Exercise of these powers was arguably necessitated by Honduras' delay in making payment. Whatever force Honduras' argument might have had if the Court had not retained jurisdiction to supervise compliance, is thus largely vitiated.

On the other hand, the principle of law urged by Honduras—that requests for interpretation of judgments by international courts must be limited to an interpretation of what the court actually decided, and not to obtain an answer to questions not so decided—was set forth and relied upon in *Requesi For Interpretation of the Judgment of November 20th, 1950 in the Asylum Case (Columbia/Peru)*, I.C.J. Rep. (1950), p. 395, at pp. 402-03. The issue here, of course, is how that acknowledged principle applies to these cases.

Nor is Honduras patently wrong in arguing that the Court's interpretation of the phrase, "under the most favorable conditions permitted by Honduran banking practice," is an "exaggeration." Letter of Oct. 17, 1990, Appendix X to the Court's 1990 Annual Report, p. 3. Honduran banking practice is not specifically set forth by evidence recited either in the Interpretation Judgments or in the Commission's requests for interpretation (Appendices V and VI to the Court's 1990 Annual Report).

Both the Commission's request for clarification (Appendix V to the Court's 1990 Annual Report, at p. 46) and the objections by Honduras (Appendix X to the 1990 Annual Report, at p. 87) rely on the European Court of Human Rights decisions in *Ringeisen*, Judgment on the Merits, 1972 Y.B. Eur. Conv. H. Ris. 678 (1972), and Interpretation of originally ordered Austria to pay damages in German currency. Upon a request for interpretation, the Court ruled that payment must be in German currency, not in Austrian currency. However, the basis for the interpretation was not that German currency had been specified in the original judgment, but rather that the Court's purpose in the judgment, namely to secure expeditious relief for a claimant then living in Germany, was best met by payment in German currency. Here, a similar rationale—effective compensation for the victim's families—would support the Court's interpretation of its original judgment to require payment in a manner designed to protect the purchasing power of the damages award.

See generally, Ibrahim F. I. Shihata, THE POWER OF THE INTERNATIONAL COURT TO DETERMINE ITS OWN JURISDICTION: COMPETENCE DE LA COMPETENCE (The Hague: Martinus Nijhoff, 1965) (hereafter "Shihata").

Interhandel Case (Prel. Obj.) I.C.J. Rep. (1959) pp. 6, 104 (Diss. Op. of Judge Lauterpacht).

49 *Certain Norwegian Loans* I.C.J. Rep. (1957), pp. 9, 44 (Diss. Op. of Judge Lauterpacht). The national jurisprudence of the United States has repeatedly recognized the power of courts, and not litigants before them, to determine the validity of judicial orders. E.g., *Walker V. Birmingham*, 388 U.S. 307, 313-14, 316-17, 320-21 (1967) (no right to disobey a court order granting temporary injunction, even though unquestionably subject to substantial constitutional question, unless and until reversed by issuing or re-issuing court). The Court explained that this rule of law "reflects a belief that in the fair administration of justice no man can be judge in his own case. . . . [R]espect for judicial process is a small price to pay for the civilizing hand of law, which alone can give abiding meaning to constitutional freedom." *Id.* at 320-21; accord, *United States v. United Mine Workers*, 330 U.S. 258, 293-94 (majority), 307-10 (Frankfurter, J., concurring) (1947).

Exceptions are extremely limited. As phrased by Mr. Justice Frankfurter: "Only when a court is so obviously traveling outside its orbit as to be merely usurping judicial forms and facilities, may an order issued by a court be disobeyed and treated as though it were a letter to a newspaper." *Id.* at 309-10.

50 See Opinions of United States Commissioners Gore and Pinckney in the *Betsy* arbitration, discussed in Shihata at pp. 12-14. Indeed, the founders of modern international law, beginning with arbitrators were final on all matters, including the extent of their own powers. See W. M. Reisman, NULLITY AND REVISION: THE REVIEW AND ENFORCEMENT OF INTERNATIONAL JUDGMENTS AND AWARDS (New Haven and London: Yale Univ. Press, 1971), pp. 22-29.

51 See Shihata at p. 15. Secretary Webster wrote to the Mexican Commissioners of the United States and Mexican Claims Commission that the Commission's rights and duties, "like those of other judicial bodies, are to determine upon the nature and extent of its own jurisdiction. . . ." *Id.*

52 Shihata at 16, discussing, respectively, *Claim of the U.S. and the Paraguayan Navigation Co.*, (1860), 2 Moore, ARBITRATIONS, 1485, 1504; the *Isaac Harrington* case (1862), *Id.* at 1551, 1564-65; and the *Didler* case (1892), *Id.* at 4329, 4331.

53 Article 48 of the Hague Convention No. 1 for the Pacific Settlement of International Disputes provided, "The Tribunal is authorized to declare its competence in interpreting the compromise as well as the other treaties which may be invoked in the case, and in applying the principles of international law." See Shihata at 20-21.

54 9 U.N. Rep. Int'l Arb. Awards, 263, 294 (1911), quoted in Shihata at p. 22.

55 *Interpretation of the Greco-Turkish Agreement of December 1st, 1920*, P.C.I.J., ser. B, No. 16 at 20 (1928) (Adv. Op.), quoted in Shihata at 35.

56 The Convention neither expressly grants nor denies to the Court the competence de la competence. Indeed, Articles 67, which makes the Court's judgment "final and not subject to appeal", and 68.1, by which States Parties "undertake to comply with the judgment of the Court in any case to which they are parties," might be construed to imply the power. Their general terms arguably embrace all final judgments of the Court, including those in which it adjudicates the limits of its own powers.

Until as late as September 1969, two months before the final text was signed, the draft Convention contained a provision (draft Art. 51), the same in substance as Art. 36.6 of the Statute of the International Court of Justice, expressly granting the Court power to rule on its own jurisdiction in cases of dispute. HUMAN RIGHTS: THE INTER-AMERICAN SYSTEM, note 69 *infra*, Binder 2, Booklet 14, p. 102. Unfortunately, the legislative history, extensively compiled in this source, does not explain why this proposed Article was removed.

In any event, under the principle recognized in Noltebohm, the absence of any provision denying the power means that the Court inherently possesses it.

57 Shihata at pp. 41-43.

58 See Shihata at 41-42. As examples, he cites *Interpretation of Judgment N°3 Case*, P.C.I.J., Ser. A, N°4 (1925); *Interpretation of Judgments N°7 and 8 Case*, Ser. A, N°13 (1927); *Asylum Case* (Interpretation), I.C.J. Rep. (1950), p. 395.

59 *Chorzow Factory Case*, P.C.I.J., Ser. A, N°9 at 21 (1927). The Court stated, "Reparation is the indispensable complement of a failure to apply a convention, and there is no necessity for this to be stated in the Convention itself." Therefore, jurisdiction over whether there had been a breach entailed "a more important jurisdiction as to the nature or extent of reparation due for a breach of an international engagement, the existence of which is already established." *Id.* at 23.

60 Shihata at pp. 26-28. *Corfu Channel Case*, I.C.J. Rep. (1949), pp. 4, 24-6.

61 Shihata at 12. See also W.M. Reisman, *Has the International Court Exceeded its Jurisdiction?*, 80 *American Journal Int'l Law* 128, 128-30 (1986); see generally W.M. Reisman, NULLITY AND REVISION, *supra* note 50.

62 Shihata at pp. 26-28. The "reserved area" exception describes in significant part the position asserted by the United States in the Nicaragua case. Central to the United States' argument that the ICJ lacked jurisdiction was its multilateral treaty reservation. *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua*, I.C.J. Rep. (1986), p.31, *see* Dissenting opinion of Judge Schwebel, *id.* at pp. 296-306.

But the ICJ rejected it even there. The Court made clear that the validity of its judgment did not "depend on the acceptance of that judgment by one party. The fact that a State purports to 'reserve its rights' in respect of a future decision of the Court, after the Court has determined that it has jurisdiction, is clearly of no effect on the validity of that decision. Under Article 36, paragraph 6, of its Statute, the Court has jurisdiction to determine any dispute as to its own jurisdiction, and its judgment on that matter, as on the merits, is final and binding on the parties...." I.C.J. Rep. (1986), pp. 23-24.

The United States Judge, Judge Schwebel, who issued a lengthy and vigorous dissent from the Court's jurisdictional and other findings, did not dispute its power to decide upon its jurisdiction. See I.C.J. Rep. 1986, pp. 259, 284-320 (Diss. Op. of Judge Schwebel). The United Kingdom judge, Judge Jennings, who was sympathetic with some of the United States' arguments, pointedly supported the Court's declaration of its competence de la competence. *Id.* at 528. Not one judge dissented from the Court's

assertion of its competence de la competence. *But see* W. M. Reisman, *International Court*, *supra* n. 61 at 128, citing the Roman law maxim, "arbiter nihil extra compissum facere potest...."

63 Shihata at 28.

64 Shihata at 12, 68-73; *see, generally*, W.M. Reisman, *International Court*, *supra*, note 61, and W.M. Reisman NULLITY AND REVISION, *supra* note 50. Professor Reisman argues that the world Court's holding that Nicaragua had accepted its jurisdiction was "so ill-founded in the facts, in the law and in the Court's own jurisprudence as to constitute a ground for nullity". *International Court*, *supra* note 61, 80 Am. J. Int'l Law at 132.

65 See HUMAN RIGHTS; THE INTER-AMERICAN SYSTEM, note 69 *infra*, Binder 1, Booklet 3, pp. 42-44.

66 Ian Brownlie, PUBLIC INTERNATIONAL LAW (4th. ed. 1990) (Oxford, England: Clarendon Press), p. 616 (footnote omitted); accord, Vienna Convention on Treaties, Article 26; Restatement of the Foreign Relations Law of the United States (3d ed. 1986), section 321.

67 Restatement, *supra* note 66, Comment to section 321. In cases where a state party to a multilateral agreement commits a material breach, another state specially affected by the breach can suspend the operation of the agreement in whole or in part as between itself and the defaulting state. Vienna Convention, Articles 6/0(2) (b); Restatement section 335(2) (b). But even if the Inter-American Court could be analogized to a state party for this purpose, Honduras would have to establish that the Court committed a material breach of the Convention. In view of the discussion under question (1) above, no such breach could be shown.

68 See the letter from the President of the Court to the Honduran Ambassador, dated November 12, 1990, Appendix XI to the Court's 1990 annual Report.

69 Report of the United States delegation on the Conference, reprinted in Thomas Buergenthal and Robert Norris, HUMAN RIGHTS: THE INTER-AMERICAN SYSTEM (Dobbs Ferry, N.Y.: Oceana Publications, Inc., 1982-90), Binder 3, booklet 15, at 1, 54-55.

70 The case was brought by the governments of Denmark, Norway, Sweden and the Netherlands. *Denmark, Norway, Sweden, Netherlands v. Greece*, Nos. 3321/67 and 3344/67, 1968 Y.B. Eur. Conv. on H.R. 690 (January 24, 1968) (decisions of the Eur. Comm'n H.R. on the admissibility of the applications). See also *Denmark, Norway, Sweden, Netherlands v. Greece*, Nos. 3321/67 and 3344/67, 1968 Y.B. Eur. Conv. on H.R. 730 (May 31, 1968) (decision of the Eur. Comm'n H.R. on the admissibility of certain new allegations). The applicant governments petitioned the European Commission charging that the Greek government violated the Convention in 1967 by declaring a state of emergency and suspending various provisions of the Greek Constitution. 1968 Y.B. Eur. Conv. on H.R. 690 (January 24, 1968). After investigation, the European Commission reported to the committee of Ministers of the Council of Europe that the Greek government had violated the European Convention. The Report of the European Comm'n on H.R., The Greek Case, Council of Europe, Doc. 15.701/1, vol. 1, pt.

I. (1969). There was also a pending motion to suspend Greece from the Council of Europe for violating Article 3 of the Statute of the Council of Europe, which requires member states to "accept its principles of the rule of law and of the enjoyment by all persons within its jurisdiction of human rights and fundamental freedoms". L. Sohn and T. Buergenthal, INTERNATIONAL PROTECTION OF HUMAN RIGHTS (1973) at 1074 citing the Statute of the Council of Europe, art. 3. The Commission's report supplied more than sufficient evidence to sustain a suspension. *Id.* When the Greek government saw that the Committee of Ministers was going to act to stand behind the Commission, it announced its withdrawal from the Council of Europe. *Id.*; See "Note Verbale dated 12 December 1969 from the Government of Greece informing the Secretary General of Greece's denunciation of the Statute and of its withdrawal from the council of Europe", Council of Europe, Doc. CM (69) 217 (December 12, 1969), 9 ILM 408-10 (1970). Despite Greece's withdrawal, the Committee of Ministers also rendered its opinion supporting the Commission's report. L. Sohn and T. Buergenthal, *supra*, at 1078-1099.

71 V. Berger, CASE LAW OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS Vo. I: 1960-1987 (1989) at 409.

CUARENTA AÑOS DE LA CONVENCIÓN EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS:

LOGROS ALCANZADOS Y FUTURAS PERSPECTIVAS

Discurso pronunciado por el juez Rolo Rysstal,

Presidente de la Corte Europea de Derechos Humanos

Viena, 18 de enero de 1991

Señoras y Señores:

Permitáame, ante todo, agradecerles la invitación para asistir a esta ceremonia, lo que me brinda la oportunidad para decir algunas palabras sobre la Convención Europea de Derechos Humanos, firmada en Roma hace poco más de cuarenta años. Esta primera Convención del Consejo de Europa, de un valor fundamental, fue la respuesta de los Estados libres y de los Estados de Europa recientemente liberados del fascismo y nazismo que habían invadido nuestro continente y habían dado muerte a miles de hombres y mujeres que se oponían a sus ideologías con valentía y firmeza. Fue el mejor momento de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que incluía muchos de los antiguos miembros de la Resistencia entre sus integrantes y no fue por accidente que uno de los líderes de la resistencia francesa, mi amigo y más tarde colega en la Corte Europea, Pierre-Henri Teitgen, llegó a ser el verdadero padre de la Convención. El propósito fue el de construir una barrera contra cualquier nuevo intento de introducir el totalitarismo, contra cualquier nueva forma de despotismo, que, como nos ha enseñado Immanuel Kant, es incompatible con la idea de la paz -una lección amarga, que se ha repetido muchas veces en nuestra historia y que en forma trágica nos trae de nuevo los sucesos dramáticos que actualmente se están desarrollando en el Golfo. La Convención Europea de Derechos Humanos, sin embargo, desde un principio fue percibida como un grupo de reglas fundamentales y obligatorias sobre las cuales se construyó la fu-

tura cooperación entre los países de Europa. El objetivo era establecer un nuevo orden europeo basado en el reconocimiento de los derechos fundamentales del hombre y este objetivo -como dichosamente lo podemos constatar ahora- se ha logrado.

I

Veintitrés de los veinticuatro Estados miembros del Consejo de Europa han firmado la Convención y han aceptado la jurisdicción obligatoria de la Comisión y de la Corte Europea de Derechos Humanos. Hungría, que recién forma parte del Consejo, lo hará muy pronto; otros Estados de Europa Central y Oriental van en ruta hacia Estrasburgo. A finales del año pasado, el Presidente Jaques Delors, solicitó un mandato para que la Comisión de Bruselas iniciara negociaciones con el propósito de conseguir la adhesión de la Comunidad Europea a la Convención.

Los ciudadanos, quienes naturalmente buscan, con mayor frecuencia, una respuesta europea a sus interrogantes, se han dirigido en cantidades numerosas a los órganos de Estrasburgo. De este modo, el número de peticiones presentadas ante la Comisión se ha incrementado de 700 en 1988 a casi 1,700 en 1990; el número de casos ante la Corte Europea ha pasado de 16 a 61 durante el mismo período. O bien, para citar de nuevo las estadísticas que recientemente mencioné en Roma: en 1990 se refirieron más casos a la Corte que en los primeros veinticuatro años de su existencia.

Luego de su modesto comienzo en los años sesenta afortunadamente con el caso austriaco ocasional —el Ministro Pahr y el Embajador Nettel llegaron a ser en ese momento verdaderos *amici curiae*— la jurisprudencia de la Corte se ha desarrollado a grandes saltos. En el interin se han producido alrededor de 240 fallos, casi todos relacionados con los derechos y libertades protegidos por la Convención, sobre todo en las áreas de la libertad de la persona, el derecho a un juicio justo, el derecho al respeto de la privacidad y de la vida familiar, la libertad de expresión y dentro de este concepto a la libertad de prensa en especial, la libertad de reunión y el derecho a la propiedad. Estos fallos de la Corte han llevado a importantes reformas en el derecho interno de los Estados Partes, como por ejemplo con respecto al desacato al tribunal (*contempt of Court*) en Gran Bretaña, lo relacionado con el derecho de familia y los procedimientos disciplinarios para las profesiones liberales en Bélgica, la revisión judicial a las decisiones administrativas en Suecia y en los Países Bajos. El Fallo Soering de 1989 bien

puede determinar, para toda la comunidad de los Estados partes de la Convención, el derecho y la práctica futuros en cuanto a la extradición.

En fin, quizá más importante es el hecho de que, con el aumento cada día mayor de casos referidos a la Corte, ésta se encuentra con más frecuencia en una posición de ayudar a través de sus fallos a que las Cortes nacionales cumplan con su deber de proteger los derechos fundamentales. Cabe señalar que esta ayuda ha sido además aceptada aún en los Estados donde, por falta de disposiciones legislativas adecuadas en la ley nacional, la Convención no se aplica en forma directa. No obstante, sin duda se trata más que nada de Estados en los que los ciudadanos pueden contar con los derechos consagrados en la Convención ante los tribunales nacionales. En estos países existen actitudes muy receptivas a la Convención y muy a menudo se recurre a la jurisprudencia de Estrasburgo. Esto es particularmente cierto en el caso de Austria, donde como resultado de una decisión admirable de su legislatura, la Convención goza de rango constitucional. Tanto a mis colegas como a mí nos impresiona siempre la importancia que usted, mi gran amigo, señor Adamovich y sus colegas en la Corte Constitucional, le han dado a la Convención y la manera en que ustedes han incorporado la jurisprudencia de Estrasburgo en sus decisiones.

Señoras y señores, estoy consciente de que estos breves comentarios no pueden demostrar en su totalidad, lo que -y esto es indiscutible- no requiere probarse porque ya no es cuestionado, a saber, que la Convención Europea de Derechos Humanos es considerada como derecho constitucional europeo y, en efecto se ha convertido en el derecho constitucional europeo. Es importante que nos demos cuenta -y debemos tenerlo siempre presente- que esto significa que tenemos una responsabilidad especial hacia el sistema de protección de los derechos fundamentales establecido por la Convención. Su futuro, y con ella una parte muy importante del futuro europeo, dependerá del éxito que tengamos en encontrar soluciones adecuadas a los desafíos que confronta, lo que ha llamado el Presidente Guido Andreotti, el embrión en desarrollo de la Constitución Europea que existe hoy en Estrasburgo.

II

Permítanme aquí señalar tres puntos, a los que me he referido con mayor detalle en otras ocasiones.

El primero es la anhelada y finalmente iniciada apertura de la Europa Central y la Europa Oriental, cuyos Estados han comenzado una transfor-

mación hacia sociedades democráticas pluralistas o han anunciado su intención de hacerlo. Tenemos el deber de darles apoyo incondicional en sus aspiraciones y asegurarles con completa convicción que su lugar está en el Consejo de Europa y en la comunidad de los Estados partes en la Convención. Un sistema de protección de los derechos humanos adicional al existente estaría de más y no dejaría de ser peligroso, porque difícilmente cumpliría con los estándares tan altos que han destacado al sistema de Estrasburgo. Esto nos llevaría directamente hacia sistemas de derecho separados y nuevas barreras, esta vez entre los Estados que son desarrollados desde el punto de vista de los derechos básicos -los de la Convención- y los Estados que han progresado menos en este campo y no se puede excluir la posibilidad de que a la larga el sistema de la Convención retrocedería para ajustarse al estándar de tal orden paneuropeo. Asimismo, tampoco podemos olvidarnos de los tribunales nacionales, que ya en la mayoría de los Estados partes en la Convención también deben aplicar el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas. Requerirle a estos Estados que además se adhieran a otro acuerdo internacional de protección de los derechos humanos de ninguna manera conduciría a una mayor protección de los derechos fundamentales; al contrario, a la larga se correría el riesgo de generar una cierta incertidumbre legal.

La adhesión de los Estados de Europa Central y Europa Oriental al Consejo de Europa, así como su adhesión a la Convención Europea de Derechos Humanos, debe ser el objetivo a través del cual los Estados del Consejo de Europa cumplan con su deber de asistir a los Estados de Europa Central y Oriental en la creación de condiciones democráticas ajustadas al imperio del derecho, sin abandonar los principios que subyacen en las actividades del Consejo de Europa, pero haciendo arreglos de transición, cuando sea necesario.

La comunidad de los Estados partes en la Convención también tiene tareas importantes -y este es mi segundo punto- en el campo de los derechos y libertades protegidos o que serán protegidos bajo la Convención. El Séptimo Coloquio Internacional sobre la Convención, organizado el verano pasado por el Secretario General del Consejo de Europa en cooperación con Institutos de Derechos Humanos Nórdicos, llamó la atención sobre las brechas en las disposiciones normativas de la Convención que tendrán que rellenarse en los próximos años. Mayor protección para los detenidos, mayor protección en contra de la discriminación, mayor protección de los derechos sociales fundamentales y finalmente la protección de las minorías. Se espera que esta problemática sea considerada por el Consejo de Europa tan pronto y tan energicamente como sea posible.

Permítanme decir unas palabras sobre la protección de las minorías, actualmente una cuestión que ha sido objeto de mucha reflexión y discusión en todos los Estados europeos después de la desintegración de los bloques en Europa. El coloquio del año pasado claramente demostró que la protección de las minorías en Europa a finales del siglo XX no debe confiarse únicamente en la resurrección de las reglas de los años veinte: la protección de las minorías debe adaptarse a un marco más amplio de la protección de los derechos humanos que ya se ha desarrollado en Europa. Aunque al principio la supervisión del cumplimiento de las Convenciones y los tratados concluidos en esta materia pueda ser un asunto de acuerdos arbitrables, aquí también podría la Corte Europea jugar un papel muy importante de una forma u otra.

Llego ahora a mi tercer punto, el que se refiere a la reforma de los mecanismos de control de la Convención; la necesidad y la urgencia de tal reforma ya no es refutable. Es importante hacerle posible al complejo sistema de protección de los derechos humanos de Estrasburgo, con sus dos instituciones independientes, resolver dentro de un tiempo razonable, las peticiones presentadas por ciudadanos, las cuales muchas veces, ya han sido objeto de procesos que han durado muchísimos años ante cortes nacionales. Considero que en este momento existen esencialmente tres posibles soluciones:

— primero: que la Corte y la Comisión sean permanentes, sin alterar sus funciones actuales de acuerdo con la Convención.

— segundo: que la Comisión sea un Tribunal de primera instancia, adquiriendo la Corte por ende jurisdicción de apelación y casación.

— tercero: establecer una Corte Europea de Derechos Humanos permanente para que determine la admisibilidad y el fondo de las denuncias europeas, contrario al sistema actual de dos instituciones independientes, la Comisión y la Corte, donde la admisibilidad la determina la primera.

El Comité de Ministros del Consejo de Europa ha establecido un comité de expertos gubernamentales para que redacte las propuestas de reforma, que supongo serán repartidas oportunamente a mis colegas y yo para nuestra opinión. Hasta el momento, la Corte no ha discutido la cuestión de reforma por lo que mis comentarios sobre las tres propuestas a las que me he referido sólo pueden considerarse de naturaleza personal. Quiero enfatizar que mi opinión en esta materia de ninguna manera es irrevocable.

Parece claro, desde mi punto de vista, que nos estamos encaminando hacia una Comisión y una Corte permanentes, ya que los jueces tienen que disponer de aproximadamente 135 días al año para tratar los asuntos en Estrasburgo. La posición de un juez ya no puede considerarse como una actividad de medio tiempo. Sin embargo, surge la problemática de si es aconsejable para el interés de una protección efectiva de derechos el establecer una institución permanente europea para la consideración preliminar de las denuncias europeas de derechos humanos y otra para la decisión del fondo del caso, cada institución con veintitrés -dentro de poco quizá treinta- abogados altamente calificados y el personal de apoyo que corresponda.

La alternativa sería una Corte Europea permanente la que, siguiendo el ejemplo de la organización judicial en Europa, tendría que decidir sobre la admisibilidad y el fondo de las peticiones. En este caso, sin embargo, tendría que considerarse la posibilidad y la manera de preservar, dentro de este sistema, la función actual de la Comisión de asistir a la Corte a través de opiniones en materia legal.

No obstante, tengo serias dudas sobre la propuesta de establecer dos niveles de jurisdicción en el sistema de protección de la Convención. No nos olvidemos de que el peticionario no puede presentar una petición en Estrasburgo hasta que no haya agotado todos los remedios que le sean disponibles dentro del derecho interno. Por esta razón, su petición ya ha sido examinada por dos, y a veces tres o cuatro tribunales nacionales y, en la mayoría de los Estados partes en la Convención, ya bajo la luz de la misma Convención. Bajo estas circunstancias, cualquiera que sea el alcance de la investigación de los hechos que se lleve a cabo en Estrasburgo, la introducción de un sistema de apelación europeo y el establecimiento de un órgano de "primera instancia" y un órgano separado para oír las apelaciones en materia de derecho no me parece apropiado ni en lo relativo a las peticiones europeas de derechos humanos ni en las peticiones constitucionales como se dispone en varios de los Estados partes en la Convención. Un segundo nivel de jurisdicción europea, una jurisdicción de apelación, de todas formas implicaría más demora en la decisión final del caso y en consecuencia, una evidente pérdida en la efectividad con respecto de la protección de derechos. En tanto que esta propuesta expresó la preocupación de que bajo un único nivel de jurisdicción europea -ya fuera en la forma actual o en forma de una sola Corte permanente- la protección de los derechos fundamentales en Europa no podría ser garantizada en su totalidad, debe recordarse que la protección de los derechos y libertades consagrados por la Convención es primordialmente el deber de los Estados Partes, de sus

autoridades y en particular de sus tribunales. El sistema de protección de derechos de la Convención -como en repetidas ocasiones lo ha enfatizado la Corte- es de naturaleza subsidiaria. Este sistema depende de una especie de colaboración entre los tribunales nacionales y la Corte Europea, la que puede ser especialmente efectiva cuando los mismos tribunales nacionales tienen que aplicar la Convención. La integración completa de la Convención dentro del sistema jurídico nacional es, por lo tanto, el corolario necesario de cualquier reforma en las instituciones de Estrasburgo. Entre más natural sea que los tribunales nacionales recurran a la Convención Europea de Derechos Humanos, mayor será la moderación que pueda proyectar la Corte Europea al llevar a cabo su revisión.

La reforma al sistema de protección de los derechos establecido por la Convención, nos concierne a todos y en particular a los tribunales nacionales de nuestros países. El Comité Directivo de Derechos Humanos del Consejo de Europa está muy al tanto de esto, como lo demuestra la invitación hecha por este Comité al Presidente Adamovich, con el fin de intercambiar ideas. Tengo la esperanza de que esto signifique, Dr. Leuprecht, un preludio para discusiones adicionales con los Presidentes de los Tribunales y Cortes Supremas de Europa.

Señoras y señores, estos breves comentarios les demuestran que, a pesar de la satisfacción lograda hasta el momento, existen numerosas interrogantes que deben contestarse si se quiere que la Convención Europea de Derechos Humanos siga siendo efectiva como derecho constitucional europeo en una Europa más extensa. No se debe menospreciar la dificultad de esta tarea. La posibilidad de que podamos ver el futuro con optimismo lo demuestran los adelantos de los últimos años, en particular la firma del Noveno Protocolo Adicional mediante el cual se les concedió finalmente a los peticionarios individuales el derecho de presentar ante la Corte su caso previamente declarado admisible por la Comisión.

La República de Austria siempre ha pertenecido a esos Estados que han mostrado su compromiso con el desarrollo de la Convención. Necesitaremos particularmente su apoyo en los años venideros.

Muchas gracias.

O BRASIL E OS DIREITOS HUMANOS: MOÇÃO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIREITO INTERNACIONAL

Nota de los editores:

El 8 de mayo de 1991, la Sociedad Brasileña de Derecho Internacional aprobó una moción, en la que impelle al Congreso y al Gobierno de Brasil a aprobar y ratificar, sin más dilación, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los Pactos de Naciones Unidas sobre la materia. Por consi-
derar de importancia la exhortación, presentamos aquí el texto aprobado:

"Em sessão ordinária realizada na tarde do dia 08 de maio de 1991, na cidade do Rio de Janeiro, a Assembleia da Sociedade Brasileira de Direito Internacional (SBDI) aprovou, por aclamação, proposta de seu Sócio Titular Professor Antônio Augusto Cançado Trindade, no sentido de que se posicionasse a respeito do considerável atraso do Congresso e do Governo brasileiros em, respectivamente, aprovar e ratificar a Convenção Americana sobre Direitos Humanos e os dois Pactos de Direitos Humanos das Nações Unidas. A Assembleia da SBDI acolheu a proposta do Professor A.A. Cançado Trindade no sentido de tornar pública "manifestação de sua preocupação, estranheza e perplexidade ante tão grave omissão" e levar suas manifestações ao conhecimento das autoridades responsáveis."

LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO INTERAMERICANO DE

DERECHOS HUMANOS SON POSIBLES GRACIAS AL APOYO DE

LOS SIGUIENTES GOBIERNOS Y ENTIDADES:

- Gobierno de Argentina
- Gobierno de Canadá
- Gobierno de Costa Rica
- Gobierno de España
- Gobierno de Gran Bretaña
- Gobierno de Honduras
- Gobierno de Noruega
- Gobierno de los Países Bajos
- Gobierno de Suiza
- Gobierno de Uruguay
- Gobierno de Venezuela
- Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (ACDI)
- Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos de América (AID)
- Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
- Autoridad Sueca para el Desarrollo Internacional (ASDI)
- Comisión de las Comunidades Europeas
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos
- Comité Internacional de la Cruz Roja
- Corte Interamericana de Derechos Humanos
- Cruz Roja Española
- Fundación Ford
- Fundación Friedrich Naumann
- Instituto Jacob Blaustein
- Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD)
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
- Programa de Desarrollo para los Desplazados, Refugiados y Repatriados en Centro América (PRODERE)
- Universidad de Georgetown
- Universidad de Heidelberg
- Universidad Internacional de Florida

IIDH

Apartado Postal: 10081-1000

San José, Costa Rica

Telex: 2233 CORTE CR

Telefono: 34-0404

Fax: 34-0955

Impreso en los talleres de

Imprenta y Litografía GARCIA HERMANOS, S.A.

San José, Costa Rica

en el mes de diciembre de 1991.

Su edición consta de 1.000 ejemplares.

LIBERTAD Y PARTICIPACIÓN POLÍTICAS
EN EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Germán Bidart Campos

OUR RIGHTS AND OBLIGATIONS TO
FUTURE GENERATIONS FOR THE ENVIRONMENT

Edith Brown Weiss

THE PARALLEL EVOLUTIONS OF INTERNATIONAL
HUMAN RIGHTS PROTECTION AND OF ENVIRONMENTAL
PROTECTION AND THE ABSENCE OF RESTRICTIONS UPON
THE EXERCISE OF RECOGNIZED HUMAN RIGHTS

A.A. Cançado Trindade

LE DROIT A LA CONSERVATION
DE L'ENVIRONNEMENT

Alexandre Kiss

LOS DERECHOS HUMANOS Y EL PRINCIPIO DE NO INTERVENCIÓN

PLANTEAMIENTO SOBRE REGLAS ESCLARecedorAS
Y SANCIONES POR VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

F. Villagrán Kramer

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

RESOLUCIONES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
DE LA XXIª ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA

DOCUMENTOS